Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Tema:

Percepciones ciudadanas hacia el rol político de las Fuerzas Armadas en Ecuador de 2012 a 2019.

Trabajo de Titulación para la obtención del Título de Licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

Presentada por:

Mario Mateo Santos Pérez

Tutor:

Alfredo Stornaiolo

Quito, DM. 03 de marzo de 2022

RESUMEN

El presente trabajo de titulación aborda como tema central las percepciones de los ciudadanos hacia una posible intervención militar en la democracia ecuatoriana. Utilizando los datos del Barómetro de las Américas, se han cruzado veinte variables concernientes a la legitimidad y satisfacción con la democracia, evaluación del estado de la economía, interés y conocimiento de la política, percepción de corrupción, valoración del trabajo de los gobernantes, orientaciones hacia las instituciones, e ideología, con la aceptación hacia un golpe de Estado militar que la ciudadanía ecuatoriana ha planteado entre 2012 y 2019. Partiendo de los ideales de la democracia teórica, por los cuales se postula que los cargos militares deben estar subordinados a los civiles y que para que el sistema democrático se perfeccione se necesita una cultura que lo favorezca, se han encontrado anomalías producto de las orientaciones ciudadanas con los preceptos para la consolidación democrática. Tras el estudio, se ha llegado a la principal conclusión de que las variables que tienen relaciones más profundas con la legitimidad de los golpes de Estado militares son las orientaciones hacia la Presidencia y la percepción de la situación económica. Ello en el contexto ecuatoriano, en el cual las instituciones militares han jugado un rol reformista a lo largo de la historia y se consolidan como la institución más confiada del país. Lo que podría significar que, a pesar de una serie de orientaciones positivas hacia la democracia, actitudes autoritarias persisten en la ciudadanía ecuatoriana, al juzgar la deseabilidad de una intervención militar no democrática en el poder ejecutivo electo si ésta se da ante una administración no aceptada o en una coyuntura desfavorable económicamente.

Palabras clave: democracia, intervención militar, legitimidad, instituciones, Ecuador.

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE NORMA ÉTICA Y DERECHOS

El presente documento se ciñe a las normas éticas y reglamentarias de la Universidad Hemisferios. Así, declaro que lo contenido en este ha sido redactado con entera sujeción al respeto de los derechos de autor, citando adecuadamente las fuentes. Por tal motivo, autorizo a la Biblioteca a que haga pública su disponibilidad para lectura dentro de la institución, a la vez que autorizo el uso comercial de mi obra a la Universidad Hemisferios, siempre y cuando se me reconozca el cuarenta por ciento (40%) de los beneficios económicos resultantes de esta explotación.

Además, me comprometo a hacer constar, por todos los medios de publicación, difusión y distribución, que mi obra fue producida en el ámbito académico de la Universidad Hemisferios.

De comprobarse que no cumplí con las estipulaciones éticas, incurriendo en caso de plagio, me someto a las determinaciones que la propia Universidad plantee.

Mario Mateo Santos Pérez

C.I. 1719216408

DEDICATORIA

Quiero dedicar este trabajo y agradecer a mis padres, Mario y María José, y a toda mi familia, por enseñarme que el objetivo de toda persona debe ser trabajar siempre para dejar un mundo que sea un lugar mejor que el que recibió. Muchas gracias por estar siempre para mí, por su gran apoyo que me ha impulsado a lograr lo que he logrado y por ser el fundamento de mi vida. A la Universidad y a todos los profesores, especialmente Alfredo Stornaiolo, Juan Francisco Camino y Carlos Santos, por acompañarme durante mi formación personal en la que, no sólo he ampliado mis conocimientos, sino también he crecido como ser humano. A todos mis amigos y compañeros; sin duda, ha sido un honor el compartir con ustedes los mejores años de mi vida y verlos crecer junto a mí. A todos, los llevaré siempre en mi corazón y memoria como ejemplo de cómo ser mejor persona, tanto en la vida profesional como personal.

ÍNDICE

Tabla de contenido

Introducción: 10

1. Cultura política, legitimidad y percepciones ciudadanas: una aproximación teórica desde la problemática de los golpes de Estado en democracia..... 17

1.1. Introducción..... 17

1.2. El estudio de la cultura política. 18

1.2.1. Aproximación y objeto de estudio. 18

1.2.2. La construcción de percepciones políticas. 18

1.2.3. Legitimidad y poder. 19

1.3. Una aproximación hacia la conceptualización de la democracia. 20

1.3.1. Los ideales de la democracia normativa. 21

1.3.2. La cultura cívica, la evolución cultural y la democracia. 25

1.3.3. El caso latinoamericano, debilidad institucional, pobreza y desigualdad: nuevas luces al debate democrático. 27

1.4. Posibles explicaciones teóricas a la legitimidad de golpes de Estado desde la cultura política latinoamericana. 31

1.4.1. Aceptación del quebrantamiento del sistema democrático. 31

1.5. La cultura política en Ecuador. 35

1.6. Síntesis de la argumentación teórica: 39

2. Lo político y lo socioeconómico en relación a las evaluaciones positivas ante un posible golpe de Estado en Ecuador entre 2012 y 2019. 40

2.1. Variables y notas metodológicas: 40

2.2. El estado de las percepciones ciudadanas en Ecuador en 2012:..... 45

2.2.1. Presentación general de resultados:..... 45

2.2.2. La relación entre legitimación de golpes de Estado y percepciones hacia la democracia: 50

2.2.3. La relación entre legitimación de golpes de Estado y percepciones económicas: 52

2.2.4. Legitimidad de golpes de Estado y percepciones hacia la política: 54

2.2.5. Legitimidad de golpes de Estado y percepciones sobre corrupción..... 55

2.2.6. Legitimidad de golpes de Estado y accionar de gobernantes:..... 57

2.2.7. Legitimidad de golpes de Estado y orientaciones hacia las instituciones: 59

2.2.8. Legitimidad de golpes de Estado y confianza hacia las instituciones ecuatorianas: 61

2.2.9. Justificación de golpes de Estado e ideología: 65

2.2.10. Conclusiones relacionadas a los resultados del 2012:..... 66
2.3. El estado de las percepciones ciudadanas en Ecuador en 2014:..... 69
2.3.1. Presentación general de resultados:..... 69
2.3.2. La relación entre la legitimación de golpes de Estado y percepciones hacia la democracia..... 73
2.3.3. Percepciones económicas y legitimidad de golpes de Estado:..... 75
2.3.4. Legitimidad de golpes de Estado y orientaciones hacia la política..... 76
2.3.5. Legitimación de golpes de Estado y percepciones sobre corrupción:.... 78
2.3.6. Legitimidad de golpes de Estado y orientaciones evaluativas hacia los gobernantes. 79
2.3.7. Legitimidad de golpes de Estado y orientaciones a las instituciones:.... 81
2.3.8. Legitimidad de golpes de Estado y confianza hacia las instituciones:... 83
2.3.9. Legitimidad de golpes de Estado e ideología:..... 88
2.3.10. Conclusiones relacionadas a los resultados del 2014:..... 88
2.4. El estado de las percepciones ciudadanas en Ecuador en 2016:..... 92
2.4.1. Presentación general de resultados:..... 92
2.4.2. La relación entre la legitimación de golpes de Estado y percepciones hacia la democracia..... 97
2.4.3. Percepciones económicas y legitimidad de golpes de Estado:..... 99
2.4.4. Legitimidad de golpes de Estado y orientaciones hacia la política:..... 101
2.4.5. Legitimación de golpes de Estado y percepciones sobre corrupción:.. 102
2.4.6. Legitimidad de golpes de Estado y orientaciones evaluativas hacia los gobernantes: 104
2.4.7. Legitimidad de golpes de Estado y orientaciones a las instituciones:.. 105
2.4.8. Legitimidad de golpes de Estado y confianza hacia las instituciones:. 108
2.4.9. Legitimidad de golpes de Estado e ideología:..... 112
2.4.10. Conclusiones relacionadas a los resultados del 2016:..... 113
2.5. El estado de las percepciones ciudadanas en Ecuador en 2018:..... 117
2.5.1. Presentación general de resultados:..... 117
2.5.2. La relación entre la legitimación de golpes de Estado y percepciones hacia la democracia: 122
2.5.3. Percepciones económicas y legitimidad de golpes de Estado:..... 124
2.5.4. Legitimidad de golpes de Estado y orientaciones hacia la política:..... 125
2.5.5. Legitimación de golpes de Estado y percepciones sobre corrupción:.. 127
2.5.6. Legitimidad de golpes de Estado y orientaciones evaluativas hacia los gobernantes: 128
2.5.7. Legitimidad de golpes de Estado y orientaciones a las instituciones:.. 130
2.5.8. Legitimidad de golpes de Estado y confianza hacia las instituciones:. 133
2.5.9. Legitimidad de golpes de Estado e ideología:..... 137

2.5.10. Conclusiones relacionadas a los resultados del 2018:..... 138
3. Evolución de la legitimidad de golpes de Estado en la cultura política ecuatoriana y tendencias evidenciadas a lo largo del estudio. 144
3.1. Tendencias económicas entre 2012 y 2018. 144
3.2. La evolución de las orientaciones ciudadanas en el Ecuador. 148
3.3. Tendencias evidenciadas en las relaciones entre variables independientes y legitimidad de golpes de Estado a lo largo del estudio. 164
3.4. Relaciones estadísticamente significativas entre variables. 168
3.5. Conclusiones. 171
4. Conclusiones del estudio. 176
5. Bibliografía. 186

PERCEPCIONES CIUDADANAS HACIA EL ROL POLÍTICO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN ECUADOR DE 2012 A 2019.

Mario Mateo Santos Pérez

Correo: mmsantop@estudiantes.uhemisferios.edu.ec

Resumen:

El presente trabajo de titulación aborda como tema central las percepciones de los ciudadanos hacia una posible intervención militar en la democracia ecuatoriana. Utilizando los datos del Barómetro de las Américas, se han cruzado veinte variables concernientes a la legitimidad y satisfacción con la democracia, evaluación del estado de la economía, interés y conocimiento de la política, percepción de corrupción, valoración del trabajo de los gobernantes, orientaciones hacia las instituciones, e ideología, con la aceptación hacia un golpe de Estado militar que la ciudadanía ecuatoriana ha planteado entre 2012 y 2019. Partiendo de los ideales de la democracia teórica, por los cuales se postula que los cargos militares deben estar subordinados a los civiles y que para que el sistema democrático se perfeccione se necesita una cultura que lo favorezca, se han encontrado anomalías producto de las orientaciones ciudadanas con los preceptos para la consolidación democrática. Tras el estudio, se ha llegado a la principal conclusión de que las variables que tienen relaciones más profundas con la legitimidad de los golpes de Estado militares son las orientaciones hacia la Presidencia y la percepción de la situación económica. Ello en el contexto ecuatoriano, en el cual las instituciones militares han jugado un rol reformista a lo largo de la historia y se consolidan como la institución más confiada del país. Lo que podría significar que, a pesar de una serie de orientaciones positivas hacia la democracia, actitudes autoritarias persisten en la ciudadanía ecuatoriana, al juzgar la deseabilidad de una intervención militar no democrática en el poder ejecutivo electo si ésta se da ante una administración no aceptada o en una coyuntura desfavorable económicamente.

Palabras clave: democracia, intervención militar, legitimidad, instituciones, Ecuador.

Abstract:

This work address as a central subject the citizenship's perception towards a possible military intervention in Ecuadorian democracy. Using data from the Latin American Public Opinion Project, this thesis presents an analysis based on the crossing of variables related to legitimacy and satisfactions towards democracy, evaluations of the state of the economy, interests and knowledge over politics, perception over corruption, evaluation of the work of decision-makers, orientations towards institutions and ideology, with the acceptance of a military coup that Ecuadorian citizenship had between 2012 and 2019. On the basis of the ideals of theoretical democracy, by which it is postulated that military ranks should be subordinated to civilians and that for the democratic system to perfect a favorable culture is needed, we found anomalies with citizen's orientations on the subject of requirements to consolidate democracy. With this study, we came to the conclusion that the variables that have a deeper relation with the legitimacy of a military coup are those related to the orientations towards the Presidency and the evaluations of the economic reality. This, in an Ecuadorian context, in which the military institutions have played a historical reformist role and have consolidated as the most trusted institution in the country. That could mean that, even though Ecuador have had positive orientations towards democracy, authoritarian attitudes prevail within Ecuadorian citizenship while they judge the desirability of a military non-democratic intervention in politics if there is a non-accepted administration in government or facing an unfavorable economic situation.

Key words: democracy, military intervention, legitimacy, institutions, Ecuador.

PERCEPCIONES CIUDADANAS HACIA EL ROL POLÍTICO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN ECUADOR DE 2012 A 2019.

INTRODUCCIÓN.

Uno de los preceptos de la democracia para alcanzar un buen nivel de desarrollo es el control de los cargos militares por parte de cargos civiles electos. Robert Dahl (1998), en su libro *On Democracy*, proponía este precepto como una de las condiciones esenciales para la democracia, en tanto establecía que, si las instituciones que controlaban la coerción, las Fuerzas Armadas y la Policía, no se encontraban subordinadas a los oficiales electos democráticamente, las instituciones democráticas tenían menos probabilidad de desarrollarse y consolidarse. La presencia de líderes con acceso a la coerción física por sobre las instituciones democráticas son la amenaza más grande a la consolidación democrática (Dahl, 1998). De hecho, la historia de América Latina ejemplifica las advertencias de Dahl. Las intervenciones militares en América Latina en la democracia son capítulos importantes de la historia regional del siglo XX. Estos hechos han llevado a varios Estados a la imposición de regímenes autoritarios en la región durante la segunda mitad del siglo pasado. Los acontecimientos posteriores a este periodo, correspondientes a las últimas décadas del siglo anterior, se han marcado en la historia de América Latina como un proceso de retorno a la democracia, una ola de democratización a nivel mundial.

Sin embargo, el proceso de consolidación democrática no ha sido completo y la región sigue viviendo en democracia con rezagos de autoritarismo (Rouquié, 2011). Este pensamiento viene en concordancia con una coyuntura regional en la cual los militares han comenzado a adquirir un rol más activo en la política. Esta es una época en la cual se ha vislumbrado el retorno de la "cuestión militar" en la región, un fenómeno en el que los militares están adquiriendo mayor poder político (Tokatlián, 2010).

En su caso, Ecuador, después de atravesar un lapso de relativa estabilidad política durante el gobierno de Rafael Correa, se ha vuelto a encontrar ante procesos de inestabilidad durante el gobierno de Lenin Moreno. Ellos se ven reflejados, por ejemplo, en las protestas masivas de octubre de 2019. En los períodos de inestabilidad política en el Ecuador, desde su vuelta a la democracia, han sido las Fuerzas Armadas quienes poseen un rol importante, y posiblemente definitorio, en la decisión del mantenimiento del gobierno. Ejemplo de ello constituye lo sucedido durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, Jamil Mahuad, entre otros presidentes cuyos mandatos no se cumplieron en términos temporales tras el retiro del apoyo

por parte de las Fuerzas Armadas. Por ende, se puede argumentar que las Fuerzas Armadas han poseído un rol importante en la democracia del país.

Una de las cuestiones alrededor de este problema es la percepción ciudadana. La cultura política estudia las orientaciones afectivas, cognitivas y evaluativas de los ciudadanos hacia objetos políticos, entre ellos hacia el sistema democrático (Mateos, 2017), y el accionar militar en la democracia. Dichas percepciones de los individuos pueden variar con base en el desarrollo del país en donde los habitantes se encuentran, y se van construyendo de acuerdo a varios contextos. En esta línea, la democracia debe parte de su estabilidad a la cultura cívica de sus ciudadanos, como un imaginario favorable a la consolidación del sistema democrático (Mateos, 2017). La cultura cívica se basa en una serie de orientaciones compartidas en las cuales los individuos se configuran como sujetos comprometidos y activos, que actúan moderada equilibrada y racionalmente (Almond y Verba, 1970). Después de todo, la democracia, al basarse en la decisión popular, necesita de la decisión popular para consolidarse. Esta consideración se da en concordancia con el enfoque psicosocial de estudio de los fenómenos sociales, por el cual se sostiene los sujetos actúan conforme a construcciones mentales que condicionan su percepción del mundo, sea esta apegada o no a la realidad (Lozada & Casas, 2008). La utilización de este enfoque es importante, sobre todo si se trata de un régimen democrático, puesto que las actuaciones potenciales, basadas en los imaginarios de los sujetos, influyen en la vida pública democrática, al ser estos el centro de la misma.

En el país en cuestión, existe un desfase entre uno de los preceptos para el ideal democrático, el control del poder militar, y las percepciones ciudadanas. De acuerdo a los datos proporcionados por Barómetro de las Américas, de la Universidad de Vanderbilt, (2019), en Ecuador el 50,4% de respuestas válidas de la encuesta justificaría un golpe militar si existe mucha delincuencia; y un 43,3% frente a la corrupción (Vanderbilt University, 2019). Ello evidencia que las percepciones ciudadanas en Ecuador poseen un porcentaje altamente significativo de aceptación de un hecho que puede vulnerar uno de los pilares sobre los cuales se consolida la democracia.

La democracia va más allá de la formalidad institucional, al basar su persistencia también en los individuos, con orientaciones propias, que tienen importancia en la vida pública democrática (Mateos, 2017). Por ende, una visión favorable o indiferente a una ruptura democrática es un problema para el sistema en sí. El ciudadano no activo, desinformado y apático muestra que una democracia no está del todo consolidada (Almond & Verba, 1970). Un alejamiento de la cultura cívica, al aceptar, o incluso desear,

intervenciones externas al sistema democrático, significa un diagnóstico de rezagos del autoritarismo en democracia. Por ello, cabe revisar las percepciones individuales de los ciudadanos, pudiendo estas ser analizadas a través de respuestas de encuestas.

Por otro lado, el problema está, posiblemente relacionado, con la existencia de carencias de la materialización de la ciudadanía, manifestadas en la existencia de pobreza y desigualdad social, que pueden terminar afectando las percepciones de la democracia. El bienestar material de la región, cuya consolidación es uno de los principales desafíos para los gobiernos y Estados de Latinoamérica, posibilita la materialización de la igualdad formal ciudadana en la que se basa la democracia y, en última instancia, el fin de la existencia del Estado democrático (O'Donnell, 2004). Por ello, las carencias sociales pueden transformarse en carencias democráticas y contribuir a una posible deslegitimación de la democracia o, incluso, a la legitimización del autoritarismo si éste responde a las demandas de mayor bienestar de la ciudadanía (O'Donnell, 2004).

Ecuador es un ejemplo de la presencia de necesidades ciudadanas en términos de bienestar material, combate a la pobreza y desigualdad. Los años propuestos constituyen buenos ejemplos de avances y retrocesos en temas sociales, marcando el año 2018 en el caso de Ecuador, de acuerdo a estadísticas socioeconómicas que se presentarán posteriormente. Dicho esto, en Ecuador, el índice de Gini de 2019 se ubicó en 45,7 y mostró un crecimiento con respecto al 2017, en el cual el índice se ubicó en 44,7 (Banco Mundial, 2020). Por otro lado, tomando en consideración la pobreza medida por ingresos, para 2019 el país tuvo un porcentaje de 3,20% en su brecha de la pobreza a USD 3,2 al día (Banco Mundial, 2020).

De acuerdo con lo establecido anteriormente, se buscará responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo se configuran las percepciones ciudadanas hacia posibles golpes militares a partir de las orientaciones políticas y perspectivas socioeconómicas en el sistema democrático de Ecuador entre 2012 y 2019? Se ha escogido dichas fechas ya que a partir de 2013 se disminuyó el precio internacional de productos de exportación de dicho país (Justo, 2013). El presente proyecto tendrá como principal objetivo el comprender las percepciones ciudadanas de la participación militar en la democracia de Ecuador y cómo éstas se configuraron en el país desde el 2012 al 2019.

La presente investigación busca ser relevante debido a que estudia las percepciones hacia la democracia en un contexto de intervenciones militares, acontecidas en la historia reciente de ciertos países de América del Sur. En este proyecto, se desea tratar el tema, enfocándose el Estado en cuestión, que han afrontado cambios en su realidad política. Con un retorno regional a posibles aceptaciones de intervenciones militares, se debe volver a

considerar las visiones ciudadanas que se puedan tener de las actuaciones de las Fuerzas Armadas, frente al quebrantamiento del contexto democrático. Se tiene que constatar con qué se relaciona la visión del rol de los militares en el país, tomando en cuenta el impacto potencial que en la democracia podría tener un golpe militar en el país, a pesar de su aceptación.

Este trabajo puede abrir un camino al entendimiento de las orientaciones evaluativas de los ciudadanos hacia el rol de los militares en la democracia, desde la visión de Ecuador tomado como caso. La academia debe considerar, dentro de su ámbito de estudio, por qué en un sistema democrático se legitimaría la intervención militar en el asunto político, por parte de los ciudadanos de ciertos países. El estudio puede replicarse en un futuro para analizar distintos países de la región. Incluso, profundizar en temas como el quebrantamiento del sistema democrático por parte de otros actores, por ejemplo, el Poder Ejecutivo afectando el ámbito de acción de otros poderes. Existe una gran variedad de estudios en América Latina sobre actitudes hacia la democracia (Alanis Figueroa, 2002), lo que evidencia la importancia que se le da al tema a nivel regional. Por ende, la visión del papel que juegan las Fuerzas Armadas en distintos países de la región debe ser entendida de igual forma.

Finalmente, es relevante mencionar que la presente investigación es viable en su realización. Los datos que se pretende utilizar, como se lo evidenciará en el marco metodológico, son de acceso público y gratuito. Por otro lado, la revisión bibliográfica puede ser hecha virtualmente, por lo que se puede acceder a datos de cualquier espacialidad sin necesidad de movilización física, y en cualquier tiempo. Por ello, se puede deducir que los recursos necesarios no son tan elevados, y pueden ser fácilmente obtenidos.

El enfoque metodológico a utilizar en la presente investigación se centra en lo cualitativo. Ello se fundamenta en tanto que se pretende interpretar las relaciones entre resultados de encuestas, generalizando los datos obtenidos del segmento encuestado. Se buscará comprender la que Fernández, Baptista y Sampieri (2010) llaman “realidad interna”, que se basa en las creencias, presuposiciones y experiencias subjetivas de las personas en una población. Si bien, para esta exposición, se utilizarán datos numéricos y estadísticas, la interpretación que se buscará realizar requiere una metodología cualitativa en tanto los datos versan sobre una realidad no numérica a ser analizada, las percepciones individuales.

El estudio se realizará utilizando el método de comparación basado en un estudio de caso. Ello debido a que permitirá explorar cómo actúan las variables indicadas a lo largo del tiempo. De esta manera, buscar relaciones significativas para lograr comprender cómo se configuraron las percepciones ciudadanas que hubieran legitimado un golpe de Estado

militar en Ecuador en la temporalidad de estudio. Utilizando el método de comparación, se pretende investigar cómo han evolucionado dichas percepciones y con cuáles elementos se relacionan en mayor medida. Esto es debido a que, si bien la hipótesis marca que la aceptación de un golpe de Estado militar por parte de los individuos del país sería influida por las variables mencionadas previamente, esta percepción es amplia en el caso ecuatoriano durante 2018 y 2019, como se evidenciará posteriormente. Se buscará analizar los datos por país a lo largo de la temporalidad escogida, para luego comparar los resultados.

Los datos empíricos se obtendrán a partir de la encuesta, vista como "técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente construida" (López-Roldán & Fachelli, 2015, pág. 8). Se ha escogido para el estudio los resultados de las encuestas del Latin American Public Opinion Proyect (LAPOP) del 2012 al 2020 (los informes remiten a resultados del año previo a la publicación) de Ecuador. Se tomó dicha decisión ya que el Barómetro de las Américas es una encuesta comparativa y científicamente rigurosa llevada a cabo en 34 países de toda América, con una periodicidad de dos años (Vanderbilt University, 2019). "LAPOP usa enfoques y métodos innovadores con los 'estándares más altos' para llevar a cabo encuestas nacionales; conducir estudios de evaluación de impacto, y producir reportes acerca de las actitudes, evaluaciones y experiencias de los individuos" (Vanderbilt University, 2019). Además, el uso de los resultados de las encuestas mencionadas será de utilidad, ya que sus preguntas son muy similares e idénticas en los años elegidos, lo que facilita la comparación. Finalmente, las encuestas se dan con una muestra representativa a nivel nacional (Vanderbilt University, 2019)[1].

Las preguntas del cuestionario que se pretenden analizar serán las relativas a la legitimación de golpes militares; las evaluaciones hacia la democracia; tendencia ideológica del individuo; percepciones sobre corrupción; evaluación del trabajo de la presidencia; percepción de estado de economía; la percepción subjetiva de bienestar; interés o conocimientos en la política; respeto e identificación hacia las instituciones y la confianza hacia las Fuerzas Armadas, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y elecciones; en concordancia con la hipótesis. Vale mencionar que estas no pretenden ser exclusivas, ya que, a medida de la realización del estudio, es posible que se puedan aumentar preguntas a

[1] Agradecemos al proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) y a sus principales donantes (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y Vanderbilt University) por poner a disposición los datos.

analizar. Como se lo mencionó previamente, los años de estudio han sido tomados en cuenta debido a la tendencia a la baja del precio de materias primas. Ello, debido a que la región depende en gran medida en exportación de materias primas.

Por otro lado, se utilizará como técnica de recopilación de información el análisis documental. Se realizará una revisión de la literatura e información concerniente a la cultura política el país en cuestión, así como a las relaciones entre civiles y militares en democracia. Se buscará con ello recopilar y seleccionar datos que ayuden en el proceso de comparación e interpretación de las relaciones entre las variables mencionadas en la hipótesis. Para encontrar documentos relacionados con la materia a tratar, se utilizarán fuentes bibliográficas obtenidas en bibliotecas digitales y repositorios de datos. En este sentido, para la revisión de datos económicos, se utilizará como fuente al Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tomando datos como el Producto Interno Bruto (PIB), el PIB per cápita, la incidencia de la pobreza, la brecha de la pobreza, el índice de Gini, el Índice de Desarrollo Humano, entre otros. Debe recalcarse que los datos que se escogerán para realizar la presente no son la única posibilidad de análisis y existe amplios debates académicos en torno a su utilización. Sin embargo, para propósitos de la presente investigación, y por temas de medición, se los utilizará.

La estructura antes mencionada es beneficiosa para los objetivos del estudio en tanto posibilita una comparación en el desarrollo anual de Ecuador. Esta decisión se fundamenta debido a que posibilita generar un mayor control en los resultados de las encuestas y así poder identificar tendencias nacionales, dividiendo las relaciones de las variables entre temas políticos, económicos y sociales y sometiéndolas a la obtención del Chi-cuadrado para observar si la relación que éstas poseen con la justificación de un golpe de Estado es estadísticamente significativa. Posteriormente, se someterán los resultados generales nacionales a un contraste entre años, que permita identificar relaciones entre variables que tengan peso explicativo en a lo largo del tiempo. Con ello, se pretende poner a prueba la hipótesis y responder la pregunta de investigación.

El presente trabajo proyecta constituirse en tres capítulos de desarrollo: un capítulo teórico y dos capítulos empíricos. El capítulo teórico buscará identificar y desarrollar las aproximaciones teóricas que sean relevantes para el estudio relacionándose con la cultura política, la legitimidad, la democracia y los golpes de Estado. El primer capítulo empírico se enfocará en el estudio del caso en cuestión por años caso y tendrá como objetivo determinar los factores políticos, económicos y sociales que se relacionen a percepciones favorables a golpes de Estado y de quienes posean dichas percepciones en el contexto de las democracia

de Ecuador entre 2012 a 2019. Finalmente, el último capítulo, previo a las conclusiones, se enfocará en comparar los resultados antes obtenidos entre 2012 y 2019, por años sobre la configuración de las percepciones hacia los golpes de Estado en democracia.

Tras la realización del trabajo, se llega a la principal conclusión de que las variables que tienen relaciones más profundas con la legitimidad de los golpes de Estado militares son las orientaciones hacia la Presidencia y la percepción de la situación económica. Por otro lado, se puede evidenciar que existe una simultaneidad entre los resultados socioeconómicos del país y una cultura política positiva, en tanto las orientaciones positivas hacia las instituciones y mantenimiento democrático disminuyeron en conjunto con el empeoramiento de la coyuntura socioeconómica del país. Ello en el contexto ecuatoriano, en el cual las instituciones militares han jugado un rol reformista en la historia y se consolidan como la institución más confiada del país. Lo que podría significar que, a pesar de una serie de orientaciones positivas hacia la democracia, actitudes autoritarias persisten en la ciudadanía ecuatoriana, al juzgar la deseabilidad de una intervención militar no democrática en el poder ejecutivo electo si ésta se da ante una administración no aceptada o en una coyuntura de afectaciones económicas. Algo que, sin duda, corresponde un reto para el correcto funcionamiento de la democracia ecuatoriana, que demanda mayor materialización y democratización de sus beneficios, además de la socialización de lo que constituye una verdadera convivencia democrática.

CULTURA POLÍTICA, LEGITIMIDAD Y PERCEPCIONES CIUDADANAS: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA DESDE LA PROBLEMÁTICA DE LOS GOLPES DE ESTADO EN DEMOCRACIA.

1. Introducción.

En el presente capítulo, se abordará el tratamiento teórico de la problemática planteada desde varias aristas del estudio de las Ciencias Políticas con el fin de dilucidar algunas posibles explicaciones para la legitimidad del quiebre del régimen democrático. En primer lugar, se hablará sobre el tema de la cultura política, su objeto de estudio, la perspectiva psicosocial y las formas de construcción de orientaciones y percepciones individuales sobre los objetos políticos de su entorno. En este apartado, se incluirá una revisión teórica de la construcción de la legitimidad al poder. Posteriormente, se aterrizará el estudio de la cultura política, que revisa las percepciones hacia objetos como el sistema político, al régimen democrático. En ese sentido, se iniciará con un abordaje teórico de la conceptualización normativa de la democracia. A continuación, se vinculará el estudio de la cultura política a la teoría democrática desde el concepto de cultura cívica como ideal para el desarrollo democrático.

Finalmente, se presentará una visión que profundiza el abordaje de la democracia, trascendiendo la formalidad electoral, en el contexto propio de América Latina, una región marcada por la debilidad institucional, la pobreza y desigualdad. El último segmento se dedica a las posibles explicaciones teóricas de la legitimidad a los golpes de Estado, principalmente desde cuestiones valorativas y la elección racional. El mismo finaliza con una breve exposición de algunas ideas en torno a la cultura política de Ecuador. Para finalizar, se presenta la síntesis de la argumentación teórica que maneja este capítulo.

2. El estudio de la cultura política.

En el presente apartado se expondrán sobre la cultura política. Se iniciará con la revisión de su objeto de estudio, problemas de interés y enfoque de las Ciencias Políticas que lo prioriza. Posteriormente, se abordará la teoría en torno a las percepciones individuales centrales en el estudio de la cultura política. Finalmente, en tanto el eje central del estudio político gira en torno a las relaciones desiguales de poder, se propondrá elementos en torno a la construcción de percepciones sobre el poder, particularmente sobre su aceptación y legitimidad.

2.1. Aproximación y objeto de estudio.

La cultura política trabaja con las orientaciones afectivas, cognitivas y evaluativas de los ciudadanos hacia objetos políticos, entre ellos hacia los sistemas políticos como el democrático (Mateos, 2017). Es decir, se estudian percepciones de los individuos, pensados como actores políticos. "La cultura política engloba al conjunto de significados compartidos de la vida política y los recursos utilizados para pensar sobre lo político (…)" (Mateos, 2017, pág. 193). Por percepciones, se puede entender como significaciones o conceptualizaciones subjetivas, que pueden ser emocionales o afectivas, de conocimiento o cognitivas, o que impliquen un juicio o evaluación (Meyenberg, 2006). Lo que el individuo piense implica intercambios entre la dimensión subjetiva del individuo y el medio social (Blin & Marín, 2013).

El enfoque de análisis político que privilegia el estudio de las decisiones individuales es el psicosocial. Su principal supuesto consiste en que "lo que explica la conducta de una persona es algo que tiene lugar, o se experimenta, en su mundo interior" (Lozada & Casas, 2008, pág. 78). Las percepciones de los sujetos importan a pesar que no concuerden con la realidad (Lozada & Casas, 2008). El individuo construye sus preferencias, opiniones, valoraciones, afecciones y otras orientaciones sobre el mundo que lo rodea en ese intercambio entre el ámbito subjetivo y el medio objetivo en el que se desarrolla la persona. Sin embargo, la percepción propia del mundo no siempre tendrá coherencia con el accionar individual (Fleury, 2004).

2.2. La construcción de percepciones políticas.

Las percepciones individuales se vuelven políticas en cuanto el individuo les otorgue un significado político, o, en cuanto el individuo perciba que los eventos de la realidad le afectan (Lozada & Casas, 2008). Dichas percepciones pueden ser construidas de forma racional o irracional. En caso de que así fuese, el individuo hace un cálculo de costos y beneficios esperados en un ambiente de información imperfecta, asimétrica y costosa (Downs, 2007). Downs (2007) proponía que las personas deciden sus preferencias con base a un cálculo racional de beneficios esperados de las distintas opciones políticas, y se los compara con los costos y perjuicios que implicarían dichas opciones, en un conteo de información costosa e incompleta. Los individuos, en la realidad, tienen costos de adquirir información sobre política, ya sea monetarios o del tiempo necesario para procesar la información (Downs, 2007). Esa característica genera que se cambie la visión del mundo por parte de los individuos (Downs, 2007).

Sin embargo, la construcción de las percepciones también puede ser realizada siguiendo cargas valorativas y emocionales. Las ciencias sociales han ido identificando que las emociones tienen una fuerte influencia en el comportamiento político puesto que estas son parte fundamental de los marcos cognitivos de las personas (Castells, 2009). Para que un individuo decida su posición sobre algún tema en específico, entran en juego un sinnúmero de consideraciones. La racionalidad juega un papel en ese proceso, pero no único. Esas construcciones responden también a valores, experiencias, creencias, sentimientos, entre otras. Se debe considerar que la opinión pública se compone de tres factores: valores, disposiciones del grupo e intereses materiales personales, siendo los primeros dos más influyentes (Castells, 2009). En ese orden de ideas, el individuo, afectado por esta información incompleta, construye sus percepciones y preferencias hacia los objetos políticos. Es decir, "las creencias de los ciudadanos parecen ser el factor clave que determina la conducta política. Y estas creencias dependen en gran medida de lo que los ciudadanos desean" (Castells, 2009, pág. 214). Así, las personas no operan separando tajantemente lo práctico de lo epistémico, lo emocional de lo intelectual, lo participativo de lo teórico (Bustamante, 2003).

2.3. Legitimidad y poder.

En esa línea de ideas, una de las cuestiones de estudio de la cultura política es la legitimidad (Mateos, 2017). La legitimidad es entendida como la aceptación hacia el poder

de la autoridad. La dimensión de legitimidad afecta la forma en cómo se ejerce el poder en todo tipo de organizaciones (Blin & Marín, 2013). Un actor o su accionar son legítimos "en la medida en que la población considera el conjunto de su actuación apropiada respecto al sistema de valores y de reglas de esa sociedad" (Blin & Marín, 2013, pág. 176). A pesar de ser fuente de legitimidad, la legalidad no es sinónimo de legitimidad.

Max Weber (2002) distinguía tres tipos de autoridad legítima: la dominación carismática, la dominación tradicional y la dominación racional. La dominación carismática descansa en la capacidad extraordinaria de la persona, razón por la cual es seguida por otros. Por su parte, la dominación tradicional recae en la creencia de santidad de las tradiciones por el hecho de regir desde tiempos inmemorables. Finalmente, la dominación racional, "que descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad" (Weber, 2002, pág. 172). La democracia, en esta visión weberiana, ubica su legitimidad en la legalidad principalmente.

Los enfoques clásicos del estudio de la cultura política, en contraste, plantea orígenes distintos de legitimidad. La legitimidad, en ese sentido se construye de la siguiente forma:

> 1) la aceptación de valores políticos universales, 2) la validez legal de la adquisición y el ejercicio del poder, 3) la justificación de las reglas que gobiernan una relación de poder en términos de las creencias y valores vigentes en una sociedad dada, y 4) la evidencia de un consentimiento que se exprese en acciones. (Meyenberg, 2006, pág. 107)

Por último, la legitimidad también puede ser adquirida con base en resultados. Por ende, se puede mantener como "una hipótesis fundamental será que la gobernabilidad quedará aquí asegurada en la medida en que un gobierno pueda simultáneamente mantener la legitimidad y promover el desarrollo socioeconómico" (Alcántara, GOBERNABILIDAD, CRISIS Y CAMBIO, 1995, pág. 41).

3. Una aproximación hacia la conceptualización de la democracia.

Tras el abordaje precedente de la definición y el objeto de estudio de la cultura política, se procederá a tratar el tema de la democracia. En primer lugar, se presentará ideales de la democracia normativa, tomando en cuenta que el debate en torno a la conceptualización del

término referente a este sistema político es un pilar de la teoría política y su tratamiento es tan amplio que se presentará una parte del mismo. Posteriormente, se pretende anclar la conceptualización de democracia a la cultura política a partir del concepto de cultura cívica y el cambio axiológico a partir de la modernización. Finalmente, se presentará la realidad general de la democracia en América Latina, en la cual se conjuga un triángulo no siempre presente de democracia, pobreza y desigualdad, generando una paradoja de reproducción de desigualdades materiales en un contexto de igualdad política que afecta los ideales democráticos.

3.1. Los ideales de la democracia normativa.

Como se lo mencionó previamente, esta investigación partirá desde una visión normativa de la democracia y su vinculación con la cultura política. Existe un sinnúmero de definiciones de democracia que varían enormemente en sus postulados. Sin embargo, a breves rasgos, se entiende por la misma como un sistema político en el cual son los ciudadanos quienes tienen el poder de decisión sobre los asuntos públicos. Robert Dahl (2001) proponía los siguientes criterios básicos para considerar a un sistema político como democrático: 1) que todo miembro exprese sus preferencias de forma libre; que dichas preferencias sean tomadas en cuenta sin distinción, un ciudadano, un voto; 2) que se declare a la alternativa con mayor cantidad de votos como la ganadora; 3) que los ciudadanos posean igual información sobre las alternativas; y, finalmente, 4) que las decisiones de cargos electos sean iguales para todos (Dahl, 2001). Además, Dahl proponía que las condiciones esenciales para que se dé un sistema democrático eran las siguientes: 1) control del poder militar y policiaco por parte de oficiales electos; 2) creencias y cultura política democrática; 3) la ausencia de control extranjero que sea hostil a la democracia; y, como condiciones favorables a la democracia, 4) una economía y una sociedad basadas en la modernidad y el mercado; y, 5) un pluralismo subcultural débil (Dahl, 1998). Las dos primeras condiciones son especialmente importantes para los objetivos de este proyecto.

A estas condiciones, se puede añadir las siguientes características de la democracia propuestas por Anthony Downs (2007): 1) dos o más partidos compiten por el control del aparato gubernamental en elecciones periódicas; 2) el partido o coalición que obtiene mayoría de votos gana; los partidos perdedores nunca intentarán evitar que los ganadores lleguen al poder; 3) los partidos ganadores no intentarán evitar que la oposición participe políticamente en la elección siguiente; y, 4) cada ciudadano tiene un voto (Downs, 2007).

Esa igualdad es básica en el concepto de ciudadanía (Meyenberg, 2006). De lo anterior se deduce que la democracia se basa en decisiones populares libres, fundamentándose en la igualdad formal de los ciudadanos, que deben ser ejecutadas, respetando la pluralidad en la participación política. El sistema democrático, por ende, requiere el respeto a dicha decisión popular.

Finalmente, es importante mencionar que el sistema democrático, al ser un sistema de gobierno, se inserta en el seno de un Estado. Por ello, se requiere que sea el mismo Estado quien garantice la democracia a través del Estado de derecho. En un informe sobre la Democracia en América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuya aproximación teórica fue coordinada por académicos como Guillermo O'Donnell, se establece que "la democracia también implica la vigencia del estado de derecho. (…) la independencia de los poderes y un sistema legal que (…) protege las libertades políticas y las garantías (…), protege los derechos civiles (…) y establece redes de responsabilidad (…)" (O'Donnell, 2004, pág. 56).

La democracia tuvo sus orígenes en la antigüedad, más precisamente en Atenas. La diferencia principal entre la democracia concebida en sus orígenes griegos y la mantenida en la actualidad es la representatividad. El ciudadano antiguo concebía su libertad democrática como el deber cívico de participar en la vida pública; mientras que, en la actualidad, esa libertad democrática consiste en escoger representantes que se encarguen de tomar decisiones sobre asuntos de Estado, para posibilitar el desarrollo de la vida privada (Constant, 1819). Es entendible, pues, sería imposible en tiempos modernos mantener una democracia directa en la cual todos los ciudadanos participen activa y constantemente. Sin embargo, la democracia también presenta la característica fundamental de permitir a los ciudadanos participar en los procesos de toma de decisiones públicas en el seno de la sociedad. Esta participación puede ser a varios niveles y responder a canalización de distintos conflictos. Pero, evidentemente, se vuelve fundamental para el bienestar democrático en tanto el sistema va más allá de la simple formalidad electoral, como se lo expondrá posteriormente (Anduiza & Bosch, 2004).

Una vez realizado un recuento de algunas de las principales características de la democracia, es pertinente revisar su teorización en América Latina. Guillermo O'Donnell revisó el concepto de poliarquía de Dahl y propone una nueva tipología de democracia que identifica como usualmente presente en América Latina y algunas zonas del Asia, tras los procesos de democratización en la segunda mitad del siglo anterior. O'Donnell comienza proponiendo que el diseño democrático dependerá en factores históricos de larga data, y por

ende distintos contextos no desarrollarán la misma intensidad institucional, o incluso las mismas instituciones. (O'Donnell, 2011). En ese sentido, logra observar que, si bien las democracias instaladas en la región cumplen con los criterios básicos propuestos por Dahl, no pueden ser denominadas representativas; además de no encontrarse consolidadas, sobre todo en periodos de profundas crisis sociales y económicas (O'Donnell, 2011). El periodo de transición de un régimen autoritario a un régimen democrático puede tener varias particularidades dependiendo del caso, que guiarán a resultados igual de disimiles. O'Donnell (2011), observa que existen dos etapas del periodo de transición: la instalación de un gobierno elegido democráticamente, y el desarrollo de un régimen democrático institucionalizado y consolidado; siendo posible que se dé la primera y no la segunda, derivando en una democracia delegativa. La clave de la segunda transición es la institucionalidad.

Por instituciones, se puede entender como "patrones de interacción regulados, que son conocidos, seguidos y comúnmente aceptados —aunque no necesariamente aprobados mediante normas— por los agentes sociales que esperan continuar interactuando bajo las reglas y normas formal o informalmente plasmadas en esos patrones" (O'Donnell, 2011, pág. 9). El régimen democrático genera instituciones políticas para reproducir los comportamientos esperados por los actores. En ese sentido, las instituciones democráticas se caracterizan por las siguientes consideraciones: 1) determinan recursos, exigencias y procedimientos para incorporar o excluir actores del proceso de toma de decisiones; 2) determinan una distribución de resultados probable y esperable; 3) influyen en los comportamientos y decisiones de los agentes, en un contexto de tiempo e información limitada; 4) introducen modelos de representación con el fin de convertir una pluralidad de voces en unas pocas capacitadas para hablar por ellas, debiendo los representantes rendir cuentas; 5) determina el rango de posibilidades a priori, presentándose el cambio como consensuado e incremental y; 6) se espera que perduren en el tiempo (O'Donnell, 2011). Esta institucionalidad es básica para la consolidación de una democracia representativa, en tanto proporciona previsibilidad, y por ende estabilidad, al juego democrático, reduciendo la posibilidad de aparición de dilemas de prisionero (O'Donnell, 2011).

La cuestión de la rendición de cuentas es central. Esta se puede dar de dos formas. La primera, de forma vertical, teniendo los ciudadanos la capacidad de castigar al gobierno con su voto en las próximas elecciones; y, la segunda, de forma horizontal, por medio de instituciones, como la separación de poderes, que pueden limitar decisiones arbitrarias y ejercer cierto nivel de control sobre el gobierno (O'Donnell, 2011). En ese sentido, cabe

considerar que la división de poderes se vuelve fundamental para la teoría republicana. La misma nace con la propuesta de los tres poderes de Montesquieu: el Legislativo, que crearía leyes; el Ejecutivo, que se encargaría de ejecutar mandatos soberanos; y, el Judicial, encargado de velar por el cumplimiento de las leyes. Montesquieu concibe dicha separación como respuesta a la necesidad de poner fin al despotismo, visto como corrupción del sistema, naciendo de una distribución de dichos poderes entre estamentos sociales (Abellán García, 1992). El concepto se desarrolló hasta ser parte fundamental de la teoría republicana, generando que la tiranía sea imposible, al menos en teoría (Shafritz, Russell, Borick, & Hyde, 2017). El sistema está pesado para ejercer pesos y contrapesos en las decisiones públicas, disminuyendo el riesgo de arbitrariedad.

Ahora, la pregunta es qué sucede si las instituciones no se materializan y pierden importancia en el flujo de influencia para la toma de decisiones (O'Donnell, 2011). Precisamente la falta de una institucionalidad fuerte es la característica principal de la democracia delegativa. Esta nueva tipología de democracia se basa "en la premisa de quien (…) gane una elección presidencial tendrá el derecho a gobernar como (…) considere apropiado, restringido sólo por la dura realidad de las relaciones de poder existentes y por un período en funciones limitado constitucionalmente" (O'Donnell, 2011, pág. 12). En otras palabras, el poder se legitima, en términos de Weber, mediante una visión mayormente carismática que racional legal. Además, tiende a desmarcarse del diálogo democrático con la oposición para ejercer gobierno. La rendición de cuentas horizontal y la institucionalidad se debilitan, o incluso desaparecen. Por otro lado, la democracia delegativa mantiene la rendición de cuentas vertical. En ese sentido, una características propias de la misma es su carácter plebiscitario y fuertemente mayoritario, al basarse principalmente en la elección popular como origen de la delegación de la soberanía al líder (O'Donnell, 2011). En otras palabras, el único límite se vuelve el término constitucional del mandato y el voto electoral. En ese sentido, la democracia delegativa es "más democrática, pero menos liberal que la democracia representativa" (O'Donnell, 2011, pág. 12).

Las definiciones de democracia son muy amplias y el debate en torno a las mismas ha acaparado en gran medida la producción académica de las Ciencias Políticas. No es pretensión de esta investigación el abarcar la amplia producción teórica sobre la democracia. Sin embargo, es pertinente mencionar un punto de acuerdo: la subordinación de cargos militares, al no ser electos, a cargos civiles electos. De ello, se puede deducir que una de las condiciones para la institucionalización de la poliarquía es el control del poder militar y policial por parte del poder elegido por la soberanía popular (Máiz, 2009). Por su parte, está

implícito que en la democracia delegativa los militares no podrían ingerir en el desarrollo de la democracia y las acciones de las figuras nombradas por parte de la decisión ciudadana, inadmitiendo la posibilidad del rol tutelar de los militares en democracia (Duque Daza, 2014). En fin, existe "una clara y justificada prevención respecto a la posible injerencia de los militares y de otros actores externos en el ejercicio del poder" (Duque Daza, 2014, pág. 58).

En suma, desde una visión normativa de la democracia, se puede establecer que el poder electo debe ser respetado por poderes no electos. Esta característica está contemplada, en efecto, en las normas fundamentales de los Estados en la región. Los sistemas políticos y las constituciones latinoamericanas se inspiran jurídicamente en modelos teóricos y legislativos europeos (Rouquié, 1981). En general, las instituciones normativas de la democracia en América Latina prohíben que las Fuerzas Armadas ejerzan un rol de poder por encima del poder civil electo. Sin embargo, la tendencia en Latinoamérica parece mostrar que las Constituciones se configuran como una aspiración casi utópica, desconectada de la realidad, como se lo expondrá posteriormente.

3.2. La cultura cívica, la evolución cultural y la democracia.

Como se lo mencionó previamente, la democracia no es ajena a la cultura política. La democracia es un sistema político basado en los individuos. Las instituciones formales no son variables suficientes en la consolidación democrática, al ir ésta más allá de lo que se establece normativa y formalmente (Mateos, 2017). Es decir, la consolidación democrática depende, en igual medida, de las orientaciones de los individuos. La cuestión radica en que el poder individual es central en la autoridad y legitimidad democrática. Existe una diversidad de clases de cultura política que difieren entre sí. La cultura política ideal para la democracia es, de acuerdo a ciertos planteamientos teóricos, la cultura cívica (Almond & Verba, 1970). Para su análisis, se debe remontar a otros tipos de cultura política.

Almond y Verba (1970) establecen la existencia de tres tipos básicos de cultura política, que posteriormente podrán converger en nuevas formas. La primera clase de cultura política que Almond y Verba identifican es la cultura parroquial. En ella, los individuos se relacionan muy poco con el sistema político, los roles sociales son difusos y sus orientaciones cognitivas hacia el sistema son limitadas (Almond & Verba, 1970). En segundo lugar, la cultura política de súbdito, en la cual el individuo adquiere un rol pasivo y obediente en el sistema, y posee orientaciones fuertemente desarrolladas hacia los resultados del mismo

(Almond & Verba, 1970). Finalmente, la cultura política participante, en la cual las orientaciones cognitivas son altas con respecto a todos los elementos del sistema político y los individuos se creen capaces de influir en el desarrollo del sistema (Almond & Verba, 1970). Cabe recalcar que estos tipos de culturas no son excluyentes y pueden convivir dentro de una misma sociedad (Almond & Verba, 1970).

Los autores finalizan su estudio proponiendo que, para favorecer la estabilidad democrática los ciudadanos deben desarrollar una cultura cívica, entendida como una "cultura política mixta. Hay en ella muchos individuos activos en la política, pero también hay muchos otros que desempeñan el rol más pasivo de súbdito" (Almond & Verba, 1970, pág. 530). Es decir, que los ciudadanos no necesariamente tienen que participar, sino encontrarse en capacidad de hacerlo cuando lo consideren necesario. Para esto, los individuos tienen que ser participativos en potencia y desarrollar un equilibrio entre la cultura política parroquial, la de súbdito y la de participante (Almond & Verba, 1970). En otras palabras, los individuos requieren la percepción de que pueden influir en el sistema político y encontrarse en la capacidad y predisposición de hacerlo (Almond & Verba, 1970).

El desarrollo de la cultura política, sin embargo, no se da de forma aislada. Sus distintas formas se relacionan con el entorno político, social y económico en el que se desempeñan los individuos. El enfoque funcionalista del estudio de la cultura política se orienta en estudiar la cuestión de la construcción de dichas percepciones. "El funcionalismo entiende la cultura política como el conjunto de interconexiones lógicas entre las preferencias, los intereses y las concepciones de las necesidades y los recursos (…)" (Mateos, 2017, pág. 201).

En este enfoque, se destaca el trabajo de Ronald Inglehart (1977) en su conceptualización de la "Revolución Silenciosa". En su estudio, el autor sostiene que las distintas sociedades evolucionan a ritmos diferentes, y que los cambios de las mismas representan también modificaciones en las tendencias de pensamiento de sus miembros. Así, dentro de las sociedades post industriales, debido a que sus necesidades primarias se encuentran mayoritariamente satisfechas, se desarrollan más los valores post materiales reflejados en la autorrealización, participación, estilo de vida y estructuras políticas o sociales menos jerárquicas. En contraste, si la sociedad es agraria, o las necesidades primarias no se encuentran garantizadas, los individuos desarrollarán principalmente valores materiales, como la seguridad alimentaria, económica o física, el empleo, entre otras.

Los cambios sistémicos, entre ellos, el desarrollo económico y tecnológico, las experiencias, la educación y la expansión de la comunicación de masas, generarán valores

individuales que se centren en la participación democrática (Inglehart, 1977). Aun así, existen sociedades en los cuales dichos valores no han sido desarrollados totalmente, persistiendo valores tradicionales y materiales (Inglehart, 2015). En ese sentido, parece ser que el desarrollo económico está vinculado a la consolidación de valores democráticos como la participación o la justicia. Valores tales, como la legitimidad de la acción institucional por encima de la ruptura del sistema que implicaría un golpe militar. Sin embargo, también pueden presentar dificultades al sistema con la aparición de nuevas necesidades.

3.3. El caso latinoamericano, debilidad institucional, pobreza y desigualdad: nuevas luces al debate democrático.

América Latina es una región en la cual predomina la adopción del sistema democrático como forma de gobierno importante. La mayor parte de los Estados latinoamericanos poseen, en efecto, un régimen que se puede considerar democrático, aunque no pleno (The Economist, 2020). La democracia en la región ha tenido una historia marcada por avances y retrocesos, pero se consolidó tras la última serie de regímenes autoritarios en la última mitad del siglo pasado. La democracia en América Latina presenta ciertas particularidades que alejan su realidad de las regiones en las cuales su desarrollo se ha consolidado. En primer lugar, está el tema del Estado de derecho. Sin embargo, se debe mencionar que se trata de una zona en la cual se viven altos índices de desigualdad social, en un marco de igualdad política democrática (O'Donnell, 2004).

Si bien se establece que la democracia va más allá de la formalidad electoral, la existencia de instituciones y procedimientos sigue siendo una condición necesaria para la existencia de un régimen democrático. Por ello, se resalta la importancia del Estado de derecho como garantía para el mantenimiento y la calidad de un sistema democrático. En ese sentido, la fragilidad del Estado de Derecho en América Latina ha sido evidente a lo largo de su historia (Rouquié, 1981). "Los valores que sustentan las practicas conformes a las instituciones adoptadas cumplen la función de una utopía (…) Inflan la retórica satisfecha de los gobernantes y alimentan la amargura de los opositores. La regla constitucional se vuelve la excepción" (Rouquié, 1981, pág. 2). En otras palabras, la historia de América Latina ha demostrado que sus instituciones constitucionales no han sido efectivamente implementadas. "Sería cometer un error dejarse engañar por la similitud de los textos constitucionales y de la inspiración jurídica de los sistemas políticos latino-americanos" (Rouquié, 1981, pág. 1).

En lo referente a cultura política, la producción teórica ha identificado varias características compartidas entre los países de América Latina. En este sentido, a raíz de una realidad marcada por las herencias de modelos coloniales explotadores, bajo desarrollo económico y dependencia, componentes de clientelismo, personalismo y baja adhesión a partidos políticos (Duarte & Souza, 2015). Por otro lado, el paso de autoritarismos en la región ha dejado marca. El legado de estos regímenes derivó en una sociedad civil debilitada y fragmentada, dando como resultado una división entre la participación política convencional y no convencional (Duarte & Souza, 2015). Se presenta, por ende, una doble cara en el desarrollo político latinoamericano: por un lado, se da una reestructuración estatal basada en una mayor innovación, mientras, por otro, se mantienen lógicas de percepción por las cuales la democracia se considera importante pero existen malas percepciones con respecto a las instituciones (Duarte & Souza, 2015).

Por otro lado, se debe considerar que la realidad de la región está marcada por altos índices de desigualdad y pobreza. La realidad única de la región genera que tanto democracia, como pobreza y desigualdad coexistan un triángulo muy presente en la política latinoamericana (O'Donnell, 2004). Esta realidad ha derivado incluso en consideraciones en torno a la libertad que, como se lo mencionó, es una de las condiciones necesarias para la democracia. El sistema democrático utiliza la libertad para perfeccionarse, pero la libertad no sólo implica poder elegir entre opciones, sino también que las opciones estén presentes (O'Donnell, 2004). Por ello, las dificultades económicas que presenta la realidad de la región se pueden traducir en problemas a la hora de ejercer realmente la libertad política que el régimen democrático otorga. Esta realidad puede derivar incluso en "la paradoja extrema de la existencia de una sociedad pobre en términos de los derechos sociales y económicos de sus ciudadanos, incluso pobre en sus derechos civiles básicos, pero plenamente democrática" (O'Donnell, 2004, págs. 44 - 45). Por ello, toda carencia social se puede, en última instancia, traducir en una carencia democrática (O'Donnell, 2004).

El problema puede deberse a la separación del condicionamiento formal para la existencia de la democracia de la cuestión de la igualdad material para efectivizar las garantías formales de la democracia. Existe una deficiencia conceptual, en tanto se juzga a la democracia como un régimen de electores, mas no necesariamente de ciudadanos o de individuos pertenecientes de todo derecho a la comunidad política; es decir, la democracia en la región tiene el desafío de ampliar las esferas conceptuales de la democracia de lo meramente formal a lo civil, social, económico y político (O'Donnell, 2004). Esta consideración viene, incluso ligada, a la necesidad de la cultura cívica, pues las deficiencias

sociales y económicas de Latinoamérica dificultan su consolidación. Este "debate incompleto" ha derivado en una baja credibilidad y prestigio de instituciones democráticas como los partidos políticos, o la capacidad de los gobiernos para abordar problemas sociales centrales, especialmente los derechos civiles y políticos (O'Donnell, 2004).

Existe, por ende, una "compleja y contingente, entre régimen democrático y justicia social. La capacidad de la primera para engendrar la segunda está en cuestión" (Vidal de la Rosa, 2010, pág. 91). La problemática social tratada tiene importantes efectos en la materialización de la igualdad formal que la democracia pregona. Cuando la desigualdad impera, puede suceder que el sector de la élite "puede imponer ciertas reglas y vetos al proceso de democratización, a su ritmo y profundidad" (Vidal de la Rosa, 2010, pág. 93). En otras palabras, se permite que el poder no político sea instrumentalizado para fines políticos que reproduzcan el statu quo y, por ende, una desconfianza en la adaptabilidad del cambio. Sin embargo, es importante resaltar que la desigualdad "no es una cuestión puramente objetiva, sino que interviene en la percepción que de ella tiene cada actor" (Vidal de la Rosa, 2010, pág. 96).

La falta de garantías reales frente a los problemas sociales propios de la región se relaciona con desafíos reales presentes en la consolidación de la democracia. Ya se ha hablado de las carencias del Estado de derecho por parte de la débil institucionalidad del Estado. Sin embargo, este problema presenta otra arista. En América Latina se ha propiciado una visión fragmentada de ver a la democracia separada de lo económico y social, lo que puede derivar en tendencias crecientes de ciudadanos de ignorar la institucionalidad formal democrática y obtener respuestas a sus demandas por medio de vías informales o ilegales (O'Donnell, 2004).

La falta de respuestas a demandas económicas y sociales por parte de las instituciones afecta en la percepción ciudadana a las mismas, y empuja a la búsqueda de nuevas opciones. La Real Academia de la Lengua define la economía como el estudio de los métodos más eficaces para asignar recursos escasos a fin de satisfacer necesidades humanas y como la cantidad de riqueza de una sociedad o individuo (Real Academia de la Lengua, 2021). Es decir, la economía está subordinada a las necesidades humanas, y por ello, se asocia al bienestar, entendido como la satisfacción o conjunto de elementos para vivir bien que posee un individuo (Rosen, 2008). Sin embargo, cuando los individuos carecen de los medios, o ven sus medios de vida empeorados, y el Estado, cuyo fin último es el bienestar general, no actúa, se podría generar anomalías en el sistema político. Así, "por ejemplo, para muchos ciudadanos latinoamericanos alcanzar mayores niveles de desarrollo en sus países es una

aspiración tan importante que muchos estarían dispuestos a apoyar un régimen autoritario si éste pudiere dar respuesta a sus demandas de bienestar" (O'Donnell, 2004, págs. 39 - 40).

Se alza la pregunta sobre compatibilidad de la democracia con la exclusión. Sobre ello, se puede estipular que la democracia es compatible con la desigualdad si se ve a la democracia como limitada a los formalismos electorales. (Fleury, 2004). Inclusive, la capacidad de las instituciones democráticas de canalizar el conflicto ha logrado que se reduzca los riesgos de agitación social frente a la histórica incapacidad institucional de hacer frente a las demandas ciudadanas (Fleury, 2004). En ese sentido, se vuelve a presentar el triángulo en donde conviven en tensión la democracia, la pobreza y la desigualdad. En general, es importante recalcar que la democracia es vista por la ciudadanía como una condición para que la región se desarrolle (Fleury, 2004).

En el marco de las percepciones, América Latina muestra una tendencia de presentar poca confianza, necesaria para la cultura cívica, tanto a instituciones gubernamentales, como hacia otros ciudadanos (Fleury, 2004). Esto presenta problemas para asegurar la gobernabilidad y el apoyo ciudadano a las decisiones públicas (Fleury, 2004). Como se lo abordará posteriormente, esto puede tener relación con el mismo concepto de representatividad. Se ha visto cómo la presencia de elecciones para decidir sobre cargos representativos no asegura que los representantes cumplan su mandato (Fleury, 2004). Ello tiene una gran vinculación con la debilidad institucional. Las crisis de gobernabilidad de la región se suelen atribuir a la combinación de régimen presidencial con un sistema de partidos muy fragmentado (Fleury, 2004). Pero, el problema más profundo es la carencia del Estado de derecho para garantizar la igualdad. Se percibe que las instituciones políticas fallan a la hora de construir la ciudadanía, entendida como una dimensión pública de los individuos que les da, en condiciones mayormente equitativas, derechos y asigna responsabilidades correspondientes (Fleury, 2004).

Fleury (2004) plantea incluso un cambio de paradigma democrático hacia un modelo de democracia deliberativa. Esta se basa en una búsqueda de innovación institucional para lograr una mayor democratización de las instituciones democráticas. El mismo modelo se basa en los principios de reconocimiento del otro, la inclusión de los ciudadanos a la comunidad política mediante la participación activa y el combate a la exclusión (Fleury, 2004). Como su nombre lo indica, dicho modelo se basa en la deliberación. Se trata de decidir las mismas normas a un proceso de toma de decisiones colectivas de todos los interesados basados en la presentación de argumentos bajo los valores de racionalidad e imparcialidad

(Fleury, 2004). Ello, según la autora, podría contribuir a una mayor priorización de la justicia social y la disminución de la exclusión.

4. Posibles explicaciones teóricas a la legitimidad de golpes de Estado desde la cultura política latinoamericana.

La consideración precedente lleva a pensar que la democracia en América Latina, históricamente, no ha sido una realidad que se haya dado por sentado. Es así como se debe introducir el tema de la legitimación del quebrantamiento de una de las consideraciones normativas de la democracia: la abstención de atentar contra el poder electo mediante vías no institucionales. En este apartado se verá sobre las explicaciones, desde la teoría, de cómo el ciudadano puede alejarse del ideal democrático de aceptar las normas del juego, para aceptar medios no institucionales de resolución de conflictos. Es importante recalcar que no se pretenderá tratar la legitimidad de las dictaduras, pero sí de los golpes de Estado dados por la clase militar que pueden derivar en dictaduras.

4.1. Aceptación del quebrantamiento del sistema democrático.

La democracia puede verse perjudicada por un quiebre constitucional, al remover, por ejemplo, por vías no institucionales, a un mandatario electo. La existencia misma de golpes militares en la historia latinoamericana evidencia cómo se ha quebrantado el régimen democrático constitucional. Si bien estos quebrantamientos no constituyen una regla, estos pueden ser capaces de legitimarse y ser aceptados por la sociedad. Es cuando el estudio de la cultura política se vuelve relevante. Sin bien no todo quebrantamiento del sistema político democrático degeneraría en dictadura (Rouquié, 1981), esto significaría una afectación por sí misma a la democracia al atentar contra el poder electo. Los golpes de Estado representan, un riesgo para el mantenimiento democrático. El término, en un inicio, se utilizó para describir la irrupción de gobiernos de facto asociados al autoritarismo, y se desarrolló hasta expresar la captura del Estado por instituciones militares (Victoriano, 2010).

El quebrantamiento del sistema democrático, por un lado, puede legitimarse desde ideas políticas. En América Latina, se ha observado que el ejercicio de poder se percibe como viciado, no controlado por los electores, quienes votan, pero no eligen (Rouquié, 1981). En los “Estados latinoamericanos se encuentran establecidos dos tipos de legitimidad, generalmente en conflicto. Por una parte, una legitimidad de tipo legal y mayoritario en

conformidad con los preceptos constitucionales, por otra una legitimidad que se puede llamar oligárquica" (Rouquié, 1981, pág. 3). Esa construcción paralela se contrapone, precisamente, a las visiones normativas de democracia, al alejarse el ejercicio del poder de la soberanía popular y permiten la legitimación de acontecimientos alejados de estos mismos ideales de democracia.

Esa dualidad explica el desfase entre lo que la ciudadanía acepta y lo que las instituciones formales mantienen. Ocurre, por ejemplo, que "un gobierno legal puede ser considerado como ilegítimo por la subjetividad social dominante y una "dictadura" instaurada de manera ilegal adornarse de una legitimidad apenas discutida" (Rouquié, 1981, pág. 3). La cuestión radica precisamente en la creencia que las instituciones legales y los valores que estas sustentan son inaccesibles, por lo que se duda de su legitimidad y la justificación del autoritarismo se vuelve más eficiente (Rouquié, 1981). Sin embargo, es relevante resaltar que no es siempre cierto que una quebrantamiento institucional por medio de un golpe devendrá en una dictadura (Rouquié, 1981).

Si bien los golpes no encuentran legitimidad en la legalidad, dichas acciones son juzgadas por diferentes sectores sociales a partir de sus aspiraciones, valores e intereses; por lo tanto, su legitimidad es siempre cambiante (Rouquié, 1981). Menciona Rouquié (1981) que:

> A la legitimidad de origen del nuevo poder, fundado en las "causas justas" de la ruptura del orden político, se agrega la "legitimidad de ejercicio" que puede referirse al restablecimiento del "orden natural" o a la "búsqueda del bien común" coincidiendo este último hoy con la "modernización" o el "desarrollo económico". (Rouquié, 1981, pág. 4)

Por otro lado, se debe considerar la cuestión de las carencias democráticas. El vínculo entre la legitimidad democrática con la cultura política se encuentra alrededor de las siguientes consideraciones por parte de los ciudadanos: la evaluación de las capacidades redistributivas del régimen; el correcto uso de las instituciones y procedimientos democráticos; la justificación de la toma de decisiones por parte de la autoridad; y, la justicia de trato hacia los ciudadanos (Meyenberg, 2006). Dichas fuentes de legitimidad pueden entrar en conflicto con la aparición de nuevas demandas democráticas y una posible incapacidad del Estado para resolverlas. Además, la incapacidad integradora del sistema político está vinculada con la pérdida de fuerza del sentido de nación como fuente de

legitimidad, insatisfacción de los resultados de las acciones gubernamentales y cambios en el sentido de la participación política (Meyenberg, 2006). Esta tarea de distribución y las respuestas a las demandas por parte del sistema democrático, ligadas a su propia legitimidad, ve un amplio desafío en el contexto de una región marcada por carencias sociales y económicas, y puede derivar en la aceptación de procedimientos que van en contra de la misma democracia, como se lo mencionó anteriormente. Incluso, "(…) existe una estrecha relación entre el desempeño económico de los gobiernos latinoamericanos y la forma en que los ciudadanos aprecian la democracia" (Alanis Figueroa, 2002, pág. 153).

Estas dificultades pueden ser ligadas, de igual manera, al mismo concepto de representación democrática por el cual el poder soberano es delegado. Se percibe que, "pese a la habilidad relativa de las instituciones de representación para manejar los intereses materiales de los representantes persiste una incapacidad de comunicación entre representantes y representados" (Meyenberg, 2006, pág. 109). La representación falla en el proveer cercanía entre los representantes y representados, generando que estos últimos sientan que no tienen control sobre los primeros, y que no son cuidados por los mismos (Meyenberg, 2006). Si bien, la representación sigue siendo fundamental en la democracia, existe una crisis de la misma, al sentirse los individuos alienados de las decisiones políticas (Alcántara & Freidemberg, Los partidos políticos en América Latina, 2001). En el tema concerniente, se ha mostrado que la evaluación al trabajo del representante se puede extender hacia la evaluación del sistema político en el cuál gobierna. Dicho de otro modo, "el apoyo político al régimen democrático depende de la forma como se evalúa el desempeño del gobierno en turno" (Alanis Figueroa, 2002, pág. 153).

La última consideración se relaciona, inclusive, con uno de los problemas centrales de la democracia delegativa de Guillermo O'Donnell. Debido a que el poder, como se lo mencionó anteriormente, es delegado a la figura presidencial para que esta pueda tomar las decisiones que desee sin necesidad de obstáculos horizontales o una institucionalidad que guie el proceso político, la responsabilidad del éxito o fracaso de las medidas adoptadas recae especialmente en el Ejecutivo (O'Donnell, 2011). Las decisiones se toman de forma rápida y sin obstáculos institucionales, pero con poca probabilidad de ser implementadas adecuadamente, lo que aumenta el riesgo de fracaso y, por ende, a la fatiga de la imagen del presidente (O'Donnell, 2011). "El cambio desde una amplia popularidad a una difamación general puede ser tan rápido como dramático" (O'Donnell, 2011, págs. 19-20). En ese sentido, O'Donnell menciona que, ante la crisis o las disfunciones socioeconómicas del gobierno:

> “Dado este escenario, en el pasado la consecuencia “natural” en América Latina habría sido un golpe de Estado exitoso. Claramente, las DDs (democracias delegativas), debido a su debilidad institucional y a los patrones erráticos de elaboración de políticas, son más propensas a la interrupción y al colapso que las democracias representativas”. (O’Donnell, 2011, pág. 20)

Una desconexión entre representante y representado atenta, asimismo, contra el principio de participación democrática, en tanto aliena a los ciudadanos que son, en última instancia, el origen del poder político democrático. Inclusive, desde el punto de vista funcional, la participación es fundamental en tanto provee legitimidad al sistema político, algo fundamental para su estabilidad; mejora las condiciones de ciudadanía, entendidas como la vinculación individual a la sociedad; y es una expresión material de la igualdad política de los ciudadanos (Anduiza & Bosch, 2004). A falta de esta visión de conexión entre las esferas de poder y los ciudadanos, en conjunto con una percepción de poca incidencia, el sistema puede verse afectado ante la percepción individual.

En un régimen democrático que no puede adquirir las características que lo legitiman mencionadas previamente, tiene dificultades en consolidarse. Así, la democracia no satisfactoria, sea en lo político o en lo socioeconómico, puede servir de base para legitimar su quebrantamiento. Visto desde la elección racional en un contexto de información incompleta, como por ejemplo la distinción entre gobierno y sistema político, ante las deficiencias de una opción política, el individuo puede desencantarse de la misma, y preferir otra opción. Por otro lado, puede suceder que la falta de desarrollo de ideas favorables a la democracia atente contra el propio sistema, y abran paso a la legitimidad de su quebrantamiento. Esta cuestión, desde la teoría, parece estar presente en algunos países latinoamericanos y sus efectos se profundizan debido a las singularidades de la región tratadas previamente. En ese sentido, en varios países de América Latina, la clase militar ha jugado un papel importante en la política; que, si bien ha disminuido durante la década de los noventa, actualmente ha retornado “la cuestión militar” (Tokatlián, 2010). La cuestión militar se “refiere a la centralidad alcanzada por los asuntos que implican la amenaza y el uso de la fuerza, así como a la relevancia de un control civil y democrático para evitar costes colectivos (…) para una nación y asegurar su bienestar” (Tokatlián, 2010). Así, parece que ha retornado la relevancia del tema y su realidad en el contexto latinoamericano.

5. La cultura política en Ecuador.

Para finalizar el presente capítulo teórico, se expondrá un breve resumen general de la cultura política centrada en el país en cuestión. En el mismo apartado, tras el abordaje teórico, se expondrán algunos indicadores que den cuenta del estado de la pobreza, democracia y desigualdad en los países durante el periodo escogido.

Sobre cuestiones de autoritarismo, este presentó menos impactos en Ecuador. En 1972, el presidente José María Velasco Ibarra fue derrocado por la clase militar, lo que derivó en la creación de un Gobierno de facto a cargo de Guillermo Rodríguez Lara. Su dictadura, sin embargo, no se dedicó a reprimir brutalmente a la izquierda. De hecho, la dictadura recibió "el apoyo del Partido Comunista de su país porque los comunistas pensaban que los gobiernos militares de carácter nacionalista y reformista ofrecerían a su partido más oportunidades de ejercer influencia política, especialmente en el movimiento obrero, que los gobiernos electivos" (Angell, 1997, pág. 111). El régimen de Rodríguez Lara fue reformista en sus políticas públicas (Rouquié & Suffern, 1997). "Contaba entre sus objetivos mejorar la distribución de la renta, luchar contra el paro y llevar a cabo la reforma agraria y la reforma fiscal" (Rouquié & Suffern, 1997, pág. 311).

En aquella época, Ecuador gozó del boom del petróleo que ayudó a financiar a la dictadura, pero a costas de volver al país dependiente de la renta del petróleo. La nueva fuente de ingresos le sirvió al Estado, bajo mandato militar, financiar programas de desarrollo y líneas de industrialización siguiendo ideas cepalinas (Rivera Vélez, 2011). Rodríguez Lara fue derrocado en 1976 tras una serie de preocupaciones empresariales por sus políticas progresistas (Rouquié & Suffern, 1997). "En Quito, el nuevo Consejo Supremo de Gobierno militar se apresuró a anunciar la vuelta al gobierno civil". (Rouquié & Suffern, 1997, pág. 321). El referéndum llegaría en 1979, y fue Jaime Roldós Aguilera quien ganó la Presidencia. Es importante, además, mencionar ciertas cuestiones relativas a las Fuerzas Armadas en Ecuador**.** Debido a características estructurales del país, como la ausencia de guerrillas importantes que amenacen la estabilidad o seguridad del Estado y su población o la carencia factores de riesgo o amenazas nuevas como la presencia de cultivos de droga, las intervenciones militares en la política ecuatoriana no han presentado significativas

violaciones a los derechos humanos, constituyendo al país como una excepción a nivel latinoamericano (Rivera Vélez, 2011).

En otras palabras, "las características peculiares del país obligaron a que las intervenciones de los militares no caigan significativamente en violación a los derechos humanos como sucedió en varias latitudes del hemisferio" (Rivera Vélez, 2011, pág. 49). Sin embargo, ello no quiere decir que no se hayan producido violaciones a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública. La Comisión de la Verdad, tras analizar testimonios otorgados voluntariamente, mas no de la totalidad de casos, por víctimas de abusos de autoridad por agentes del Estado determinó que en el periodo "1984-2008 hubo en el Ecuador un total de 456 víctimas de las seis violaciones de los derechos humanos consideradas en este informe: privación ilegal de la libertad, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, atentado contra la vida y ejecución extrajudicial" (Comisión de la Verdad Ecuador 2010, 2010, pág. 67). Las graves vulneraciones a los Derechos Humanos detalladas en el Informe de la Comisión de la Verdad no deben ser atenuados, puesto que quien lo haga "sustentándose en el número menor de casos en comparación con situaciones investigadas por otras Comisiones de la Verdad en otros países, cometerían el error de reducir vidas humanas a meras cifras" (Comisión de la Verdad Ecuador 2010, 2010, pág. 69).

Sin embargo, las Fuerzas Armadas han gozado históricamente de una fuerte credibilidad, en parte por su papel activo en tareas de desarrollo y por su papel en el imaginario popular nacionalista del país, centrándose en un pasado mitificado (Rivera Vélez, 2011). Ello permitió que las Fuerzas Armadas gozasen, y actualmente, gocen de una amplia aceptación popular. A nivel institucional, las Fuerzas Armadas ecuatorianas construyeron una doctrina de seguridad enfocada en la protección interna, situando a las instituciones militares como impulsoras de programas de desarrollo social y evitando la entrada de la seguridad en el centro del debate político (Rivera Vélez, 2011).

Las doctrina de seguridad ecuatoriana logró constituir a la "defensa de la nación" como un mandato encima de cualquier otro interés, y utilizándola como de pretexto para la preservación de prácticas corporativas militares y la creación de redes clientelares en el seno de las instituciones de inteligencia, además de la limitación de acceso a la información para actores policiales y políticos civiles (Rivera Vélez, 2011). La seguridad nacional fue un tema manejado, casi exclusivamente, por el Ejército a partir de su creación en los setenta, evitando la injerencia de otras instituciones, destacándose el gobierno (Rivera Vélez, 2011).

El periodo de mayor violación de Derechos Humanos por parte de las instituciones armadas se dio en un marco de militarización de la seguridad interna durante los años ochenta, bajo la noción de lucha antisubversiva (Rivera Vélez, 2011). Durante los noventa, las acciones militares se centraron en los conflictos fronterizos que mantenía el Ecuador con Perú.

A partir de la paz de 1998, la seguridad nacional entró en un periodo de falta de transformación, hasta el bombardeo de Angostura de 2008, después del cual, tras investigaciones que mostraron fuertes déficits en el sistema de inteligencia, se reformó la doctrina y se dio mayor presencia del gobierno civil (Rivera Vélez, 2011). Sin embargo, a pocos meses de la reforma, tras los eventos del 30 de septiembre de 2010, en el cual una revuelta policial mantuvo cautivo al presidente Rafael Correa hasta que fue rescatado por miembros del Ejército, la seguridad volvió a ser manejada por actores con relación a las Fuerzas Armadas (Rivera Vélez, 2011).

Por otro lado, durante periodo democrático, la cultura política de Ecuador es un caso particular y se muestra, de forma general, alejada de los ideales que la cultura cívica presenta. Las relaciones sociales, en lugar de estar apegadas a vínculos impersonales regidos por espacios como el mercado, están ligadas a la lógica del mecenazgo político, criterios personalistas, carismáticos, emotivos y difusos, generando en la desigualdad un sentido mismo en las relaciones sociales (Bustamante, 2003). Estas lógicas se presentan como un reto para que la cultura política ecuatoriana avance hacia las lógicas que la modernidad liberal demanda, entre ellas, que la legitimidad derive de procesos de autonomía de la voluntad. Por el contrario, el Ecuador sigue una lógica más apegada al concepto de autoridad carismática de Weber. El poder deriva "de una capacidad y potencia que reside en el propio aspirante al poder" (Bustamante, 2003, pág. 354).

Así, el poder del gobernante se tiende a legitimar en tanto presente resultados que se vean como positivos. Como el poder reside en sus capacidades, toda limitación legal se vuelve difusa; lo que se espera por parte del gobernante, es que sea caritativo y generoso con el botín que conquistó (Bustamante, 2003). "La gente, los electores y clientelas del político "esperan, exigen, demandan", que el dirigente realice a través de su gestión una serie de redistribuciones por encima (o por debajo) de los mecanismos formalmente consagrados" (Bustamante, 2003, pág. 358).

Este se vuelve el parámetro por el cual se mide las acciones públicas que, por ende, terminan volviendo difusa la línea que separa lo público de la privado. "Por tanto, en la

medida en que las actividades públicas ilegales sirven para sostener y soportar las potencias representativas y benefactoras (…) de los dirigentes, estas no son, en la práctica efectiva, condenadas" (Bustamante, 2003, pág. 358). Esta lógica es la que determina las prácticas políticas. Incluso a nivel de democracia representativa. Se puede ver al representante como agente de un mandato específico, impidiéndolo salir de ese mandato, o como delegado del poder, que le asigna competencias difusas y mayores (Bustamante, 2003). En el caso ecuatoriano, se busca que el representante cumpla ambas funciones a la vez, a pesar de contradecirse en sí mismas, lo que genera un amplio desprestigio en la clase política (Bustamante, 2003).

Que se perciba que la legitimidad del gobernante no provenga del mandato, sino de sus capacidades tiene implicaciones importantes consecuencias en su ejercicio, y por ende en la legitimidad de su quiebre. En ese sentido, el "mandato solo es revocable cuando esta potencia desplegada en la persuasión se revela frágil o insubstancial" (Bustamante, 2003, pág. 354). Ello muestra concordancia con el hecho de transmitir las percepciones que se tiene del gobierno hacia otros objetos políticos, como se lo mencionó previamente. Por otro lado, se termina afectando la capacidad de acción del Estado y la estabilidad institucional, lo que demanda la normatividad de la democracia.

Para concluir, se presenta a continuación una tabla con la evolución del Ecuador en Producto Interno Bruto, tasa de pobreza, índice Gini, democracia, e índice de desarrollo humano durante los años de estudio escogidos. De los datos presentados a continuación, se puede observar cómo Ecuador tuvo uno de sus mejores años, económica y socialmente hablando, en el 2014. Tras ese año, el país decreció y posteriormente el crecimiento se ralentizó. En lo social, el año 2014 presentó los menores índices de pobreza y desigualdad, que luego volvieron a crecer. En lo referente a democracia, el país avanzó desde la salida de Rafael Correa del poder. Finalmente, el Índice de Desarrollo Humano se ha mantenido relativamente estable.

Tabla 1: Evolución de indicadores sociales, políticos y económicos en Ecuador.

Ecuador								
Indicador	**Año**							
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
PIB (en USD Mil Millones)	87.925	95.130	101.726	99.290	99.938	104.296	107.562	107.436
PIB per cápita (en USD)	5,122.180	5,295.683	5,412.132	5,330.539	5,176.059	5,205.763	5,180.599	5,097.069
Crecimiento anual PIB (en %)	5.64%	4.947%	3.79%	0.10%	-1.23%	2.37%	1.29%	0.54%
Crecimiento anual PIB per cápita (en %)	4.07%	3.39%	2.20%	-1.51%	-2.90%	0.57%	-0.48%	-1.61%
Tasa de incidencia de pobreza sobre USD 1.9 al día (en %)	4.50%	3.20%	2.60%	3.50%	3.60%	3.20%	3.30%	3.60%
Brecha de la pobreza a USD 3.2% al día (en %)	4.10%	3.20%	2.60%	3.30%	3.30%	2.90%	3.10%	3.20%
Índice de Gini	46.1	46.9	45	46	45	44.7	45.4	45.7
Fuente:	Elaboración propia a partir de datos de Banco Mundial, 2020							
Democracia	5.78	5.87	5.87	5.87	5.81	6.02	6.27	6.33
Régimen	Híbrido	Híbrido	Híbrido	Híbrido	Híbrido	Democracia con fallas	Democracia con fallas	Democracia con fallas
Fuente:	Elaboración propia a partir de datos de The Economist, 2020							
Índice de Desarrollo Humano	0.726	0.751	0.756	0.764	0.756	0.76	0.762	0.759
Fuente:	Elaboración propia a partir de datos de PNUD, 2019							

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial (2020), The Economist (2020), PNUD (2021).

6. Síntesis de la argumentación teórica.

Para resumir lo anteriormente planteado, se puede establecer el siguiente argumento: 1) una de las condiciones de la democracia, según una visión normativa, consiste en respetar las decisiones de los electores durante el mandato establecido; 2) esa consideración está presente en las normas supremas en América Latina; 3) sin embargo, los valores normativos no siempre se materializan y el sistema democrático puede ser quebrantado, por ejemplo, mediante un golpe de estado militar; 4) ese quebrantamiento puede ser legítimo, a pesar de no ser legal, basándose en resultados insatisfactorios de la democracia; entendiendo como legitimidad la aceptación de una manifestación de poder; 5) es cuando el estudio de las percepciones en la cultura política entra en escena.

Continuando con lo mencionado previamente: 6) son los individuos quienes construyen sus percepciones, sean racionales o no, en un ejercicio de conexión entre el mundo subjetivo y la realidad objetiva; pudiendo responder a autopercepciones de estados socioeconómicos y valores o consideraciones políticas; 6) a pesar de existir tipos de cultura ideales para la consolidación democrática, estos no siempre se materializan; 8) estos problemas pueden ser debidos a la falta de satisfacción de demandas en el seno de la democracia o por la percepción de que el golpe responde a causas justas; y, 9) esto puede generar un desfase entre la legitimidad legal en la que se sustenta el sistema democrático y lo realmente aceptado por la ciudadanía; lo que posibilita que se vea a un quebrantamiento del sistema, e inclusive a un régimen no democrático naciente del mismo, como justificable a pesar de su origen ilegal.

LO POLÍTICO Y LO SOCIOECONÓMICO EN RELACIÓN A LAS EVALUACIONES POSITIVAS ANTE UN POSIBLE GOLPE DE ESTADO EN ECUADOR ENTRE 2012 Y 2019.

1. Variables y notas metodológicas.

Como se lo mencionó previamente, la presente investigación tomará como variable dependiente la aceptación de golpes de Estado, obtenidas mediante encuestas realizadas por el Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt. La pregunta del cuestionario del Barómetro que se utilizará para abordar esta variable se compone de dos sub preguntas, relacionadas a las condicionantes para la aceptación del golpe: inseguridad y corrupción. La pregunta en cuestión, con sus respectivos códigos en el cuestionario de LAPOP, es la siguiente:

- "Ahora hablemos de otro tema. Alguna gente dice que en ciertas circunstancias se justificaría que los militares de este país tomen el poder por un golpe de Estado. ¿En su opinión se justificaría que hubiera un golpe de estado por los militares frente a las siguientes circunstancias…?" (El Barómetro de las Américas, 2019).
    - "JC10. Frente a mucha delincuencia".
    - "JC13. Frente a mucha corrupción".

Las posibles respuestas son dos: sí se justifica o no se justifica. La interrogante se presentó en los cuestionarios de los cuatro años a analizar; sin embargo, en el año 2016 y 2019, las dos sub preguntas se presentaron a los encuestados en cuestionarios distintos y complementarios, dirigidos a grupos distintos de encuestados, por lo que su índice de respuestas pérdidas por el sistema aumenta en gran medida. Tomando la última consideración en cuenta, vale destacar que, al considerar ambas sub preguntas, los datos válidos de las encuestas sobrepasan el 92%, excluyendo quienes no respondieron o no supieron la respuesta, en todos los años de estudio.

Por otro lado, si bien la pregunta toma ya condicionantes, es importante recalcar que, como se lo evidenció en la sección precedente de este trabajo, la teoría democrática prevé

vías institucionales para la resolución de problemas y no admite la interferencia de poderes no elegidos popularmente sobre poderes electos. Por ello, las variables independientes que serán utilizadas en esta investigación se centran en los siguientes datos, evidenciados con sus respectivas preguntas del cuestionario y, de ser el caso, algunas particularidades de cada pregunta:

- Con respecto a la satisfacción a la democracia, la pregunta se presenta en los cuatro años de estudio; sin embargo, en el 2012, la pregunta solamente se planteó en un cuestionario dirigido a un grupo de encuestados. En todos los cuestionarios, se presentan cuatro posibles respuestas: muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho. Excluyendo el cuestionario del 2012, todas las respuestas válidas son superiores al 96%. La pregunta es:
    - "PN4. En general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy insatisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en Ecuador?" (El Barómetro de las Américas, 2019).
- Como percepción de la situación económica, se presentan dos preguntas relativas a la situación nacional y personal. Cada interrogante tiene tres opciones de respuesta: mejor, igual o peor. En todos los casos, las respuestas válidas superan el 97%. Las preguntas son:
    - "SOCT2. ¿Considera usted que la situación económica del país es mejor, igual o peor que hace doce meses?" (El Barómetro de las Américas, 2019).
    - "IDIO2. ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace doce meses?" (El Barómetro de las Américas, 2019).
- En lo referente a percepción de la corrupción, se presentan dos preguntas. La primera, relativa a la percepción de corrupción de los funcionarios públicos, se aplicó en todos los cuestionarios a excepción de 2016. Las posibles respuestas son cuatro: muy generalizada, algo generalizada, poco generalizada y nada generalizada. La segunda pregunta, referente a la corrupción de los políticos, se presentó a partir del cuestionario de 2016. Las posibles respuestas son cinco: ninguno, menos de la mitad, la mitad y más de la mitad. Ambas preguntas se presentaron en dos cuestionarios, diferentes y complementarios, dirigidos a distintos grupos de encuestados, en el 2018. En todos los casos, las respuestas válidas son superiores al 92%. Las preguntas son:

    - “EXC7. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los funcionarios públicos en el país está?” (El Barómetro de las Américas, 2019).
    - “EXC7NEW. Pensando en los políticos de Ecuador, ¿cuántos de ellos cree usted que están involucrados en corrupción?” (El Barómetro de las Américas, 2019).
- Con respecto al interés en la política, ésta se plantea a quienes respondieron no tener relación con algún partido político. La misma presenta cuatro posibles respuestas: mucho, algo, poco y nada. En todos los casos, las respuestas válidas sobrepasan el 99%. La pregunta es:
    - “POL1. ¿Qué tanto interés tiene usted en la política: mucho, algo, poco o nada?” (El Barómetro de las Américas, 2019).
- Sobre la evaluación del trabajo del presidente, se debe considerar que el periodo analizado corresponde a dos administraciones distintas. Los tres primeros cuestionarios se dieron durante la presidencia de Rafael Correa y el último, durante la administración de Lenín Moreno. Las posibles respuestas son cinco: muy bueno, bueno, ni bueno ni malo, malo y muy malo. En todos los casos las respuestas válidas sobrepasan el 99%. Las preguntas son:
    - “M1. Hablando en general acerca del gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que está realizando el Presidente Rafael Correa es...?” (El Barómetro de las Américas, 2019).
    - “M1. Hablando en general acerca del gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que está realizando el Presidente Lenín Moreno es...?” (El Barómetro de las Américas, 2019).
- Con respecto a temas de democracia y conocimiento de la política, se plantearon preguntas de escala. En todos los casos, se antecedió la pregunta con la siguiente consigna: “Ahora, vamos a usar una escalera en donde el número 1 representa “muy en desacuerdo” y el número 7 representa “muy de acuerdo” (El Barómetro de las Américas, 2019). Un número entre el 1 y el 7, representa un puntaje intermedio”. Para simplificar el análisis, se agrupó las posibles respuestas en tres grupos, de la siguiente forma: las respuestas entre el número 1 y 3 representan que está en desacuerdo, la respuesta en el número 4 representa indiferencia y las respuestas entre 5 y 7 representan que se está de acuerdo. Las preguntas fueron aplicadas en todos los cuestionarios y son:

- Sobre legitimidad de la democracia: “ING4. Cambiando de nuevo el tema, puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?” (El Barómetro de las Américas, 2019). En todos los casos, las respuestas válidas están sobre el 92%.
- Sobre la percepción del interés que los gobernantes tienen con respecto a la opinión ciudadana: “EFF1. A los que gobiernan el país les interesa lo que piensa la gente como usted. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?” (El Barómetro de las Américas, 2019). En todos los casos, las respuestas válidas sobrepasan el 96%.
- Sobre la percepción del conocimiento personal de asuntos políticos: “EFF2. Usted siente que entiende bien los asuntos políticos más importantes del país. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?” (El Barómetro de las Américas, 2019). En todos los casos, las respuestas válidas están por encima del 96%.

- En lo referente a percepciones sobre instituciones, corresponde las mismas consideraciones hechas en el punto anterior. Las preguntas, realizadas a escala, son precedidas por el siguiente enunciado: “En esta tarjeta hay una escalera con gradas numeradas del uno al siete, en la cual el 1 es la grada más baja y significa NADA y el 7 es la grada más alta y significa MUCHO. (…) Si su opinión está entre nada y mucho elegiría un puntaje intermedio” (El Barómetro de las Américas, 2019). Las respuestas fueron agrupadas de la misma forma que en la pregunta precedente, para simplificar el análisis. Las preguntas son:
    - Sobre el estado de la protección de derechos en el país: “B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el sistema político ecuatoriano?” (El Barómetro de las Américas, 2019). En todos los casos, las respuestas válidas están por encima del 96%.
    - Sobre el respeto a las instituciones: “B2. ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de Ecuador?” (El Barómetro de las Américas, 2019). En todos los casos, las respuestas válidas están por encima del 97%.
    - Sobre el orgullo por las instituciones: “B4. ¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso de vivir bajo el sistema político ecuatoriano?” (El Barómetro de

las Américas, 2019). En todos los casos, las respuestas válidas están por encima del 97%.

- Sobre la confianza en las Fuerzas Armadas: “B12. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en las Fuerzas Armadas?” (El Barómetro de las Américas, 2019). En todos los casos, las respuestas válidas están por encima del 97%.
- Sobre la confianza en el Ejecutivo: “B21A. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el Presidente de la República?” (El Barómetro de las Américas, 2019). En todos los casos, las respuestas válidas están por encima del 99%.
- Sobre la confianza en el Legislativo: “B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Asamblea Nacional?” (El Barómetro de las Américas, 2019). En todos los casos, las respuestas válidas están por encima del 97%.
- Sobre la confianza en los partidos políticos: “B21. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en los partidos políticos?” (El Barómetro de las Américas, 2019). En todos los casos, las respuestas válidas están por encima del 98%.
- Sobre la confianza en la administración de justicia: “B1. ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de Ecuador garantizan un juicio justo?” (El Barómetro de las Américas, 2019). En todos los casos, las respuestas válidas están por encima del 84%, y excluyendo los datos del 2012, superior al 96%.
- Sobre la confianza en las elecciones: “B47A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en este país?” (El Barómetro de las Américas, 2019). En todos los casos, las respuestas válidas están por encima del 97%.

- Con respecto a ideología, también se presenta una pregunta de escala del 1 al 10 en la cual 1 representa a la izquierda; y 10, a la derecha. Para facilitar el análisis, se agrupó los datos de la siguiente forma: respuestas del 1 al 4 se categorizan como izquierda, de 5 a 6 como centro y de 7 a 10 representan a la derecha. En todos los casos, las respuestas válidas sobrepasan el 78%; y, si se excluyen los dos primeros años considerados, sobrepasan el 91%. La pregunta es la siguiente:
    - “Cambiando de tema, en esta tarjeta tenemos una escala del 1 a 10 que va de izquierda a derecha, en la que el 1 significa izquierda y el 10 significa derecha. (…). Según el sentido que tengan para usted los términos "izquierda" y "derecha" cuando piensa sobre su punto de vista político, ¿dónde se encontraría usted en esta escala?” (El Barómetro de las Américas, 2019).

Las preguntas seleccionadas para el estudio se han tomado teniendo en cuenta el argumento teórico presentado en la sección precedente y los objetivos de esta investigación. Existen otras preguntas que pueden utilizarse para la revisión del tema con la misma validez, sin embargo, este estudio no pretende abordarlas. Asimismo, vale enfatizar en que la revisión de las percepciones ciudadanas será realizada con base en las encuestas realizadas por el Barómetro de las Américas de LAPOP de la Universidad de Vanderbilt. Para finalizar esta aclaración metodológica, se debe establecer que todo el análisis empírico de la presente investigación se basará en los resultados válidos de las encuestas.

Tras realizar la presentación general de los resultados de las encuestas, se describirán los resultados obtenidos al cruzar respuestas entre las dos variables relacionadas a la legitimidad de los golpes de Estado y las demás variables independientes, posicionando las variables dependientes en las filas, con sus porcentajes, y las independientes, en las columnas. Además, se obtendrá el valor del Chi-cuadrado de Pearson para verificar si la relación entre variables es estadísticamente significativa, dándose un caso positivo si el valor es inferior a 0.050. Es importante mencionar que la agrupación en las variables que presentan pregunta de escala con siete o más posibles respuestas puede arrogar distintos datos cuando se toma en cuenta el Chi-cuadrado. Por ello, la presente investigación mencionará los distintos valores obtenidos, en caso que presenten diferencias que cambien la determinación de la relación entre variables.

2. El estado de las percepciones ciudadanas en Ecuador en 2012.

2.1. Presentación general de resultados.

Durante este año, Ecuador estaba gobernado por Rafael Correa. A partir de ese momento, el país experimentó una relativa estabilidad económica y una amplia popularidad gubernamental. Por otro lado, el país vivía tiempos de progreso económico. El PIB per cápita a precios constantes de 2010 del país subía de USD 4.633,59 en 2010 a USD 5.122,18 en 2012; el PIB mantenía un crecimiento de 5,642% con respecto al año pasado; la desigualdad decrecía, presentando una baja del índice de Gini de 48,8 en 2010 a 46,1 en 2012; y la tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de USD 1,90 al día disminuía de 5,7% a 4,5%, por nombrar algunos indicadores (Banco Mundial, 2020). En general, el Índice de Desarrollo

Humano del PNUD crecía de 0,688 en 2007, a 0,716 en 2010 y 0,726 en 2012 (PNUD, 2021). El principal producto del país, el petróleo, experimentó un aumento de precio que se tradujo en mayores ingresos para el Estado y una mayor posibilidad de inversión social. En promedio, en 2007, el barril de petróleo ecuatoriano tenía un precio de USD 65.98 y, en 2012, adquirió un valor de USD 102,89 (Banco Central del Ecuador, 2017). En suma, el país vivía tiempos de progreso económico que permitió mayores beneficios en la vida los ecuatorianos.

En este año, a pesar de los buenos indicadores económicos y sociales expresados previamente, los datos arrogan cifras altas respecto a la aceptación de un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas. Cuando se les consultó a los encuestados si se justificaría que los militares tomen el poder frente a mucha delincuencia, el 46,6% de respuestas válidas fueron afirmativas y el 53,4% fueron negativas. En el total de respuestas, un 4,3% estableció que no sabía y un 0.9% no respondió. Por otro lado, cuando se consultó sobre la justificación de un golpe de Estado cuando exista mucha corrupción, las respuestas afirmativas ascendieron a un 48,1% de respuestas válidas; mientras que un 51,9% de encuestados que dieron una respuesta válida respondió que no se justificaría. Ante esta pregunta, un 4,3% de encuestados totales respondieron que no sabe la respuesta y un 1,2% no respondió. Estos datos reflejan una alta legitimidad a un proceso que atenta contra la democracia, a pesar de no consolidarse como mayoría.

A pesar de ello, con respecto a preguntas directamente relacionadas con la democracia, se dan mejores cifras. Sobre la legitimidad de la democracia, los resultados obtenidos en este año presentan mejores resultados. Solamente un 23,9% de respuestas válidas de los encuestados establecieron que no están de acuerdo que la democracia sea la mejor forma de gobierno; mientras que un 14,6% se mostraron indiferentes. Ello evidencia que un 61,5% de encuestados, cuyas respuestas fueron válidas, piensan que la democracia es la mejor forma de gobierno, a pesar de sus problemas. Sin embargo, un 5,3% de encuestados mencionó que no sabe la respuesta. Estos números, si bien marcan una mayoría a favor del sistema democrático, muestran que todavía perduran valores no democráticos que pueden afectar a un sistema que necesita de aprobación para legitimarse. Con respecto a satisfacción con la democracia, un 6,9% de respuestas válidas de los encuestados establecieron que se encuentran muy satisfechos, 57,9% mencionaron que se encuentran satisfechos, dando un total de 64.7% de encuestados que respondieron estar satisfechos con la democracia. Por otro

lado, un 30,8% respondió encontrarse insatisfecho con la democracia y un 4,5%, muy insatisfecho con la misma.

En lo referente a economía, las mejoras mencionadas al inicio de este apartado fueron sentidas por parte de la población. Al respecto de la percepción sobre la situación económica del país, solamente un 23% de respuestas válidas establecieron que la situación fue peor con respecto a la del año anterior; un 50,8%, que la situación económica del país fue igual; y, por último, un 26,1% sintió que la situación fue mejor. Con respecto a la situación económica personal, los resultados son menores: un 21% de encuestados respondió que su situación es mejor, un 58.4% mencionó que si situación es igual y un 20,6% percibió que su situación económica fue peor. En esta sección se presentan mejores índices de respuesta, posiblemente debiéndose a que los encuestados perciben la situación económica más cercana que la situación política. Sobre el estado de la economía del país, solo un 1,7% mencionó que no sabe la respuesta y, en el caso de la situación personal, este porcentaje es de 0,6%.

Con respecto a las actitudes y orientaciones cognoscitivas hacia la política, se evidencia una apatía por parte de los encuestados. Cuando se les pregunta sobre el interés que éstos poseen, sólo un 6,6% de encuestados respondió que sentían mucho interés hacia la política y un 20,4% mencionó que les interesaba algo. Por otro lado, una gran mayoría mostró un desinterés en la política: un 38,7% de encuestados respondió que le interesa poco la política y un 34,4% estableció que no tienen ningún interés en la misma. En el tema en cuestión, sólo un 0,7% de respuestas son pérdidas, entre no respuesta y no sabe. Por otro lado, en el ámbito de orientaciones cognoscitivas, 40,5% de encuestados mencionó no entender los fenómenos políticos, un 20,7% se mostró indiferente y una minoría de 38,8% declaró entender los asuntos políticos. En esta pregunta, existe un 3,2% de respuestas pérdidas por el sistema.

Por otro lado, los encuestados respondieron en una amplia mayoría que la corrupción está generalizada entre los servidores públicos. En primer lugar, es destacable que un 5.9% de encuestados respondió no saber sobre el tema, entre un total de 7,8% de respuestas pérdidas por el sistema. Tomando en cuenta las respuestas válidas, un 30,7% de encuestados respondió que la corrupción está muy generalizada en el sector público y un 46,6% mencionó que está algo generalizada, dando un total de 77,3%. Al contrario, un 20,2% percibió que la corrupción está poco generalizada y un 2,5% mencionó que el problema no está nada generalizado.

Ya en el tema de percepciones hacia los gobernantes. Ante la cuestión del trabajo del presidente, las orientaciones evaluativas de los encuestados muestran una amplia satisfacción. Un 18,5% de encuestados evaluó el trabajo del gobierno como muy bueno y un 45,6% mencionó que el mismo era bueno, dando un total de una mayoría de 64,1% de evaluaciones positivas. Por otro lado, un 28,4% de encuestados se mostró indiferente, mencionando que el trabajo del gobierno no es ni bueno ni malo. Al respecto de evaluaciones negativas, solamente un 5,5% y un 2% de encuestados respondió que el trabajo del gobierno fue malo y muy malo, respectivamente. Sin embargo, en el tema de inclusión y participación democrática, cuando se les cuestionó a los encuestados sobre si creían que a los gobernantes les interesa su opinión, un 47,3% respondió que no, un 13,7% se mostró indiferente y un 39% mencionó que a los gobernantes sí les interesa su opinión. Fueron un 0,5% y un 3.3% de respuestas pérdidas por el sistema, respectivamente.

Prosiguiendo, en lo que concierne a la confianza y evaluación hacia las instituciones. En primer lugar, con respecto a la percepción de protección de derechos se evidencia un considerable porcentaje de evaluaciones positivas, posiblemente en concordancia con la buena evaluación ciudadana de la coyuntura, en tanto un 33,9% de los encuestados percibe que los derechos no están protegidos por el sistema político ecuatoriano, un 21,4% se muestra indiferente y un 44,7% establece que los derechos sí se encuentran protegidos. En este tema, existe un 2,4% de respuestas pérdidas por el sistema. En lo referente al respeto por las instituciones, con un 97,9% de respuestas válidas, un 26,4% de encuestados mencionó no respetar las instituciones, un 19,3% se mostró indiferente y una mayoría de 54,3% respondió respetar las mismas. Por último, con respecto al orgullo, con un 2,6% de respuestas pérdidas, un 33,6% de encuestados estableció no tener orgullo por las instituciones políticas, un 20,6% se mantuvo indiferente y un 46,2% se posicionó orgulloso por las instituciones. En este tema, existe cierta concordancia entre las evaluaciones positivas, neutras y negativas.

En este sentido, se continúa a la presentación de resultados respecto a la confianza hacia las instituciones. De las variables escogidas, las Fuerzas Armadas se posicionan como la institución con más confianza ciudadana, seguida por el Ejecutivo. El 63,8% de encuestados mencionó confiar en las instituciones militares, un 15,5% se mostró indiferente y un 20,7% respondió no confiar en las Fuerzas Armadas. En el caso del Ejecutivo, una mayoría de 61,9% confía en la Presidencia, un 12,6% ni desconfía ni confía y un 25,5% dijo

no confiar en dicha institución. Se presentó un 1,4% y un 0,8% de respuestas pérdidas por el sistema, respectivamente.

Las siguientes instituciones no presentan niveles de confianza similares, en tanto menos de la mitad respondieron positivamente. Sobre la Asamblea Nacional, el 47% de respuestas válidas mencionaron no confiar en la misma, el 18,7% se mostró indiferente y el 34,2% estableció confiar en el órgano legislativo. Los partidos políticos presentan un mayor número de respuestas negativas, posiblemente relacionadas al discurso abiertamente antipartidista de Rafael Correa o a la fatiga democrática que mencionaba Alcántara y Freidemberg, como se lo mencionó en el apartado teórico. Un 64,9% de encuestados respondió no confiar en los partidos, un 16,2% estableció ni confiar ni desconfiar y solamente un 18,8% mencionó confiar en dichas instituciones representativas. Se presenta un 2,1% y un 1,9% de respuestas pérdidas, respectivamente.

Por último, se presentan los resultados relacionados a dos instituciones directamente relacionadas al Estado de derecho y a la democracia. Cuando se consultó a los encuestados sobre la confianza en el sistema de justicia, un 49,6% respondió no confiar en las garantías de la justicia, un 19,8% se mostró indiferente y un 30,6% mencionó confiar en el sistema de justicia. Con mejores resultados, las elecciones en el país mostraron una cifra de 44,3% de encuestados que mencionaron confiar en las mismas, un 19,4% respondieron de forma indiferente y una minoría, aunque considerable para una institución crucial en democracia, de 36,3% se estableció desconfiada de los procesos electorales en el país. En el caso de la justicia, se dio un 15,4% de respuestas pérdidas, entre un 4,2% que no sabe y un 11,2% que no respondió, evidenciando un alejamiento del tema y un bajo nivel de orientaciones cognoscitivas sobre una institución tan crítica como lo es la administración de justicia. En el caso de las elecciones, se dio un nivel de 2,4% de respuestas pérdidas por el sistema.

Finalmente, al respecto de la ideología. En el espectro ideológico, un 29,7% de encuestados se declaró de izquierda definiéndola individualmente, un 43,8% se definió de centro y un 26,5% mencionó ser de derecha. En este caso, un 13,5% de encuestados respondió no saber la respuesta y un 8% no respondió, dando un total de 21,5% de respuestas pérdidas por el sistema.

2.2. La relación entre legitimación de golpes de Estado y percepciones hacia la democracia.

Dicho ello, se presenta en primer lugar la relación entre la legitimidad que los encuestados otorgan a los golpes de Estado y las percepciones hacia la democracia. Cuando se toma la relación entre la legitimidad de golpes de Estado y aquella de la democracia, el resultado en ambos casos es intuitivo, en tanto hay mayor tendencia de quienes justifican el golpe a no estar de acuerdo que la democracia es la mejor forma de gobierno. En el caso de la justificación del golpe relacionado con la delincuencia, un 26,1% de quienes justifican el golpe no legitiman la democracia, mientras que un 58,8% menciona que la democracia es la mejor forma de gobierno. Entre quienes no justifican el golpe, el porcentaje de quienes no legitiman la democracia es menor en 3,5 puntos porcentuales, dando un resultado de 22,6%, y aquel de quienes legitiman la democracia asciende 5,1 puntos porcentuales, adquiriendo un valor de 63,9%. Por otro lado, la indiferencia es mayor entre quienes justifican el golpe, un 15,1%, que entre los encuestados que no justifican el golpe, un 13,5%. Sin embargo, la relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa, ya que se presenta un Chi-cuadrado de 0.162.

Cuando se analiza la justificación de golpes de Estado frente a mucha corrupción, los resultados presentan una tendencia mayor que la evidenciada previamente. Los encuestados que justifican un golpe de Estado, en este caso, tienden a responder en mayor medida que no piensan que la democracia sea la mejor forma de gobierno. Entre quienes justifican el golpe de Estado, un 26,9% no legitima la democracia, un 16,4% se muestra indiferente y un 56,8% establece que la democracia es la mejor forma de gobierno. Por otro lado, entre quienes no justifican el golpe, un porcentaje menor de 21,5% de encuestados no piensa que la democracia es la mejor forma de gobierno; hay además una menor indiferencia, en tanto un 13,5% no está de acuerdo ni en desacuerdo con que la democracia sea la mejor forma de gobierno; y, finalmente, un porcentaje de 65% legitima la democracia. Es decir, hay una diferencia de 5,4 puntos porcentuales entre quienes sí justifican el golpe y quienes no lo hacen con referencia a la no legitimación de la democracia; y, además, una diferencia de 8,2 puntos porcentuales entre quienes no justifican el golpe y entre quienes sí lo hacen al respecto de la legitimación de la democracia. En suma, la relación presenta un Chi-cuadrado de 0.009, por lo que se puede establecer que existe una relación estadísticamente significativa entre estas dos variables. Sin embargo, cuando se toma la relación entre variables sin agrupar, se

obtiene un Chi-cuadrado de 0.124, presentando una relación que no es estadísticamente significativa.

Cuando se toma en cuenta la satisfacción con la democracia, las tendencias son menos marcadas, aunque intuitivas. Al respecto de la justificación de un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, quienes justifican el golpe tienden a mostrarse menos satisfechos con la democracia. Entre quienes justifican el golpe, un 6% mencionó estar muy satisfecho; un 56,5%, satisfecho; un 32,9% respondió estar insatisfecho; y un 4,6%, muy insatisfecho. Al contrario, entre quienes no justifican el golpe, un 8,2% respondió estar muy satisfecho con la democracia; un 56,8%, satisfecho; un 30,6% mencionó estar insatisfecho; y, un 4,4%, muy insatisfecho. Es decir, hay una diferencia de 2,2 puntos porcentuales en la alta satisfacción con la democracia entre quienes no justifican el golpe y quienes sí lo hacen; la diferencia se reduce a tres décimas cuando se toma la satisfacción. Cifras similares ocurren con respecto a la insatisfacción. Entre estas dos variables no existe una relación estadísticamente significativa, en tanto el Chi-cuadrado asciende a 0.721.

Analizando la legitimación un golpe de Estado frente a mucha corrupción, las tendencias son más marcadas que lo mencionado previamente. Se mantiene la relación por medio de la cual quienes justifican el golpe tienden a mostrarse más insatisfechos con la democracia que los encuestados que no lo hacen. Así, de entre los encuestados que justifican el golpe, un 7% mencionó estar muy satisfecho con la democracia; un 54,3%, satisfecho; un 32,1% respondió estar insatisfecho; y un 6,6%, muy insatisfecho. Por otro lado, entre quienes no justifican el golpe, un 7,1% estableció estar muy satisfecho con la democracia; un 59,8%, satisfecho; un 29,9% respondió estar insatisfecho; y, un 43,1%, muy insatisfecho. Las diferencias aumentan, en tanto hay una diferencia de 5,5 puntos porcentuales con respecto a la satisfacción de entre quienes no justifican el golpe y aquellos que sí lo justifican; y disminuye a 3,5 puntos porcentuales con respecto a la alta insatisfacción de entre quienes justifican el golpe y aquellos que no. La relación entre ambas variables presenta un Chi-cuadrado de 0.152, por lo que tampoco existe una relación estadísticamente significativa en este caso.

Es relevante destacar la gran cantidad de encuestados que, en ambos casos, legitiman la democracia y, a su vez, justifican un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas. Si bien, como se lo mencionó previamente, las tendencias son intuitivas, es destacable que la mayoría de encuestados, en ambas preguntas, que justifican un golpe de Estado, ven a la democracia como la mejor forma de gobierno. Este fenómeno puede situar la explicación en

la satisfacción a la democracia, al llevar a una persona a justificar una vía no institucional cuando no está satisfecho con el funcionamiento de las vías institucionales. Sin embargo, como se lo observó en la presentación de la relación entre legitimación de golpes y satisfacción con la democracia, no existe relaciones significativas entre estas variables. Ello es una anomalía puesto que, como se lo abordó en el apartado teórico, la democracia no admite un quiebre del poder elegido por medio de vías no institucionales. En otras palabras, hay un porcentaje considerable que concilia dos ideas, contradictorias desde la teoría, al mismo tiempo. Esta realidad sitúa la pregunta en la definición que la ciudadanía le otorgue a la democracia y merece estudios más profundos que el presente no pretende abordar.

2.3. La relación entre legitimación de golpes de Estado y percepciones económicas.

El estudio prosigue a presentar el cruce de variables entre legitimación de golpes de Estado, ya sea por mucha delincuencia o corrupción, y percepción de la situación económica, tanto nacional como personal. En las cuatro posibles combinaciones existe una relación estadísticamente significativa, además de que, en cada caso, los encuestados que legitiman los golpes de Estado en democracia tenderán a percibir la situación económica como peor en mayor medida que quienes no justifican los golpes de Estado. Es destacable que la relación cuya tendencia es más marcada se da entre la justificación de golpes de Estado por mucha delincuencia y la evaluación de la situación económica propia. Esto puede arrojar la hipótesis que los encuestados analizan la deseabilidad de posibles escenarios con base en su realidad, notablemente la económica, siendo la delincuencia es una directa afectación a la misma.

En primer lugar, los datos arrojan que quienes justifican los golpes de Estado frente a mucha delincuencia poseen una mayor tendencia a evaluar la situación económica nacional como peor que aquella presentada el año previo. De entre quienes respondieron justificar el golpe de Estado, un 23,6% percibe la situación económica nacional como mejor; un 50,1%, como igual; y un 26,3%, como peor. Por otro lado, quienes no justifican un golpe de Estado en este caso tienden a percibir de mejor medida la economía, en tanto un 29,3% de este grupo, con una diferencia de 5,7 puntos porcentuales con respecto a quienes justifican el golpe, ve a la situación económica como mejor; un 51,1% la perciben como igual; y, finalmente, un 19,7% la percibe como peor, un 6,6% menos que en el caso de quienes sí

justifican un golpe de Estado. La relación entre estas variables presenta un Chi-cuadrado de 0.004, dándose así una relación estadísticamente significativa.

Con referencia a la relación entre la evaluación de la situación económica nacional y la legitimación de golpes de Estado por corrupción, la tendencia se mantiene, pero la diferencia entre ambos grupos será mayor con respecto a la evaluación de la situación como igual. Además, será mayor la diferencia en la evaluación negativa de la realidad económica nacional entre quienes legitiman y no legitiman el golpe de Estado. Entre los encuestados que legitiman un golpe de Estado frente a mucha corrupción, un 25,3% evalúa la situación económica nacional como mejor, un 48% como peor y un 26,8% como peor. Por otro lado, de entre quienes no justifican un golpe de Estado, con una diferencia de 2,5 puntos porcentuales con respecto a los encuestados que sí legitiman un golpe, un 27,8% percibe la situación económica nacional como mejor; con una diferencia de 4,5 puntos porcentuales, un 52,5% percibe la situación económica nacional como igual; y, por último, con una diferencia de 7.1 puntos porcentuales con respecto a quienes legitiman el golpe de Estado, un 19,7% evaluó la situación como peor. La relación entre variables es estadísticamente significativa, con un Chi-cuadrado de 0.007.

La relación entre la legitimación de golpes de Estado frente a mucha delincuencia y evaluación de la realidad económica personal mantiene, como se lo mencionó antes, una tendencia más marcada. Sin embargo, es mayor el porcentaje de quienes evalúan como igual la situación económica personal entre quienes legitiman un golpe que entre los encuestados que no. Entre quienes justifican el golpe, un 17,4% evalúa su situación económica personal como mejor; un 59,3%, como igual; y un 23,3%, como peor. Al contrario, de entre los encuestados que no justifican el golpe, un 25%, con una amplia diferencia de 7,3 puntos porcentuales con respecto a quienes sí justifican el golpe, perciben su situación económica como mejor; un 57,4%, como igual; y, finalmente, con una disminución de 5,6 puntos porcentuales, un 17,7% menciona que su situación económica es peor. Entre estas dos variables se da un Chi-cuadrado de 0.001, evidenciándose así una relación estadísticamente significativa.

Finalmente, la relación entre la justificación de golpes de Estado frente a mucha corrupción y la evaluación de la situación económica personal mantiene la misma tendencia, aunque en menor medida. De entre los encuestados que justifican un golpe de Estado, un 19,5% evalúan su situación económica actual como mejor; un 57,4% como igual; y un

23,1%, como peor. Por otro lado, entre quienes no justifican el golpe, un 23,8% menciona que su situación económica personal es mejor, con una diferencia de 4.3 puntos porcentuales; un 58,7% responde que su situación económica es igual; y, finalmente, con una diferencia de 5,6 puntos porcentuales, un 17.5% establece que su situación económica actual es peor. La relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, con un Chi-cuadrado de 0.015.

2.4. Legitimidad de golpes de Estado y percepciones hacia la política.

Se proseguirá con la revisión de resultados con respecto a la relación entre legitimidad de golpes de Estado y percepciones hacia la política, ya sea el interés o las orientaciones cognoscitivas. En primer lugar, relacionando la legitimación de un golpe de Estado frente a mucha delincuencia con el interés en la política, se evidencia una tendencia concordante con la teoría por la cual quienes no justifican un golpe de Estado se interesarán más por la política. De entre quienes justifican un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, un 5,8% menciona que le interesa mucho la política; a un 16,3% le interesa algo la política; un 41,6% establece que la política le interesa poco; y un 36,4% respondió que no le interesa nada. Por otro lado, entre quienes no justifican un golpe de Estado, un 7.9% menciona que le interesa mucho la política; con una diferencia de 8.6 puntos porcentuales, un 24,9% responde que le interesa algo la política; un 36%, con una disminución de 5,6 puntos porcentuales, menciona que le interesa poco la política; y, finalmente, con 5,2 puntos porcentuales menos con respecto a quienes legitiman el golpe, un 31,2% se muestra nada interesado en la política. Es decir, las mayores diferencias se encuentran en las respuestas de algo y poco interés. La relación entre estas dos variables es estadísticamente significativa, con un Chi-cuadrado de 0,000.

La tendencia cuando se analiza la relación entre el interés por la política y la justificación de un golpe de Estado frente a mucha corrupción se mantiene, a pesar de ser menor. De entre quienes justificarían el golpe por mucha corrupción, un 6,4% respondió tener mucho interés en la política; un 17,8%, algo de interés; un 39,8%, poco interés; y, un 36,1% se mostró completamente desinteresado. Por otro lado, de entre los encuestados que no justificarían un golpe de Estado, un 7,4% mencionó estar muy interesado por la política; con una diferencia de 6,6 puntos porcentuales, un 24,4% responde estar algo interesado por la política; un 36,9%, con una disminución de 2,9 puntos porcentuales respecto al anterior

grupo, estableció estar poco interesado por la política; y, finalmente, con una reducción de 4.8 puntos porcentuales, un 31,3% mencionó estar nada interesado en la política. La relación entre ambas variables presenta un Chi-cuadrado de 0.012, dándose una relación estadísticamente significativa.

La situación relacionada al conocimiento de la política presenta la misma tendencia: quienes responden conocer sobre los asuntos políticos tenderán a no legitimar los golpes de Estado; mientras que, quienes justifican un golpe de Estado tendrán a no entender los asuntos políticos, o mostrarse indiferentes, en mayor medida. Con respecto a la justificación frente a mucha delincuencia, los encuestados que mencionan que un golpe sí se legitima respondieron en un 43% que no comprenden los fenómenos políticos; un 21,4% se mostró indiferente; y un 35,6% mencionó conocer sobre los asuntos políticos. Al contrario, de entre quienes no justifican el golpe, un 38,4%, con una disminución de 4,6 puntos porcentuales con respecto al grupo que sí justifica el golpe, estableció no conocer sobre política; un 19,7% se mostró indiferente; y, con un aumento de 6,4 puntos porcentuales, un 42% respondió entender los fenómenos políticos. La relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, con un Chi-cuadrado de 0.049.

Analizando el conocimiento de la política con respecto a la legitimidad de golpes de Estado frente a mucha corrupción se obtiene la misma tendencia, pero menos marcada. De entre quienes justifican un golpe de Estado en este caso, un 41,1% menciona no entender los asuntos políticos; un 22,1% se muestra indiferente; y un 36,9% establece entender los fenómenos políticos. Por otro lado, de entre quienes no justifican el golpe de Estado, con una disminución de 1,4 puntos porcentuales, un 39,7% menciona no conocer la política; un 19,7% se muestra indiferente; y, con un aumento de 3,7 puntos porcentuales, un 40,6% responde entender los asuntos políticos. El Chi-cuadrado de la relación obtiene un valor 0.320, no siendo estadísticamente significativo.

2.5. Legitimidad de golpes de Estado y percepciones sobre corrupción.

Con respecto a la relación entre la legitimidad de un golpe de Estado y la percepción de corrupción entre funcionarios públicos, se obtienen tendencias distintas. En general, analizando los datos, se obtiene que quienes justifican un golpe de Estado frente a mucha corrupción tienden, en este periodo, a percibir la corrupción con menores índices de presencia entre funcionarios públicos que quienes no justifican el golpe. Al contrario, cuando la pregunta se refiere a la justificación de un golpe frente a mucha delincuencia, la tendencia

se vuelve intuitiva, en tanto se muestra que quienes justifican el golpe tenderán a ver la corrupción más generalizada que los encuestados que no justificarían un golpe. Esta variación puede deberse a la presentación de la pregunta frente a una relación hipotética, puesto que el hecho de justificar un golpe de Estado por parte de los militares, sea frente a mucha corrupción o frente a mucha delincuencia, no implica que en el periodo de respuesta se presente alguno de los dos hechos. De todas formas, esta constatación evidencia que las legitimación hacia golpes de Estado puede responder, correspondiendo a características del Ecuador mencionadas ya en el apartado teórico, a concepciones ampliamente insertadas en el imaginario público de la ciudadanía ecuatoriana.

En primer lugar, frente a mucha delincuencia, la tendencia es muy poco marcada, de manera que quienes justifican el golpe de Estado tenderán a percibir en mayor medida que la corrupción está muy generalizada entre los funcionarios públicos que quienes no justifican un golpe; pero, tenderán a responder en menor medida que la corrupción está algo generalizada que sus pares. De entre los encuestados que justifican un golpe de Estado, un 35,5% percibe la corrupción como muy generalizada; un 45%, como algo generalizada; un 16,9%, como poco generalizada y un 2,6% menciona que la corrupción está nada generalizada entre los funcionarios públicos. Por otro lado, entre los encuestados que no justifican un golpe de Estado frente a mucha corrupción, con una disminución 8,5 puntos porcentuales con respecto al grupo previo, un 27% percibe a la corrupción como muy generalizada; por otro lado, es destacable como, con un ascenso de 2,4 puntos porcentuales con respecto a quienes justifican golpes de Estado, un 47,4% establece que la corrupción está algo generalizada; mientras que, con un aumento de 6,4 puntos porcentuales, un 23,3% menciona que la corrupción está poco generalizada entre funcionarios públicos; y, finalmente, con un aumento mínimo, un 2,3% menciona que la corrupción está nada generalizada. Sin embargo, la relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, con un Chi-cuadrado de 0.002.

Cuando se analiza las respuestas sobre la justificación de un golpe de Estado frente a la corrupción, la tendencia se revierte. De forma esperable, de entre quienes justifican el golpe de Estado, un 31,8% perciben la corrupción como muy generalizada frente al 30,4% que la percibe de la misma manera de entre quienes no justifican un golpe de Estado. De igual manera, es intuitivo que se dé un porcentaje menor, de 19,5%, de entre quienes justifican el golpe de Estado que perciben la corrupción como poco generalizada que la cifra que se presenta de entre quienes no justificarían un golpe y perciben la corrupción como

poco generalizada, un 20,7%. Sin embargo, lo contraintuitivo se da entre quienes mencionan que la corrupción está algo generalizada y nada generalizada. De entre quienes justifican el golpe de Estado, un 45,6% establece que la corrupción está algo generalizada; mientras que, entre quienes no justifican el golpe, el porcentaje asciende a 47,1%. Por otro lado, entre quienes justifican el golpe, un 3,1% responde que la corrupción está nada generalizada; entre quienes no justifican el golpe, el porcentaje desciende a 1,8%. La relación entre ambas variables presenta un Chi-cuadrado de 0.374, no siendo significativa.

2.6. Legitimidad de golpes de Estado y accionar de gobernantes.

Se prosigue a analizar las variables dependientes en cuestión junto con la percepción hacia el accionar de los gobernantes. En primer lugar, se puede evidenciar una fuerte tendencia por la cual, quienes legitiman un golpe de Estado, tenderán a evaluar de peor manera el trabajo del gobierno de turno, en concordancia con hallazgos mencionados en el apartado teórico que estipulan que se tiende a evaluar el régimen político con base en la actuación del gobierno. Esta tendencia se mantiene en las dos preguntas relativas a la justificación de un golpe de Estado, siendo más marcada en el caso de delincuencia.

Entre quienes justifican un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, un 15,5% evalúan el trabajo del gobierno como muy bueno; un 43,9%, como bueno; un 31,1%, como regular; un 6,8% como malo; y un 2,7% como muy malo. Por otro lado, quienes no justifican un golpe de Estado frente a esta circunstancia evalúan de mejor manera el trabajo del gobierno: con una diferencia de 6,4 puntos porcentuales, un 21,9% estipula que el trabajo del gobierno es muy bueno; un 47,5%, 3,6 puntos porcentuales más que en el grupo anterior, menciona que es bueno; con una disminución de 6,1 puntos porcentuales, un 35% lo evalúa como regular; un 4,1%, como malo; y, finalmente, un 1,5% como muy malo. El Chi-cuadrado de esta relación es 0.000, por lo que la misma es estadísticamente significativa.

La misma tendencia se presenta con la segunda pregunta, aunque menos marcada. Entre quienes justifican un golpe de Estado frente a mucha corrupción, un 16,7% evalúa el trabajo del gobierno como muy bueno; un 44%, como bueno; un 29,8%, como regular; un 6,5%, como malo; y un 3,1%, como muy malo. Al contrario, de entre quienes no justifican un golpe de Estado frente a mucha corrupción, con un aumento de 3,7 puntos porcentuales, un 20,4% evalúa el trabajo del gobierno como muy bueno; con una diferencia

de 3,6 puntos porcentuales, un 47,6%, como bueno; un 26,5%, como regular; con unos 2,2 puntos porcentuales menos, un 4,4% percibe el trabajo del gobierno como malo; y, finalmente, con una disminución de 2 puntos porcentuales, un 1,1% menciona que el trabajo del gobierno es muy malo. La relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.005.

En lo referente a participación, la relación entre la percepción que a los gobernantes les interesa la opinión de personas como los encuestados y la legitimidad de golpes de Estado presenta tendencias menos marcadas. En general, en el caso de la legitimidad de un golpe frente a mucha delincuencia, se da una tendencia intuitiva que evidencia que quienes justifican un golpe de Estado tenderán a percibir en menor medida que a los gobernantes les interesa su opinión. Al respecto de la legitimación de golpes de Estado frente a mucha corrupción, la tendencia no es clara, como se lo verá a continuación.

En este sentido, de entre los encuestados que justifican un golpe de Estado por mucha delincuencia, un 48,4% menciona que a los gobernantes no les interesa su opinión; un 16,5% se muestra indiferente; y un 35,1%, percibe que a los gobernantes sí les interesa su opinión. Entre quienes no justificarían un golpe de Estado ante esta circunstancia, con una diferencia de 2,4 puntos porcentuales menos, un 46% menciona que a los gobernantes no les interesa su opinión; un 10,8% se muestra indiferente, con una disminución de 5,7 puntos porcentuales; y, con un aumento de 8,2 puntos porcentuales, un 43,3% responde que a los gobernantes sí les interesa su opinión. Esta tendencia permite un Chi-cuadrado de 0.001, siendo la relación estadísticamente significativa. En otras palabras, quienes justifican el golpe de Estado tenderán responder en mayor medida que a los gobernantes no les interesa su opinión, además de mostrarse más indiferentes, que los encuestados que no legitimarían un golpe.

Ocurre algo diferente cuando se analiza la legitimidad de un golpe de Estado frente a mucha corrupción. Entre quienes justifican el golpe, un 47,1% percibe que a los gobernantes no les interesa su opinión; un 15,8% se muestra indiferente; y, un 37,1% establece que a quienes gobiernan el país sí les interesa su opinión. Con un aumento de 0,2 puntos porcentuales, un 47,9% de entre quienes no justifican el golpe perciben que a los gobernantes no les interesa su opinión; y, también con un aumento de 3,3 puntos porcentuales, un 40,4% de quienes no justifican el golpe perciben que a los gobernantes sí les interesa su opinión. La diferencia está en la indiferencia, en tanto un 11,6% de quienes no justifican el golpe se muestran indiferentes. Evidentemente, la relación no es estadísticamente significativa, con un Chi-cuadrado de 0.063. Sin embargo, cuando se

realiza el cálculo con los datos sin agrupar, se obtiene una relación estadísticamente significativa, con un Chi-cuadrado de 0.045.

2.7. Legitimidad de golpes de Estado y orientaciones hacia las instituciones.

Se continúa con el análisis de la relación entre la legitimidad que los ciudadanos otorgarían a un golpe de Estado y las percepciones que se posee hacia las instituciones. En primer lugar, se puede evidenciar una tendencia, mayormente marcada en el caso de la legitimidad de un golpe de Estado frente a mucha delincuencia que, frente a mucha corrupción, por la cual quienes justifican un golpe tenderán a percibir en mayor medida que los derechos no se encuentran protegidos por el sistema político ecuatoriano. Así, de entre quienes justifican un golpe de Estado en el primer caso, un 37,3% menciona que los derechos no están protegidos por el sistema político; un 20,9% se muestra indiferente; y, un 41,8% percibe que los derechos sí se encuentran protegidos por el sistema político ecuatoriano. Por otro lado, con una disminución de 6,7 puntos porcentuales, un 30,6% de encuestados que no justifican un golpe mencionan que los derechos no están protegidos por el sistema político ecuatoriano; un 21,3% se muestran indiferentes; y, finalmente, con un aumento de 6,3 puntos porcentuales, un 48,1% responde que los derechos están protegidos por el sistema político ecuatoriano. La relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, con un Chi-cuadrado de 0.021.

Cuando se analiza la justificación de un golpe de Estado frente a mucha corrupción y la percepción de protección de derechos, la tendencia se muestra menos marcada. Entre quienes justifican que los militares tomen el poder, un 35,5% percibe que los derechos no están protegidos por el sistema político ecuatoriano; un 19,8% se muestra indiferente; y, un 44,7% menciona que los derechos sí están protegidos. Por otro lado, de los encuestados que no justificarían una toma de poder de los militares por medio de un golpe de Estado, un 32% establece que los derechos no están protegidos, una disminución de 3,5 puntos porcentuales con respecto al anterior grupo; un 22,9% se muestra indiferente; y, por último, con un aumento mínimo, un 45,1% percibe que los derechos están protegidos por el sistema político del país. La relación no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.241. Sin embargo, es importante destacar que, si se analiza el valor de esta variable sin agrupar, se presenta un Chi-cuadrado de 0.000, obteniéndose así una relación estadísticamente significativa.

Cuando se analiza la relación de las variables dependientes con el respeto a las instituciones, se obtiene una tendencia contraintuitiva. En ambos casos, quienes no justifican un golpe de Estado tenderán a responder en mayor medida que no respetan las instituciones que quienes sí justifican el golpe. Ello levanta una anomalía, puesto que la misma esencia de un golpe de Estado es una ruptura del poder institucional por medio de una vía no institucional. En este sentido, se llega a pregunta sobre qué entienden los encuestados por instituciones, puesto que justificar un golpe de Estado y establecer que se respeta las instituciones es una contradicción en sí misma. En ambos casos, sin embargo, la relación no es estadísticamente significativa.

En este sentido, entre quienes justifican un golpe de Estado por mucha delincuencia, un 25% responde no respetar las instituciones; un 20,6% se muestra indiferente; y un 54,49% menciona tener respeto por las instituciones. Al contrario, entre quienes no justifican un golpe de Estado, un 27,1% establece no respetar las instituciones; un 17,9%, se muestra indiferente; y un 55,2% responde respetar las instituciones. El Chi-cuadrado de esta relación es de 0.331, no siendo estadísticamente significativa. Por otro lado, de entre quienes justifican un golpe de Estado frente a mucha corrupción, un 25,5% reconoce no respetar las instituciones; un 18,9% mantiene una postura indiferente; y un 55,6% alega respetar las instituciones. Entre quienes no justifican un golpe de Estado, un 27,1% manifiesta no respetar las instituciones; un 19,9% se muestra indiferente; y, finalmente, con una disminución de 2,6 puntos porcentuales, un 53% percibe respetar las instituciones. La relación entre estas dos variables tampoco es estadísticamente significativa, con un Chi-cuadrado de 0.632.

Por otro lado, al analizar las relaciones con el orgullo por las instituciones, se vuelven a obtener tendencias intuitivas. En ambos casos, quienes justifican los golpes de Estado tenderán a mostrarse menos orgullosos por las instituciones ecuatorianas. Así, entre quienes legitiman un golpe frente a mucha delincuencia, un 36,7% reconoce no sentirse orgulloso por las instituciones; un 20,7%, se muestra indiferente; y, por último, un 42,6% responde sentirse orgulloso por las mismas. Al contrario, entre quienes no justifican el golpe, con una disminución de 5,3 puntos porcentuales, un 31,4% no se siente orgulloso por las instituciones; un 19,6% se menciona indiferente; y, finalmente, con un aumento de 6,5 puntos porcentuales, un 49,1% de encuestados se siente orgulloso por las instituciones. La relación es estadísticamente significativa, con una cifra de 0.043 por Chi-cuadrado.

La tendencia se mantiene cuando se revisa la relación entre el orgullo por las instituciones y la legitimidad de un golpe de Estado frente a mucha corrupción, aunque menos marcada. En este sentido, de entre quienes justifican un golpe de Estado frente a

mucha corrupción, un 35,7% menciona no sentir orgullo por las instituciones; un 20,1% se posiciona como indiferente; y, un 44,2% establece sentirse orgulloso por las instituciones. Por otro lado, de entre quienes no legitimarían un golpe de Estado, un 32,8% responde no sentirse orgulloso por las instituciones; un 19,6% se muestra indiferente; y, con un aumento de 3,4 puntos porcentuales, un 47,6% responde sentirse orgulloso por las instituciones. La relación entre estas variables presenta un Chi-cuadrado de 0.412, no siendo estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando se realiza el cálculo del Chi-cuadrado con los datos sin agrupar, se obtiene una relación estadísticamente significativa, presentando una cifra de 0.030.

2.8. Legitimidad de golpes de Estado y confianza hacia las instituciones ecuatorianas.

Posteriormente, el análisis se centrará en la relación entre la legitimidad de golpes de Estado por parte de las Fuerzas Armadas y la confianza que tengan los ciudadanos hacia distintas instituciones del país. Se iniciará por la confianza hacia las Fuerzas Armadas, prosiguiendo con la Presidencia, la Asamblea Nacional, los partidos políticos, el sistema de justicia y las elecciones.

En primer lugar, no hay tendencia concluyente en la relación entre la confianza en las Fuerzas Armadas y la justificación de un golpe de Estado. Frente a mucha delincuencia, quienes justificarían un golpe de Estado militar tenderán a confiar en mayor medida en las Fuerzas Armadas que quienes no legitiman un golpe. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando se cuestiona frente a mucha corrupción. En el primer caso, entre quienes justificarían un golpe, un 19,9% de encuestados respondió no confiar en las Fuerzas Armadas; un 15,2% se mostró indiferente; y un 64,9% estableció confiar en la institución militar. Por otro lado, de entre quienes no justifican un golpe de Estado, con un aumento ligero de 0.3 puntos porcentuales, un 20,2% menciona no confiar en las Fuerzas Armadas; un 16% se muestra indiferente; y, por último, con una disminución de 1,1 punto porcentual, un 63,8% menciona confiar en las Fuerzas Armadas. Los datos del Chi-cuadrado referentes a la relación entre ambas variables varían dependiendo de si se toman los datos agrupados o sin agrupar. En el primer caso, no se puede establecer una relación estadísticamente significativa, en tanto se da un Chi-cuadrado de 0.879; en el segundo, al contrario, se da una relación estadísticamente significativa, con Chi-cuadrado de 0.003.

Como se lo mencionó previamente, es contraintuitivo la tendencia obtenida cuando se analiza la relación entre la justificación de un golpe de Estado por mucha corrupción y la confianza en las Fuerzas Armadas. Entre quienes legitimarían un golpe, un 20,5% no confía en las Fuerzas Armadas; un 16% se mostró indiferente; y, un 63,5% estableció confiar en la institución militar. Por otro lado, entre quienes no justifican el golpe, con una disminución mínima de 0,6 puntos porcentuales, un 19,9% mencionó no confiar en las Fuerzas Armadas; un 15,3% se mantuvo indiferente; y, finalmente, con un aumento de 1,3 puntos porcentuales, un 64,8% respondió confiar en la institución militar. Así como en la otra pregunta, el Chi-cuadrado varía dependiendo si se agrupan los datos. Cuando los mismos están agrupados, se presenta una relación no estadísticamente significativa, con un Chi-cuadrado de 0.878; mientras que, al contrario, cuando los datos no están agrupados, se presenta una relación significativa con un Chi-cuadrado de 0.000.

Cuando se toma la relación entre las variables dependientes y la confianza hacia el presidente, se obtiene resultados más concluyentes. Al igual que lo evidenciado con la evaluación del trabajo del gobierno, en ambos casos, quienes justifican un golpe de Estado tenderán a responder en mayor medida que no confían en el presidente o se mantienen indiferentes que quienes no justifican el golpe de Estado. Así, frente a mucha delincuencia, de entre quienes justificarían un golpe, un 28,4% no confía en la Presidencia; un 13,1% se muestra indiferente; y un 58,5% responde confiar en el máximo órgano del Ejecutivo. Por otro lado, con una disminución de 5,8 puntos porcentuales, un 22,6% de quienes no justifican un golpe de Estado se mantienen desconfiados de la Presidencia; un 11,6% se muestra indiferente; y, finalmente, con un aumento de 7,2 puntos porcentuales, un 65,7% confía en el presidente. La relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.017.

Lo mismo sucede analizando la confianza en la Presidencia con la justificación de golpes de Estado frente a mucha corrupción. Entre quienes justificarían el golpe, un 28,8% menciona no confiar en el máximo órgano del Ejecutivo; el 13,3% se mantiene indiferente; y un 57,9% responde confiar en la Presidencia. Por otro lado, entre quienes no justifican el golpe, con una disminución de 6,3 puntos porcentuales, un 22,5% establece no confiar en la Presidencia; un 12,2% se muestra indiferente; y, finalmente, con un aumento de 7,4 puntos porcentuales, un 65,3% responde confiar en el presidente. La relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, con un Chi-cuadrado de 0.012.

Asimismo, cuando se toma en cuenta la confianza en la Asamblea Nacional, la tendencia se mantiene. Es decir, en ambos casos, los encuestados que justifican el golpe de Estado tenderán a confiar menos en el órgano legislativo que quienes no justifican un golpe de Estado, aunque de forma menos marcada. De esta forma, entre los encuestados que justifican un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, un 48,6% responde no confiar en la Asamblea; un 18,8% se muestra indiferente; y un 32,6% confía en el Legislativo. Por otro lado, de entre quienes no justifican un golpe de Estado ante esta circunstancia, con una disminución de 2,3 puntos porcentuales, un 46,3% estipula no confiar en la Asamblea; un 17,9% responde de forma indiferente; y, por último, con un aumento de 2,3 puntos porcentuales, un 35,9% establece confiar en el órgano Legislativo. Cuando se analiza el Chi-cuadrado de los datos agrupados, se da una cifra de 0.431, no dándose una relación estadísticamente significativa; sin embargo, cuando se toman los datos sin agrupar, se da un Chi-cuadrado de 0.006, siendo estadísticamente significativa.

Con una tendencia similar, aunque menos marcada, de entre quienes justifican un golpe de Estado frente a mucha corrupción, un 48,2% no confía en la Asamblea; un 18,2% se muestra indiferente; y un 33,6% responde confiar en el órgano legislativo. Al contrario, entre quienes no legitimarían un golpe de Estado, con una disminución de 2,1 puntos porcentuales, un 46,1% establece no confiar en la Asamblea; un 18,4% se posiciona de forma indiferente; y, por último, con un aumento de 1,9 puntos porcentuales, un 35,5% establece confiar en el órgano legislativo. En este caso, no se da una relación estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.701.

En el caso de la relación entre la legitimación hacia golpes de Estado y la confianza hacia las instituciones partidarias, se evidencia una leve tendencia por la cual quienes justifican la toma de poder por parte de los militares tenderán a confiar en menor medida en las instituciones de representación ya mencionadas. De esta forma, entre quienes justifican un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, un 65,3% establece desconfiar de las instituciones partidistas; un 16,7% responde de forma indiferente; y un 17,9% menciona confiar en los partidos políticos. Por otro lado, de entre quienes no justifican un golpe de Estado ante esta circunstancia, con una ligera disminución de 1,1 punto porcentual, un 64,2% no confía en los partidos políticos; un 15,8% se mantiene indiferente; y, con un aumento de 2,1 puntos porcentuales, un 20% confía en las instituciones partidarias. En este caso, se da un Chi-cuadrado de 0.590, no presentándose una relación estadísticamente significativa.

Por otro lado, de entre quienes justifican un golpe de Estado frente a mucha corrupción, un 65,8% no confía en los partidos; un 15,2% se muestra indiferente; y un 19% establece confiar en las instituciones partidistas. Al contrario, de entre quienes no legitimarían un golpe de Estado, con una leve disminución de 1,4 puntos porcentuales, un 64,4% responde no confiar en los partidos; un 16,4% se mantiene indiferente; y, con una mínima diferencia de 0,2 puntos porcentuales, un 19,2% establece confiar en las instituciones partidarias. En este caso, con los datos agrupados, se presenta un Chi-cuadrado de 0.818, no siendo una relación estadísticamente significativa; sin embargo, ello cambia cuando se analizan los datos sin agrupar, en cuyo casi el Chi-cuadrado desciende hasta 0.027, dándose una relación significativa.

Cuando se toma la relación entre las variables dependientes y la confianza en el sistema de justicia, se obtienen resultados no concluyentes. En primer lugar, cuando se toma la justificación de un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, se da la tendencia por la cual quienes justifican un golpe de Estado tenderán a confiar en menor medida en la administración de justicia. Sin embargo, cuando se toma la justificación de un golpe de Estado frente a mucha corrupción, se da la tendencia opuesta: quienes no justifican el golpe, tenderán a confiar en menor medida en las la administración de un juicio justo por los tribunales de justicia.

De esta forma, entre quienes justifican un golpe frente a mucha delincuencia, un 51,3% establece no confiar en la administración de justicia; un 20,1% se mantiene indiferente; y un 28,6% estipula confiar en la justicia. Por otro lado, de entre quienes no legitimarían un golpe de Estado ante esta circunstancia, con una disminución de 3,9 puntos porcentuales, un 47,4% no confía en la justicia; un 19,9% se muestra indiferente; y, finalmente, con un aumento de 4,1 puntos porcentuales, un 32,7% confía en la justicia. Con los datos agregados, no se da una relación estadísticamente significativa entre ambas variables, presentándose un Chi-cuadrado de 0.280. Caso contrario, cuando se toman los datos sin agregar, se da una relación estadísticamente significativa, dándose un Chi-cuadrado de 0.044.

Al contrario, cuando se analiza la legitimación de golpes de Estado frente a mucha corrupción, se obtiene la tendencia opuesta. En este sentido, entre quienes justifican un golpe de Estado por mucha corrupción, un 48,6% no confía en la administración de justicia; un 19,9% se mantiene indiferente; y un 31,5% responde confiar en el sistema de justicia. Por otro lado, con un ligero aumento de 1,2 puntos porcentuales, un 49,8% de entre quienes no justifican el golpe ante esta situación responde no confiar en la justicia; un 20,7 se muestra indiferente; y, finalmente, con una disminución de 2 puntos porcentuales, un 29,5% confía

en la administración de justicia. En este caso, no se da una relación estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.765.

Finalmente, tomando los datos de la confianza en las elecciones y su relación con las dos variables dependientes en cuestión, en ambos casos se obtiene la tendencia por la cual quienes justifican los golpes de Estado tenderán a mostrar menos confianza en los procesos electorales. De este modo, de entre quienes justifican un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, un 39,4% menciona no confiar en las elecciones; un 19,3% se muestra indiferente; y un 41,3% estableció confiar en los procesos electorales. Por otro lado, de entre los encuestados que no legitimarían un golpe de Estado frente a esta situación, con una disminución de 5,7 puntos porcentuales, un 33,7% dice no confiar en las elecciones; un 19,5% se mantiene indiferente; y, finalmente, con un aumento de 5,5 puntos porcentuales, un 46,8% establece confiar en las elecciones. Sin embargo, esta relación no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.062.

Así, manteniendo la tendencia, aunque menos marcada, de entre quienes justificarían un golpe de Estado frente a mucha corrupción, un 38,2% no confía en las elecciones; un 19% responde de forma indiferente; y un 42,8% establece confiar en los procesos electorales. Por otro lado, entre los encuestados que no justificarían un golpe de Estado, con una disminución de 2,8 puntos porcentuales, un 35,4% establece no confiar en las elecciones; un 19,7% se mantiene indiferente; y, por último, con un aumento de 2,1 puntos porcentuales, un 44,9% estipula confiar en los procesos electorales. De igual manera, la relación entre estas variables no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.558.

2.9. Justificación de golpes de Estado e ideología.

Por último, se presenta la relación entre la legitimidad de los golpes de Estado y la ideología manifestada por los encuestados. Frente a esta variable, no se puede marcar una tendencia definida. En primer lugar, de entre quienes justificarían un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, un 30,6% se declara de izquierda; un 41% se sitúa en el centro; y un 28.4% se autodenomina de derecha. Por otro lado, de entre quienes no justificarían un golpe ante esta situación, un 28,9% se menciona de izquierda; un 45,8%, de centro; y un 25,3%, de derecha. La relación, evidentemente, no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.249.

Cuando se toma la legitimidad de un golpe de Estado frente a mucha corrupción, la situación varía un poco. Se presenta una ligera tendencia que marca que quienes justifican un golpe de Estado tenderán en mayor medida situarse a la derecha de la escala ideológica. Así, de entre quienes justifican un golpe de Estado en esta situación, un 29,9% se declara de izquierda; un 42,2%, de centro; y un 27.9%, de derecha. Por otro lado, de entre quienes no justifican el golpe, con un ligero aumento de 0,4 puntos porcentuales, un 30,3% se menciona de izquierda; un 44,3% se ubica en el centro; y, finalmente, con una disminución de 2,6 puntos porcentuales, un 25,3% establece ser de derecha. La relación tampoco es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.613.

2.10. Conclusiones relacionadas a los resultados del 2012.

Después del presente análisis, se pueden obtener las siguientes conclusiones. En primer lugar, durante el año 2012, el país experimentó una serie de buenos resultados económicos que se tradujeron en una mejora de vida para una parte de la ciudadanía ecuatoriana. A pesar de ello, este año mantuvo elevados índices de aceptación de golpes de Estado. A nivel general, la democracia mantuvo altas cifras de legitimidad, a pesar de mostrar un porcentaje considerable de encuestados que no estaban de acuerdo con que el sistema democrático sea lo mejor. Por otro lado, hubo menores índices de satisfacción con el sistema democrático. En la cuestión económica, al contrario, se puede evidenciar con una parte considerable tiende a observar que su situación económica y la situación económica nacional es mejor o igual que aquella presentada el año anterior, en concordancia con los buenos resultados económicos analizados en un inicio.

Entre otras conclusiones obtenidas a lo largo del análisis de la presentación de los resultados, destacan elevados niveles de apatía hacia la política y una percepción amplia por la cual se ve a la corrupción como un problema generalizado entre funcionarios públicos. A nivel de instituciones, la que más confianza posee son las Fuerzas Armadas, seguidas por la Presidencia y las elecciones. Al contrario, las que menos índices de confianza obtuvieron son los partidos políticos, la justicia y el Legislativo, en ese orden. Es interesante destacar la amplia aprobación hacia el trabajo del gobierno, a pesar de la percepción amplia de que a los gobernantes no les interesa la opinión de los ciudadanos. Ello puede ir ligado, aunque se necesitan estudios más profundos, a los buenos resultados económicos obtenidos en aquel año. Finalmente, a nivel institucional, la protección de derechos, el orgullo y el respeto por

las instituciones obtuvieron resultados positivos en las orientaciones evaluativas de los encuestados, a pesar de no obtener más de la mitad de respuestas válidas.

De este modo, revisando la relación entre las variables antes mencionadas y la legitimación de los golpes de Estado, se obtienen algunas conclusiones. En primer lugar, destaca la anomalía que se evidencia al revisar los amplios porcentajes de encuestados que legitiman la democracia y, a su vez, los golpes de Estado. Si bien la tendencia marca que quienes legitimarían un golpe tenderán a aceptar en menor medida la democracia y a sentirse menos satisfechos con la misma, la tendencia mantiene resultados anómalos. Esto es una observación a tomar en cuenta puesto que, como ya se lo mencionó previamente, la democracia se basa en el principio de aceptación de la elección ganadora, no pudiendo intervenir poderes no electos contra poderes electos. Por otro lado, la relación entre la percepción del estado de la economía, tanto a nivel nacional como personal, es concluyente en tanto se obtienen tendencias marcadas mediante las cuales quienes responden no legitimar un golpe de Estado tenderán a evaluar la situación económica de mejor manera.

Cuando se analiza las percepciones hacia la política, se obtienen resultados concordantes, en su mayor medida, con la teoría. Los porcentajes de respuesta relativos al interés y conocimientos sobre la política son mayores entre quienes no legitimarían un golpe de Estado que entre quienes sí lo harían, mostrándose más apáticos, desinteresados y desconocedores. En este punto, se llega a la primera relación contraintuitiva. Las tendencias mostradas en la relación entre la justificación de golpes de Estado y la percepción hacia la corrupción no son concluyentes, en tanto varían entre variables dependientes.

Así como la cuestión económica, también se obtienen tendencias concluyentes frente a la relación entre la legitimidad de golpes de Estado, la evaluación del trabajo del gobierno y la confianza hacia la Presidencia. A modo general, los encuestados que justifican un golpe de Estado tenderán a evaluar de peor forma el trabajo del gobierno y a confiar menos en la Presidencia. En este sentido, se puede observar lo mencionado en la teoría: se tenderá a evaluar cuestiones relativas al sistema político en concordancia con las percepciones hacia el gobierno. Sin embargo, es destacable también que no se obtienen resultados concluyentes en torno a la percepción de participación y la legitimidad de golpes de Estado.

Sobre las instituciones, se obtiene varias conclusiones. En primer lugar, en este año, se confirma la teoría en tanto una percepción de respuesta insatisfactoria de las instituciones en la protección de derechos está relacionado con una mayor aceptación al accionar de vías no institucionales, e incluso ilegales; en este caso, un golpe de Estado. De esta forma, quienes justifican un golpe tenderán a percibir en mayor medida que los derechos no se encuentran

protegidos por el sistema político ecuatoriano. Además, los datos arrojan la tendencia por la cual, quienes justifican el golpe tienden a estar menos orgullosos por las instituciones. Sin embargo, es contraintuitivo constatar que los encuestados que legitiman el golpe tenderán a responder en mayor medida que respetan las instituciones que quienes no justificarían un golpe de Estado, lo que lleva a cuestionarse sobre la misma definición que la ciudadanía otorgue a las instituciones.

Se prosigue con la confianza hacia instituciones concretas. En primer lugar, es relevante mencionar que no existe una tendencia concluyente, a pesar de lo que sería intuitivo, entre la legitimación de un golpe de Estado militar y la confianza hacia las Fuerzas Armadas y la justicia. Lo contrario ocurre al respecto a la confianza hacia el Legislativo, los partidos políticos y las elecciones, en cuyos casos se evidencia que quienes justifican un golpe de Estado tenderán, aunque de forma menos marcada que en el caso de la Presidencia, a mostrarse menos confiados con dichas instituciones. Finalmente, no hay tendencias definidas al respecto de la relación entre las variables dependientes y la auto ubicación ideológica de los encuestados.

De entre todas las variables, se obtuvieron relaciones estadísticamente significativas con las dos variables dependientes en los siguientes casos: la evaluación de la situación económica, tanto personal como nacional; el interés en la política; la evaluación del trabajo del gobierno y la confianza en la Presidencia. Al contrario, no se obtuvo relaciones estadísticamente significativas en ninguno de los dos casos cuando se analizó las siguientes variables independientes: satisfacción con la democracia, respeto a las instituciones, confianza en las elecciones e ideología. Por otro lado, presentan una relación estadísticamente significativa con una variable dependiente, y no con la otra, las siguientes variables: conocimiento de la política y percepción de corrupción.

Cuando se toma los datos agrupados se obtuvo relación estadísticamente significativa en un caso cuando se tomó las siguientes variables: legitimidad de la democracia, percepción de protección de derechos, el interés de los gobernantes hacia la opinión de los ciudadanos y orgullo por las instituciones. Asimismo, agrupando los datos, no existen relaciones estadísticamente significativas cuando se toma la confianza en las Fuerzas Armadas, Asamblea, partidos políticos y justicia. Sin agrupar, las variables del interés de los gobernantes en la política, protección de derechos, orgullo por las instituciones y confianza en las Fuerzas Armadas obtienen dos relaciones estadísticamente significativas. Además, sin agrupar, la confianza hacia la Asamblea, partidos políticos y justicia obtienen relaciones estadísticamente significativas con una variable dependiente; y, en el caso de legitimidad de la democracia, con ninguna variable dependiente.

De esta forma, el primer año de estudio arroja resultados que muestran la persistencia de actitudes autoritarias entre los ciudadanos ecuatorianos, además de cierta apatía hacia la política en general. Ello a pesar de una amplia popularidad de la Presidencia y una realidad económica relativamente próspera. A nivel general, se puede observar como se tiende a evaluar la situación con base en la realidad más próxima, y determinar la deseabilidad de un acontecimiento, como un golpe de Estado, en relación hacia la evaluación de instituciones clave, la protección de derechos, el interés en la política y la situación económica; incluso en mayor medida que lo que se perciba sobre el sistema democrático como tal. Con ello dicho, se prosigue a la presentación de los datos obtenidos en el año 2014.

3. El estado de las percepciones ciudadanas en Ecuador en 2014.

3.1. Presentación general de resultados.

En el año 2014, Rafael Correa ejercía su octavo año de mandato presidencial consecutivo. El país continuaba su ciclo de prosperidad económica iniciado previamente. De esta manera, el PIB per cápita a precios constantes del 2010 se elevaba de USD 5.122,18 en 2012 a USD 5.412,132 en 2014; el PIB crecía a un ratio de 3,789% anual; la desigualdad continuaba su proceso de disminución, presentándose una baja del Índice de Gini de 46,1 en 2012 a 45 en 2014; y la tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de USD 1,90 al día se ubicaba en un 2.6% (Banco Mundial, 2020). Además, el Índice de Desarrollo Humano del PNUD continuaba su crecimiento, de 0,726 en 2012 a 0,756 en 2014 (PNUD, 2021). Ello, a pesar de una disminución baja del precio promedio del petróleo, que se ubicó en USD 98,01 (Banco Central del Ecuador, 2017).

De forma intuitiva, las cifras de legitimidad hacia los golpes de Estado en este año se redujeron con respecto al 2012. En este año, cuando se cuestionó a los encuestados sobre la justificación que otorgarían a un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, un 28,4% de respuestas válidas establecieron que sí se justificaría el golpe, mientras que una amplia mayoría de 71,6% de encuestados que emitieron una respuesta válida no legitimaron un eventual golpe. En esta pregunta, un 7,3% del total de encuestados no supieron la respuesta y un 0,6% no respondió. Por otro lado, en referencia a la legitimación de golpes de Estado frente a mucha corrupción, un 34,2% de respuestas válidas justificó el golpe; y, por otro lado, una mayoría amplia, aunque menor con respecto a la anterior pregunta, de 65,8% estableció

que no se justificaría tal acto. De forma similar, un 7,1% de encuestados no supo la respuesta y un 0,9% no respondió, dando un total de 8% de respuestas pérdidas por el sistema. Así, se mantiene la tendencia de justificar un golpe frente a mucha corrupción en mayor medida que frente a mucha delincuencia.

La democracia, por otro lado, también obtuvo cifras más altas de legitimad con respecto al año de estudio previo. Ante la pregunta de si la democracia era la mejor forma de gobierno, sólo un 13,3% respondió no estar de acuerdo, un 20,1% se mostró indiferente y, con una amplia mayoría, un 66,7% legitimó la democracia. Incluso, en esta pregunta, se dio menores índices de no respuesta que los evidenciados el año anterior, en tanto un 3,9% de encuestados no supo la respuesta y 0.3 no respondió. Lo mismo sucede con la satisfacción hacia la democracia. De esta forma, un 6,4% de encuestados respondió encontrarse muy satisfechos con el sistema democrático; una amplia mayoría de 62,4% estableció encontrarse satisfecho con el mismo, dando un total de 68,8% de respuestas válidas que muestran satisfacción con el sistema. Ello mientras que, al contrario, un 26,5% se encontraba insatisfecho con la democracia; y, con un porcentaje mínimo, un 4,6% estipulaba estar muy insatisfecho con el sistema democrático. En esta pregunta, se da un total de 5,6% de respuestas pérdidas por el sistema, entre quienes no supieron la respuesta y quienes no respondieron.

En concordancia con el tiempo de progreso económico, la percepción de la situación económica, tanto nacional como personal, mostró mejores resultados que en el 2012. Así, un 39,2% de respuestas válidas mencionaron que la situación económica nacional era mejor a la del año anterior; un 40,8% la percibió como igual; y, por último, un 19,9% respondió que la situación fue peor. Con menores cifras, ante la cuestión de la evolución de la situación económica personal, un 25,2% la percibió como mejor; un 51,9%, como igual; y, un 22,9%, como peor. Las respuestas pérdidas por el sistema son menores: un 1% y un 0,4%, respectivamente. Al igual que en el 2012, los encuestados tienden a evaluar su situación económica de peor forma que la situación nacional.

En general, se obtienen mejores resultados en el 2014 con respecto al 2012 en lo relativo a las orientaciones hacia la política, aunque de forma más matizada y perdurando la apatía mencionada en el apartado anterior. En este sentido, un 6,8% de encuestados respondió estar muy interesado por la política; un 26,6% se mostró algo interesado; un 41,3% estableció estar poco interesado; y un 25,3% confeso no estar para nada interesado en la política. Se evidenció, además, un aumento del porcentaje de encuestados que estipulo

conocer sobre la política con referencia al año 2012. Así, un 34,5% de respuestas válidas establecen que el encuestado no conoce sobre el tema; un 27% se muestra indiferente; y un 38,6% menciona entender bien los asuntos políticos. En este tema, se dio un total de 0,2% y 2,6% de respuestas pérdidas por el sistema, respectivamente.

Por otro lado, el tema de la corrupción mantuvo altos niveles de percepción de generalización del problema, aunque menores con respecto al año anterior. De esta forma, un 26,1% respondió que la corrupción se encuentra muy generalizada entre funcionarios públicos; un 44,2%, que la misma está algo generalizada; mientras que, al contrario, un 26,6% de encuestados mantuvo que la corrupción se encuentra algo generalizada; y, con un porcentaje mínimo, un 3,1% dijo que la corrupción está nada generalizada entre funcionarios públicos. En este caso, hubo un 4,4% de respuestas pérdidas por el sistema.

Intuitivamente, el gobierno también recibió mayores cifras de aprobación cuando se cuestionó a los encuestados sobre sus orientaciones evaluativas hacia el trabajo del presidente. En ese sentido, un 22,9% de encuestados estableció que el trabajo del presidente fue muy bueno y un 47,3% lo evaluó como bueno, dando una amplia mayoría de 70,3% de encuestados cuyas evaluaciones hacia el gobierno fueron positivas. Al contrario, un 24,3% respondió que el trabajo de la Presidencia no fue ni bueno ni malo; un 4,1% lo evaluó como malo; y, una minoría de 1,3% evaluó el trabajo del gobierno como pésimo. En total, se dio un 0,4% de respuestas pérdidas por el sistema. Frente a la cuestión si a los gobernantes les interesa la opinión de los representados, la tendencia es menos clara: si bien disminuye el porcentaje de respuestas negativas, un 41,5% responde que a los gobernantes no les interesa su opinión; sucede lo mismo con las respuestas positivas, en tanto un 35,3% percibe que a los que gobiernan el país les interesa su opinión. El aumento se da en las respuestas indiferentes, con un 23,2% de respuestas válidas. En esta pregunta, se perdió por el sistema un porcentaje de 2,4%.

Al respecto de las instituciones, en las tres variables tomadas por el presente estudio se evidencia un aumento de respuestas positivas por parte de los encuestados. Cuando se cuestionó a los encuestados sobre la percepción que poseían al respecto de la protección de derechos por el sistema político ecuatoriano, un 46,8% de respuestas válidas mencionaron que los derechos están protegidos; un 27,8% se mostró indiferente; y, por último, una minoría de 25,3% estuvo en desacuerdo que los derechos estén protegidos por el sistema político ecuatoriano. En este tema se dio un 3,5% de respuestas pérdidas por el sistema. Por otro lado, al respecto del respeto por las instituciones, un 20,2% responde no respetar las

instituciones; un 19,5% se mantiene indiferente; y, el restante 60,3% establece tener respeto por las mismas. Finalmente, en el tema del orgullo hacia las instituciones, se dan resultados similares: un 20,3% de encuestados declara no sentirse orgulloso por las instituciones; un 23,4% se mantiene indiferente; y un 56,3% establece sentirse orgulloso por las mismas. Frente a las dos preguntas previas, se da un 1,9% de respuestas pérdidas por el sistema en ambos casos.

Prosiguiendo con la confianza hacia las instituciones ecuatorianas, se observa que las Fuerzas Armadas siguen siendo la institución con más confianza, seguida por la Presidencia. Además, es destacable mencionar que en todos los casos se presentan mejores índices de confianza. Así, sólo un 11,5% de encuestados respondió no confiar en las Fuerzas Armadas; un 12,1% se mantuvo indiferente; y un 76,4% de respuestas válidas muestran confiar en la institución militar. Por otro lado, la Presidencia obtuvo, igualmente, altos niveles de confianza, aunque menores que las Fuerzas Armadas: un 15,9% de encuestados estableció desconfiar del máximo órgano ejecutivo; un 15,1% se mostró indiferente; y, una mayoría de 69% estableció confiar en la Presidencia. En relación a las Fuerzas Armadas, se presentó un 2,3% de respuestas pérdidas por el sistema; por otro lado, en el caso de la Presidencia, se dio un 0,5% de respuestas no válidas.

Como ya se lo mencionó previamente, las instituciones representativas también obtuvieron mejores niveles de confianza, aunque menores frente a las dos instituciones tratadas previamente. La Asamblea, por su parte, obtuvo un 45,1% de encuestados que respondieron confiar en la misma; un 24,1% se mostró indiferente; y un 30,8% confeso desconfiar del órgano legislativo. En este caso, se dio un 1,9% de respuestas pérdidas por el sistema. Los partidos políticos muestran menores niveles de confianza. Entre los encuestados que dieron respuestas válidas, un 57% mencionó no confiar en los partidos políticos; un 20,1% se mantuvo indiferente; y un 23% respondió confiar en los mismos. Al respecto, se perdió por el sistema un total de 1,2% de respuestas.

La segunda institución con menor confianza en este año, tras los partidos políticos, fue la administración de justicia. Solamente un 29,9% de los encuestados estableció confiar en que los tribunales garantizan un juicio justo; un 30% se mostró indiferente; y un 40,1% estableció no confiar en la justicia. Se dio un 3,3% de respuestas pérdidas por el sistema. Por su parte, los procesos electorales obtuvieron mejores resultados. Un 23,7% de encuestados mantuvo no confiar en las elecciones; un 21,5% dio una respuesta indiferente; y, por último,

una mayoría de 54,8% respondió confiar en los procesos electorales. En total, ante esta pregunta, se dio un 1,5% de respuestas pérdidas por el sistema, entre no responde y no sabe.

Finalmente, ante la cuestión ideológica, el presente año muestra un giro ideológico amplio hacia la izquierda, que obtuvo, inclusive, mayores cifras que el centro. De esta forma, entre las respuestas válidas, un total de 44,7% de encuestados se confesó de izquierda; un 31,7% se situó en el centro; y, por último, una minoría de 23,6% se ubicó a la derecha en el espectro ideológico, de acuerdo a su propia definición de los términos. Es destacable mencionar que se mantienen los altos niveles de no respuesta ante esta pregunta. Del total de encuestados, un 15,9% mencionó no saber la respuesta y un 5,6% prefirió no responder la pregunta, dando un total de 21,5% de respuestas pérdidas por el sistema. Dicho esto, se prosigue a presentar los resultados obtenidos tras el cruce de variables.

3.2. La relación entre la legitimación de golpes de Estado y percepciones hacia la democracia.

Al igual que en la sección anterior, tras analizar los resultados de la relación entre las variables dependientes y la legitimidad de la democracia, se obtiene la tendencia mediante la cual los encuestados que legitiman los golpes de Estado tenderán a mostrarse en desacuerdo o indiferentes frente al postulado de la democracia como mejor forma de gobierno en mayor medida que quienes no legitiman el golpe. Sin embargo, la tendencia es poco marcada. Tomando los dos posibles casos, se puede evidenciar que, en el caso de justificación del golpe frente a mucha delincuencia, la tendencia es, incluso, mínima.

De esta forma, entre el total de encuestados que justificarían una toma de poder por parte de los militares cuando exista mucha delincuencia, un 13,5% no legitima la democracia; un 20,5% se mantiene indiferente; y un 66% establece que la democracia es la mejor forma de gobierno. Por otro lado, de entre los encuestados que no justificarían el golpe, con un descenso mínimo de 0,3 puntos porcentuales con respecto a quienes sí legitiman el golpe, un 13,2% establece que la democracia no es la mejor forma de gobierno; con una disminución similar, un 20,1% se muestra indiferente; y, con un ligero aumento de 0,7 puntos porcentuales, un 66,7% legitima la democracia. La relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.976.

Cuando se toma la legitimidad de un golpe de Estado frente a mucha corrupción con aquella de la democracia, los resultados son más marcados. De esta forma, entre quienes justificarían el golpe, un 14,7% mantiene que la democracia no es la mejor forma de gobierno; un 20,5% se muestra indiferente; y, por último, un 64,8% legitima al sistema democrático. Al contrario, entre quienes no justificarían una toma de poder militar ante la circunstancia planteada, con una disminución de 1,4 puntos porcentuales con respecto a quien sí legitimaría un golpe, un 13,3% no legitima la democracia; con una diferencia mínima, un 20,2% se mantiene indiferente; y, con un aumento de 1,8 puntos porcentuales, un 66,6% menciona que la democracia es la mejor forma de gobierno. Sin embargo, la relación entre las dos variables en cuestión mantiene un Chi-cuadrado de 0.744, no siendo estadísticamente significativa.

En este año, la satisfacción con la democracia obtiene mayor peso, en tanto presenta tendencias más marcadas por las cuales quienes no justificarían un golpe de Estado tienden a encontrarse más satisfechos con la democracia que quienes sí legitimarían un golpe. Sin embargo, es igualmente relevante destacar cómo, incluso en los casos en los que los encuestados justificarían el golpe, la mayoría se encuentra satisfecho con la democracia. De entre los encuestados que justificarían un golpe de Estado, un 5,3% respondió estar muy satisfecho con la democracia; un 54,5%, satisfecho; mientras que un 33,7% establece encontrarse insatisfecho con el sistema democrático; y, por último, un 6,4%, muy insatisfecho. Por otro lado, de entre quienes no justificarían un golpe de Estado, un 7,1% declara estar muy satisfecho con la democracia; con un aumento considerable de 10,6 puntos porcentuales con respecto al grupo de encuestados que sí legitiman el golpe, un 65,1% menciona encontrarse satisfecho; mientras que, con una disminución de 9,4 puntos porcentuales, un 24,3% establece encontrarse insatisfecho con el sistema democrático; y, por último, un 3,5% responde estar muy insatisfecho. La relación entre estas dos variables presenta un Chi-cuadrado de 0.000, siendo estadísticamente significativa.

Cuando se analiza la legitimación de un golpe de Estado frente a mucha corrupción, la tendencia se mantiene, aunque en menor medida. De esta forma, de entre quienes justificarían un golpe militar frente a esta circunstancia, un 5,4% responde estar muy satisfecho con la democracia; un 57,7%, satisfecho; mientras que un 31,8% establece encontrarse insatisfecho con el sistema democrático; y un 5,1%, muy insatisfecho. Por otro lado, de entre quienes no justificarían un golpe frente a mucha corrupción, un 6,9% se encontró muy satisfecho con la democracia; con un aumento de 7,1 puntos porcentuales con respecto a quienes sí justifican el golpe, un 64,8% declaró encontrarse satisfecho; al contrario, con una disminución de ocho puntos porcentuales con respecto al anterior grupo,

un 23,8% se mostró insatisfecho con la democracia; y, finalmente, un 4,5% dijo estar muy insatisfecho con la misma. Se da una relación estadísticamente significativa, con un Chi-cuadrado de 0.013.

Antes de finalizar esta sección, es destacable recalcar la consideración hecha al revisar los resultados entre las variables dependientes y las orientaciones hacia la democracia en el 2012, en tanto en el 2014 se presentan resultados similares. Si bien, en los cuatro casos las tendencias marcan que quienes justifican un golpe de Estado frente a cualquiera de los dos escenarios manejados por las encuestas tendrán mejores percepciones hacia la democracia, se debe tomar en cuenta que, en el caso de los encuestados que justificaron un golpe de Estado, la mayoría mencionó estar de acuerdo que la democracia sea la mejor forma de gobierno y a encontrarse satisfecho con la misma. Se presenta, así, la misma anomalía del 2012, mediante la cual la ciudadanía concilia dos pensamientos opuestos desde la teoría democrática, algo que merece estudios posteriores más profundos.

3.3. Percepciones económicas y legitimidad de golpes de Estado.

Al igual que en el 2012, de forma intuitiva, cuando se toman las percepciones sobre la situación económica y su relación con la legitimación de golpes de Estado, se da la tendencia por la cual quienes justificarían un golpe de Estado responderán en menor medida que la situación es mejor que hace doce meses y en mayor medida que la situación es peor que el año pasado que quienes no legitiman un golpe. En todos los casos, salvo en la relación entre legitimidad del golpe frente a mucha corrupción y la evaluación de la situación económica propia, se obtienen relaciones estadísticamente significativas.

De esta forma, de entre quienes justificarían un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, un 31,2% establece que la situación económica nacional es mejor que hace doce meses; un 41% de encuestados la percibe como igual; y un 27,8% menciona que la situación es peor. Por otro lado, de entre quienes no justificarían un golpe de Estado frente a este hecho, con un aumento de doce puntos porcentuales, un 43,2% menciona que la situación económica nacional es mejor; un 40,7% la percibe como igual; y, finalmente, con una disminución de 11,7 puntos porcentuales, un 16,1% evalúa la situación nacional como peor. La relación es estadísticamente significativa, con un Chi-cuadrado de 0.000.

La tendencia se mantiene en la relación entre legitimidad de un golpe militar frente a mucha corrupción y la evaluación de la situación económica nacional. De entre los encuestados que justificarían un golpe ante esta situación, un 34,4% evalúa la situación

económica nacional como mejor; un 40,4%, como igual; y, un 25,2%, como peor que hace doce meses. Por otro lado, con un aumento de 7,7 puntos porcentuales, entre los encuestados que establecieron que un golpe no se justificaría, un 42,1% menciona que la situación económica nacional es mejor; un 41,2% establece que la situación es igual; y, finalmente, con una disminución de 8,5 puntos porcentuales, un 16,7% establece que la situación es peor. La relación es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.000.

Asimismo, en general se presenta que quienes justifican un golpe de Estado tenderán a evaluar su situación económica personal de peor forma que quienes no legitimarían el golpe. De esta forma, entre los encuestados que justificarían una toma de poder militar frente a mucha delincuencia, un 20,2% de encuestados respondió que su situación económica es mejor; un 50% la percibió como igual; y un 29,8% la establece que fue peor que hace doce meses. Al contrario, entre quienes no justificarían el golpe, con un aumento de 7,6 puntos porcentuales, un 27,8% ve su situación económica como mejor; un 53,1%, como igual; y un 19,1%, con una disminución de 10,7 puntos porcentuales con respecto al anterior grupo, establece que la situación fue peor. Entre ambas variables, se da un Chi-cuadrado de 0.000, siendo una relación estadísticamente significativa.

Por otro lado, de entre quienes justificarían una toma de poder por parte de los militares frente a mucha corrupción, un 22,9% estableció que su situación económica fue mejor a la presentada el año previo; un 52,2% se mostró indiferente; y un 24,8% percibió su situación económica como peor. De entre quienes no legitiman un golpe de Estado, con un aumento de 4,7 puntos porcentuales con respecto al anterior grupo, un 27,6% mencionó que su situación económica es mejor; un 52,2% la percibió como igual; y, finalmente, con una disminución de 4,6 puntos porcentuales, un 20,2% respondió que su situación económica es peor a aquella presentada el año previo a la pregunta. Sin embargo, no se puede establecer una relación estadísticamente significativa, en tanto, tras el cruce de estas variables, se obtiene un Chi-cuadrado de 0.062.

3.4. Legitimidad de golpes de Estado y orientaciones hacia la política.

Se prosigue a presentar la relación entre las variables dependientes y las orientaciones de los encuestados hacia la política. Entre estas variables, se obtiene resultados menos concluyentes y tendencias poco marcadas. A nivel general, los datos arrojan que los ciudadanos que justifican un golpe de Estado, en comparación con quienes no legitiman el

golpe, tenderán a presentar mayores porcentajes de respuesta en torno a la opción de tener mucho interés en la política y, pero menores niveles de respuesta en frente a la opción de algo de interés en la política, además mayores porcentajes de respuesta de poco interés en la misma.

De esta forma, de entre quienes justifican un golpe frente a mucha delincuencia, un 9,2% responde tener mucho interés por la política y un 22,3% se muestra algo interesado por la misma, dando un total de 31,5% de encuestados interesados; mientras que, un 43,6% se dice poco interesado por la política y un 24,9% menciona no tener nada de interés, dando un total de 68,5% del grupo que se declara estar desinteresado por la política. Por otro lado, de entre quienes no justificarían una toma de poder por parte de los militares, con una disminución de 3,4 puntos porcentuales con respecto al grupo que sí legitimaría un golpe, un 5,8% de encuestados responde tener mucho interés en la política, mientras que, con un aumento de 6,5 puntos porcentuales, un 28,8% responde tener algo de interés por la política, dando un total de 34,6% del grupo interesado en la política. Además, de entre este grupo, un 40,8% responde estar poco interesado en la política y un 24,5% dice estar nada interesado en la misma. Así, se puede observar cómo, a pesar de mostrar menores cifras de "mucho interés" en la política, en total, el grupo de encuestados que no justifica el golpe tiende a mostrarse más interesado por la política que el grupo de encuestados que sí justifica la toma de poder por parte de los militares. El Chi-cuadrado de esta relación es de 0.021, obteniéndose así una relación estadísticamente significativa.

Asimismo, entre quienes justifican un golpe de Estado frente a mucha corrupción, a un 7,3% le interesa mucho la política y a un 24,6%, le interesa algo, dándose un total de 31,9% de encuestados que dicen tener interés en la política; mientras que, un 44% responde tener poco interés en la política y un 24,1% se muestra completamente desinteresado por la política. Al contrario, de entre quienes no justifican el golpe, con una disminución mínima frente a quienes sí lo legitiman, un 6,5% establece que le interesa mucho la política y, con un aumento más amplio de 3,3 puntos porcentuales, un 27,9% responde tener algo de interés en la política, dando un total de 34,4% de encuestados que muestran interés en la política, un 2,5% más que el resultado obtenido en el primer grupo. Finalmente, de entre quienes no justifican el golpe, un 40,2% menciona tener poco interés por la política y un 25,5% se posiciona como completamente desinteresado de la política. La relación entre ambas variables no es, evidentemente, estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.405.

Algo similar ocurre en relación con el conocimiento de la política. A nivel general, en los dos casos se obtiene que quienes sí justificarían un golpe de Estado militar tenderán a responder en mayor medida que sí conocen y que no conocen, a la vez, sobre política. De entre quienes justificarían un golpe frente a mucha delincuencia, un 35,5% responde no conocer sobre política; un 24,4% se muestra indiferente; y un 40,1% establece conocer sobre política. Por otro lado, de entre quienes no justificarían un golpe de Estado, con una disminución de 2,9 puntos porcentuales, un 32,6% dice no entender los asuntos políticos; un 28,2% se mantiene indiferente; y, con una leve disminución de 0,9 puntos porcentuales, un 39,2% declara conocer sobre política. La relación no es estadísticamente significativa, en tanto presenta un Chi-cuadrado de 0.331.

Algo similar ocurre cuando se analiza la legitimación de un golpe militar frente a mucha corrupción. De entre quienes justificarían un golpe frente a este escenario, un 35,1% responde no entender los asuntos políticos; un 25,9% se muestra indiferente; y un 39% establece conocer sobre la política. Por otro lado, de entre quienes no legitiman el golpe, un 33,8% dice no conocer sobre los asuntos políticos; un 27,7% se mantiene indiferente; y un 38,5% responde conocer sobre los asuntos políticos. La relación tampoco es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.770.

3.5. Legitimación de golpes de Estado y percepciones sobre corrupción.

Cuando se revisan los resultados de la relación entre justificación de golpes de Estado y percepciones sobre la generalización de la corrupción, se obtiene la tendencia mediante la cual aquellos ciudadanos que no justificarían un golpe de Estado tenderán a responder en menor medida que la corrupción está muy o algo generalizada. De entre los encuestados que justificarían un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, un 28,9% percibe a la corrupción como muy generalizada entre los funcionarios públicos; un 44,7% establece que está algo generalizada; un 23,3% respondió que este problema está poco generalizado; y, finalmente, un 3,2% establece que no está nada generalizado. Por otro lado, de entre los encuestados que no justificarían un golpe, con una reducción de 2,9 puntos porcentuales con respecto al grupo que sí legitima un golpe, un 26% percibió a la corrupción como muy generalizada; además que, con otra diferencia de 1,8 puntos porcentuales, un 42,9% dijo que la corrupción está algo generalizada; mientras que, con un aumento de 4,3 puntos

porcentuales, un 27,7% respondió que este problema está poco generalizado; y, finalmente, con un ligero incremento, un 3,4% sugirió que el problema está nada generalizado. A pesar de esta tendencia, no se evidencia una relación estadísticamente significativa, en tanto se obtiene un Chi-cuadrado de 0.387.

Un resultado similar se obtiene al tomar la legitimación de un golpe de Estado frente a mucha corrupción, aunque la tendencia es menos marcada aún. De entre los encuestados que justificarían un golpe de Estado frente a este escenario, un 27,8% respondió que la corrupción está muy generalizada entre funcionarios públicos; un 43,8%, que está algo generalizada; un 24,9%, que está poco generalizada; y un 3,6%, que está nada generalizada. Por otro lado, de entre quienes no legitimarían un golpe de Estado en esta circunstancia, con 1,7 puntos porcentuales menos que el otro grupo, un 26,1% percibe al problema como muy generalizado; con una diferencia mínima, un 43,5% responde que está algo generalizado; con un aumento de 2,4 puntos porcentuales, un 27,3% menciona que la corrupción está poco generalizada; y, finalmente, un 3,1% alude a que la corrupción está nada generalizada entre funcionarios públicos. La relación en cuestión tampoco es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.773.

3.6. Legitimidad de golpes de Estado y orientaciones evaluativas hacia los gobernantes.

Prosiguiendo con la revisión de resultados del 2014, se presenta la relación entre las variables dependientes en cuestión y las orientaciones evaluativas hacia los gobernantes. En primer lugar, se debe destacar que se mantiene la tendencia del año anterior por la cual la evaluación del trabajo del presidente está relacionada con la legitimación de un golpe de Estado. Así, los encuestados que justificarían una toma de poder por parte de los militares, sea frente a mucha delincuencia o frente a mucha corrupción, evaluarán de peor forma al gobierno y tenderán a mostrar mayores niveles de indiferencia que los encuestados que no justificarían un golpe.

En este sentido, de entre quienes legitimarían un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, un 20,1% evaluó el trabajo del presidente como muy bueno; un 41,1% dijo que el mismo era bueno; un 27,2% estableció que no era ni bueno ni malo; mientras que, un 7,7% lo evaluó como malo; y un 3,6%, como pésimo. Por otro lado, de entre los encuestados que

no legitimaron una toma de poder militar, con un aumento de 4,6 puntos porcentuales, un 24,7% respondió que el trabajo del presidente era muy bueno; y, con una mayor diferencia de 8,9 puntos porcentuales, un 50,1% evaluó el trabajo de la administración como bueno; un 22,1% estableció que no era ni bueno ni malo; con una disminución de 5,3 puntos porcentuales con respecto al otro grupo, un 2,4% declaró que el trabajo de la presidencia era malo; y, finalmente, con una diferencia de 3 puntos porcentuales, sólo un 0,6% dijo que el trabajo del presidente fue pésimo. Se da una relación estadísticamente significativa, con un Chi-cuadrado de 0.000.

La misma tendencia se presenta al revisar los resultados de la legitimación de un golpe de Estado frente a mucha corrupción y la aprobación del trabajo del gobierno. De esta forma, entre los encuestados que justificarían un golpe de Estado, un 19,1% declaró que el trabajo del presidente es muy bueno; un 47,8% lo evaluó como bueno; un 24,6% mencionó que no era ni bueno ni malo; mientras que, un 5,8% y un 2,8% respondió que la administración del país estaba realizando un mal y pésimo trabajo, respectivamente. Al contrario, de entre los encuestados que no justificarían un golpe de Estado ante tal circunstancia, con un aumento de 5,5 puntos porcentuales, un 24,6% evaluó el trabajo del presidente como muy bueno; un 47,.9%, como bueno; un 23,8%, como ni bueno ni malo; con una reducción de 2,8 puntos porcentuales con respecto al anterior grupo, un 3% mencionó que el trabajo del gobierno fue malo; y, finalmente, con una ligera diferencia, un 0,7% declaró que el trabajo del presidente fue pésimo. La relación también es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.000.

Por otro lado, en torno al interés de los gobernantes por la opinión de los ciudadanos, se obtiene la tendencia mediante la cual los encuestados que respondieron justificar un golpe de Estado mencionarán, en mayor medida, que a los que gobiernan el país no les interesa su opinión y, en menor medida, que a los representantes les interesa lo que piensan los representados. Sin embargo, la tendencia se matiza cuando se evidencia que los encuestados que no justificarían un golpe de Estado tienden a mostrarse más indiferentes que el grupo que sí legitima el golpe. En ninguno de los dos posibles casos se presenta relaciones estadísticamente significativas.

De esta forma, entre los encuestados que justificarían un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, un 45,6% respondió que a los gobernantes no les interesa su opinión; un 19% se mostró indiferente; y un 35,4% dijo que a quienes gobiernan el país les interesa

lo que ellos piensan. Por otro lado, de entre quienes no justifican el golpe de Estado ante esta circunstancia, con una disminución de 5,6 puntos porcentuales con respecto al grupo previo, un 40% dice que a los gobernantes no les interesa su opinión; un 23,7% se mantuvo indiferente; y, finalmente, con un ligero aumento de 0,9 puntos porcentuales, un 36,3% percibe que a quienes dirigen el país sí les interesa lo que los ciudadanos piensan. La relación, como se lo mencionó previamente, no es estadísticamente significativa, arrojando un Chi-cuadrado de 0.090.

Cuando se toma la justificación de un golpe de Estado frente a mucha corrupción, la tendencia no es clara. Así, de entre el grupo de encuestados que sí justificaría un golpe ante esta circunstancia, un 44,6% percibe que a los gobernantes no les interesa su opinión; un 20,3% respondió de forma indiferente; y un 35,1% mencionó que a quienes gobiernan el país les interesa la opinión de los ciudadanos. Por otro lado, de entre quienes no justifican un golpe de Estado, con una disminución de 3,9 puntos porcentuales, un 40,7% respondió que a los gobernantes les interesa su opinión; un 24,6% se mantuvo indiferente; y, con otra ligera disminución de 0,4 puntos porcentuales, un 34,7% percibió que a los representantes gubernamentales les interesa la opinión de los representados. La relación no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.164.

3.7. Legitimidad de golpes de Estado y orientaciones a las instituciones.

La presentación de resultados prosigue al revisar las relaciones presentadas entre las variables dependientes manejadas a lo largo del estudio y las orientaciones hacia las instituciones. En los seis casos posibles, obtenidos de la relación entre las dos variables relativas a la legitimación de golpes de Estado y las tres variables relacionadas a las instituciones, la percepción de protección de derechos, respeto y orgullo, se obtienen relaciones estadísticamente significativas que muestran cómo las personas que justifican los golpes de Estado tenderán a manejar peores orientaciones hacia las instituciones. Las tendencias se repiten en todos los casos.

En primer lugar, los resultados evidencian que quienes justifican un golpe de Estado frente a mucha delincuencia percibirán en mayor medida que los derechos no se encuentran protegidos por el sistema político ecuatoriano y, asimismo, en menor medida que los derechos sí están protegidos. De entre los encuestados que legitiman el golpe ante esta circunstancia, un 30,4% respondió que los derechos no están protegidos; un

25,9% se mostró indiferente; y un 43,7% declaró que los derechos sí están protegidos por el sistema político ecuatoriano. Al contrario, de entre quienes no justificarían el golpe, con una disminución de 6,9 puntos porcentuales con respecto a los encuestados que sí legitiman un eventual golpe, un 23,5% no está de acuerdo que los derechos se encuentran protegidos; un 27,8% se mantuvo indiferente; y, finalmente, con un aumento de cinco puntos porcentuales, un 48,7% declaró que los derechos están protegidos por el sistema político ecuatoriano. La relación es estadísticamente significativa, obteniéndose un Chi-cuadrado de 0.032.

Lo mismo sucede con la legitimación de golpes de Estado frente a mucha corrupción. Así, de entre los encuestados que justificarían un golpe de Estado ante esta circunstancia, un 31,2% estableció que los derechos no están protegidos por el sistema político ecuatoriano; un 22% se mantuvo indiferente; y un 47,1% estableció que los derechos sí se encuentran protegidos por el sistema. Por otro lado, de entre quienes no justificarían un golpe de Estado ante esta circunstancia, con una disminución de nueve puntos porcentuales con respecto al grupo de encuestados que sí legitiman el golpe, un 22,2% declaró que los derechos no están protegidos; un 30,7% se mantuvo indiferente; y, finalmente, con una diferencia menor de 0,3 puntos porcentuales, un 47,1% respondió que los derechos sí están protegidos. La relación presenta un Chi-cuadrado de 0.000, siendo estadísticamente significativa.

Cuando se toma el respeto por las intuiciones, se revierte la tendencia contraintuitiva presentada el año anterior y se evidencia que quienes justifican un golpe de Estado tenderán en mayor medida a responder que no respetan las instituciones. De todas formas, se mantiene la anomalía mediante la cual la mayoría de personas en este grupo establece que respetan las instituciones, presentándose la contradicción mencionada previamente. De esta manera, entre los encuestados que legitimarían un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, un 26,2% declara no respetar las instituciones; un 16,5% se muestra indiferente; y un 57,2% establece respetar las instituciones. Al contrario, de entre quienes no justificarían un golpe de Estado ante esta circunstancia, con una disminución de 8,3 puntos porcentuales, un 17,9% declara no respetar las instituciones; un 20% se mantiene indiferente; y, con un aumento de 4,9 puntos porcentuales, un 62,1% menciona respetar las instituciones. La relación es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.002.

Algo similar ocurre cuando se toma la legitimación de un golpe de Estado frente a mucha corrupción. De entre los encuestados que justificarían un golpe de Estado ante esta situación, un 26,1% respondió no respetar las instituciones; un 16,3% se mostró indiferente;

y un 57,6% estableció que respeta las instituciones del país. Por otro lado, de entre quienes no justificarían el golpe, con una disminución de 8,3 puntos porcentuales con respecto a quienes sí justifican el golpe, un 17,8% declaró no respetar las instituciones; un 21,1% se muestra indiferente; y, finalmente, con un aumento de 3,5 puntos porcentuales, un 61,1% estableció respetar las instituciones. La relación entre ambas variables posee un Chi-cuadrado de 0.001, por lo que es estadísticamente significativa.

Por último, también se evidencia que los encuestados que justificarían un golpe de Estado ante las dos circunstancias preguntadas tenderán a mostrar menos orgullo por el sistema político ecuatoriano. De esta forma, de entre quienes legitiman una toma de poder militar frente a mucha delincuencia, un 26,6% no se siente orgulloso por las instituciones; un 21,1% se mantiene indiferente; y un 52,2% se declara orgulloso de vivir bajo el sistema político ecuatoriano. Por otro lado, de entre los encuestados que no justificarían un golpe de Estado, con una disminución de 9,2 puntos porcentuales, un 17,4% declara no sentirse orgulloso de las instituciones; un 24,3% se mantiene indiferente; y, con un aumento de 5,9 puntos porcentuales, un 58,3% establece sentirse orgulloso de vivir bajo el sistema político ecuatoriano. Se da una chi-cuadrado de 0.001 al respecto de la relación entre ambas variables, siendo una relación estadísticamente significativa.

Lo mismo ocurre cuando se toma la relación entre la legitimación de un golpe de Estado ante mucha corrupción y el orgullo por las instituciones. De esta forma, de entre los encuestados que justificarían un golpe de Estado ante este hecho, un 25,7% confiesa no sentirse orgulloso de vivir bajo el sistema político ecuatoriano; un 18,6% se muestra indiferente; y un 55,7% establece sentirse orgulloso de las instituciones. Por otro lado, de entre quienes no justificarían un golpe de Estado ante esta circunstancia, con una disminución de 7,9 puntos porcentuales, un 17,8% establece no sentirse orgulloso por las instituciones; un 26,2% se mantiene indiferente; y, finalmente, con ligero aumento de 0,4 puntos porcentuales, un 56,1% declara sentirse orgulloso de vivir bajo el sistema político ecuatoriano. Entre ambas variables, se da una relación estadísticamente significativa, con un Chi-cuadrado de 0.000.

3.8. Legitimidad de golpes de Estado y confianza hacia las instituciones.

Se continúa con la presentación de la relación mantenida entre la legitimidad de golpes de Estado y la confianza hacia distintas instituciones del país. En primer lugar,

abordando el tema de las orientaciones hacia las Fuerzas Armadas, se obtiene la tendencia mediante la cual, intuitivamente, aunque de forma poco marcada y no estadísticamente significativa, quienes no justifican un golpe de Estado militar confiarán menos en la institución militar. De esta forma, entre quienes legitiman un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, un 10,2% no confía en las Fuerzas Armadas; un 10,7% se muestra indiferente; y un 79,2% establece confiar en la institución militar. Por otro lado, de entre quienes no justificarían un golpe de Estado ante este escenario, con un ligero aumento de 1,9 puntos porcentuales, un 12,1% menciona no confiar en las Fuerzas Armadas; un 12,4% se mantiene indiferente; y, con una disminución de 3,7 puntos porcentuales con respecto a quienes sí justificarían un golpe, un 75,5% responde confiar en la institución militar. La relación no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.365.

Algo similar ocurre al revisar los resultados de la relación entre la confianza hacia las Fuerzas Armadas y la legitimación de golpes de Estado frente a mucha corrupción. De entre los encuestados que justificarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, un 11,4% declara no confiar en las Fuerzas Armadas; un 9,3% se mantiene indiferente; y un 79,3% confía en la institución militar. Al contrario, de entre quienes no justificarían un golpe de Estado ante esta circunstancia, con un ligero aumento de 0,9 puntos porcentuales, un 12,3% establece no confiar en las Fuerzas Armadas; un 13,4% se declara indiferente; y, con una disminución más considerable de cinco puntos porcentuales, un 74,3% establece confiar en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la relación no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.067.

Al igual que en el 2012, las tendencias son más marcadas cuando se toma las variables dependientes y la confianza en el Ejecutivo. En ambos casos, se evidencia cómo los encuestados que justifican un golpe de Estado se mostrarán más desconfiados y más indiferentes hacia la Presidencia que quienes no justificarían un golpe de Estado. Así, de entre quienes legitimarían una toma de poder militar frente a mucha delincuencia, un 25,8% estableció desconfiar del Ejecutivo; un 16% se mantuvo indiferente; y un 58,1% declaró confiar en la Presidencia. Al contrario, de entre quienes no justificarían un golpe ante esta circunstancia, con una amplia disminución de 13,8 puntos porcentuales, solamente un 12% respondió no confiar en la Presidencia; un 14,3% se mantuvo indiferente; y, finalmente, con un gran aumento de 15,6 puntos porcentuales, una amplia mayoría de 73,7% mencionó confiar en el Ejecutivo. La relación es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.000.

Lo mismo ocurre en la relación entre confianza en el Ejecutivo y la legitimación de un golpe de Estado militar frente a mucha corrupción, aunque de forma menos marcada. De entre quienes justificarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, un 21,7% confiesa no confiar en la Presidencia; un 16,1% se mantiene indiferente; y un 62,2% establece confiar en el Ejecutivo. Por otro lado, de entre los encuestados que no legitimarían un golpe, con una diferencia de 8,3 puntos porcentuales, un 13,4% establece no confiar en la Presidencia; un 14,6% se mantiene indiferente; y, finalmente, con un aumento de 7,8 puntos porcentuales, un 72% declara confiar en el Ejecutivo. La relación también es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.000.

Cuando se obtienen los resultados de la relación entre las variables dependientes y la confianza en el Legislativo, se obtienen tendencias poco claras. En general, se evidencia que quienes justificarían un golpe de Estado tenderán a mostrar más niveles de no confianza que quienes no justificarían un golpe. Sin embargo, lo mismo sucede con la confianza. La diferencia se obtiene en tanto los encuestados que no justifican un golpe se muestran más indiferentes que quienes sí lo hacen. De esta forma, entre quienes justificarían un golpe frente a mucha delincuencia, un 34,6% responde no confiar en la Asamblea; un 19,7% se muestra indiferente; y un 45,7% declara confiar en el Legislativo. Por otro lado, de entre los encuestados que no justificarían el golpe, con una disminución de 4,6 puntos porcentuales con respecto al grupo previo, un 30% mantiene no confiar en el Legislativo; un 25,3% se mantiene indiferente; y un, con una ligera disminución de un punto porcentual, un 44,7% mantiene confiar en la Asamblea Nacional. Se obtienen dos resultados tomando el Chi-cuadrado: agrupando los datos, no se obtiene una relación estadísticamente significativa, dando una cifra de 0.063; mientras que, sin agrupar, sucede lo contrario, en tanto el Chi-cuadrado es de 0.018.

Sucede lo mismo con la legitimidad de golpes de Estado frente a mucha corrupción. De entre quienes justificarían un golpe de Estado frente a esta circunstancia, un 34,2% no confía en la Asamblea Nacional; un 21,1% se muestra indiferente; y un 44,7% establece confiar en el Legislativo. Por otro lado, de entre quienes no justificarían un golpe, con una disminución de 4,1 puntos porcentuales, un 30,1% establece no confiar en la Asamblea; un 25,45 se muestra indiferente; y, con una mínima disminución de 0,3 puntos porcentuales, un 44,4% confía en el Legislativo. Cuando se toman los datos agrupados, se obtiene un Chi-cuadrado de 0.142, siendo una relación no estadísticamente significativa; al contrario, sin agrupar, el Chi-cuadrado desciende hasta 0.005, obteniéndose una relación estadísticamente significativa.

Tampoco se obtienen resultados claros cuando se analiza las variables dependientes a la luz de la confianza en los partidos políticos. Cuando se toma la legitimidad de un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, se evidencia que quienes justificarían el golpe tenderán a mostrarse más desconfiados, más indiferentes y menos confiados de los partidos políticos que quienes no legitimarían el golpe. En este sentido, de entre quienes justificarían una toma de poder militar, un 57,9% establece no confiar en los partidos; un 20,5% se muestra indiferente; y un 21,6% declara confiar en las instituciones partidistas. Por otro lado, de entre quienes no justificarían un golpe ante esta circunstancia, con una disminución de un punto porcentual con respecto al anterior grupo, un 56,9% no confía en los partidos políticos; un 20% se mantiene indiferente; y, con un aumento de 1,5 puntos porcentuales, un 23,1% confía en los partidos. La relación no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.829.

Cuando se toma la legitimidad de golpes de Estado frente a mucha corrupción, la tendencia se vuelve menos clara aún. Se evidencia que quienes justifican un golpe tenderán a desconfiar más, mantenerse menos indiferentes y confiar más en los partidos que quienes no justifican un golpe. Así, de entre quienes legitimarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, un 58,7% establece desconfiar de los partidos políticos; un 18,6% se muestra indiferente; y un 22,7% responde confiar en dichas instituciones. Por otro lado, de entre quienes no justificarían el golpe, con una disminución de 1,7 puntos porcentuales, un 57% establece no confiar en los partidos; un 20,5% se mantiene indiferente; y, con una ligera baja de 0,2 puntos porcentuales, un 22,5% confía en los partidos. La relación no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.707.

Por otro lado, las relaciones entre la legitimidad de un golpe de Estado y la confianza en la administración de justicia tampoco muestran tendencias claras. En primer lugar, se evidencia que quienes justificarían una toma de poder militar frente a mucha delincuencia se mantendrán más desconfiados, indiferentes y menos confiados en que las cortes del país garanticen un juicio justo que quienes no justificarían un golpe. De esta forma, entre quienes legitimarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, un 43,4% responde no confiar en la justicia; un 30,2% se mantiene indiferente; y un 26,5% declara confiar en las instituciones judiciales. Al contrario, de entre quienes no justifican un golpe, con una disminución de 4,4 puntos porcentuales, un 39% declara no confiar en la justicia; un 29,8% se mantiene indiferente; y, con un aumento de 4,7 puntos porcentuales, un 31,2% responde confiar en las instituciones judiciales. La relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa, en tanto se obtiene un Chi-cuadrado de 0.182.

Por otro lado, es poco claro la tendencia entre legitimidad de un golpe ante mucha corrupción y confianza en la justicia, en tanto los datos arrojan que quienes justificarían un golpe de Estado se muestran ligeramente más desconfiados de la justicia, más confiados de la misma y menos indiferentes que quienes no legitimarían un golpe. Así, de entre quienes justificarían un golpe ante esta circunstancia, un 40% declara no confiar en la justicia; un 29,6% se muestra indiferente; y un 30,5% declara confiar en las instituciones judiciales. De entre quienes no justificarían un golpe, con una ligera baja de 0,2 puntos porcentuales, un 39,8% menciona no confiar en la justicia; un 30,8% se mantiene indiferente; y, con otra ligera disminución de 1,2 puntos porcentuales, un 29,3% establece confiar en la administración de justicia. Evidentemente, la relación no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.870.

Finalmente, en relación a las elecciones, tampoco se obtienen tendencias claras. En primer lugar, los datos arrojan que quienes justifican un golpe de Estado frente a mucha delincuencia tendrán mayores índices de desconfianza y un ligero aumento en el porcentaje de confianza, pero responderán en menor medida de forma indiferente que quienes no justificarían un golpe. Así, de entre quienes aceptarían una toma de poder militar, un 26,2% menciona que no confía en las elecciones; un 19,4% se muestra indiferente; y un 54,5% responde confiar en los procesos electorales. Por otro lado, de entre los encuestados que no legitimarían un golpe ante esta circunstancia, con una disminución de tres puntos porcentuales con respecto al grupo que sí legitima un golpe, un 23,2% declara no confiar en las elecciones; un 22,6% se muestra indiferente; y, por último, con una mínima diferencia de 0,3 puntos porcentuales, un 54,2% responde confiar en los procesos electorales. La relación entre ambas variables obtiene un Chi-cuadrado de 0.314, no siendo estadísticamente significativa.

La tendencia se vuelve más clara al tomar la legitimidad de golpes de Estado frente a mucha corrupción y su relación con la confianza hacia los procesos electorales. Los datos arrojan que quienes justifican un golpe de Estado ante esta circunstancia se tenderán a ser más desconfiados, menos indiferentes y menos confiados de las elecciones que quienes sí justificarían un golpe. Así, de entre los encuestados que aceptarían una toma de poder militar frente a esta circunstancia, un 26,5% responde no confiar en las elecciones; un 20,9% se mantiene indiferente; y un 52,6% establece confiar en los procesos electorales. Al contrario, de entre quienes no justificarían un golpe, con una disminución de 3,3 puntos porcentuales, un 23,2% responde no confiar en las elecciones; un 22,2% se muestra indiferente; y, con un aumento de 1,9 puntos porcentuales, un 54,5% menciona confiar en los procesos electorales.

Sin embargo, la relación entre ambas variables tampoco es estadísticamente significativa, obteniendo un Chi-cuadrado de 0.404.

3.9. Legitimidad de golpes de Estado e ideología.

Finalmente, se presenta la relación entre las variables dependientes y la autopercepción ideológica de los encuestados. En general, se obtiene la tendencia por medio de la cual los encuestados que justificarían un golpe de Estado, sea frente a mucha delincuencia o frente a mucha corrupción, tenderán a ubicarse ideológicamente en mayor medida hacia la derecha. De esta forma, entre quienes legitimarían una toma de poder militar frente a mucha delincuencia, un 39,7% se auto percibe como de izquierda; un 32,8%, de centro; y un 27,4%, de derecha. Por otro lado, entre quienes no justificarían un golpe de Estado ante este escenario, con un aumento de 6,7 puntos porcentuales con respecto al anterior grupo, un 45% se dice de izquierda; un 31,5% se ubica en el centro; y, con una disminución de cuatro puntos porcentuales, un 23,4% se ubica en la derecha del espectro ideológico. Sin embargo, no se obtiene una relación estadísticamente significativa, en tanto se da un Chi-cuadrado de 0.218.

La tendencia es mayor cuando se toma la legitimación de golpes de Estado frente a mucha corrupción. De entre los encuestados que no justificarían una toma de poder por parte de los militares ante esta circunstancia, un 38,8% se dice de izquierda; un 33,8%, de centro; y un 27,4%, de derecha. Al contrario, de entre quienes no justificarían un golpe, con un aumento de 8,2 puntos porcentuales, un 47% se ubica en la izquierda; un 30,5% responde ser de centro; y, finalmente, con una disminución de 4,8 puntos porcentuales, un 22,6% declara ser de derecha. La relación entre ambas variables, cuando se toman los datos de ideología agrupados, es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.030. Ello cambia cuando se revisa la relación entre ambas variables sin agrupar los datos, obteniéndose un Chi-cuadrado de 0.053, no siendo estadísticamente significativa.

3.10. Conclusiones relacionadas a los resultados del 2014.

De esta forma, tras el análisis de este año se obtiene las siguientes conclusiones. En primer lugar, el 2014 se caracteriza por ser un año de crecimiento económico, reducción de desigualdad y disminución de la incidencia de la pobreza. El año también registró un crecimiento de índices humanos. La mejora de indicadores económicos y sociales se da al mismo tiempo de una reducción, hasta niveles relativamente bajos, de legitimidad de golpes

de Estado, con respecto al 2012. Al igual que en aquel año, la legitimidad de un golpe frente a mucha corrupción es mayor que frente a mucha delincuencia. La democracia, por otro lado, también obtuvo mayores cifras de legitimidad y satisfacción entre las orientaciones evaluativas de la ciudadanía ecuatoriana. En el año en cuestión también se evidencian niveles más altos de percepción de bienestar económico, tanto nacional como personal, en concordancia con las mejoras económicas antes mencionadas.

Si bien se dieron, además, mejores orientaciones hacia la política como tal, perdura la apatía y rechazo hacia el concepto y lo que ello implica, en tanto un porcentaje mayoritario de resultados mantiene un desinterés en los procesos políticos. Lo mismo sucede cuando se revisan los datos al respecto del conocimiento de la ciudadanía de los asuntos políticos. Asimismo, es recalcable que los encuestados percibieron a la corrupción como menos generalizada que en el año de estudio anterior, aunque se mantuvo altos niveles de respuestas que el problema estaba presente entre funcionarios públicos.

El año en cuestión también muestra niveles más altos, y ampliamente mayoritarios, de aprobación del trabajo del presidente y confianza en el máximo órgano ejecutivo. Sin embargo, ello sucede al mismo tiempo que los encuestados percibieron de forma minoritaria que a los gobernantes les interesa la opinión de la ciudadanía. Ello podría estar relacionado a una evaluación basada en resultados más que en procesos. Al respecto de las instituciones, se evidencia que, durante estos años, la ciudadanía se encontró más respetuosa y orgullosa de las instituciones, al tiempo que mantuvo que los derechos estaban más protegidos por el sistema político. Prosiguiendo con el tema, se mantiene el hecho por el cual las Fuerzas Armadas son la institución que más confianza genera en la ciudadanía, seguida por la Presidencia y las elecciones. Entre las instituciones menos confiadas, se encuentran los partidos políticos, la administración de justicia y la Asamblea Nacional, en ese orden. Todas las instituciones muestran mayores índices de confianza, sin embargo. Finalmente, el 2014 es un año que marca un amplio giro ideológico hacia la izquierda.

De esta forma, se prosigue a la presentación de las conclusiones al respecto del análisis de la relación entre las variables dependientes e independientes mantenidas en este estudio. En primer lugar, los datos evidencian cómo quienes legitimarían un golpe de Estado tienden a mostrarse en desacuerdo o indiferentes en mayor medida que quienes no justificarían una toma de poder militar cuando se les pregunta si la democracia es la mejor forma de gobierno. A pesar de ello, se mantiene la anomalía destacada en el año anterior mediante la cual se presentan amplios porcentajes de personas que legitiman la democracia y, a su vez, justificarían un golpe de Estado. Ante ello, la satisfacción con la democracia obtiene resultados más concluyentes, en tanto la tendencia por la cual quienes justifican un golpe se

sentirán menos satisfechos por la democracia es más marcada. Sin embargo, en esta variable también se da la anomalía relativa a una mayoría de encuestados que justificarían el golpe que se muestran satisfechos con la democracia.

Por otro lado, al igual que en el año previo de estudio, de forma intuitiva y concordante con la teoría, la percepción sobre la situación económica, sea nacional o personal, está relacionada con las variables dependientes en cuestión. De esta forma, se puede evidenciar cómo quienes justificarían un golpe de Estado tenderán a responder en mayor medida que la situación económica es peor que hace doce meses. Cuando se toman las orientaciones de los encuestados a la política, los resultados son menos concluyentes. En general, se puede observar cómo quienes no legitiman una toma de poder por parte de los militares presentan mayorías ligeras de interés en la política que quienes justificarían un golpe, aunque ello se revierte frente a la opción de mucho interés. Esta anomalía también se presenta al respecto del conocimiento sobre la política. Así, los datos arrojan que los encuestados que sí justificarían un golpe de Estado militar tenderán a responder en mayor medida que sí conocen y que no conocen, a la vez, sobre política.

En lo referente a la relación entre legitimidad de golpes de Estado y percepción sobre corrupción, se revierten las tendencias contraintuitivas del año anterior y se obtiene que los ciudadanos que no justificarían una toma de poder militar tenderán a responder en menor medida que la corrupción está generalizada entre los funcionarios públicos. Prosiguiendo con las orientaciones hacia el accionar de los gobernantes, se puede evidenciar cómo quienes justificarían un golpe militar ante cualquiera de las dos situaciones previstas tenderán a evaluar de peor forma al trabajo del presidente y a mostrar mayores niveles de indiferencia que los encuestados que no legitimarían un golpe. Asimismo, las respuestas durante este año arrojan la tendencia mediante la cual los ciudadanos que justificarían un golpe de Estado responden en mayor medida que a los que gobiernan el país no les interesa su opinión que los encuestados que no legitimarían el golpe.

En lo relativo a instituciones, se concluye que, durante este año, la legitimidad de un golpe de Estado militar está relacionada a peores orientaciones en lo que respecta a orgullo, respeto y percepción de protección de derechos por parte de las instituciones. En general, quienes legitiman una toma de poder militar tenderán a percibir en menor medida que los derechos se encuentran protegidos por el sistema político ecuatoriano, a respetar menos y mostrarse menos orgullosos por las instituciones que quienes no justificarían un eventual golpe. Sin embargo, destaca la permanencia de la anomalía que se da cuando la mayoría de encuestados que legitiman un golpe mantienen, a la vez, que respetan las instituciones, dándose así una conciliación de dos percepciones inherentemente opuestas.

Frente a la confianza hacia instituciones específicas del Ecuador, se obtienen resultados más variados. En primer lugar, intuitivamente, aunque de forma poco marcada, sucede que quienes no justificarían una toma de poder militar tenderán a mostrarse menos confiados hacia las Fuerzas Armadas que quienes sí lo hacen. Los resultados son más concluyentes cuando se toma la relación entre las variables dependientes y la confianza en el Ejecutivo. Ante ello, se evidencia que los ciudadanos que justifican un golpe de Estado se mostrarán más desconfiados e indiferentes hacia la Presidencia que quienes no justifican un golpe.

Los resultados son poco claros cuando se revisa las relaciones entre las variables dependientes y la confianza hacia instituciones representativas. En primer lugar, se evidencia que quienes justificarían un golpe de Estado tenderán a mostrar mayores índices de confianza y, a la vez, de desconfianza hacia la Asamblea que quienes no legitiman un golpe de Estado. Por otro lado, los datos arrojan que quienes aceptarían un golpe de Estado frente a mucha delincuencia tienden a desconfiar más y ser más indiferentes al respecto de los partidos políticos que quienes no justificarían una toma de poder militar. No sucede lo mismo cuando se analiza la relación entre confianza en los partidos y legitimidad de un golpe frente a mucha corrupción.

Tampoco se obtienen tendencias claras en la relación entre las variables dependientes y la confianza en la administración de justicia. Frente a mucha delincuencia, se obtiene la tendencia intuitiva mediante la cual los encuestados que justificarían una toma de poder militar frente a mucha delincuencia se mantendrán más desconfiados, indiferentes y menos confiados de la administración de justicia que quienes no justificarían un golpe. Sin embargo, frente a mucha corrupción, se obtiene que quienes justifican el golpe tienden ligeramente a mantenerse más desconfiados y, a su vez, confiados en la justicia que quienes no legitiman un golpe. Algo similar ocurre frente a la confianza hacia los procesos electorales. Por último, en lo referente a ideología, los datos también muestran cómo, durante este año, quienes justifican una toma de poder militar tenderán a ubicarse en mayor medida a la derecha del espectro ideológico.

Así, de entre todas las variables, se obtuvo relaciones estadísticamente significativas ante las dos variables dependientes, legitimidad de golpes de Estado frente a mucha delincuencia y corrupción, en los siguientes casos: satisfacción con la democracia, evaluación de la situación económica nacional y personal, aprobación del trabajo del presidente, percepción de protección de derechos, respeto y orgullo por las instituciones, y, finalmente, confianza en la Presidencia. Al contrario, no se obtuvo una relación estadísticamente significativa frente a ninguna de las dos variables dependientes en los siguientes casos: legitimidad de la democracia, conocimiento de la política, percepción de

corrupción, percepción de que a los gobernantes les interesa la opinión ciudadana, confianza en las Fuerzas Armadas, confianza en los partidos políticos, confianza en la administración de justicia y confianza en las elecciones. Solamente la variable relacionada al interés por la política obtuvo una sola relación estadísticamente significativa con una de las dos variables dependientes.

Por otro lado, agrupando los datos, la confianza en el Legislativo no estuvo estadísticamente relacionada de forma significativa con ninguna de las dos variables dependientes y la ideología obtuvo una relación estadísticamente significativa. Sin agrupar las posibles respuestas, la confianza en la Asamblea Nacional estuvo relacionada de forma estadísticamente significativa con las dos variables dependientes; y, finalmente, en el caso de ideología, no estuvo relacionada con ninguna variable de forma estadísticamente significativa.

Así, el estudio del segundo año de estudio arroja una simultaneidad de mejores resultados económicos en el país y una mejor cultura cívica por parte de los ciudadanos ecuatorianos, en tanto se mantuvo mejores percepciones hacia la democracia, instituciones y una menor aceptación a eventuales golpes de Estado. Se sigue evidenciando cómo tiende a evaluar la deseabilidad de un acontecimiento, como un golpe de Estado en este caso, en relación hacia la evaluación de instituciones clave, especialmente la Presidencia, la protección de derechos y la situación económica por sobre, incluso, las percepciones mantenidas hacia el sistema democrático como tal. Finalmente, los resultados de este año lanzan la pregunta si la ideología adquiere la tendencia relacionada a la legitimidad de golpes de Estado por sí misma o porque viene influenciada por las orientaciones hacia el presidente, de tendencia mayormente de izquierda. Por ello, se prosigue a la presentación de datos del año 2016.

4. El estado de las percepciones ciudadanas en Ecuador en 2016.

4.1. Presentación general de resultados.

En el año 2016, el país seguía siendo administrado por Rafael Correa, llegando a su décimo año de gobierno. El ciclo de buenos resultados económicos llegaba a su fin en el 2015, terminando la tendencia de crecimiento evidenciada en los dos años de estudio previos. De esta forma, el PIB per cápita a precios constantes de 2010 se disminuía de USD 5.412,13 en 2014 a USD 5.330,54 en 2015 y USD 5.176,06 en 2016; el PIB disminuyó su crecimiento

de 3,79% en 2014 a 0,10% en 2015 y, en 2016, incluso llegó a decrecer en un ratio de -1,226% interanual; la desigualdad se mantenía, creciendo el índice de Gini a 46 puntos en 2015 y volviendo a decrecer hasta 45 en 2016; y, finalmente, la tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de USD 1,90 al día aumentaba a 3,6% en 2016 (Banco Mundial, 2020). Por otro lado, el índice de Desarrollo Humano decrecía de 0,764 en 2015 a 0,756 en 2016 (PNUD, 2021). Esta serie de malos resultados económicos llegaba al mismo tiempo de una caída del precio del petróleo, la principal materia de la economía ecuatoriana con amplia participación en la financiación del Estado. Para enero de 2016, el barril de crudo ecuatoriano tenía un valor promedio de USD 29,15 (Banco Central del Ecuador, 2017).

Por su parte, la cifras de legitimación de golpes de Estado, sea frente a mucha delincuencia como frente a mucha corrupción, aumentaban con respecto al año previo de estudio. De esta forma, cuando se cuestionó a los encuestados si justificarían una toma de poder militar cuando la delincuencia sea amplia en el país, el 39,8% de respuestas válidas mencionaron que sí; mientras que una mayoría de 60,2% de encuestados, cuyas respuestas fueron válidas, respondieron que no legitimarían el golpe. Por otro lado, frente a la legitimación de golpes de Estado frente a mucha corrupción, un 31,9% de respuestas válidas declararon que sí se justificaría una toma de poder por parte de los militares y, al contrario, un 68,1% dijo que no.

Es decir, se revierte la tendencia mostrada en años anteriores, en tanto en el 2016 se presentó mayores índices de legitimidad de golpes frente a mucha delincuencia que frente a mucha corrupción. Vale destacar que, como se lo mencionó al inicio del presente capítulo, en este año las dos preguntas fueron parte de dos cuestionarios aplicados a distintos grupos de encuestados de forma complementaria. Por ello, el porcentaje de respuestas válidas fue de 50,2% para la primera pregunta y 44,8%, para la segunda que, en caso de ser sumadas, se obtiene un total de 95% de respuestas válidas en torno a la legitimación de golpes de Estado. Por último, se debe recalcar que, si bien los datos arrojan que una minoría legitimaría un golpe, los porcentajes siguen siendo considerables, en tanto se trata de una aceptación de un eventual quebrantamiento del sistema democrático, algo que afecta fuertemente al sistema político, como se lo mencionó en el capítulo teórico.

La democracia también obtuvo peores resultados que aquellos obtenidos en el 2012 y en el 2014. Cuando se solicitó a los encuestados si estaban de acuerdo en que la democracia era la mejor forma de gobierno, un 24,8% dijo estar en desacuerdo; un 22,2% se mostró indiferente; y, finalmente, con una ligera mayoría, un 53% legitimó el sistema democrático.

Nuevamente, se evidencian altos índices de no aceptación del sistema democrático, algo alarmante debido a que la democracia, como ya se lo abordó, necesita de la legitimidad de sus ciudadanos para mantenerse. Además, en el presente año se puede evidenciar menores niveles de satisfacción con la democracia. De entre los encuestados con respuestas válidas, un 7,8% respondió estar muy satisfecho con la democracia; un 44,2%, satisfecho; un 39% dijo estar insatisfecho con el sistema democrático; y un 9%, muy insatisfecho. Entre estas dos variables, se dio un 2,7% y un 4,1% de respuestas perdidas por el sistema, respectivamente.

En concordancia con un mal desempeño económico del país, los encuestados evaluaron de peor forma la situación económica. De esta forma, solamente un 12,2% percibió la situación económica del país como mejor; un 24,2%, como igual; y, por último, una gran mayoría de 63,5% dijo que la situación económica del país fue peor que aquella presentada doce meses antes de la realización de la encuesta. En este caso, se dio un 2,1% de respuestas perdidas por el sistema. Resultados ligeramente mejores se presentaron en torno a la percepción de la situación económica personal. Así, un 12,5% de encuestados mencionó que su situación económica personal fue mejor que aquella del año pasado, un 35,7% la percibió como igual y una mayoría de 51,8% de encuestados declaró que su situación fue peor a la del año previo. Ante esta pregunta, se perdieron por el sistema un 0,8% de respuestas.

En lo referente a orientaciones hacia la política, los resultados no varían en gran medida con respecto al año anterior de estudio. Cuando se preguntó sobre el interés que los encuestados tenían por la política, un 11,6% declaró tener mucho interés y un 21,3% mencionó tener algo de interés, dando un total de 32,9% de encuestados interesados por la política. Por otro lado, un 36,1% respondió tener poco interés y un 31% dijo estar nada interesado en la política. En esta pregunta, se pierde un 0,2% de respuestas por el sistema. Frente a la cuestión del conocimiento de la política, un 34,3% respondió no entender los asuntos políticos; un 24,2% se declaró indiferente; y un 41,5% mencionó que sí entiende la política. En este caso, se perdió por el sistema un 1,6% de respuestas válidas. Es decir, si bien no varía en gran medida las orientaciones hacia la política, se puede evidenciar cómo persiste la apatía hacia el concepto como tal.

En el tema de corrupción, se puede evidenciar cómo persisten los altos índices de percepción que el problema está generalizado en lo público. Como se lo mencionó al inicio de este capítulo, en este año la pregunta relativa a la percepción de la corrupción cambia para

cuestionar sobre la corrupción entre los políticos. De entre las respuestas válidas, sólo un 3,1% de encuestados respondió que ningún político es corrupto; un 13,4% dijo que menos de la mitad de políticos son corruptos; un 27,4% percibió que la mitad de los políticos son corruptos; mientras que, un 31,9% de encuestados declaró que más de la mitad de políticos son corruptos; y, finalmente, un 24,2% indicó que todos los políticos son corruptos. En este caso, se da un 5,1% de respuestas perdidas por el sistema.

Intuitivamente, en este año también se dio una menor aprobación del trabajo del gobierno que aquella evidenciada en 2014, aunque se mantuvo una mayoría de orientaciones evaluativas positivas. En este sentido, un 15,1% de encuestados respondió que el trabajo del presidente como muy bueno y un 40,3%, como bueno, dando un total de 55,4% de evaluaciones positivas al trabajo del gobierno. Por otro lado, un 31,2% estableció que el trabajo del presidente no fue ni bueno ni malo, mientras que un 8,9% y un 4,5% evaluó el trabajo del presidente como malo y pésimo, respectivamente. Sin embargo, cuando se preguntó a los encuestados si creían que a los gobernantes les interesaba la opinión de la ciudadanía, se dio resultados no tan intuitivos, en tanto las evaluaciones mejoraron con respecto al 2014. Así, un 41,6% percibió que a los gobernantes no les interesa la opinión de ciudadanos como ellos; un 16,5% se mostró indiferente; y, finalmente, un 41,9% estableció que a quienes gobiernan el país sí les interesaba su opinión. Entre ambas preguntas, se dio un 1,3% y 1,4% de respuestas perdidas por el sistema, respectivamente.

A nivel general, las orientaciones hacia las instituciones también se deterioraron durante este año. Cuando se solicitó a los encuestados su opinión sobre si los derechos estaban protegidos por el sistema político ecuatoriano, se dio mayor nivel de respuestas negativas y, al mismo tiempo, aunque en menor medida, positivas, encontrándose la diferencia en las respuestas indiferentes. De esta manera, un 31,5% de encuestados percibió que los derechos no están protegidos, un 21,4% se mantuvo indiferente y un 47,1% percibió que los derechos sí se encontraban protegidos por el sistema político ecuatoriano. Se dio un 2% de respuestas perdidas por el sistema ante esta pregunta. Por otro lado, sucede algo similar cuando se revisa los datos del respeto por las instituciones: un 22,5% confesó no respetar las mismas, un 16,3% se mantuvo indiferente y un 61,2% respondió que las instituciones merecían respeto. A nivel de orgullo sí se puede evidenciar una amplia disminución de orientaciones positivas, en tanto un 31,4% dijo no sentirse orgulloso de vivir bajo el sistema político ecuatoriano, un 16,9% respondió de forma indiferente y un 51,7%

declaró sentirse orgulloso de las instituciones. En las dos últimas preguntas, se dio un 1,8% y 1,9%, respectivamente, de respuestas perdidas por el sistema.

Al respecto de la confianza hacia las instituciones, se puede ver evoluciones dispares en relación a los resultados del 2014. Solamente las Fuerzas Armadas y la administración de justicia obtuvieron mayores niveles de confianza que en el año previo de estudio. Tanto la Presidencia, como las elecciones, Asamblea Nacional y partidos políticos sufrieron disminuciones en sus niveles de confianza. A nivel general, la institución con más confianza seguiría siendo las Fuerzas Armadas, seguidas de la Presidencia y las elecciones. Los partidos políticos, la justicia y el Legislativo se constituyen como las instituciones menos confiadas, en ese orden.

De esta forma, una amplia mayoría de 78,8% de encuestados declaró confiar en las Fuerzas Armadas; mientras que un 10,8% se mantuvo indiferente y un 10,4% estableció desconfiar de la institución militar. Como se lo mencionó previamente, la Presidencia tuvo menores índices de confianza: un 49,6% estableció confiar en el presidente; un 14,1% respondió indiferente; y, finalmente, un 36,3% declaró desconfiar del máximo órgano ejecutivo. Por su parte, al respecto de la confianza en el Legislativo, un 42,6% mencionó confiar en la Asamblea Nacional; un 19,1% se mostró indiferente; y, por último, un 38,3% se mantuvo desconfiado del máximo órgano legislativo. Sobre estas tres instituciones, se dio un 1,6%, 1% y 2,6% de respuestas perdidas por el sistema, respectivamente.

Los partidos políticos, por su parte, se constituyeron como la institución menos confiada entre las seis tomadas para este estudio. Una minoría de 20,3% declaró confiar en los partidos; un 19,9% se mantuvo indiferente; y, finalmente, un 59,8% se mostró desconfiado de los partidos políticos. Ante esta pregunta, se dio un 1,6% de respuestas perdidas por el sistema. La administración de confianza obtuvo mejores niveles de confianza. Así, un 31% de encuestados confiaron en las garantías del sistema judicial para un juicio justo; un 26,5% se mantuvo indiferente; y un 42,6% se mostró desconfiado de la administración de justicia. En este caso, se dio un 2,1% de respuestas perdidas por el sistema. Finalmente, las elecciones se consolidaron como la tercera institución más confiada entre las tomadas por este estudio, llegando a niveles similares al Ejecutivo. En ese sentido, un 49,3% respondió confiar en los procesos electorales; un 18,3% se mantuvo indiferente; y, una minoría de 32,3% estableció desconfiar de las elecciones. En esta variable, se dio un 1,4% de respuestas perdidas por el sistema.

Por último, ante la cuestión ideológica, el presente año evidenció una reducción en la cantidad de personas que declararon ser de izquierda. En este sentido, de entre las respuestas válidas, un 32,7% se ubicó en la izquierda de la escala ideológica; un 34,2%, en el centro; y, finalmente, un 33,2%, en la derecha. Es decir, se repite que se tienda a ubicar en mayor medida en el centro. Ante esta pregunta, se dio un 8,7% de respuestas perdidas por el sistema. Establecido esto, se prosigue a presentar los datos obtenidos tras el cruce de las variables dependientes e independientes de este estudio.

4.2. La relación entre la legitimación de golpes de Estado y percepciones hacia la democracia.

Cuando se toma la relación entre legitimidad de golpes de Estado y aquella de la democracia, se vuelve a obtener la tendencia intuitiva mediante la cual los encuestados que justificarían un golpe de Estado, sea frente a mucha delincuencia o ante mucha corrupción, se mantendrán en mayor medida en desacuerdo o indiferentes frente al postulado que la democracia es la mejor forma de gobierno. Además, este grupo tenderá a sentirse menos satisfecho, a nivel general, con la democracia que quienes no legitimarían una toma de poder militar. En el 2016, las tendencias son más marcadas que en el año 2014.

De esta forma, de entre quienes justificarían un golpe de Estado cuando exista mucho crimen, un 27,2% no está de acuerdo que la democracia es la mejor forma de gobierno; un 23,3% se muestra indiferente; y, por último, un 49,5% legitima el sistema democrático. Por otro lado, de entre los encuestados que no justificarían un eventual golpe ante esta circunstancia, con una leve disminución de 1,3 puntos porcentuales con respecto a los encuestados que sí justificarían un golpe, un 25,9% no legitima la democracia; un 20,2% se muestra indiferente; y, por último, con un aumento de 4,4 puntos porcentuales, un 53,9% establece que la democracia es la mejor forma de gobierno. En este caso, se obtienen distintos resultados de Chi-cuadrado dependiendo si se toman los datos agrupados o sin agrupar. Cuando se agrupan las respuestas, la relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.445; caso contrario, sin agrupar las respuestas, se da un Chi-cuadrado de 0.039, obteniéndose una relación estadísticamente significativa.

La tendencia se vuelve más marcada al tomar la relación entre justificación de un golpe frente a mucha corrupción y legitimidad hacia la democracia. Así, de entre quienes legitimarían una toma de poder militar ante este escenario, un 25,5% no está de acuerdo que la democracia sea la mejor forma de gobierno; un 25,5% se mantiene indiferente; y, un 49,1% legitima al sistema democrático. Al contrario, entre los encuestados que no justificarían una toma de poder militar, con una reducción de 4,8 puntos porcentuales, un 20,7% no legitima la democracia; un 21,8% se muestra indiferente; y, con un aumento de 8,4 puntos porcentuales, un 57,5% está de acuerdo en que la democracia es la mejor forma de gobierno. Sin embargo, la relación no es estadísticamente significativa, en tanto se obtiene un Chi-cuadrado de 0.115.

Asimismo, al revisar la relación entre variables dependientes y la satisfacción hacia la democracia, los datos arrojan que, intuitivamente, quienes legitimarían un golpe de Estado tenderán a encontrarse, a nivel general, menos satisfechos con el sistema democrático. De esta forma, de quienes aceptarían una toma de poder militar frente a mucha delincuencia, un 7% establece estar muy satisfecho con la democracia y un 42,1%, satisfecho, dando así un total de 49,1% de este grupo que muestra orientaciones positivas hacia la democracia. Por otro lado, un 41,1% responde estar insatisfecho con la democracia y 9,7%, muy insatisfecho. Al contrario, de entre los encuestados que no legitimarían un golpe ante esta circunstancia, con un ligero aumento de 0,8 puntos porcentuales con respecto al otro grupo, un 7,8% menciona estar muy satisfecho con la democracia y, con un aumento mayor de 5,1 puntos porcentuales, un 47,2% dice estar satisfecho, dando un total de 55% de este grupo que muestra evaluaciones positivas hacia la democracia. Mientras que, de entre este grupo, con una reducción de 4,5 puntos porcentuales con respecto a quienes sí legitimarían un golpe, un 36,6% declara estar insatisfecho con la democracia y, con una disminución menor de 1,3 puntos porcentuales, un 8,4% responde estar muy insatisfecho con el sistema democrático. Sin embargo, la relación presenta un Chi-cuadrado de 0.483, no siendo estadísticamente significativa.

La tendencia se mantiene, aunque con ciertas anomalías, cuando se revisa la legitimidad hacia golpes de Estado frente a mucha corrupción. A nivel general, se obtiene que quienes no justificarían una toma de poder militar ante esta circunstancia estarán más satisfechos con la democracia; sin embargo, es contraintuitivo que el grupo que legitimaría un eventual golpe responde en mayor medida estar muy satisfecho con la democracia. Así, entre los encuestados que aceptarían un golpe de Estado, un 9,7% menciona estar muy

satisfecho con la democracia y un 36,4%, satisfecho, obteniéndose un total de 46,1% de este grupo con evaluaciones positivas a la democracia. Por otro lado, de entre este grupo, un 41% se posiciona como insatisfecho con la democracia y un 12,9%, como muy insatisfecho. De entre los encuestados que no justificarían una toma de poder ante esta circunstancia, con una disminución de 2,7 puntos porcentuales, un 7,5% establece que está muy satisfecho con la democracia; pero, con un aumento mayor de 11,3 puntos porcentuales, un 47,7% responde estar satisfecho con la democracia. En total, se evidencia que una mayoría de 55,2%, de entre quienes no justifican un golpe, evalúa positivamente la democracia; mientras que, con una reducción de 2,9 puntos porcentuales con respecto al anterior grupo, un 37,1% declara estar insatisfecho con la democracia y, con otra disminución de 5,2 puntos porcentuales, un 7,7% se dice muy insatisfecho con el sistema democrático. La relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, dándose un Chi-cuadrado de 0.019.

Finalmente, cabe destacar que, al igual que en los dos años anteriores, se mantiene la anomalía identificada a lo largo del estudio, en tanto un porcentaje considerable de quienes justificarían un eventual golpe legitiman y se muestran satisfechos, a su vez, con la democracia. Este hecho que arrojan los datos levanta, nuevamente, la cuestión de qué es lo que se entiende por democracia en tanto se mantiene la conciliación de dos pensamientos irreconciliables desde la teoría, lo que supone un campo de estudio ulterior. Con ello mencionado, se prosigue a presentar los resultados de la relación entre legitimidad de un golpe de Estado y percepción de realidad económica.

4.3. Percepciones económicas y legitimidad de golpes de Estado.

Los resultados al respecto de la relación entre las variables dependientes y la percepción de la situación económica, tanto nacional como personal, son más concluyentes. En la mayor parte de los cuatro casos posibles se pueden evidenciar relaciones estadísticamente significativas, reflejando tendencias que evidencian que quienes legitiman un golpe de Estado tenderán a percibir su situación como peor en mayor medida que quienes no justificarían una toma de poder militar. Estos últimos, por otro lado, tenderán a evaluar en mayor medida la situación económica como mejor e igual que el grupo que legitima un eventual golpe.

De esta forma, de entre quienes justificarían una toma de poder militar frente a mucha delincuencia, un 10,5% percibe la situación económica nacional como mejor; un 19,3%,

como igual; y un 70,3%, como peor. Al contrario, con un ligero aumento de 2,5 puntos porcentuales con respecto a los encuestados que sí legitimarían un golpe, un 13% evaluó la situación económica nacional como mejor; un 25,2%, como igual; y, con un reducción de 8,6 puntos porcentuales, un 61,7% menciona que la situación nacional es peor que la de doce meses previos a la realización de la encuesta. Sin embargo, la relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa, dándose un Chi-cuadrado de 0.052.

La tendencia se mantiene y se profundiza cuando se revisa la relación entre la legitimación de golpes de Estado frente a mucha corrupción y la evaluación de la situación económica nacional. De entre quienes justificarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, sólo un 7,1% percibe la situación económica nacional como mejor; un 19,3%, como igual; y, finalmente, la gran mayoría de 73,6% menciona que la situación fue peor que aquella presentada doce meses antes de la encuesta. Al contrario, de entre quienes no justificarían un golpe, con un aumento de más del doble con respecto al anterior grupo, un 14,9% establece que la situación económica nacional fue mejor; con un aumento de 9,4 puntos porcentuales, un 28,7% responde que la situación fue igual; y, por último, con una amplia disminución de 17,2 puntos porcentuales, un 56,4% dijo que la situación fue peor. En este caso, se da una relación estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.000.

Asimismo, los datos arrojan que quienes justifican un golpe de Estado tenderán a evaluar su situación económica de peor forma que quienes no legitimarían una toma de poder militar. De esta forma, de entre quienes aceptarían un eventual golpe frente a mucha delincuencia, un 11,4% percibe su situación como mejor; un 28,9%, como igual; y una mayoría de 59,7%, como peor. Al contrario, de entre los encuestados que no legitimarían un golpe de Estado frente a esta circunstancia, con un aumento de 3,1 puntos porcentuales, un 14,5% responde que su situación económica fue mejor; un 37,5% la percibió como igual; y. con una disminución de 11,8 puntos porcentuales, un 47,9% declaró que su situación fue peor que aquella presentada doce meses antes de la realización del cuestionario. La relación presenta un Chi-cuadrado de 0.006, siendo estadísticamente significativa.

Lo mismo sucede con la legitimación de golpes de Estado frente a mucha corrupción. De entre los encuestados que respondieron justificar una toma de poder militar frente a esta circunstancia, un 6,8% mencionó que su situación económica fue mejor; un 38,4%, que fue igual; y una mayoría de 54,8%, que fue peor. Por otro lado, de entre quienes no legitiman un eventual golpe ante mucha corrupción, con un porcentaje mayor al doble de quienes sí

aceptarían un golpe, un 14,3% responde que su situación fue mejor; un 37,2% estableció que su situación fue igual; y, con una reducción de 6,3 puntos porcentuales, un 48,5% declaró que su situación fue peor. La relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, obteniéndose un Chi-cuadrado de 0.017.

4.4. Legitimidad de golpes de Estado y orientaciones hacia la política.

Se continúa a presentar la relación entre las variables dependientes y las orientaciones hacia la política. Tras la revisión de estos cruces, se puede evidenciar cómo los encuestados que no justificarían un golpe de Estado tenderán, en la mayor parte de los casos, a mostrar mejores orientaciones a la política, en tanto responderán en mayor medida interesarse en la política y entender los asuntos políticos. Ello se matiza en el caso del interés en la política, como se lo verá posteriormente.

Así, en primer lugar, de entre quienes justificarían un golpe de Estado ante mucha delincuencia, un 9,4% declara estar muy interesado por la política; un 19,4%, algo interesado; un 35%, poco interesado; y un 36,2% establece estar nada interesado por la política. Por otro lado, de entre quienes no justificarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, con un aumento de 6,1 puntos porcentuales con respecto al grupo de encuestados que sí legitiman un eventual golpe, un 15,5% menciona tener mucho interés por la política; con un aumento menor, un 22,1% establece tener algo de interés por la política; un 33,7% dice tener poco interés por la política; y, finalmente, con una reducción de 7,4 puntos porcentuales, un 28,8% estipula no estar nada interesado en la política. La relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.026.

La tendencia se revierte cuando se la revisa a la luz de la legitimación de un eventual golpe de Estado frente a mucha corrupción. De esta forma, ante quienes aceptarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, un 11,8% declara estar muy interesado por la política; un 21,7% responde tener algo de interés por la política; un 35,3% se muestra poco interesado por la política; y un 31,2% mantiene no tener ningún interés por la política. Por otro lado, de entre quienes no legitimarían un eventual golpe ante mucha corrupción, con una disminución de 1,8 puntos porcentuales con respecto al anterior grupo, un 10% responde tener mucho interés por la política; con un aumento menor de 0,6 puntos porcentuales, un 22,3% se declara algo interesado por la política; mientras que, con un aumento mayor de 3,6

puntos porcentuales, un 38,9% establece tener poco interés por la política; y, finalmente, con una reducción de 2,3 puntos porcentuales, un 28,9% confiesa no estar nada interesado en la política. La relación entre ambas variables no es, evidentemente, estadísticamente significativa, en tanto presenta un Chi-cuadrado de 0.738.

Por otra parte, los datos arrojan la tendencia mediante la cual, en ambos casos, los encuestados que justificarían un golpe de Estado responderán en mayor medida no conocer sobre la política; mientras que, al contrario, quienes no legitimarían una toma de poder por parte de los militares tenderán a declarar en mayor medida que entienden bien los asuntos políticos. Así, de entre los encuestados que justificarían un eventual golpe ante mucha delincuencia, un 39,4% confiesa no entender los asuntos políticos; un 24,8% se muestra indiferente; y un 35,8% dice conocer sobre política. Por otro lado, entre los encuestados que no legitiman una toma de poder militar ante esta circunstancia, con una reducción de nueve puntos porcentuales, un 30,4% declara no conocer sobre política; un 23,9% se mantiene indiferente; y, con un aumento de diez puntos porcentuales, un 45,8% responde entender los asuntos políticos. La relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.012.

La tendencia es mucho menos marcada con la legitimidad de un eventual golpe ante mucha corrupción. De entre los encuestados que aceptarían una toma de poder por parte de los militares ante este escenario, un 36,2% establece no conocer sobre la política; un 22,5% se mantiene indiferente; y un 41,3% dice entender bien los asuntos políticos. Por otro lado, de entre quienes no legitimarían un golpe, con una disminución de 3,9 puntos porcentuales, un 32,3% confiesa no entender los asuntos políticos; un 25% se muestra indiferente; y, finalmente, con un ligero aumento de 1,4 puntos porcentuales, un 42,7% menciona conocer sobre política. En este caso, no se puede evidenciar la existencia de una relación estadísticamente significativa, en tanto se da un Chi-cuadrado de 0.558.

4.5. Legitimación de golpes de Estado y percepciones sobre corrupción.

Las tendencias son poco intuitivas cuando se revisa la relación entre la legitimidad que los ciudadanos pueden otorgar a un eventual golpe de Estado y la percepción de la corrupción entre los políticos del país. Los datos concernientes a la relación entre la primera variable dependiente y la percepción de corrupción evidencian ciertas anomalías que se presentarán

a continuación. Sin embargo, a nivel general, los datos arrojan que quienes justificarían una toma de poder militar, sea ante mucha delincuencia o frente a mucha corrupción, tenderán a responder en mayor medida que más de la mitad de los políticos y que todos los políticos son corruptos que quienes no legitimarían un golpe.

Así, la tendencia no es concluyente en la relación entre legitimidad de un golpe frente a mucha delincuencia y percepción de la corrupción. De entre quienes legitiman un golpe de Estado ante esta circunstancia, un 3,4% percibe que ningún político es corrupto; un 14,8%, que menos de la mitad de los políticos son corruptos; un 22,2%, que la mitad de los políticos son corruptos; un 31,6%, que más de la mitad son corruptos; y un 27,9%, que todos los políticos son corruptos. Por otro lado, de entre quienes no justificarían un eventual golpe ante esta circunstancia, con un ligero aumento de medio punto porcentual con respecto al anterior grupo, un 3,9% percibe que ningún político es corrupto; con una reducción de 1,6 puntos porcentuales, un 13,2% menciona que menos de la mitad de políticos son corruptos; mientras que, con un aumento de 4,9 puntos porcentuales, un 27,3% responde que la mitad de políticos son corruptos; con un aumento de 1,7 puntos porcentuales, un 33,3% declara que más de la mitad son corruptos; y, con una disminución de 5,6 puntos porcentuales, un 22,3% sugiere que todos los políticos son corruptos. La relación no es, evidentemente, estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.319.

La tendencia se vuelve más clara al revisar los resultados de la legitimidad de un golpe frente a mucha corrupción. Así, de entre quienes aceptarían un golpe ante este escenario, un 3,3% percibe que ningún político es corrupto; un 9,8%, que menos de la mitad son corruptos; un 23,3%, que la mitad de los políticos son corruptos; mientras que, un 35,3% responde que más de la mitad de políticos son corruptos; y, finalmente, un 28,4% declara que todos los políticos son corruptos. Al contrario, de entre los encuestados que no justificarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, un 2% establece que ningún político es corrupto; con un aumento de 5,5 puntos porcentuales con respecto al grupo de encuestados que sí legitiman un golpe , un 15,3% percibe que menos de la mitad de políticos son corruptos y, con un aumento mayor de 7,7 puntos porcentuales, un 31% declara que la mitad de políticos son corruptos; mientras que, con una disminución de cinco puntos porcentuales, un 30,3% menciona que más de la mitad de políticos son corruptos; y, por último, con una baja de 6,9 puntos porcentuales, un 21,5% dice que todos los políticos son corruptos. La relación entre estas variables es estadísticamente significativa, arrojando un Chi-cuadrado de 0.023.

4.6. Legitimidad de golpes de Estado y orientaciones evaluativas hacia los gobernantes.

El estudio prosigue a presentar la relación entre las variables dependientes y las orientaciones hacia los gobernantes. En el presente año se mantiene la tendencia mostrada en los dos años previos de estudio: los encuestados que legitiman un golpe de Estado, sea frente a mucha delincuencia o frente a mucha corrupción tienden a evaluar de peor forma el trabajo del gobierno que quienes no legitiman un golpe, dándose, ante ambas posibilidades, relaciones estadísticamente significativas. En este caso, los datos también arrojan que quienes aceptarían una toma de poder militar tenderán a sentirse más alienados de las decisiones políticas, en tanto perciben en mayor medida que a los gobernantes no les interesa su opinión, aunque de forma menos marcada.

En este sentido, de entre los encuestados que legitimarían un golpe frente a mucha delincuencia, un 8,6% evalúa el trabajo del presidente como muy bueno; un 40,8%, como bueno; un 34,9%, como ni bueno ni malo; mientras que un 10,9% y 4,9% mencionó que el trabajo del gobierno es malo y muy malo, respectivamente. Por otro lado, entre los encuestados que no justificarían un golpe de Estado, con un aumento de once puntos porcentuales, un 19,6% evaluó el trabajo del presidente como muy bueno; un 42,3% percibió que el trabajo del gobierno fue bueno; un 27,5%, lo evaluó como ni bueno ni malo; mientras que, con una reducción de 3,9 puntos porcentuales, un 7% estableció que el trabajo de Presidencia es malo; y, finalmente, con una leve disminución, un 3,7% dijo que el mismo fue pésimo. La relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.000.

Lo mismo sucede tomando la legitimidad de un golpe de Estado frente a mucha corrupción. De entre quienes justificarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, un 8,7% evaluó el trabajo del presidente como muy bueno; un 36,5%, como bueno; un 33,3%, como ni bueno ni malo; un 12,3%, como malo; y, un 9,1%, como pésimo. Al contrario, de entre quienes no legitimarían un eventual golpe frente a mucha corrupción, con un aumento de 10,1 puntos porcentuales con respecto a quienes sí legitima el golpe, un 18,2% respondió que el trabajo del presidente fue muy bueno y, con un aumento de 5,4 puntos porcentuales, un 41,9% lo evaluó como bueno. Además, un 29,1% mencionó que el trabajo del presidente no es ni bueno ni malo; mientras que, con una disminución 4,4 y 6,1 puntos porcentuales, respectivamente, un 7,9% evaluó el trabajo del presidente como malo

y un 3%, como muy malo. La relación entre ambas variables también es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.000.

Las tendencias son menores en la relación entre las variables dependientes y la percepción de los encuestados del interés que los gobernantes tienen por la opinión de los ciudadanos. En este sentido, entre los encuestado que justificarían un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, un 47,7% percibe que a los gobernantes no les interesa su opinión; un 18,1% se muestra indiferente; y un 34,2% responde que a quienes gobiernan el país sí les interesa lo que piensan. Al contrario, de entre quienes no justificarían un golpe, con una reducción de 5,7 puntos porcentuales, un 42% percibe que los gobernantes no tienen interés por la opinión de la ciudadanía; un 13,9% se mantiene indiferente; y, por último, con un aumento de diez puntos porcentuales, un 44,2% establece que la a la clase gobernante sí le importa lo que ellos piensen. La relación, en este caso, es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.018.

Lo mismo ocurre, aunque en menor medida, con la justificación de un eventual golpe frente a mucha corrupción. De entre quienes legitiman una toma de poder militar ante esta circunstancia, un 43,2% percibe que a los gobernantes no les interesa su opinión; un 17,7% se mantiene indiferente; y, finalmente, un 39,1% responde que a los gobernantes les importa lo que la ciudadanía piensa. Por otro lado, de entre quienes no justificaría un golpe, con una reducción de 6,2 puntos porcentuales con respecto al grupo de encuestados que sí justificaría el golpe, un 37% responde que los gobernantes no tienen interés por la opinión de la ciudadanía; un 17,6% se muestra indiferente; y, por último, con un aumento de 6,3 puntos porcentuales, un 45,4% percibió que a la clase gobernante le interesa lo que opinen los ciudadanos. Sin embargo, la relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa, en tanto presenta un Chi-cuadrado de 0.245.

4.7. Legitimidad de golpes de Estado y orientaciones a las instituciones.

Continuando la presentación de los resultados en el año en cuestión, se prosigue a la revisión de la relación entre las variables dependientes del presente estudio y las orientaciones evaluativas hacia las instituciones. Es destacable que, en la mayor parte de los seis casos posibles relacionados a las percepciones hacia las instituciones, se obtienen

tendencias que marcan que los ciudadanos que legitimarían una toma de poder militar tendrán peores orientaciones hacia las instituciones.

En primer lugar, los datos evidencian que quienes justificarían un eventual golpe, sea frente a mucha corrupción o frente a mucha delincuencia, tenderán a responder en mayor medida que los derechos básicos no se encuentran protegidos por el sistema político ecuatoriano comparando con aquellos que no legitimarían un golpe. Así, de entre quienes aceptarían una toma de poder militar cuando exista mucha delincuencia, un 36% menciona que los derechos básicos no están protegidos; un 20,8% se muestra indiferente; y un 43,2% percibe que el sistema político sí protege los derechos básicos. Al contrario, de entre quienes no justificarían un golpe de Estado ante esta circunstancia, con una disminución de 6,5 puntos porcentuales con respecto a quienes sí justificarían un golpe, un 29,5% establece que los derechos no están protegidos; un 21,4% se mantiene indiferente; y, finalmente, con un aumento de 5,9 puntos porcentuales, un 49,1% responde que los derechos sí se encuentran protegidos por el sistema político del país. Sin embargo, la relación entre ambas variables presenta un Chi-cuadrado de 0.151, no siendo estadísticamente significativa.

La tendencia es más marcada al tomar la legitimación de un eventual golpe frente a mucha corrupción. Así, de entre quienes aceptarían este fenómeno frente a tal circunstancia, un 36,4% establece que los derechos no están protegidos; un 22,1% se mantiene indiferente; y un 41,5% responde que los derechos se encuentran protegidos por el sistema político del país. Por otro lado, de entre quienes no justificarían una toma de poder militar, con una disminución de nueve puntos porcentuales, un 27,4% percibe que los derechos no se encuentran protegidos; un 21,4% se muestra indiferente; y, por último, con un aumento de 9,7 puntos porcentuales con respecto al anterior grupo, un 51,2% declara que los derechos sí están protegidos por el sistema. En este caso se presenta una relación estadísticamente significativa, obteniéndose un Chi-cuadrado de 0.032.

Los resultados son menos claros cuando se toma el respeto por las instituciones. A nivel general, quienes no justificarían un golpe de Estado tenderán a mostrar menores niveles de respeto por las instituciones, aunque de forma muy matizada en el caso de la legitimación de un golpe frente a mucha corrupción. De todas formas, persiste la anomalía ya evidenciada en el año previo de estudio por la cual la mayoría de encuestados que legitiman una toma de poder militar responden, a la vez, que respetan las instituciones, alzando nuevamente la pregunta sobre el significado que los ciudadanos otorgan a las instituciones.

En este sentido, entre los encuestados que justificaron un eventual golpe ante mucha delincuencia, un 24,4% respondió que las instituciones no merecen respeto; un 15% se mantuvo indiferente; y un 60,6% declaró respetar las instituciones. Por otro lado, de entre quienes no justificarían un golpe, con una disminución de 1,6 puntos porcentuales, un 22,8% confeso no respetar las instituciones; un 16,3% respondió de forma indiferente; y, con un aumento mínimo, un 61% estableció respetar las instituciones. La relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.814.

Por otro lado, de entre quienes aceptarían una toma de poder militar frente a mucha corrupción, un 24,5% responde no respetar las instituciones; un 13,9%, ser indiferente; y, un 61,6%, respetar las instituciones. Entre quienes no legitimarían una toma de poder militar, con una reducción de 3,8 puntos porcentuales con respecto al anterior grupo, un 20,7% confiesa no respetar las instituciones; un 17,9% se muestra indiferente; y, con una ligera disminución, un 61,3% menciona respetar las instituciones. La relación entre ambas variables tampoco es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.299. Sin embargo, cuando se toman los datos sin agrupar, se obtiene una relación estadísticamente significativa, en tanto el Chi-cuadrado disminuye hasta un 0.019.

Los resultados son más concluyentes cuando se toma el orgullo por las instituciones. En ambos casos, quienes legitimarían un golpe de Estado, de forma estadísticamente significativa, tenderán a sentirse menos orgullosos y más indiferentes al respecto de las instituciones que quienes no aceptarían una toma de poder militar. Así, de entre quienes aceptarían un eventual golpe ante mucha delincuencia, un 36,7% no se siente orgulloso; un 18,4% se muestra indiferente; y un 44,9% responde tener orgullo por las instituciones. Al contrario, de entre quienes no legitimarían una toma de poder militar ante tal circunstancia, con una reducción de 8,5 puntos porcentuales al respecto del anterior grupo, un 28,2% confiesa no sentirse orgulloso por las instituciones; un 15,9% se mantiene indiferente; y, con un aumento de 10,9 puntos porcentuales, un 55,8% declara sentirse orgulloso de vivir bajo el sistema político ecuatoriano. La relación es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.011.

La tendencia se mantiene con la segunda variable dependiente. De entre los encuestados que justificarían una toma de poder militar frente a mucha corrupción, un 39,8% confiesa no sentirse orgulloso de vivir bajo el sistema político ecuatoriano; un 18,5% se mantiene indiferente; y, por último, un 41,7% responde sentirse orgulloso por las instituciones. Al contrario, de entre quienes no justificarían un eventual golpe ante esta

circunstancia, con una amplia disminución de 12,6 puntos porcentuales con respecto al grupo de encuestados que sí legitimaría un golpe, un 27,2% responde no sentirse orgulloso por las instituciones; un 16,6% se muestra indiferente; y, finalmente, con un aumento aún mayor de 14,5 puntos porcentuales, un 56,2% establece sentirse orgulloso de vivir bajo el sistema político ecuatoriano. La relación es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.001.

4.8. Legitimidad de golpes de Estado y confianza hacia las instituciones.

Se prosigue a presentar los resultados de las relaciones obtenidas entre las variables dependientes y la confianza hacia instituciones específicas del país. En primer lugar, los datos arrojan que los encuestados que legitiman una toma de poder por parte de los militares tenderán a mostrarse más confiados y menos indiferentes ante las Fuerzas Armadas. De esta forma, de entre quienes justificarían un golpe de Estado ante mucha delincuencia, un 7,2% no confía en la institución militar; un 6,9% se muestra indiferente; y un 85,8% declara confiar en las Fuerzas Armadas. Al contrario, de entre los encuestados que no legitimarían un eventual golpe, con un aumento de 6,1 puntos porcentuales, un 13,3% se dice desconfiado de las Fuerzas Armadas; un 13,1% se declara indiferente; y, finalmente, con una considerable reducción de 12,3 puntos porcentuales, un 73,6% establece confiar en la institución militar. La relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.000.

La tendencia se vuelve menos clara con la segunda variable dependiente. De entre quienes justificarían una toma de poder militar frente a mucha corrupción, un 11,8% declara desconfiar de las Fuerzas Armadas; un 8,1% se mantiene indiferente; y un 80,1% responde confiar en la institución militar. Por otro lado, con una disminución de 3,4 puntos porcentuales, un 8,4% menciona desconfiar de las Fuerzas Armadas; un 13,1% se muestra indiferente; y, finalmente, con otra reducción de 1,6 puntos porcentuales con respecto al grupo anterior, un 78,5% responde confiar en la institución militar. En este caso, se dan dos posibilidades frente a la relación entre ambas variables: agrupando los datos, se obtiene un Chi-cuadrado de 0.079, no siendo así la relación estadísticamente significativa; caso contrario, sin agrupar los datos, se da una relación estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.002.

Los resultados son más concluyentes cuando se analiza la relación entre las variables dependientes y la confianza hacia el presidente. En sí, se mantiene la tendencia evidenciada en los dos años de estudio previo mediante la cual quienes justifican un golpe de Estado mostrarán menores niveles de confianza hacia la Presidencia. De esta forma, entre quienes legitiman una eventual toma de poder por parte de los militares ante mucho crimen, un 45,8% desconfía del presidente; un 13,1% se muestra indiferente; y un 41,2% responde confiar en la Presidencia. Por otro lado, de entre quienes no justificarían un eventual golpe ante esta circunstancia, con una disminución amplia de 18,1 puntos porcentuales, un 27,7% responde no confiar en el presidente; un 14,7% se muestra indiferente; y, finalmente, con un aumento de 16,4 puntos porcentuales, un 57,6% declara confiar en la administración del Ejecutivo. La relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.000.

Lo mismo sucede con la segunda variable dependiente, aunque de forma menos marcada. De entre quienes justificarían un golpe de Estado militar frente a mucha corrupción, un 49,8% declara no confiar en el presidente; un 13,6% se muestra indiferente; y un 36,7% establece confiar en la Presidencia. Al contrario, entre los encuestados que no legitimarían una toma de poder por parte de los militares ante esta circunstancia, con una amplia reducción de 17,7 puntos porcentuales, un 32,1% responde no confiar en la Presidencia; un 15% se mantiene indiferente; y, finalmente, con un aumento de 16,3 puntos porcentuales, un 53% menciona confiar en el presidente. En este caso, la relación entre ambas variables también es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.000.

Cuando se toma la confianza en el Legislativo, la tendencia sigue siendo intuitiva y marca que los encuestados que justificarían un golpe de Estado militar desconfiarán más y serán más indiferentes hacia la Asamblea Nacional. Así, de entre los encuestados que justificarían una toma de poder militar ante mucha delincuencia, un 41,5% no confía en la Asamblea; un 20,3% se muestra indiferente; y un 38,2% responde confiar en el Legislativo. Por otro lado, de entre quienes no legitiman un eventual golpe, con una disminución de 5,5 puntos porcentuales, un 36% no confía en el Legislativo; un 16,1% se mantiene indiferente; y, con un aumento más considerable de 9,7 puntos porcentuales con respecto al anterior grupo, un 47,9% declara confiar en la Asamblea Nacional. Agrupando los datos, se obtiene una relación estadísticamente significativa, con un Chi-cuadrado de 0.027; mientras que, sin agrupar, ello se revierte en tanto la relación arroja un Chi-cuadrado de 0.192.

Las tendencias son más profundas ante la segunda variable dependiente. De entre los encuestados que justificaría una toma de poder por parte de los militares ante mucha corrupción, un 46,5% confiesa no confiar en la Asamblea Nacional; un 22,8% se mantiene indiferente; y un 30,7% confía en el Legislativo. Al contrario, de entre quienes no legitiman un eventual golpe ante este escenario, con una disminución de 10,8 puntos porcentuales con respecto al grupo que sí justificaría un golpe, un 35,7% responde no confiar en el Legislativo; un 19,9% se muestra indiferente; y, con un aumento mayor de 13,7 puntos porcentuales, un 44,4% dice confiar en la Asamblea Nacional. La relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, arrojando un Chi-cuadrado de 0.003.

Los datos son menos concluyentes al revisar la relación entre la legitimidad de los golpes de Estado y la confianza hacia los partidos políticos. En ambos casos, existe una tendencia, aunque no estadísticamente significativa que muestra cómo quienes justificarían una toma de poder por parte de los militares se mostrarán más desconfiados e indiferentes de los partidos políticos que quienes no legitimarían un golpe. Así, de entre quienes justificarían un eventual golpe de Estado militar ante mucha delincuencia, un 59,8% responde no confiar en los partidos; un 19,9% se mantiene indiferente; y un 20,3% confía en las instituciones partidistas. Por otro lado, de entre quienes no legitimarían una toma de poder por parte de los militares ante esta circunstancia, con una disminución de 2,1 puntos porcentuales con respecto al anterior grupo, un 57,7% establece no confiar en los partidos; un 18,1% se muestra indiferente; y, con un aumento de 3,9 puntos porcentuales, un 24,2% expresa confiar en dichas instituciones. La relación no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.424.

Algo similar ocurre con la segunda variable dependiente, aunque las tendencias son más marcadas. De entre los encuestados que justificarían un golpe de Estado militar frente a mucha corrupción, un 63,2% responde no confiar en los partidos; un 22,7% se mantiene indiferente; y un 14,1% establece confiar en dichas instituciones. Al contrario, de entre quienes no legitimarían un eventual golpe ante esta circunstancia, con una diferencia de 3,5 puntos porcentuales con respecto al anterior grupo, un 59,7% declara no confiar en los partidos políticos; un 20,2% se muestra indiferente; y, finalmente, con un aumento de 6,1 puntos porcentuales, un 20,2% expresa confianza en las instituciones en cuestión. La relación entre ambas variables tampoco es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.149.

Las tendencias tampoco son claras al analizar la relación entre la legitimidad de un eventual golpe de Estado frente a mucha delincuencia y la confianza en el sistema de justicia. Como se lo verá posteriormente, ello cambia con la justificación de un golpe ante mucha corrupción. De entre los encuestados que mencionaron aceptar una toma de poder militar ante mucho crimen, un 42,2% respondió no confiar en que las cortes garanticen un juicio justo; un 23,4% se mantuvo indiferente; y un 34,3% declaró confiar en la administración de justicia. Por otro lado, de entre quienes no aceptarían un eventual golpe, un 39,6% confesó no confiar en la administración de justicia; un 28% se mantuvo indiferente; y, finalmente, un 32,4% respondió confiar en que las cortes del país garantizan un juicio justo. Es decir, los encuestados que justificarían un golpe de Estado ante mucha delincuencia tenderán a desconfiar y, al mismo tiempo, confiar en mayor medida en la administración de justicia, mostrándose menos indiferentes que quienes no justificarían un eventual golpe. La relación no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.372.

Al contrario, los datos arrojan la tendencia mediante la cual los ciudadanos que justificarían un golpe ante mucha corrupción se mostrarán más desconfiados y menos confiados de la administración de justicia que quienes no legitimarían un golpe. De esta forma, entre los encuestados que aceptarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, un 51,2% plantea desconfiar de la administración de justicia; un 24,9% se muestra indiferente; y, por último, una minoría de 23,9% declara confiar en que las cortes garantizan un juicio justo. Por otro lado, de entre quienes no legitimarían un golpe de Estado frente a mucha corrupción, con una disminución de 10,6 puntos porcentuales con respecto a los encuestados que sí justificarían un golpe, un 40,6% responde desconfiar en la garantía de un juicio justo por parte de las cortes; un 28,6% se mantiene indiferente; y, con un aumento de 6,9 puntos porcentuales, un 30,8% determina confiar en la administración de justicia. En el caso de tomar los datos agrupados, la relación entre ambas variables arroja un Chi-cuadrado de 0.034, obteniéndose una relación estadísticamente significativa; sin embargo, si no se agregan los datos, el Chi-cuadrado aumenta hasta 0.056, dándose una relación no estadísticamente significativa.

Finalmente, durante el presente año también se puede observar cómo los encuestados que legitimarían un golpe de Estado, sea ante mucha delincuencia o frente a mucha corrupción, tenderán a desconfiar más y confiar menos en las elecciones que quienes no legitimarían un eventual golpe. Así, de entre quienes justificarían una toma de poder militar frente a mucho crimen, un 37,9% desconfía de las elecciones; un 16,7% se muestra

indiferente; y un 45,4% dice confiar en los procesos electorales. Al contrario, de entre los encuestados que no justificarían un golpe ante tal escenario, con una disminución de 10,1 puntos porcentuales, un 27,8% responde confiar en las elecciones; un 20,7% se mantiene indiferente; y, con un aumento de 6,1 puntos porcentuales, un 51,5% declara confiar en los procesos electorales. Cuando se toman los datos agrupados, con un Chi-cuadrado de 0.012, la relación entre ambas variables es estadísticamente significativa. No sucede lo mismo cuando los datos no se agrupan, en cuyo caso el Chi-cuadrado de la relación aumenta hasta 0.075.

La tendencia se profundiza con la segunda variable dependiente. De entre los encuestados que justificarían un eventual golpe de Estado militar ante mucha corrupción, un 42,2% desconfía de los procesos electorales; un 14,2% se muestra indiferente; y un 43,6% responde confiar en las elecciones. Al contrario, de entre quienes no legitimarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, con una amplia reducción de 13,5 puntos porcentuales con respecto a quienes sí legitimarían el golpe, un 28,7% confiesa no confiar en las elecciones; un 19,4% se mantiene indiferente; y, por último, con un aumento de 8,3 puntos porcentuales, un 51,9% declara confiar en los procesos electorales. En este caso, se presenta una relación estadísticamente significativa, con un Chi-cuadrado de 0.002.

4.9. Legitimidad de golpes de Estado e ideología.

Por último, se presentan las relaciones obtenidas de las relaciones entre las variables dependientes y la auto percepción ideológica de los encuestados. En este año, se revierte la tendencia del año previo y se puede ver cómo quienes no justificarían un golpe de Estado se ubicarán en mayor medida hacia el centro y, en el caso de la segunda variable dependiente, hacia derecha, de la escala ideológica que quienes si legitimarían un golpe. De todas formas, en ninguno de los dos posibles casos se obtienen relaciones estadísticamente significativas. Así, de entre los encuestados que aceptarían una toma de poder militar ante mucha delincuencia, un 33,9% se dice de izquierda; un 32,9%, de centro; y un 33,2%, de derecha. Por otro lado, de entre quienes no legitimarían un golpe, un 33,6% se menciona de izquierda; un 34,1%, de centro; y un 32,3%, de derecha. La relación no es estadísticamente significativa, con un Chi-cuadrado de 0.938.

Finalmente, de entre quienes justificarían un golpe de Estado militar frente a mucha corrupción, un 34,7% se percibe como de izquierda; un 34,2%, como de centro; y un 31.2%, como de derecha. Por otro lado, de entre quienes no justificarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, con una reducción de 4,3 puntos porcentuales con respecto a quienes sí justificarían un golpe, un 30,3% responde ser de izquierda; un 35,2% establece ser de centro; y, con un aumento de 3,3 puntos porcentuales, un 34,5% declara ser de derecha. La relación, sin embargo, no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.521.

4.10. Conclusiones relacionadas a los resultados del 2016.

Tras la revisión de los resultados durante el presente año, se puede concluir lo siguiente. En primer lugar, el 2016, a diferencia de los dos años previos de estudio, se caracteriza por un mal desempeño económico, marcado por un decrecimiento de la economía ecuatoriana, aumento de la incidencia de la pobreza y reducción de indicadores de desarrollo humano. Este hecho se da al mismo tiempo de un aumento de los niveles de legitimación de golpes de Estado entre las percepciones ciudadanas del país. En conjunto, la mayor parte de variables evidencian cómo la cultura cívica disminuyó durante el año de estudio en cuestión con respecto al 2014. A nivel de instituciones, también se puede evidenciar disminuciones en los niveles de aprobación y confianza, a excepción de las Fuerzas Armadas y la administración de justicia.

El presente año de estudio también evidencia una baja en los niveles de legitimidad y satisfacción hacia la democracia. Además, en concordancia con un peor desempeño económico del país en comparación con años anteriores, se disminuye el porcentaje de encuestados que percibe una mejora de la situación económica, tanto propia como nacional. Con respecto a la política, el año evidenció un aumento de encuestados que mantuvieron entender bien los asuntos políticos. Sin embargo, a nivel de interés, la apatía hacia el concepto aumentó levemente. En general, los resultados relacionados a las orientaciones hacia la política no variaron en gran medida con respecto al año previo de estudio. En el tema de corrupción, los datos arrojan una considerable percepción que menciona que el problema está generalizado entre lo público, en este caso, entre los políticos.

Al respecto de las orientaciones hacia los gobernantes, intuitivamente, los datos del 2016 muestran que los niveles de aprobación al trabajo del presidente disminuyeron, al igual que la confianza en la Presidencia. Ello viene en conjunto, paradójicamente, con un aumento del porcentaje de encuestados que perciben que a los gobernantes les interesa lo que piensa la ciudadanía. Al igual que en el año previo, este fenómeno podría estar relacionado a un proceso de evaluación basado en resultados más que en procesos, algo que requiere estudios más profundos. En el tema de instituciones, hay mayores cifras de percepción de que los derechos están protegidos y, a la vez, no protegidos; encontrándose la diferencia en una disminución de respuestas indiferentes. Algo similar ocurre con el respeto a las instituciones. El año sí evidencia una reducción notable en el nivel de orgullo que los encuestados declararon poseer de vivir bajo el sistema político ecuatoriano. Continuando con la confianza hacia instituciones concretas del país, las Fuerzas Armadas siguen siendo la institución que más confianza genera en la ciudadanía, seguida por la Presidencia, con una disminución considerable, y, finalmente, las elecciones. Entre las instituciones más desconfiadas, se encuentran los partidos políticos, la administración de justicia y el Legislativo, en ese orden. Por último, el presente año presenta una disminución de encuestados que declararon ser de izquierda.

Se prosigue a la presentación de conclusiones obtenidas tras la revisión de resultados de las relaciones encontradas entre las variables dependientes e independientes utilizadas en el presente estudio. En primer lugar, en la relación entre legitimidad de golpes de Estado por parte de los militares y la de la democracia, se mantiene la tendencia de los años anteriores por la cual quienes justificarían una toma de poder militar, sea ante mucha delincuencia o ante mucha corrupción, se mostrarán en mayor medida en desacuerdo o indiferentes ante la proposición que la democracia es la mejor forma de gobierno. Asimismo, en este año se evidencia igualmente que quienes legitimarían un eventual golpe tenderán a sentirse menos satisfechos con el sistema democrático. Si bien en este año las tendencias son más marcadas, persiste la anomalía de los años previos de estudio en tanto un porcentaje considerable de quienes legitiman un golpe legitiman, a su vez, el sistema democrático y se sienten satisfechos con el mismo.

Al igual que en los dos años de estudio anteriores, la percepción de la situación económica personal y, en menor medida nacional, está relacionada con la aceptación de una toma de poder militar. En todos los casos, los datos muestran que los encuestados que justificarían un golpe de Estado militar tenderán a percibir la realidad económica de peor

forma que aquellos que no justificarían un acontecimiento como éste. Por otro lado, quienes no justificarían un eventual golpe evaluarán en mayor medida que la situación económica es mejor e igual que el grupo que sí justificaría una intervención militar de esta índole en el sistema democrático. Al tomar las orientaciones hacia la política, se obtienen resultados diversos. A nivel general, tras la revisión de datos, se obtiene la tendencia por la cual quienes no justificarían un golpe de Estado militar declararán en mayor parte interesarse por la política y entender bien los asuntos políticos que quienes sí justificarían un golpe, revirtiéndose así la anomalía identificada en el 2014.

Los resultados tampoco son claros en relación a la percepción sobre la corrupción. Se presenta ciertas anomalías en la relación entre dicha variable y la primera variable dependiente de este estudio. Sin embargo, a nivel general, se evidencia que, intuitivamente, quienes justificarían un golpe de Estado tenderán a responder en mayor medida que la mayoría de políticos son corruptos. Con referencia a las orientaciones hacia el accionar de los gobernantes, se mantiene la tendencia de los dos años de estudio previo, en tanto los encuestados que legitiman un golpe de Estado en los dos casos posibles evaluarán de peor forma al trabajo del presidente que quienes no legitimarían un golpe. Además, las relaciones también muestran cómo los encuestados que aceptarían un golpe de Estado percibirán en mayor parte que a los gobernantes no les interesa la opinión de la ciudadanía.

A su vez, en la mayor parte de los seis cruces de variables posibles relacionados a las orientaciones hacia las instituciones, se puede observar que quienes legitimarían una toma de poder militar poseerán peores percepciones hacia las mismas. De esta forma, los encuestados que aceptarían una toma de poder militar tenderán a responder en mayor medida que los derechos básicos no están protegidos por el sistema político ecuatoriano que quienes no legitimarían un golpe de Estado. Los datos son menos concluyentes en torno al respeto por las instituciones, a pesar de que, a nivel general, se puede observar que quienes no justificarían un golpe tenderán a mostrarse más respetuosos por las instituciones. Persiste, sin embargo, la anomalía evidenciada en los años previos de estudio por la cual la mayor parte de encuestados que legitiman un golpe responden, a su vez, que respetan las instituciones. Por último, en el 2016, los encuestados que legitimarían un golpe de Estado se mostrarán menos orgullosos de vivir bajo el sistema político ecuatoriano que quienes no justificarían tal acto.

Prosiguiendo con los resultados de las relaciones entre las variables dependientes y la confianza hacia las instituciones, se obtienen resultados variados. Primeramente, en este año

también se presenta la tendencia, y más marcada que en el 2014, mediante la cual los encuestados que legitimarían un golpe de Estado militar se mostrarán más confiados y menos indiferentes hacia las Fuerzas Armadas que quienes no justificarían el golpe. La tendencia es más concluyente con la confianza hacia la Presidencia y marca que quienes no justificarían una toma de poder militar responderán en mayor medida confiar en el presidente que quienes sí justificarían un eventual golpe.

También se obtienen resultados intuitivos al respecto del Legislativo. Así, quienes justificarían un golpe de Estado militar desconfiarán más y se mostrarán más indiferentes hacia la Asamblea Nacional que quienes no legitimarían un golpe. Por otro lado, también se puede observar que los encuestados que aceptarían una toma de poder por parte de los militares responderán en mayor medida desconfiar y ser indiferentes hacia los partidos políticos que quienes no justificarían un eventual golpe.

Las tendencias son menos claras con la confianza hacia el sistema de justicia. En primer lugar, los encuestados que justificarían un golpe ante mucha delincuencia tenderán a desconfiar y confiar, al mismo tiempo, en mayor medida en la administración de justicia. Ello se revierte con la legitimación de un golpe de Estado ante mucha corrupción, en tanto se obtiene una tendencia intuitiva que marca que quienes aceptarían una toma de poder militar desconfiarán más y confiarán menos en que las cortes del país garantizan un juicio justo que quienes no legitiman un golpe. Además, los encuestados que justificarían un eventual golpe también tenderán a mostrarse más desconfiados en los procesos electorales que quienes no aceptarían una toma de poder militar. Finalmente, en este año se revierte la tendencia del año anterior y los datos arrojan que quienes no justificarían un golpe se ubicarán en mayor medida hacia el centro y la derecha del espectro ideológico que quienes sí legitiman el golpe.

Dicho esto, se obtuvieron relaciones estadísticamente significativas con las dos variables dependientes en los casos de las siguientes variables: percepción de la situación económica personal, evaluación del trabajo del presidente, respeto por las instituciones y confianza hacia el presidente. Por el contrario, las variables independientes que no obtuvieron una relación estadísticamente significativa con ninguna de las dos variables dependientes son: confianza en los partidos políticos e ideología. Finalmente, las variables que obtuvieron una relación estadísticamente significativa en uno de los casos son: satisfacción con la democracia, percepción de la situación económica nacional, interés por la política, conocimiento de la política, percepción de la generalización de la corrupción entre políticos, percepción que a los gobernantes les interesa la opinión de los ciudadanos y percepción de protección de derechos.

Por otro lado, agrupando los datos, la legitimidad de la democracia y el respeto por las instituciones no obtienen ninguna relación estadísticamente significativa; y, agrupando los datos, la obtienen con una sola variable dependiente. Por su parte, la confianza en las Fuerzas Armadas, agrupando los datos obtiene una relación estadísticamente significativa y, sin agrupar las respuestas, las obtiene con ambas variables dependientes. La confianza en la administración de justicia obtuvo una relación estadísticamente significativa agrupando los datos; sin embargo, sin agrupar, esta variable no estaría relacionada de forma estadísticamente significativa con ninguna de las dos variables dependientes. Por último, la confianza en el Legislativo y en las elecciones, agrupando los datos, estuvieron relacionadas de forma estadísticamente significativas con ambas variables dependientes; y, sin agrupar, ambas variables obtuvieron sólo una relación estadísticamente significativa.

Finalmente, cabe realizar una serie de consideraciones. El presente año de estudio evidencia una simultaneidad de peores resultados económicos en el país y una reducción en la cultura cívica de la ciudadanía. En este año, la legitimación hacia un golpe de Estado aumentó y se redujo la legitimidad y satisfacción con la democracia. En el 2016 también se puede observar como la deseabilidad de un golpe está relacionada con las orientaciones hacia instituciones como la Presidencia y la percepción de la situación económica, por sobre de las percepciones hacia la democracia como tal. Es destacable que, en este año, en el caso de las relaciones entre variables dependientes y percepciones hacia el presidente y las elecciones, las respuestas de los encuestados muestran mayor polarización entre encuestados, algo que posiblemente está relacionado con la coyuntura del año en cuestión y que merece estudios ulteriores que el presente no pretende abordar. Dicho ello, se continúa a la presentación de datos del 2018.

5. El estado de las percepciones ciudadanas en Ecuador en 2018.

5.1. Presentación general de resultados.

En el año 2018, el gobierno ecuatoriano era presidido por Lenín Moreno tras su victoria electoral por un pequeño margen en las elecciones generales de 2017. La bonanza económica ya había acabado, en tanto la economía del país continuaba en un proceso de crecimiento atenuado y presentación de bajos resultados económicos. El PIB per cápita a precios constantes de 2010 creció de USD 5.176,06 en 2016 a USD 5.205,76 en el 2017 y volvió a decrecer hasta USD 5.180,60 en 2018; el PIB creció apenas un 1,29% de 2017 a

2018; la desigualdad aumentaba, llegando a un índice de Gini de 45.4 en 2018; sin embargo, la tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de USD 1,90 disminuiría a 3,3% en 2016 (Banco Mundial, 2020). Por su parte, el índice de Desarrollo Humano aumentó de 0,756 en 2016 a 0,762 en 2018 (PNUD, 2021). La presentación de resultados económicos variados se daba en conjunto con una recuperación mayor del precio del barril del petróleo, que alcanzó un valor promedio de más de USD 45 en 2017 y siguió creciendo hasta adquirir un precio de USD 60,5 en 2018 (Banco Central del Ecuador, 2020).

Al respecto de las variables dependientes, en este año se puede observar un aumento considerable de cifras referentes a la legitimación de golpes de Estado. Cuando se cuestionó a los encuestados si justificarían una toma de poder militar frente a mucha delincuencia, un 50,4% de respuestas válidas legitimó el golpe y una minoría de 49,6% no justificó una eventual toma de poder militar. Asimismo, un 43,3% de encuestados, cuyas respuestas fueron válidas, mencionó que justificarían un golpe de Estado militar frente a mucha corrupción y, complementariamente, un 56,7% respondió negativamente. Por ende, se mantiene la tendencia de presentar mayores niveles de legitimidad de un eventual golpe frente a mucha delincuencia que frente a mucha corrupción. Del mismo modo que el año anterior, ambas preguntas se realizaron a dos grupos complementarios de encuestados. En este sentido, el porcentaje de respuestas válidas de la primera variable dependiente fue de 47,9% y, de la segunda, de 48,4%, dando un total de 96,3% de respuestas válidas. Finalmente, es importante recalcar que el presente año es el único entre los años de estudio que muestra un porcentaje mayoritario de legitimación de golpes de Estado en una variable dependiente.

La democracia, paradójicamente, obtuvo mejores resultados al respecto de legitimidad aquellos mostrados en el 2016, no siendo el mismo caso con la satisfacción. Frente a la cuestión de si la democracia es la mejor forma de gobierno, un 20,6% estableció estar en desacuerdo, un 25% se mantuvo indiferente y una mayoría de 54,4% respondió que la democracia es el mejor sistema político. A pesar de la mejora, los datos muestran que persiste un nivel considerable de rechazo e indiferencia a un sistema que, como se ya se lo mencionó, requiere de la legitimación de los ciudadanos para mantenerse. En esta pregunta, se perdió un 1,4% de respuestas por el sistema. Contrario a lo sucedido con la legitimidad, este año presente menores niveles de satisfacción con la democracia. Solamente un 5,7% de encuestados respondió encontrarse muy satisfecho con la democracia y un 33% dijo estar

satisfecho; mientras que, por otro lado, un 46,3% mencionó estar insatisfecho con el sistema democrático y un 14,9% estableció encontrarse muy insatisfecho con el mismo. En este caso, se perdió por el sistema un 2% de respuestas.

Congruentemente con el desempeño variado de la economía, los encestados mantuvieron la tendencia de evaluar negativamente el estado de la situación económica, aunque de forma atenuada si se la compara con los resultados del 2016. En este año, un 5,9% de encuestados percibió que la situación económica del país era mejor a la del año anterior; un 30,3%, que fue igual; y, finalmente, un 63,8% estableció que la situación nacional fue peor. Así como en el año de estudio previo, se dieron resultados mejores al respecto de la evaluación de la economía personal. Un 8,8% de encuestados mencionó que su situación económica fue mejor; un 42,3%, que fue igual; y un 48,9%, que fue peor. En estos casos, se dio un 0,5% y 0,3% de respuestas perdidas por el sistema, respectivamente.

Con respecto a las orientaciones hacia la política, los resultados tampoco varían en gran manera, perdurando la apatía encontrada en los tres años de estudio previos. Frente a la cuestión del interés de los encuestados por los asuntos políticos, un 8,8% respondió tener mucho interés en la política y un 22,9% dijo estar algo interesado, dando un total de 31,7% de encuestados que se mostraron interesados por la política. Por otro lado, un 35,5% declaró estar poco interesado en la política y un 32,9% confesó estar nada interesado por la misma. En este caso, se dio un 0,2% de respuestas perdidas por el sistema. Además, un 28,9% de encuestados mencionó no entender bien los asuntos políticos, un 24,6% se mantuvo indiferente y un 46,5% declaró conocer sobre la política. En esta pregunta, el sistema perdió un 1,5% de respuestas.

Al respecto de la corrupción, en el 2018 persiste la percepción que el problema está generalizada en el ámbito público. Como se lo mencionó en un inicio, en este año se realizaron dos preguntas complementarias a distintos grupos de encuestados. Ante la pregunta sobre la generalización de la corrupción entre funcionarios públicos, un 45,7% respondió que se encuentra muy generalizada; un 22%, algo generalizada; un 21,1%, poco generalizada y un 11,2%, nada generalizada. Con referencia a los políticos, solamente un 1,5% de encuestados respondió que ningún político es corrupto; un 10,4% declaró que menos de la mitad son corruptos; un 23,8% mencionó que la mitad de los políticos son corruptos; un 32,8% percibió que más de la mitad de políticos son corruptos; y, finalmente, un 31,5% estableció que todos los políticos son corruptos. En estas dos preguntas, se dio un 50,3% y

48,3% de respuestas válidas respectivamente, dando un total de 98,6% de respuestas válidas en torno a las percepciones de corrupción.

El presidente Lenín Moreno, por su parte, obtuvo niveles ampliamente menores de aceptación que su predecesor. En este sentido, en este año la aprobación del trabajo del Ejecutivo se situó en niveles mínimos. Ante la cuestión, solamente un 2,8% de encuestados evaluó el trabajo del presidente como muy bueno y un 27,4%, como bueno, dando un total minoritario de 30,2% de evaluaciones positivas. Por otro lado, un 42,6% respondió que el trabajo del presidente no fue ni bueno ni malo, mientras que un 16,9% y un 10,3% evaluó el trabajo del Ejecutivo como malo y pésimo, respectivamente. En este caso, se dio un 0,7% de respuestas perdidas por el sistema. Asimismo, se mostró menores niveles de percepción del interés de los gobernantes por la opinión de los ciudadanos. Un 45,4% de encuestados mencionó que a los gobernantes no les interesa lo que ellos piensan; un 15% se mostró indiferente; y, por último, una minoría de 39,6% percibió que a quienes gobiernan el país sí les interesa su opinión. En esta pregunta, se dio un 0,5% de respuestas perdidas por el sistema.

A nivel general, las orientaciones hacia las instituciones continuaron con la tendencia de deteriorarse durante el presente año de estudio. Ante la cuestión de la protección de los derechos por parte de las instituciones, un 41,2% declaró que los mismos no están protegidos, un 22,1% se mantuvo indiferente y un 36,7% respondió que las instituciones sí protegen los derechos de los ciudadanos. Sólo se dio un 1,1% de respuestas perdidas por el sistema ante esta pregunta. En el caso del respeto y el orgullo por las instituciones, los datos muestran una profundización de las orientaciones negativas hacia las mismas. Así, un 26,2% confesó no respetar las instituciones, un 16,3% se mantuvo indiferente y un 57,5% estableció tener respeto por las instituciones. Por otro lado, un 34,5% contestó no sentirse orgulloso de vivir bajo el sistema político del país, un 19,5% se mostró indiferente y un 46% dijo tener orgullo por las instituciones. Se dio un 0,8% y 0,5% de respuestas perdidas por el sistema, respectivamente.

En lo referente a las orientaciones hacia las instituciones específicas del país, en el 2018 se puede observar que todas las instituciones tomadas en el presente trabajo obtuvieron menores niveles de confianza que los del año previo de estudio, siendo la Presidencia la más afectada a nivel relativo. En el presente año también varían los puestos de las instituciones con mayor y menor confianza. Las Fuerzas Armadas obtuvieron los mayores niveles de

confianza, seguidas por las elecciones, la Asamblea y la Presidencia. Los partidos políticos continuaron siendo la institución menos confiada, seguida de la administración de justicia.

En este sentido, una amplia mayoría de 73,1% de encuestados mencionó confiar en las Fuerzas Armadas, un 12,3% se mantuvo indiferente y un 14,5% confesó desconfiar de la institución militar. La Presidencia, por su parte, obtuvo una drástica disminución en sus niveles de confianza, en tanto solamente un 31,2% estableció confiar en la misma, un 18,9% se mostró indiferente y un 49,9% declaró desconfiar del Ejecutivo. Por otro lado, al respecto de la Asamblea Nacional, un 33% respondió confiar en la misma, un 20,9% se mantuvo indiferente y un 46,1% expresó desconfiar de la institución legislativa. En las preguntas relacionadas a la confianza por estas tres instituciones, se dio un 0,7%, 0,1% y 0,7% de respuestas perdidas por el sistema, respectivamente

Al igual que el año anterior, los partidos políticos siguieron siendo la institución menos confiada entre las seis tomadas para este estudio. De entre las respuestas válidas, un 19,9% dijo confiar en los partidos; un 18,6% se mantuvo indiferente; y, por último, un 61,5% estableció desconfiar de dichas instituciones. En este caso, se dio un 0,2% de respuestas perdidas por el sistema. Por su parte, un 29% de encuestados confiaron en las garantías del sistema judicial para un juicio justo; un 24,1% se mostró indiferente; y un 46,8% confesó desconfiar de la administración de justicia. Ante esta pregunta, se dio un 1,4% de respuestas perdidas por el sistema. Finalmente, las elecciones fueron la segunda institución más confiada entre las tomadas por este estudio durante este año, con porcentajes de confianza mucho menores a los de las Fuerzas Armadas. De esta forma, un 42,9% respondió confiar en los procesos electorales; un 19,3% se mantuvo indiferente; y, un 37,8% de encuestados expresó desconfiar de las elecciones. En esta variable, se dio un 0,4% de respuestas perdidas por el sistema.

Finalmente, en el presente año, ante la pregunta de la autopercepción ideológica, se evidenció una mayor agrupación de respuestas al centro de la escala. Así, de entre las respuestas válidas, un 30,2% se ubicó en la izquierda de la escala ideológica; un 37%, en el centro; y, finalmente, un 33,8%, en la derecha. Nuevamente se da la tendencia de una mayor ubicación ideológica en el centro de la escala. En este caso, se dio un 6,8% de respuestas perdidas por el sistema. Establecido esto, se prosigue a presentar los datos obtenidos tras el cruce de las variables dependientes e independientes de este estudio.

5.2. La relación entre la legitimación de golpes de Estado y percepciones hacia la democracia.

En el presente año, se vuelve a obtener la tendencia intuitiva, aunque poco marcada, mediante la cual los encuestados que legitimarían un golpe de Estado ante ambas circunstancias se mostrarán en mayor medida en desacuerdo e indiferentes frente al estipulado que la democracia es la mejor forma de gobierno. En lo referente a satisfacción con la democracia, en este año, no se evidencian tendencias claras.

En este sentido, de entre los encuestados que legitimarían un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, un 20,7% no legitima la democracia; un 26,7% se mantiene indiferente; y un 52,6% concuerda con que la democracia es la mejor forma de gobierno. Por otro lado, de entre quienes no aceptarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, con una pequeña diferencia de 2,4 puntos porcentuales con respecto a quienes sí justificarían un golpe, un 18,3% no legitima la democracia; un 21,9% se muestra indiferente; y, finalmente, con un aumento más considerable de 7,1 puntos porcentuales, un 59,7% está de acuerdo con que la democracia es la mejor forma de gobierno. Sin embargo, en este caso no se evidencia una relación estadísticamente significativa, en tanto la relación obtiene un Chi-cuadrado de 0.145.

Por otro lado, de entre quienes justificarían un golpe de Estado militar ante mucha corrupción, un 22,5% no legitima la democracia; un 25,3% se mantiene indiferente; y, finalmente, un 52,2% ve al sistema democrático como la mejor forma de gobierno. Al contrario, de entre quienes no aceptarían una toma de poder militar, con cona diferencia de 1,2 puntos porcentuales con respecto al anterior grupo, un 21,3% declara que la democracia no es la mejor forma de gobierno; un 24,7% se muestra indiferente; y, con un leve aumente de 1,8 puntos porcentuales, un 54% legitima el sistema democrático. En este caso tampoco existe una relación estadísticamente significativa ya que el Chi-cuadrado obtenido es de 0.880.

Al respecto de la satisfacción con la democracia, la tendencia es poco clara. Contra intuitivamente, en el caso de la legitimación de un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, los resultados muestran que quienes aceptarían una toma de poder militar estarán más satisfechos con la democracia que quienes no justificarían el golpe. En este sentido, de entre los encuestados que justificarían un golpe ante mucha delincuencia, un 6,5% dice estar muy satisfecho con la democracia y un 33,4%, satisfecho; mientras que un

45,9% y un 14,1% responde estar insatisfecho y muy insatisfecho con el sistema, respectivamente. Por otro lado, de entre quienes no justificarían un golpe de Estado militar ante esta circunstancia, con una reducción de 3,2 puntos porcentuales, un 3,3% establece encontrarse muy satisfecho con el sistema democrático y un 35,6%, satisfecho; mientras que un 45% declara encontrarse insatisfecho con la democracia y, con un aumento de dos puntos porcentuales, un 16,1% responde estar muy insatisfecho con el sistema democrático. En la relación entre ambas variables se obtiene un Chi-cuadrado de 0.213, no siendo estadísticamente significativa.

Al tomar la relación entre la satisfacción hacia la democracia y la legitimidad de golpes de Estado frente a mucha corrupción, la tendencia se vuelve más clara e intuitiva: quienes justificarían un golpe de Estado militar tenderán a mostrarse más insatisfechos con la democracia que quienes no aceptarían dicho quebrantamiento democrático. De esta forma, de entre quienes legitimarían una toma de poder militar, un 6,4% responde estar muy satisfecho con el sistema democrático; un 29,3% declara estar satisfecho con la democracia; un 48,7% establece estar insatisfecho con la democracia y un 15,6% dice estar muy insatisfecho con el sistema de gobierno del país. Por otro lado, de entre quienes no justificarían un eventual golpe militar, un 6,8% declara estar muy satisfecho con la democracia y, con un aumento de 4,2 puntos porcentuales con respecto al anterior grupo, un 33,5% dice estar satisfecho con el sistema democrático; mientras que, con una disminución de 4,2 puntos porcentuales, un 44,5% estipula estar insatisfecho con la democracia y, finalmente, un 15,2% confiesa estar muy insatisfecho con el sistema democrático. La relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa, en tanto presenta un Chi-cuadrado de 0.624.

Antes de finalizar esta sección, es relevante mencionar nuevamente que, con lo evidenciado recientemente, en todos los años de estudio se presenta la anomalía por la cual un porcentaje considerable de quienes justificarían un eventual golpe legitiman y se muestran satisfechos, a su vez, con la democracia. Es decir, se vuelve a evidenciar cómo los encuestados concilian pensamientos irreconciliables desde el punto de vista teórico y merece un estudio posterior sobre qué es lo que se entiende en el país por democracia, como ya se lo mencionó previamente. Dicho esto, se prosigue a la presentación de las relaciones entre las variables dependientes y las percepciones de la realidad económica.

5.3. Percepciones económicas y legitimidad de golpes de Estado.

En el presente año, las relaciones entre la legitimidad de golpes de estado y las percepciones económicas son menos claras que las evidenciadas a lo largo del estudio. En el caso de la percepción del estado de la economía nacional, los datos arrojan que quienes legitiman un golpe de Estado militar tenderán a evaluar de peor forma la realidad económica. Sin embargo, sucede lo contrario en la relación entre la aceptación de golpes militares y la evaluación de la realidad económica personal. En ninguno de los cuatro casos se presenta una relación estadísticamente significativa.

En este sentido, de entre quienes justificarían una toma de poder militar ante mucha delincuencia, un 5,7% establece que la situación económica nacional fue mejor a la del año pasado; un 28,8%, igual; y, por último, un 65,5% responde que la situación del país fue peor. Por otro lado, de entre quienes no legitimarían un eventual golpe militar, con un leve aumento, un 6,6% responde que la situación fue mejor; un 32,4% evaluó la situación como igual; y, finalmente, con una diferencia más considerable de 5,6 puntos porcentuales con respecto a los encuestados que sí legitiman el golpe, un 60,9% declara que la situación nacional fue peor a la del año previo a la realización de la encuesta. La relación presenta un Chi-cuadrado de 0.442, no siendo así estadísticamente significativa.

La tendencia es más marcada en el caso de la legitimación de un golpe ante mucha corrupción. Así, de entre quienes justificarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, un 4,7% declara que la situación económica nacional es mejor a la del año previo; un 27,1% responde que la misma fue igual; y un 68,2% establece que la situación económica nacional fue peor. Al contrario, de entre quienes no justificarían un eventual golpe ante esta circunstancia, con un aumento de 1,7 puntos porcentuales con respecto a quienes justificarían un golpe militar, un 6,4% evalúa la situación nacional como mejor; un 32%, como igual; y, por último, con una diferencia de 6,6 puntos porcentuales, un 61,6% declara que la situación económica fue peor a aquella de doce meses atrás. La relación entre ambas variables no es, sin embargo, estadísticamente significativa, en tanto presenta un Chi-cuadrado de 0.157.

Como se lo mencionó previamente, la tendencia se vuelve contra intuitiva en el caso de la evaluación de la situación económica personal. De entre los encuestados que justificarían un golpe de Estado militar ante mucha delincuencia, un 11,1% evalúa su

situación económica como mejor; un 41,9%, como igual; y, un 47%, como peor a la del año previo. Por otro lado, de entre quienes no justificarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, con una reducción de dos puntos porcentuales con respecto a quienes sí legitimarían un eventual golpe, un 9,1% establece que su situación económica es mejor; un 42,3%, que es igual; y, finalmente, con un ligero aumento de 1,6 puntos porcentuales, un 48,6% percibe que su situación económica es peor a la de doce meses previos a la encuesta. En este caso, se da un Chi-cuadrado de 0.670, no siendo una relación estadísticamente significativa.

Por su parte, de entre quienes justificarían un golpe de Estado militar ante mucha corrupción, un 8,1% percibe su situación económica como mejor; un 41,7%, como igual; y, un 50,2%, como peor. Por otra parte, de entre los encuestados que no aceptarían una toma de poder militar ante tal circunstancia, con una diferencia de 0,9 puntos porcentuales con respecto al anterior grupo, un 7,2% evalúa su situación económica como mejor; un 43%, como igual; y, con otra diferencia de 0,3 puntos porcentuales, un 49,9% declara que su situación es peor a la del año previo. La relación entre ambas variables tampoco es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.870.

5.4. Legitimidad de golpes de Estado y orientaciones hacia la política.

Se prosigue a presentar las relaciones obtenidas entre las variables dependientes y las orientaciones hacia la política. En este año, se puede observar tendencias poco claras y concluyentes en el caso del interés hacia la política y su relación con la legitimidad de golpes de Estado: quienes aceptarían el quebrantamiento democrático tenderán a responder en menor medida que tienen mucho interés por la política y nada de interés en la política que quienes no justificarían el golpe, dándose la diferencia en las respuestas relacionadas al poco y algo de interés. Sin embargo, los datos arrojan tendencias más concluyentes e intuitivas en el caso del conocimiento de la política y marcan que quienes no legitimarían una toma de poder militar declararán en mayor medida entender bien los fenómenos políticos que quienes sí aceptarían un eventual golpe de Estado.

En este sentido, de entre quienes justificarían un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, un 7,6% responde tener mucho interés en la política y un 27,3%, algo de interés en la política, dando un total de 34,9% de encuestados que se muestran interesados en los fenómenos políticos; mientras que un 36,5% y 28,6% declaran tener poco y nada de interés en la política respectivamente, dando un total de 65,1% de encuestados desinteresados en la

política. Por otro lado, de entre quienes no justificarían un golpe, con un ligero aumento con respecto al grupo anterior, un 9,4% establece interesarse mucho por la política y, con una disminución mayor, un 19% establece estar algo interesado, dando un total de 28,4% de encuestados interesados por la política; mientras que, de entre este grupo, un 36,1% y un 35,5% menciona tener poco y nada de interés por la política, dando un total de 71,6% de encuestados desinteresados de los fenómenos políticos. Es decir, a nivel general, quienes legitimarían un eventual golpe tenderán a mostrarse más interesados por la política. En este caso, se presenta un Chi-cuadrado de 0.031, obteniéndose una relación estadísticamente significativa.

Algo similar ocurre en el caso de la relación entre el interés por la política y la legitimación de un golpe frente a mucha corrupción. Así, de entre quienes justificarían una toma de poder militar frente a este escenario, un 8,1% declara tener mucho interés en la política y un 24,1%, algo de interés, dando un total de 32,2% de encuestados en este grupo interesados por la política; mientras que un 37,8% y un 30% respondieron tener poco y nada de interés en la política, dando un total de 67,8% de encuestados desinteresados de los fenómenos políticos. Por otro lado, de entre quienes no justificarían un eventual golpe, con un ligero aumento, un 9,3% declara interesarse mucho por la política y un 23%, algo, dando un total de 32,3% de encuestados en este grupo interesados por la política; mientras que un 32,5% y un 35,2% respondieron tener poco y nada de interés por la política, dando un total de 67,7% de encuestados en este grupo desinteresados por los fenómenos políticos. Es decir, a nivel general y casi mínimo, quienes legitiman un golpe ante esta circunstancia se verán menos interesados por la política. La relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa, teniendo un Chi-cuadrado de 0.352.

Por otro lado, las tendencias marcan que quienes justificarían un golpe de Estado militar responderán en mayor medida que no entienden bien los asuntos políticos. De entre quienes aceptarían una toma de poder militar frente a mucha delincuencia, un 28,8% declara no conocer sobre la política; un 26,9% se mantiene indiferente y un 44,3% establece entender bien los asuntos políticos. Al contrario, de entre quienes no justificarían un eventual golpe ante esta circunstancia, un 27,7% dice no conocer sobre la política; un 23,8% se muestra indiferente; y, con un aumento de 4,2 puntos porcentuales, un 48,5% menciona entender bien los asuntos políticos. Sin embargo, no se evidencia una relación estadísticamente significativa, en tanto se obtiene un Chi-cuadrado de 0.485.

Del mismo modo, de entre quienes justificarían un golpe de Estado militar ante mucha corrupción, un 32,4% confiesa no entender los asuntos políticos; un 22% se muestra indiferente; y, por último, un 45,6% declara entender bien los asuntos políticos. De entre

quienes no justificarían un golpe militar, por otro lado, ante esta circunstancia, con una reducción de 6,1 puntos porcentuales con respecto al otro grupo, un 26,3% responde no entender bien los asuntos políticos; un 25,4% se mantiene indiferente; y, con un aumento de 2,7 puntos porcentuales, un 48,3% estipula conocer la política. La relación entre estas variables tampoco es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.185.

5.5. Legitimación de golpes de Estado y percepciones sobre corrupción.

Los resultados de las relaciones entre las variables dependientes y las percepciones sobre corrupción entre funcionarios públicos y políticos no son concluyentes y muestran resultados variados. En primer lugar, se obtiene una tendencia marcada e intuitiva que muestra que quienes justifican un golpe de Estado frente a mucha delincuencia percibirán que la corrupción está más generalizada entre funcionarios públicos que quienes no legitimarían un golpe. Así, de entre quienes aceptarían un eventual quebrantamiento democrático, un 46,7% y un 23,4% declaró que la corrupción está muy generalizada y algo generalizada, respectivamente, entre funcionarios públicos; mientras que un 19,3% y un 10,7% percibió que la corrupción está poco y nada generalizada, respectivamente. Al contrario, entre quienes no legitimarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, con una diferencia de 1,9 puntos porcentuales con respecto al primer grupo, un 44,8% percibió que la corrupción está muy generalizada y, con una diferencia mayor de 4,8 puntos porcentuales, un 18,6% dijo que la corrupción está algo generalizada; mientras que, con un aumento de ocho puntos porcentuales, un 27,3% mencionó que la corrupción está poco generalizada y, con una diferencia leve, un 9,3% declaró que el problema está nada generalizado entre funcionarios públicos. El Chi-cuadrado de esta relación es de 0.270, no siendo estadísticamente significativa.

Algo diferente ocurre con la legitimación de un golpe ante mucha corrupción, paradójicamente. De entre quienes justificarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, un 38% y un 30,1% perciben que la corrupción está muy y algo generalizada, respectivamente; mientras que un 20,5% y un 11,4% mencionan que el problema está poco y nada generalizado entre los funcionarios públicos, respectivamente. Por otro lado, de entre quienes no justificarían un golpe, con un aumento de doce puntos porcentuales con respecto a quienes sí justificarían un golpe, un 50% percibe que la corrupción está muy generalizada y, con una disminución menor de 11,6 puntos porcentuales, un 18,5% responde que el

problema está algo generalizado entre funcionarios públicos; mientras que, con un leve aumento y diferencia, un 19% y un 12,5% declara que la corrupción está poco y nada generalizada entre funcionarios públicos, respectivamente. La relación entre estas variables es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.040.

Las tendencias tampoco son concluyentes en torno a la percepción de corrupción entre políticos. De entre quienes aceptarían un golpe de Estado militar frente a mucha delincuencia, un 0,6% responde que ningún político es corrupto; un 11,6%, que menos de la mitad son corruptos; un 24,4%, que la mitad son corruptos; un 34,9%, que más de la mitad son corruptos; y, finalmente, un 28,5%, que todos los políticos son corruptos. Por otro lado, de entre quienes no justificarían un eventual golpe ante esta circunstancia, un 2,3% percibe que ningún político es corrupto; un 10,3%, que menos de la mitad son corruptos; un 25,3%, que la mitad son corruptos; un 27%, que más de la mitad son corruptos; y, finalmente, un 35,1%, que todos los políticos son corruptos. La relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.305.

Por su parte, en el caso de la justificación de golpes de Estado frente a mucha corrupción, las respuestas entre quienes justifican y no justifican una toma de poder militar no presenta mayor variación. Así, de entre quienes justificarían un golpe de Estado militar ante mucha corrupción, un 1,3% percibe que ningún político es corrupto; un 9%, que menos de la mitad son corruptos; un 22,6%, que la mitad son corruptos; un 34,2%, que más de la mitad son corruptos; y, finalmente, un 32,9%, que todos son corruptos. De entre quienes no legitiman un eventual golpe, un 1,4% menciona que ningún político es corrupto; 9,5%, que menos de la mitad son corruptos; un 22,4%, que la mitad son corruptos; un 37,6%, que más de la mitad son corruptos; y, finalmente, un 29%, que todos son corruptos. En este caso, tampoco se da una relación estadísticamente significativa en tanto la relación tiene un Chi-cuadrado de 0.944.

5.6. Legitimidad de golpes de Estado y orientaciones evaluativas hacia los gobernantes.

Se continua con la relación entre las variables dependientes y las orientaciones evaluativas hacia los gobernantes. En este año de estudio, continua presente la tendencia mediante la cual los encuestados que justificarían una toma de poder militar, sea frente a

mucha delincuencia o frente a mucha corrupción, evaluarán de peor manera el trabajo del presidente que quienes no aceptarían un eventual golpe. Las tendencias se vuelven menos claras en torno a la percepción de interés por parte de los gobernantes por la opinión de los gobernados, dándose, incluso, en un caso, una tendencia contra intuitiva.

De esta forma, entre quienes justificarían un golpe de Estado militar frente a mucha delincuencia, un 3,2% evalúa el trabajo del presidente como muy bueno; un 25,1%, como bueno; un 42,4%, como ni bueno ni malo; un 19,5%, como malo; y, por último, un 9,7%, como muy malo. Al contrario, de entre quienes no legitimarían una eventual toma de poder militar ante esta circunstancia, con un ligero aumento, un 3,6% calificó el trabajo del Ejecutivo como muy bueno; con un aumento mayor, de 6,5 puntos porcentuales con respecto a quienes sí justificaron un eventual golpe, un 31,6% declaró que el trabajo fue bueno; un 40,2%, como regular; mientras que, con una disminución de 3,7 puntos porcentuales, un 15,8% estableció que el trabajo del presidente fue malo y, finalmente, un 8,9% dijo que el trabajo de la máxima autoridad ejecutiva fue muy malo. En este caso, se da un Chi-cuadrado de 0.341, no obteniéndose así una relación estadísticamente significativa.

Lo mismo sucede en el caso de la legitimación de un golpe de Estado frente a mucha corrupción. De entre los encuestados que justificarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, un 1,6% evalúa el trabajo del presidente como muy bueno; un 24,7%, como bueno; un 41,6%, como ni bueno ni malo; un 17,8%, como malo; y, por último, un 14,4%, como pésimo. Al contrario, de entre quienes no aceptarían un eventual golpe, con un aumento de 1,3 puntos porcentuales con respecto a quienes sí justificarían el golpe, un 2,9% calificó el trabajo del Ejecutivo como muy bueno; con un aumento mayor de 2,5 puntos porcentuales, un 27,2% dijo que fue bueno; un 44,3%, como regular; mientras que, con una diferencia de 2,1 puntos porcentuales, un 15,7% estableció que el trabajo de Presidencia fue malo y, con una diferencia mayor de 4,5 puntos porcentuales, un 9,9% respondió que el trabajo de la máxima autoridad ejecutiva fue pésimo. Sin embargo, la relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.220.

Por otro lado, los resultados relacionados a la percepción de que a los gobernantes les interesa la opinión ciudadana son variados. En primer lugar, se obtiene la tendencia mediante la cual quienes justifican un golpe de Estado frente a mucha delincuencia percibirán en mayor medida que a los gobernantes no les interesa su opinión y, al mismo tiempo, que sí les interesa la opinión ciudadana, dándose la mayor diferencia en el caso de la percepción negativa. Así, de entre quienes justificarían una toma de poder militar frente a

esta circunstancia, un 44,2% percibió que los gobernantes no tienen interés por su opinión; un 12,2% se mantuvo indiferente; y un 43,6% respondió que a quienes gobiernan el país si les interesa su opinión. Al contrario, de entre quienes no justificarían un eventual golpe, con una ligera disminución de 0,3 puntos porcentuales con respecto al grupo de encuestados que sí justifica el golpe, un 43,9% menciona que los gobernantes no se interesan por su opinión; un 16,6% se muestra indiferente; y, finalmente, con una disminución mayor de 4,1 puntos porcentuales, un 39,5% establece que a quienes gobiernan el país sí les interesa la opinión ciudadana. La relación no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.203.

En el caso de la legitimidad de golpes de Estado frente a mucha corrupción, se obtiene la tendencia contra intuitiva, aunque levemente marcada, mediante la cual quienes justificarían una toma de poder militar responderán en mayor medida que a los gobernantes les interesa la opinión ciudadana. Así, entre los encuestados que aceptarían un golpe de Estado militar ante este escenario, un 46,1% percibió que a los gobernantes no les interesa su opinión; un 16% se mantuvo indiferente; y, finalmente, un 37,9% estableció que a los gobernantes les interesa la opinión ciudadana. Al contrario, de entre quienes no justificarían un eventual golpe, con un ligero aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al anterior grupo, un 47,6% mencionó que a los gobernantes no les interesa la opinión ciudadana; un 14,8% se mostró indiferente; y, con una disminución mínima, un 37,6% respondió que a los que gobiernan el país sí les interesa la opinión ciudadana. La relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.872.

5.7. Legitimidad de golpes de Estado y orientaciones a las instituciones.

Con ello, se prosigue a la presentación de los resultados obtenidos de la relación entre las variables dependientes y las orientaciones hacia las instituciones. En este año, a diferencia de años anteriores, se puede evidenciar resultados no concluyentes y, en una parte considerable de los casos, contraintuitivos y alejados de la teoría.

En este sentido, en primer lugar, las encuestas de este año marcan como, de forma contraintuitiva, quienes declaran que justificarían un golpe de Estado ante mucha delincuencia evaluarán de mejor manera la protección de derechos por parte del sistema político. Así, de entre quienes legitimarían un eventual golpe ante esta circunstancia, 35,4%

responde que los derechos básicos no se encuentran protegidos; un 25,9% se mantiene indiferente; y un 38,7% percibe que el sistema sí protege los derechos básicos de los ciudadanos. Al contrario, de entre los encuestados que no aceptarían una toma de poder militar ante mucha delincuencia, con un considerable aumento de 11,1 puntos porcentuales con respecto al grupo de encuestados que sí justificaría un golpe, un 46,5% menciona que los derechos básicos no están protegidos; un 18,3% se mantiene indiferente; y, con una ligera disminución de 3,5 puntos porcentuales, un 35,2% establece que el sistema político sí protege los derechos de los ciudadanos. La relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.004.

Sucede lo contrario al tomar la relación entre la variable en cuestión y la legitimad de golpes de Estado frente a mucha corrupción. En este caso, se da una relación no estadísticamente significativa que marca que quienes justificarían una toma de poder militar ante esta circunstancia tenderán a responder en mayor medida que los derechos básicos no se encuentran protegidos que quienes no legitimarían un eventual golpe. De esta forma, entre los encuestados que justificarían un golpe de Estado militar ante mucha corrupción, un 42,9% establece que los derechos no están protegidos; un 21,3% se muestra indiferente; y un 35,7% menciona que el sistema sí protege sus derechos básicos. Por otro lado, de entre quienes no legitimarían una eventual toma de poder militar, con una ligera disminución de 1,2 puntos porcentuales respecto a quienes sí justificarían un golpe, un 41,7% declara que los derechos no se encuentran protegidos por el sistema político; un 21,8% se mantiene indiferente; y, con un ligero aumento, un 36,5% percibe que el sistema sí protege los derechos básicos de los ciudadanos. Sin embargo, no se evidencia, como se lo mencionó previamente, una relación estadísticamente significativa entre ambas variables en tanto su Chi-cuadrado es de 0.946.

En el caso de la relación entre las variables dependientes y el respeto hacia las instituciones, la tendencia se vuelve más marcada, pero permanece contraintuitiva y arroja que quienes justifican un golpe de Estado militar declararán en mayor medida que respetan las instituciones que quienes no justificarían una toma de poder militar. Ello, nuevamente, levanta la pregunta sobre el significado que la ciudadanía otorga al término de instituciones, al ser contradictorio que se establezca respetar las mismas y, al mismo tiempo, legitimar el quebrantamiento del sistema democrático mediante un golpe militar.

En este sentido, de entre los encuestados que legitimarían un golpe de Estado frente a mucha delincuencia, un 24,1% responde que las instituciones políticas del país no merecen

respeto; un 17,6% se mantiene indiferente; y un 58,4% declara que respeta las instituciones. Al contrario, de entre quienes no justificarían una eventual toma de poder militar ante esta circunstancia, con un aumento de 3,5 puntos porcentuales con respecto a quienes justificarían un golpe, un 27,6% responde no respetar las instituciones; un 17,4% se muestra indiferente; y, con una disminución de 3,4 puntos porcentuales, un 55% establece que las instituciones merecen respeto. Sin embargo, el Chi-cuadrado de la relación entre estas variables es de 0.572, no evidenciándose así una relación estadísticamente significativa.

Lo mismo sucede en el caso de la legitimación de un golpe frente a mucha corrupción. De entre quienes justificarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, un 25,2% responde que no respeta las instituciones; un 16,7% se mantiene indiferente; y un 58,2% declara tener respeto por las instituciones. Al contrario, de entre quienes no justificarían un eventual golpe, con un aumento de tres puntos porcentuales con respecto a quienes sí legitimarían un quebrantamiento democrático, un 28,2% confiesa no tener respeto por las instituciones; un 14,2% se muestra indiferente; y, con una disminución leve, un 57,6% dice respetar las instituciones. En este caso, la relación tampoco es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.513.

En el caso del orgullo por las instituciones, las tendencias vuelven a ser poco marcadas. En primer lugar, los datos arrojan que quienes justificarían un golpe militar frente a mucha delincuencia tenderán a sentirse más orgulloso por las instituciones. Así, de entre quienes legitimarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, un 28,6% declara no sentirse orgulloso de vivir bajo el sistema político ecuatoriano; un 21,1% se menciona indiferente; y un 50,3% responde sentirse orgulloso de las instituciones. Al contrario, de entre quienes no legitimarían un eventual golpe, con un aumento considerable de seis puntos porcentuales con respecto al anterior grupo, un 34,6% confiesa no sentirse orgulloso de vivir bajo el sistema político ecuatoriano; un 20,1% se mantiene indiferente; y, con una disminución de cinco puntos porcentuales, un 45,3% se dice orgulloso de las instituciones políticas del país. La relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.213.

No sucede lo mismo con la segunda variable dependiente. Los datos arrojan que quienes no justificarían un golpe de Estado ante mucha corrupción tenderán a mostrarse más indiferentes, siendo la tendencia poco clara con las dos otras posibilidades. Así, de entre quienes justificarían un golpe de Estado militar frente a esta circunstancia, un 39,1% confiesa no sentirse orgulloso de vivir bajo el sistema político ecuatoriano; un 16,6% se muestra indiferente; y un 44,4% responde sentirse orgulloso de las instituciones. Por otro lado, de

entre quienes no legitimarían una eventual toma de poder militar, un 36,8% establece no sentirse orgulloso de las instituciones; un 20,9% se muestra indiferente; y un 42,3% dice sentirse orgulloso de vivir bajo el sistema político ecuatoriano. En este caso tampoco se da una relación estadísticamente significativa, siendo el Chi-cuadrado 0.328.

5.8. Legitimidad de golpes de Estado y confianza hacia las instituciones.

Continuando con la presentación de las relaciones entre la legitimidad hacia golpes de Estado y orientaciones hacia instituciones específicas del país se obtiene que, en primer lugar, e intuitivamente, los encuestados que legitiman una toma de poder por parte de los militares tenderán a mostrarse más confiados de las Fuerzas Armadas. En este sentido, de entre quienes justificarían un golpe de Estado ante mucha delincuencia, un 10,5% responde no confiar en la institución militar; un 8,9% se muestra indiferente; y un 80,5% confía en las Fuerzas Armadas. Por otro lado, de entre los encuestados que no legitimarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, con un aumento de 7,3 puntos porcentuales con respecto a los encuestados que sí justificarían un golpe, un 17,8% se dice desconfiado de las Fuerzas Armadas; un 10,8% se mantiene indiferente; y, finalmente, con una disminución de 9,1 puntos porcentuales, un 71,4% dice confiar en la institución militar. La relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.009.

La tendencia es menos marcada, aunque persiste, con la segunda variable dependiente. De entre quienes justificarían un golpe de Estado militar ante mucha corrupción, un 12,5% responde no confiar en las Fuerzas Armadas; un 15% se muestra indiferente; y un 72,4% establece confiar en la institución miliar. Por su parte, de entre quienes no justificarían una toma de poder militar ante este escenario, con un aumento de 4,5 puntos porcentuales con respecto al grupo previo, un 17% responde desconfiar de las Fuerzas Armadas; un 13,9% se mantiene indiferente; y, con una diferencia menor, un 69,1% dice confiar en la institución militar. La relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa en este caso, dándose un Chi-cuadrado de 0.244.

Cuando se toma la relación entre las variables dependientes y la confianza en el presidente, se vuelve a obtener la tendencia ya evidenciada en años previos por la cual se evalúa la deseabilidad de un quebrantamiento democrático con la influencia de las orientaciones que se mantienen hacia el Ejecutivo. Dicho de otro modo, los datos arrojan la

clara tendencia mediante la cual los encuestados que justificarían una toma de poder militar, sea frente a mucha delincuencia o frente a mucha corrupción, mostrarán menores niveles de confianza hacia la Presidencia que quienes no justificarían un golpe de Estado.

En este sentido, de entre quienes justificarían un golpe militar ante mucha delincuencia, un 50,3% confiesa no confiar en el presidente; un 20% se mantiene indiferente; y un 29,7% responde confiar en la máxima autoridad ejecutiva del país. Al contrario, de entre quienes no legitimarían una toma de poder militar ente dicha circunstancia, con una diferencia de 2,8 puntos porcentuales con respecto a quienes sí justificarían dicho acto, un 47,5% desconfía del presidente; un 18,1% se muestra indiferente; y, con un aumento mayor de 4,6 puntos porcentuales, un 34,3% declara confiar en la máxima autoridad ejecutiva. La relación entre ambas variables no es, sin embargo, estadísticamente significativa, dándose un Chi-cuadrado de 0.399.

La tendencia se vuelve más marcada en el caso de la segunda variable dependiente. De entre quienes justificarían un golpe militar ante mucha corrupción, un 57% responde no confiar en la Presidencia; un 17,1% se muestra indiferente; y un 25,9% confía en la máxima autoridad Ejecutiva. Por otro lado, de entre quienes no legitimarían una toma de poder militar ante esta circunstancia, con una considerable disminución de 7,7 puntos porcentuales con respecto a quienes sí aceptarían tal quebrantamiento democrático, un 49,3% responde no confiar en el presidente; un 18,3% se mantiene indiferente; y, con un aumento de 6,5 puntos porcentuales, un 32,4% dice confiar en la autoridad ejecutiva. La relación entre ambas variables presenta dos posibilidades: agrupando los datos, se obtiene un Chi-cuadrado de 0.089, no siendo estadísticamente significativa; sin embargo, sin agrupar las respuestas, el Chi-cuadrado disminuye a 0.006, obteniéndose así una relación estadísticamente significativa.

Las tendencias son menos claras en torno a la confianza en el Legislativo. En primer lugar, los datos arrojan, contra intuitivamente, que quienes legitimarían un golpe de Estado ante mucha delincuencia se mostrarán más confiados de la Asamblea que quienes no aceptarían una toma de poder militar. En este sentido, entre quienes justificarían un golpe militar ante esta circunstancia, un 41,5% desconfía de la Asamblea; un 24,4% se mantiene indiferente; y un 34,1% establece confiar en el Legislativo. Por su parte, de entre los encuestados que no legitimarían un golpe, con un aumento de 4,1 puntos porcentuales con respecto a quienes sí aceptarían tal acto, un 45,6% desconfía de la Asamblea; un 21,7% se muestra indiferente; y, con una reducción menor de 1,4 puntos porcentuales, un 32,7%

declara confiar en el órgano legislativo. La relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.494.

No sucede lo mismo en el caso de la segunda variable dependiente. Así, se obtiene la tendencia mediante la cual los encuestados que justificarían un golpe militar ante mucha corrupción estarán más desconfiados del Legislativo que quienes no legitimarían tal acto. En este sentido, de entre quienes justificarían un eventual golpe ante esta circunstancia, un 51,9% responde desconfiar de la Asamblea; un 19,2% se muestra indiferente; y un 28,9% declara confiar en el Legislativo. Al contrario, de entre los encuestados que no legitimarían un golpe, con una reducción de 4,5 puntos porcentuales con respecto a quienes sí justificarían tal quebrantamiento, un 47,4% dice desconfiar de la Asamblea; un 17,9% se mantiene indiferente; y, con un aumento de 5,8 puntos porcentuales, un 34,7% confía en el Legislativo. Sin embargo, la relación entre ambas variables tampoco es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.252.

Por su parte, en este año se da la tendencia mediante la cual los encuestados que justificarían un golpe de Estado ante mucha delincuencia, contra intuitivamente, confiarán más en los partidos políticos que quienes no legitimarían un golpe. De entre quienes aceptarían una eventual toma de poder militar ante este escenario, un 59,2% no confía en los partidos políticos; un 18,6% se muestra indiferente; y un 22,2% responde confiar en dichas instituciones. Por su parte, de entre quienes no legitimarían un golpe militar ante tal circunstancia, con un aumento de 4,5 puntos porcentuales con respecto al anterior grupo, un 63,7% desconfía de los partidos; un 18,4% se mantiene indiferente; y, con una disminución de 4,3 puntos porcentuales, un 17,9% establece confiar en las instituciones en cuestión. La relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.313.

Por su parte, de entre quienes justificarían un golpe de Estado militar ante mucha corrupción, un 62,6% desconfía de los partidos; un 17,1% se muestra indiferente; y un 20,2% dice confiar en las instituciones partidistas. Por otro lado, de entre quienes no legitimarían una eventual toma de poder militar ante esta circunstancia, con una ligera disminución con respecto a los encuestados que sí justificarían un golpe militar, un 62,4% declara no confiar en los partidos políticos; un 18,8% se mantiene indiferente; y, con otra disminución, esta vez mayor, un 18,8% responde confiar en las instituciones partidistas. La relación entre ambas variables tampoco es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.787.

Los resultados de la relación entre las variables dependientes y la confianza en la administración de la justicia muestran tendencias diferentes. En el caso de la legitimidad de un golpe de Estado militar ante mucha delincuencia, los encuestados que justificarían tal acto se mostrarán más desconfiados de la administración de justicia que quienes no legitimarían tal acto. En el caso de la justificación de un golpe militar ante mucha corrupción, sucede lo contrario: quienes justificarían tal hecho, se mostrarán más confiados en la justicia.

Así, de entre quienes legitimarían una eventual toma de poder militar ante mucha delincuencia, un 48,1% responde desconfiar en que las cortes del país garantizan un juicio justo; un 23,1% se muestra indiferente; y un 28,8% dice confiar en la administración de justicia. Al contrario, de entre quienes no legitimarían un eventual golpe militar ante esta circunstancia, con una reducción de 2,7 puntos porcentuales con respecto a quienes sí justificarían tal acto, un 45,4% responde desconfiar de la administración de justicia; un 23,8% se mantiene indiferente; y, finalmente, con un aumento de 1,9 puntos porcentuales, un 30,7% declara confiar en que las cortes del país garantizan un juicio justo. Entre ambas variables, se obtiene un Chi-cuadrado de 0.765, no siendo una relación estadísticamente significativa.

Como se lo mencionó previamente, sucede lo contrario en el caso de la segunda variable dependiente. En este sentido, de entre los encuestados que justificarían una toma de poder militar ante mucha corrupción, un 45,8% dice desconfiar de la administración de justicia; un 23,4% se muestra indiferente; y un 30,8% declara confiar en que las cortes del país garantizan un juicio justo. Por su parte, de entre quienes no aceptarían un golpe ante tal circunstancia, con un aumento de 2,3 puntos porcentuales con respecto al anterior grupo, un 48,1% responde confiar en la administración de justicia; un 24,9% se mantiene indiferente; y, con una diferencia de 3,7 puntos porcentuales, un 27,1% confía en que las cortes del país garantizan un juicio justo. La relación entre ambas variables tampoco es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.529.

Con referencia a la confianza en las elecciones, los datos arrojan que, en ambos casos, los encuestados que justificarían un golpe de Estado militar tenderán a confiar menos en los procesos electorales que quienes no legitimarían un golpe. En este sentido, de entre quienes legitimarían una toma de poder militar ante mucha delincuencia, un 37,3% responde no confiar en las elecciones; un 18,6% se mantiene indiferente; y un 44,1% dice confiar en los procesos electorales. Al contrario, de entre quienes no aceptarían un eventual golpe ante este escenario, con una reducción de cuatro puntos porcentuales, un 35,3% establece desconfiar

de las elecciones; un 17,4% se muestra indiferente; y, con un aumento de 3,3 puntos porcentuales, un 47,4% confía en los procesos electorales. La relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.662.

Lo mismo sucede con la segunda variable dependiente. De entre los encuestados que justificarían un golpe de Estado militar frente a mucha corrupción, un 42,4% dice desconfiar de las elecciones; un 20,2% se muestra indiferente; y un 37,4% declara confiar en los procesos electorales. Por su parte, de entre quienes no legitimarían un quebrantamiento democrático ante esta circunstancia, con una reducción de 4,1 puntos porcentuales con respecto a quienes sí aceptarían un eventual golpe militar, un 38,3% dice desconfiar de las elecciones; un 21,1% se mantiene indiferente; y, finalmente, con un aumento de 3,3 puntos porcentuales, un 40,7% responde confiar en los procesos electorales del país. Sin embargo, en este caso, la relación tampoco es estadísticamente significativa, obteniéndose un Chi-cuadrado de 0.518.

5.9. Legitimidad de golpes de Estado e ideología.

Finalmente, con referencia a la relación entre las variables dependientes y la autopercepción ideológica, los datos arrojan tendencias diferentes entre la legitimidad de un golpe de Estado frente a mucha delincuencia y frente a mucha corrupción. En este sentido, los encuestados que justificarían un golpe de Estado frente a mucha delincuencia tenderán a percibirse en mayor medida de derecha que quienes no legitimarían tal acto. En el caso de la legitimación de una toma de poder militar frente a mucha corrupción, sucede lo contario: los encuestados que justificarían el quebrantamiento democrático se mostrarán en mayor medida de izquierda. En ningún caso se obtienen relaciones estadísticamente significativas.

De este modo, de entre quienes justificarían un golpe de Estado militar frente a mucha delincuencia, un 27,9% se dice de izquierda; un 38,3%, de centro; y, un 33,8%, de derecha. Por otro lado, de entre quienes no aceptarían una eventual toma de poder militar ante esta circunstancia, con un ligero aumento con respecto al grupo anterior, un 28,3% se percibe de izquierda; un 40,1%, de centro; y, con una disminución de 2,2 puntos porcentuales, un 31,6% responde ser de derecha. La relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.810.

Por su parte, de entre quienes legitimarían un golpe militar frente a mucha corrupción, un 32,5% responde ser de izquierda; un 36,4%, de centro; y un 31,1%, de derecha. Al contrario, de entre los encuestados que no legitimarían una eventual toma de poder militar ante este hecho, con una ligera disminución con respecto al anterior grupo, un 31,1% se dice de izquierda; un 35,2%, de centro; y, con un aumento de 2,6 puntos porcentuales, un 33,7% declara ser de derecha. La relación entre ambas variables tampoco es estadísticamente significativa, presentando un Chi-cuadrado de 0.777.

5.10. Conclusiones relacionadas a los resultados del 2018.

Con lo ya expuesto, se pueden obtener conclusiones diversas. En primer lugar, este es el primer año de estudio en el cual el presidente de la República no fue Rafael Correa, siendo el gobierno ecuatoriano liderado por Lenín Moreno. Asimismo, el año 2018 se caracterizó por una serie de resultados económicos variados, marcados por un rendimiento relativamente bajo del país si se compara con los dos primeros años de estudio. El Ecuador, económicamente, presentó una recuperación en el año 2017 y comenzó a decrecer en términos de PIB per cápita en el 2018, a pesar del crecimiento absoluto de la economía. La desigualdad aumentó a pesar de que se dio una ligera mejora en el desarrollo humano. Además, vale rescatar, a nivel de democracia es que, por primera vez a lo largo del estudio, el Ecuador dejó de ser considerado un régimen híbrido a una democracia con fallas (The Economist, 2020). Al igual que el año previo, una serie de resultados económicos relativamente bajos se da al mismo tiempo de un aumento considerable de legitimación de golpes de Estado en la cultura política del país, especialmente frente a mucha delincuencia. A nivel general, se muestran resultados variados y ampliamente dispares en torno a la cultura cívica del país, si se compara con los otros años de estudio.

La democracia, como se lo mencionó previamente, obtuvo mayores niveles de legitimidad que aquellos del 2016, de forma paradójica si se considera el aumento de legitimidad de golpes militares. Sin embargo, también en este año se constata una disminución en los porcentajes de satisfacción con la democracia. A pesar de esta situación, persiste un nivel considerable de rechazo hacia el sistema democrático. Al respecto de la economía, en concordancia con la realidad económica, los encuestados tendieron a evaluar de igual forma o peor forma la situación económica nacional y personal, aunque de forma

atenuada si se la compara con los resultados del año anterior. En el ámbito de las orientaciones hacia la política, los resultados no varían en gran medida y se puede evidenciar la supervivencia del rechazo al concepto entre la población ecuatoriana. Referente al tema de corrupción, se mantienen percepciones que el problema está generalizado entre funcionarios públicos y políticos.

Sobre las orientaciones hacia los gobernantes, el año 2018 se configura como el que se evidenció la más baja aprobación al trabajo del presidente. Los niveles de aprobación de Lenín Moreno se redujeron drásticamente comparados con los de Rafael Correa a lo largo de los tres años previos. Además, las percepciones que a los gobernantes les interesa lo que piensa la ciudadanía también disminuyeron. Las instituciones también sufrieron peores resultados en lo que a las orientaciones hacia las mismas respecta. En el 2018, los niveles de percepción de protección de derechos, orgullo y respeto hacia las instituciones se deterioraron. Prosiguiendo con la confianza hacia las instituciones específicas del país, los datos arrojan una disminución de dicha orientación positiva en cada una de las seis instituciones tomadas por el estudio, especialmente el caso de la Presidencia. Las Fuerzas Armadas continuaron siendo la institución con más confianza entre la ciudadanía, seguidas, esta vez, por las elecciones y la Asamblea. Los partidos políticos continuaron siendo la institución menos confiada, seguida de la administración de justicia y la Presidencia. Por último, en este año aumentó la cantidad de encuestados que se situó en el centro de la escala ideológica.

Se continúa con la presentación de las conclusiones obtenidas tras la revisión de las relaciones encontradas entre las variables dependientes e independientes del estudio. En primera instancia, en el presente año también se mantiene la tendencia, aunque poco marcada, por la cual los encuestados que justificarían un golpe de Estado ante ambas circunstancias se mostrarán en mayor medida en desacuerdo o indiferentes frente a la proposición que la democracia es la mejor forma de gobierno. En el caso de la satisfacción con la democracia, los datos son poco concluyentes. En primer lugar, de forma contraintuitiva, quienes legitimarían un eventual golpe ante mucha delincuencia tienden a encontrarse más satisfechos con la democracia que quienes no aceptarían el quebrantamiento democrático. Sucede lo contrario, sin embargo, en el caso de la legitimación de un golpe frente a mucha corrupción: quienes justificarían la toma de poder militar se sentirán más insatisfechos con la democracia.

Previo a continuar, es necesario recalcar que, al igual que en los tres años anteriores, existe un porcentaje importante de encuestados que justificarían un golpe de Estado y, a la vez, concuerdan con que la democracia es la mejor forma de gobierno o se sienten satisfechos con ella. Nuevamente se presenta la anomalía de los tres años previos por la cual los ciudadanos mantienen dos pensamientos irreconciliables desde el punto de vista teórico y vuelve a proponer la pregunta sobre qué es lo que se entiende en Ecuador como democracia. Todo ello, como ya se lo insistió, merece un estudio previo.

En el 2018, se rompe parcialmente la relación que existía en los tres años previos entre la legitimidad de golpes de Estado militares y la percepción de la situación económica. En primer lugar, sí se puede evidenciar que los encuestados que justificarían una toma de poder militar tenderán a evaluar de peor forma la situación económica nacional. Los datos se vuelven poco concluyentes en lo referente a evaluación de la situación personal. En primer lugar, y de forma contraintuitiva, quienes legitimarían un golpe frente a mucha delincuencia evaluarán de mejor forma su situación que quienes no. En el caso de la segunda variable dependiente, los datos arrojan que las evaluaciones positivas y negativas de la situación económica personal son mayores entre quienes legitimarían un golpe. Cabe recalcar que, por primera vez, en ninguno de los cuatro casos se da relaciones estadísticamente significativas.

Al respecto de las orientaciones hacia la política, también se dan relaciones poco claras y concluyentes. En el caso del interés hacia la política, quienes justificarían un golpe tenderán a responder en menor medida que tienen mucho interés por la política y nada de interés en la política que quienes no justificarían el golpe. En el caso del conocimiento de la política, los resultados son más concluyentes y marcan que quienes legitimarían una toma de poder militar responderán en menor medida entender bien los asuntos políticos que quienes no aceptarían tal quebrantamiento democrático. Algo similar ocurre en el caso de las percepciones hacia la corrupción. En este sentido, quienes justifican un golpe de Estado frente a mucha delincuencia percibirán que la corrupción está más generalizada entre funcionarios públicos que quienes no legitimarían un golpe. Sucede lo contrario, paradójicamente, en el caso de la legitimidad de un golpe frente a mucha corrupción. En el caso de la percepción de generalización del problema entre políticos, los resultados también marcan tendencias poco concluyentes.

En lo referente a orientaciones hacia los gobernantes, se mantiene presente la tendencia por la cual quienes legitimarían un golpe de Estado en los dos casos posibles evaluarán de peor forma el trabajo del presidente que quienes no aceptarían una eventual

toma de poder por parte de los militares. Los datos se vuelven menos claros al respecto de la percepción del interés de los gobernantes por la opinión ciudadana. En el caso de la primera variable dependiente, quienes justifican un golpe de Estado percibirán en mayor medida que a los gobernantes no les interesa su opinión y, a la vez, que sí les interesa la opinión ciudadana, dándose la mayor diferencia en las percepciones negativa. En la segunda variable dependiente, la tendencia es mayormente contraintuitiva y marca que quienes no legitimarían un golpe percibirán en mayor medida que a los gobernantes no les interesa su opinión.

En el presente año, los resultados en torno a la relación entre variables dependientes y orientaciones a instituciones tampoco fueron concluyentes y, en parte de los casos, contraintuitivos desde la teoría. En primer lugar, en este año, los encuestados que justificarían un golpe de Estado ante mucha delincuencia evaluarán de mejor manera la protección de derechos por parte del sistema político, paradójicamente. Sucede lo contrario en el caso de la segunda variable dependiente, en tanto quienes justificarían un eventual golpe frente a mucha corrupción evaluarán de peor forma la protección de derechos básicos ciudadanos. Asimismo, las encuestas también arrojan que quienes legitimarían una toma de poder militar tenderán a responder en mayor medida que respetan las instituciones, de forma inherentemente contradictoria, levantando nuevamente la cuestión sobre el significado que la ciudadanía otorga al término de institución. Finalmente, en el tema del orgullo, las tendencias tampoco son claras y muestran resultados contradictorios entre los casos de las dos variables dependientes.

Los resultados también son dispares y variados en el caso de la confianza hacia instituciones específicas del país. En primer lugar, y de forma intuitiva, se obtiene que quienes justificarían un golpe de Estado militar tenderán a mostrar mayores niveles de confianza en las Fuerzas Armadas que quienes no legitimarían tal quebrantamiento. Lo mismo sucede en el caso de la Presidencia: quienes aceptarían un golpe tienden a mostrarse menos confiados de la máxima autoridad ejecutiva. Es decir, se vuelve a obtener la relación de años anteriores que muestra que se tiende a evaluar la deseabilidad de un quebrantamiento democrático con base en las orientaciones hacia estas instituciones.

Las tendencias son contraintuitivas, aunque menos marcadas, en el caso de la Asamblea Nacional. En este sentido, y rompiendo la lógica del año previo, quienes legitimarían un golpe militar frente a mucha delincuencia tenderán a responder en mayor medida que confían en el Legislativo que quienes no aceptarían un eventual golpe. Sucede lo contrario en el caso

de legitimidad frente a mucha corrupción. En el caso de los partidos políticos, contra intuitivamente, quienes justificarían una toma de poder militar confiarán en mayor medida en los partidos políticos que quienes no legitimarían tal quebrantamiento democrático.

Al respecto de la confianza hacia la administración de justicia, también se muestran resultados contradictorios entre variables dependientes. En el caso de la legitimidad de un eventual golpe militar ante mucha delincuencia, quienes justificarían el quebrantamiento democrático se mostrarán más desconfiados del sistema de justicia. Al contrario, quienes justificarían una toma de poder militar frente a mucha corrupción, se mostrarán más confiados en que las cortes garantizan un juicio justo. En referencia a las elecciones, los resultados son más claros e intuitivos, en tanto marcan que los encuestados que justificarían un golpe tienden a desconfiar más de los procesos electorales. Finalmente, en el presente año tampoco se puede obtener una conclusión clara en torno a la relación entre variables dependientes y autopercepciones ideológicas, en tanto los resultados son contrarios entre ambos casos.

En concordancia con los resultados dispares mostrados a lo largo del presente año, ninguna variable independiente obtuvo dos relaciones estadísticamente significativas con ambas variables dependientes. Por el contrario, la mayoría de variables independientes no obtuvieron una relación estadísticamente significativa con ninguna de las dos variables dependientes. Estas fueron: legitimidad de la democracia, satisfacción con la democracia, percepción de la situación económica nacional y personal, percepción de corrupción de políticos, evaluación del trabajo del presidente, percepción de interés de gobernantes por la opinión ciudadana, respeto y orgullo por las instituciones, confianza en el Legislativo, confianza en los partidos políticos, confianza en la administración de justicia, confianza en las elecciones y, finalmente, la ideología. A su vez, las variables que obtuvieron una relación estadísticamente significativa en uno de los casos son: interés por la política, conocimiento de la política, percepción de corrupción entre funcionarios públicos, percepción de protección de derechos y confianza en las Fuerzas Armadas. Por último, la confianza en la Presidencia sin agrupar no obtiene ninguna relación estadísticamente significativa; y, agrupando los datos, la obtiene con una sola variable dependiente.

Finalmente, cabe realizar una serie de consideraciones. El 2018 evidencia una simultaneidad de resultados socioeconómicos variados, aunque bajos al respecto de los dos primeros años de estudio, un aumento en la legitimidad hacia golpes de Estado militares y una serie de resultados variados en torno a la cultura política general del país. En este año,

también se puede observar como la deseabilidad de un golpe está relacionada con las orientaciones hacia instituciones como la Presidencia por sobre de las percepciones hacia la democracia como tal, al igual que en los tres años de estudio previo. Lo que marca un paralelismo, es el rompimiento de la tendencia dada en los tres años previo marcada en la relación entre evaluaciones de la situación económica y la legitimidad de golpes de Estado. Igualmente, es remarcable que el presente año se caracteriza por resultados dispares y contradictorios entre variables, distanciándose a nivel general de las tendencias encontradas en años previos. Una vez revisados los datos de los cuatro años en cuestión, se prosigue con el último capítulo empírico y la comparación de resultados a fin de obtener las conclusiones pertinentes.

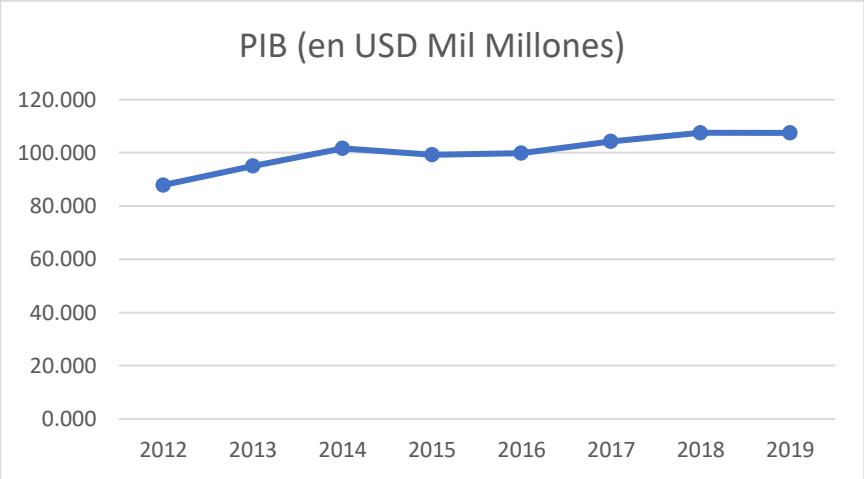
EVOLUCIÓN DE LA LEGITIMIDAD DE GOLPES DE ESTADO EN LA CULTURA POLÍTICA ECUATORIANA Y TENDENCIAS EVIDENCIADAS A LO LARGO DEL ESTUDIO.

1. Tendencias económicas entre 2012 y 2018.

Como se lo puede evidenciar, Ecuador tuvo, a lo largo de los cuatro años de estudio, resultados económicos variados. De 2012 a 2014, el país experimentó crecimiento económico, reducción de desigualdad por ingresos y una mejora general del desarrollo humano. Sin embargo, a partir del año 2015, coincidente con la caída del precio del petróleo, el crecimiento económico desaceleró e inclusive se puede observar decrecimiento económico. A continuación, se presentará la evolución de los principales indicadores socioeconómicos, admitiendo que no son los únicos que se pueden tomar para un análisis de la realidad nacional y que han sido escogidos por motivos prácticos.

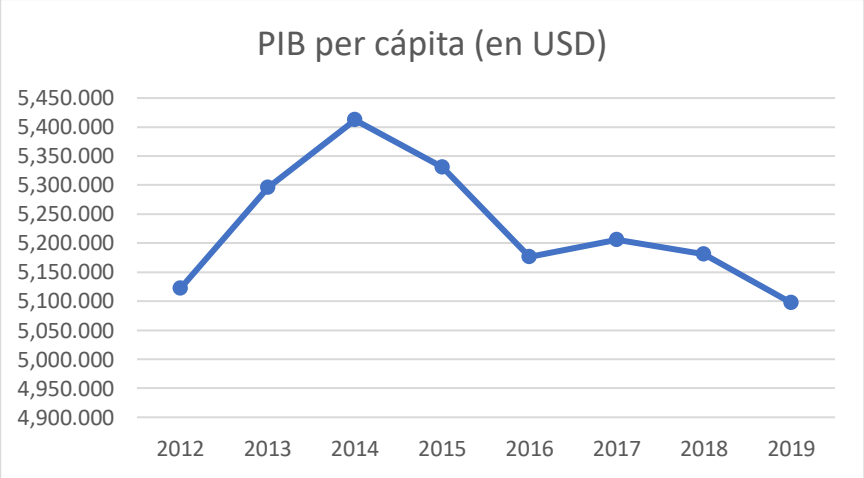
Los primeros indicadores a presentar son los relativos al Producto Interno Bruto. El Gráfico 1 presenta la evolución del PIB en el Ecuador, el Gráfico 2 evidencia la progresión del PIB per cápita del país y el Gráfico 3 muestra el crecimiento de la producción nacional a lo largo de los años de estudio. Como se puede evidenciar en el primer gráfico, la economía ecuatoriana aumentó su producción de forma sostenida hasta el año 2014, decreció en 2015, se recuperó en el 2016 y presentó una progresión más sostenida. Sin embargo, la afectación producida en la economía del país se vuelve más evidente en el segundo y tercer gráfico. A nivel per cápita, el PIB presentó un crecimiento considerable desde el 2012 hasta el 2014; a partir de ese año, el indicador decreció hasta llegar en 2016 a niveles ligeramente superiores a los del 2012. Se presencia una leve recuperación en 2017 y, a partir del 2018, el PIB per cápita vuelve a decrecer hasta llegar a niveles menores a los del 2012. Por su parte, se presencia la misma tendencia en el crecimiento: el Ecuador mantenía tasas de crecimiento económico mayores al 3% hasta el 2014; en 2015 el crecimiento fue casi nulo y en el 2016, el país decreció. Se presenta una leve mejora en 2017 que no se mantiene en 2018 y 2019.

Gráfico 1: PIB del Ecuador en miles de millones de dólares.



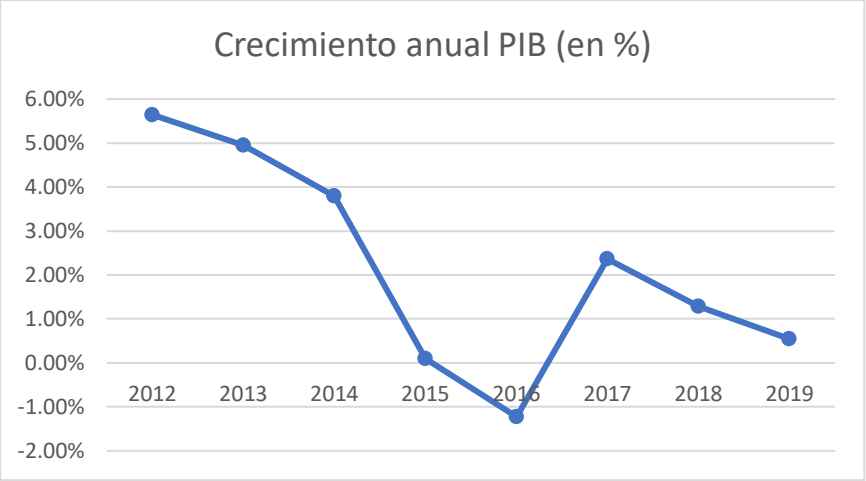
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial, 2020.

Gráfico 2: PIB per cápita del Ecuador en dólares.



Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial, 2020.

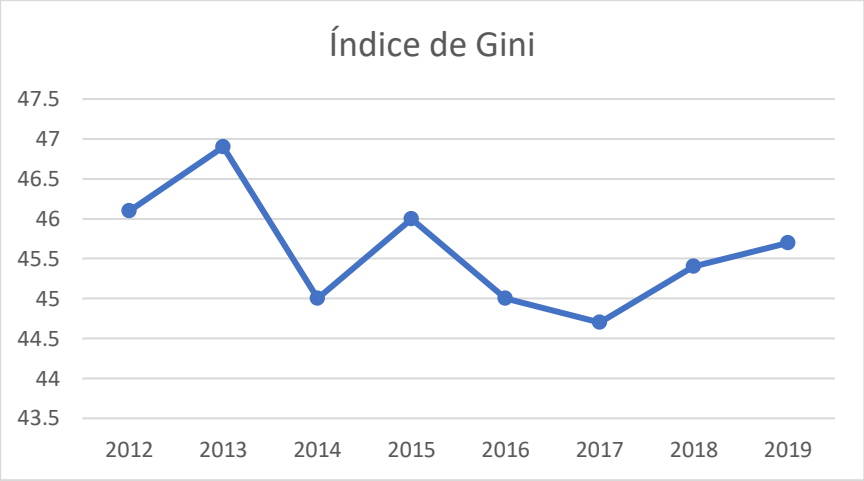
Gráfico 3: Crecimiento anual del PIB del Ecuador.



Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial, 2020.

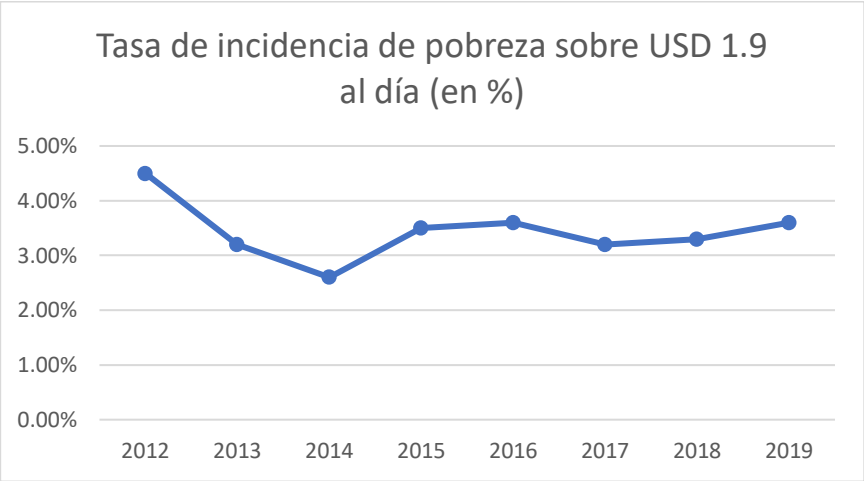
Resultados similares se obtienen al revisar la evolución de los indicadores sociales en el país. El Gráfico 4 indica la progresión del Índice de Gini en Ecuador, el Gráfico 5 presenta la tasa de incidencia de la pobreza y, finalmente, el Gráfico 6 evidencia el Índice de Desarrollo Humano que tuvo el país. En primer lugar, la desigualdad por ingresos muestra resultados dispares. El Índice de Gini crece de 2012 a 2013 y presenta una caída más considerable en el 2014 para volver a crecer el año siguiente. A partir del 2015, la desigualdad vuelve a decrecer hasta llegar a un mínimo en 2017 y vuelve a crecer en 2018 y 2019. La tasa de la incidencia de pobreza sobre USD 1,9 al día es más estable y evidencia una mejora de 2012 a 2014; de 2015 a 2016 aumenta la incidencia de pobreza; en 2017, se experimenta una ligera reducción que no se mantiene, en tanto en 2018 y 2019 el problema vuelve a aumentar. Con el Índice de Desarrollo Humano sucede algo parecido: el mismo crece sostenida y considerablemente de 2012 a 2015, decrece de 2015 a 2016, aumenta en 2017 y presenta pocas variaciones desde entonces.

Gráfico 4: Índice de Gini en Ecuador.



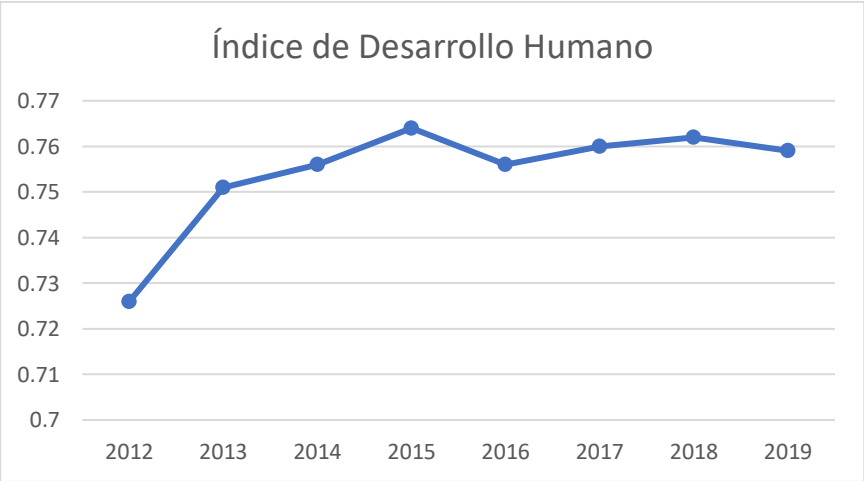
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial, 2020.

Gráfico 5: Tasa de incidencia en la pobreza.



Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial, 2020.

Gráfico 6: Índice de Desarrollo Humano.



Fuente: Elaboración propia a partir de PNUD, 2019

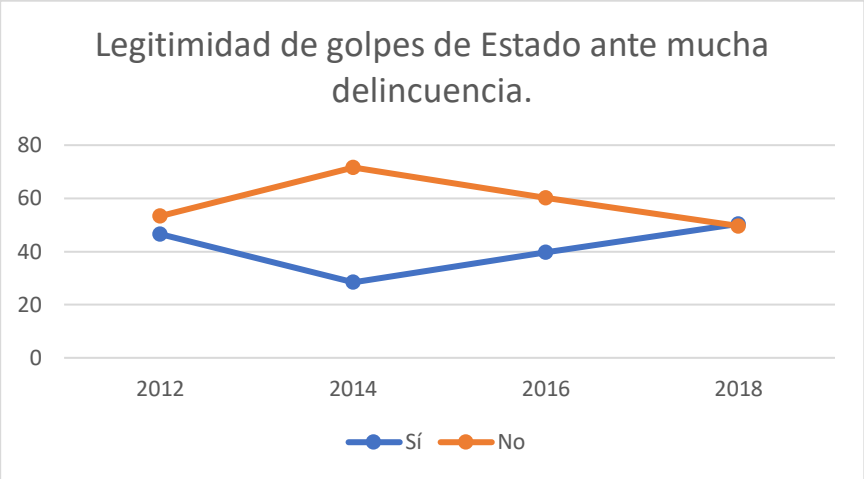
En suma, los datos muestran que el periodo de 2015 a 2016 representa un quiebre en los buenos resultados socioeconómicos que el Ecuador sostenía desde el inicio de los años de estudio. A nivel general, el 2014 fue el mejor año del país entre los que se representan y, a partir de ahí, los resultados económicos decrecen o mantienen niveles estables y relativamente bajos. Cabe mencionar que esta realidad negativa se da durante los últimos años de gobierno de Rafael Correa y el inicio del gobierno de Lenín Moreno. Por otro lado, como ya se lo mencionó antes, a partir de 2016 la situación democrática nacional fue mejor evaluada (The Economist, 2020). Como se lo verá, intuitivamente, el año 2014 también fue el mejor en lo que a orientaciones ciudadanas respecta y, a partir de ese año, la cultura política ecuatoriana se deterioró.

2. La evolución de las orientaciones ciudadanas en el Ecuador.

Los resultados relativos a la cultura política del Ecuador también presentaron variaciones a lo largo de los años de estudio. El Gráfico 7 muestra la progresión de la legitimidad de golpes de Estado ante mucha delincuencia y el Gráfico 8 presenta la aceptación de un eventual golpe ante mucha corrupción. Es relevante mencionar que, en el caso de la aceptación de una toma de poder militar ante mucha delincuencia se pueden observar la presencia de coincidencias con los resultados económicos presentados en la sección previa. El porcentaje de quienes aceptarían un golpe reduce de 2012 a 2014, para volver a crecer en 2016 y 2018. Por su parte, de forma análoga, las personas que no justificarían tal quebrantamiento democrático aumentan de 2012 a 2014 y vuelven a decrecer en 2016 y 2018.

Es decir que, la aceptación de golpes de Estado disminuye a su nivel mínimo en el año de mejor desempeño socioeconómico del país y comienza a aumentar en conjunto con un deterioro de la economía nacional, a partir del 2014. Por último, también cabe mencionar que la aceptación de un golpe militar llegó, incluso, a representar la mayoría en 2018. En todos los años previos, a pesar de ser una minoría quienes justificarían un eventual golpe, los porcentajes son considerables si se considera que se aceptaría un eventual quebrantamiento de la democracia, un sistema que necesita de la aceptación ciudadana para mantenerse y perfeccionarse.

Gráfico 7: Legitimidad de golpes de Estado militar ante mucha delincuencia.

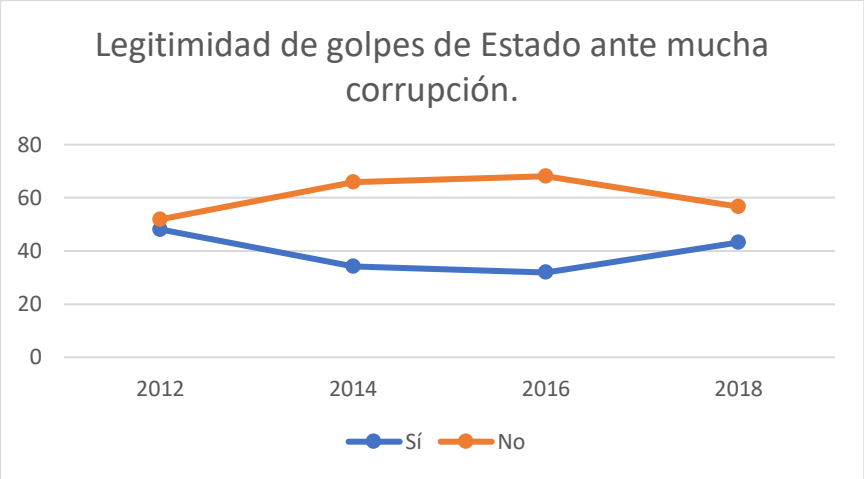


Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

Algo similar se puede observar en el Gráfico 8, aunque de manera más atenuada. En este caso, de 2012 a 2014 se da una reducción considerable del porcentaje de personas que legitimarían un golpe de Estado militar ante mucha corrupción, de 2014 a 2016 el porcentaje de aceptación disminuye ligeramente y, para 2018 aumenta considerablemente. Análogamente, el porcentaje de encuestados que no aceptarían un eventual golpe militar ante esta circunstancia aumentó considerablemente de 2012 a 2014 y ligeramente de 2014 a 2016, y procede a decrecer en 2018. Incluso, es relevante mencionar que, en el caso de esta variable, en el 2018 se puede evidenciar que la mayoría de encuestados respondió legitimar un quebrantamiento democrático, representando un gran riesgo para el sistema democrático que necesita de la aceptación ciudadana para su mantenimiento.

Viendo los datos en conjunto con la profesión del desempeño económico del país, se puede ver un evidente deterioro de orientaciones cívicas a partir del 2014, al mismo tiempo de los malos resultados ya mencionados previamente. Al igual que con la anterior variable, si bien en todos los años la aceptación de un eventual golpe militar no constituye una mayoría, el porcentaje se mantiene alto para una justificación de un golpe militar.

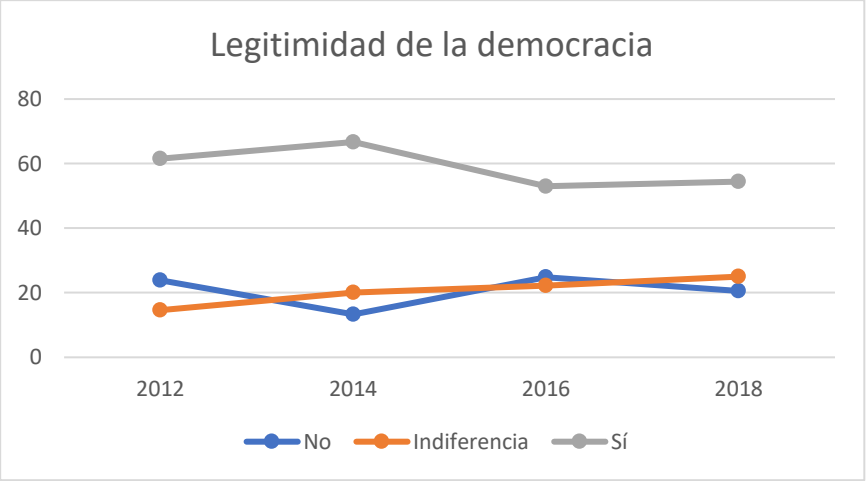
Gráfico 8: Legitimidad de golpes de Estado militar ante mucha corrupción.



Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

Por su parte, el Gráfico 9 y el Gráfico 10 presentan la evolución de las orientaciones hacia la democracia en Ecuador, el primero presentando la legitimidad del sistema democrático y el segundo, la satisfacción con el mismo. En Ecuador, se puede evidenciar que, de 2012 a 2014, el porcentaje de encuestados que afirmaba que la democracia es la mejor forma de gobierno aumentó y, así como en las dos variables previas, a partir de 2014 la legitimidad de la democracia disminuyó; de 2016 a 2018, la legitimidad aumenta levemente. Asimismo, la indiferencia crece de forma sostenida. Finalmente, el porcentaje de personas que no están de acuerdo con que la democracia sea la mejor forma de gobierno disminuye de 2012 a 2014, en conjunto con una reducción de legitimidad de golpes militares y una mejora de la situación económica; aumenta de 2014 a 2016 y decrece levemente de 2016 a 2018. Se puede, así, evidenciar correlaciones con las variables dependientes y los resultados socioeconómicos del país. Es relevante mencionar, finalmente, que en todos los años de estudio, y a pesar de la disminución antes mencionada, la amplia mayoría estableció que la democracia es la mejor forma de gobierno.

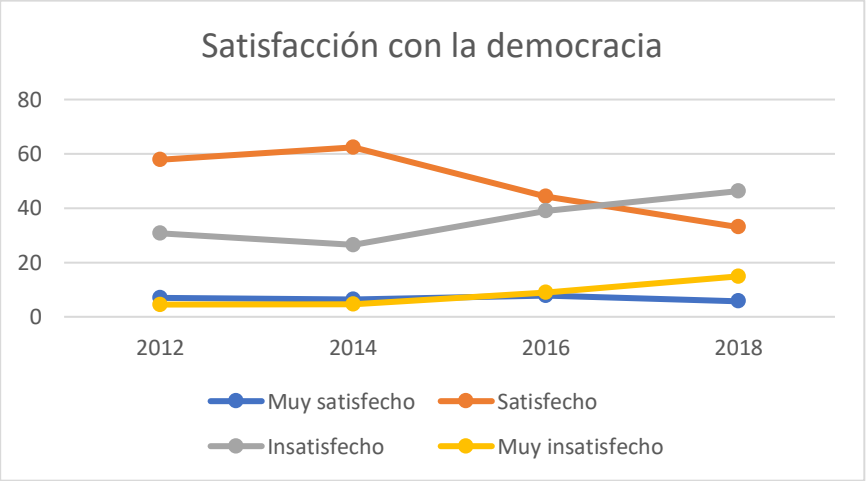
Gráfico 9: Legitimidad de la democracia.



Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

Asimismo, el porcentaje de personas satisfechas con el funcionamiento del sistema democrático aumenta de 2012 a 2014 y, a partir de dicho año, comienza a decrecer. Del mismo modo, la insatisfacción con la democracia disminuyó de 2012 a 2014, y comienza a aumentar sostenidamente a partir de ese entonces. En el caso del porcentaje de personas que se sienten muy satisfechos con la democracia, se puede observar una tendencia al decrecimiento y, en el caso del porcentaje de encuestados que se declaran muy insatisfechos con el sistema, se presenta lo inverso. Es decir, la relación planteada entre esta variable y la legitimidad de golpes de Estado militares se presenta en los casos de los encuestados que declaran encontrarse satisfechos e insatisfechos con la democracia.

Gráfico 10: Satisfacción con la democracia.

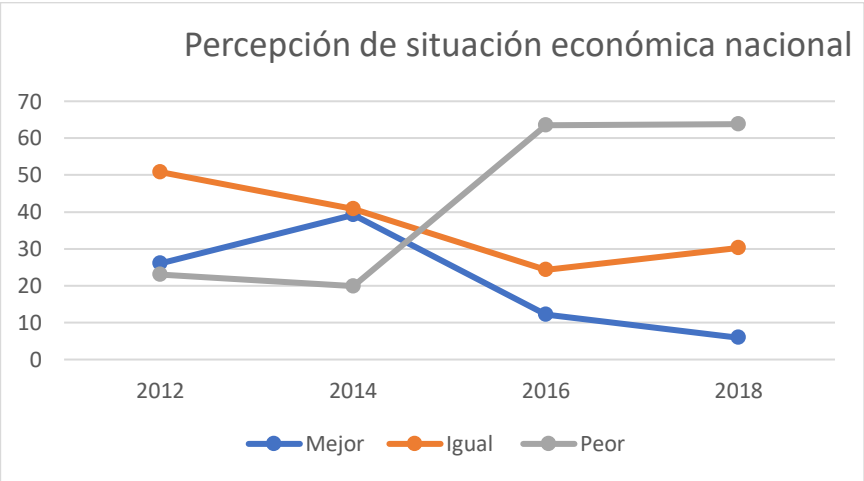


Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

Por su parte, los Gráficos 11 y 12 representan la percepción de la situación económica nacional y personal, respectivamente. En ambos casos, se puede observar cómo el año 2014 también representa un quiebre al respecto de las orientaciones positivas hacia la realidad económica, en concordancia con la realidad descrita en el primer apartado de este capítulo. De 2012 a 2014, aumentó el porcentaje de encuestados que percibió la situación como mejor, siendo el mayor aumento el dado en el caso de la percepción de la situación nacional. A partir de ese año, las evaluaciones positivas decrecieron tanto en 2016 como en 2018 y, análogamente, la evaluación negativa de la situación aumentó hasta sobrepasar, en ambos casos, las evaluaciones positivas e iguales.

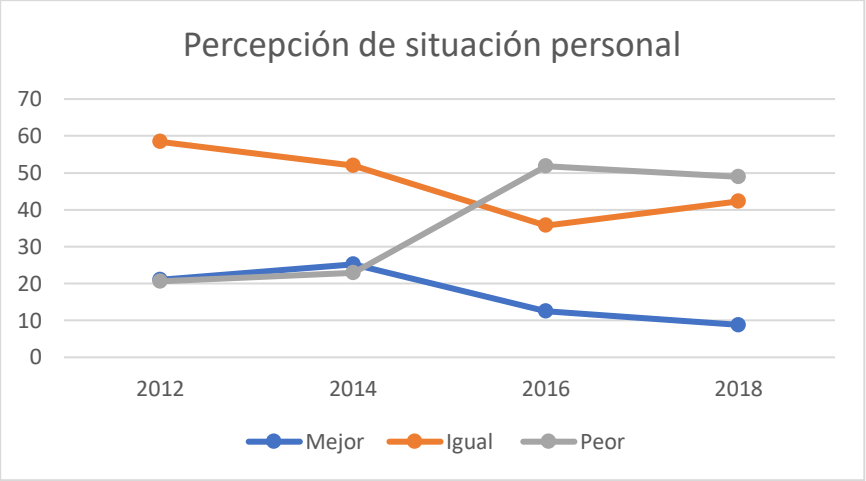
En los dos casos, el porcentaje de encuestados que mencionó que la situación era igual decreció de 2012 a 2016 y creció ligeramente en 2018. En suma, en concordancia con lo revisado previamente, el 2014 se constituye como un año en el cual las evaluaciones de la realidad económica son peores, en conjunto con afectaciones reales a la economía, mayor legitimidad de golpes de Estado militares y peores resultados en torno a las orientaciones hacia la democracia.

Gráfico 11: Percepción de la situación económica nacional.



Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

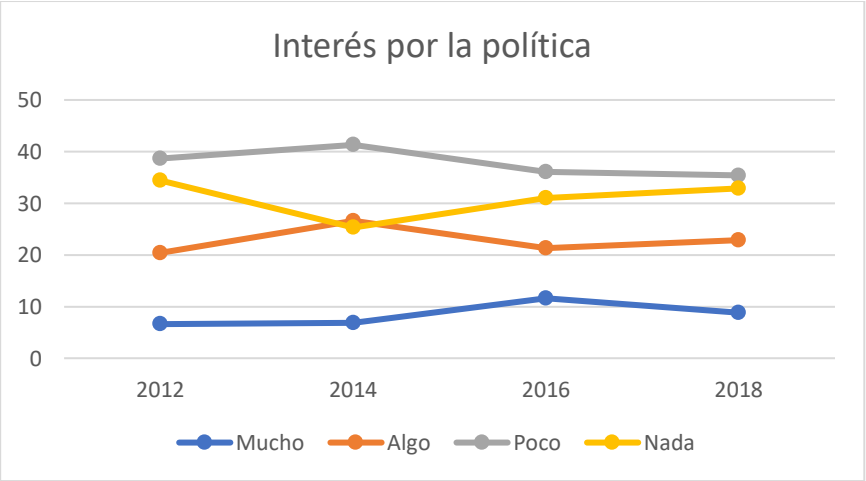
Gráfico 12: Percepción de la situación económica personal.



Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

El Gráfico 13 y 14 muestran las orientaciones hacia la política. En estos casos no se puede observar una simultaneidad clara con las variables dependientes, como en los casos previos. En el caso del interés por la política, se debe mencionar que durante todos los años tomados en este estudio predominó un rechazo por el concepto. Si bien en 2014 aumentó el porcentaje de personas que declararon que no tenían ningún interés en la política, también aumentó la cantidad de encuestados que declararon tener mucho interés en la misma. Por otro lado, de 2012 a 2014 aumenta el porcentaje de encuestados que declaró tener algo de interés por la política, disminuyó de 2014 a 2016 y aumentó levemente en 2018. El porcentaje de quienes declararon tener poco interés por la política aumentó de 2012 a 2014 y comenzó a disminuir a partir de ese año. No existe relación clara, por ende, con las variables dependientes.

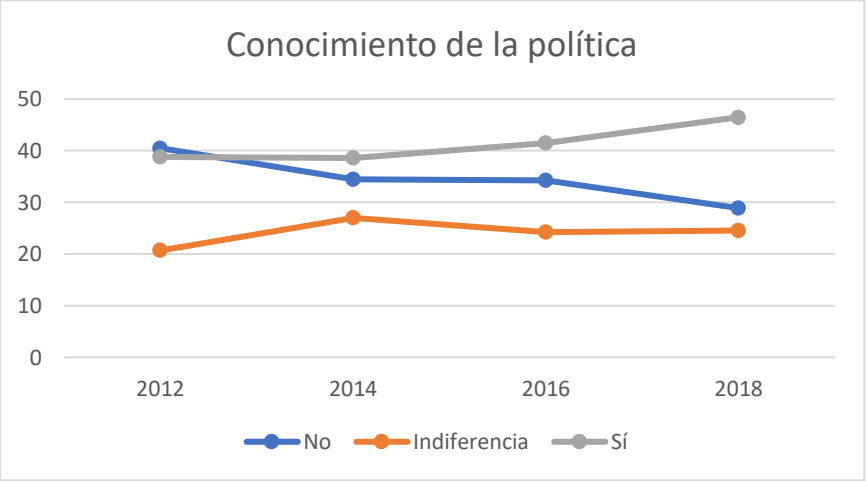
Gráfico 13: Interés por la política.



Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

Algo similar ocurre en el caso del conocimiento de la política. Durante los cuatro años aumentó el porcentaje de encuestados que estableció entender bien los asuntos políticos y decreció el porcentaje de quienes declararon no conocer sobre la política. Quienes se mostraron indiferentes aumentaron de 2012 a 2014, y a partir de ese año comenzaron a disminuir. En este caso tampoco hay una relación clara con la legitimidad de golpes de Estado militares.

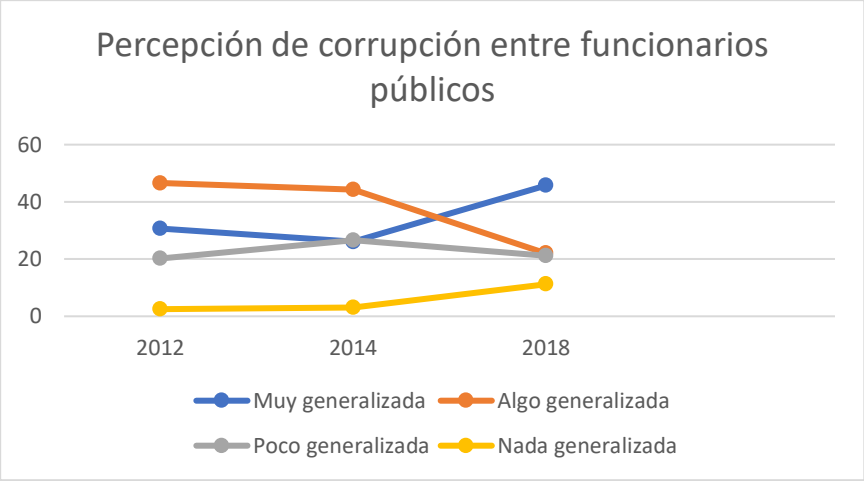
Gráfico 14: Conocimiento de la política.



Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

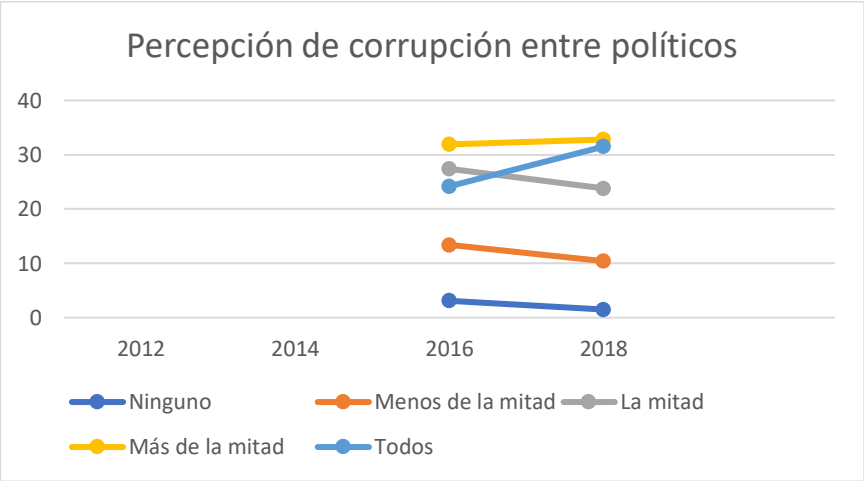
Asimismo, se da la progresión de la percepción de corrupción. Los Gráficos 15 y 16 muestran la evolución de las respuestas en torno a la generalización de dicho problema entre funcionarios públicos y políticos, respectivamente. De los mismos, se puede evidenciar que no hay una relación clara con las variables dependientes. A partir de 2014, la percepción de que la corrupción estaba muy generalizada aumentó; pero también aumentó la percepción de que el problema no estaba nada generalizado. Tanto los resultados de que el problema está muy generalizado y nada generalizado tienen comportamientos similares. De todas formas, siempre perduró la visión por la cual la corrupción estaba generalizada entre funcionarios públicos. Por su parte, la percepción de corrupción entre políticos muestra poca variación entre 2016 y 2018, siendo el cambio más significativo el aumento de la percepción por la cual se establece que todos los políticos son corruptos y la disminución del porcentaje de encuestados que establecieron que la mitad de políticos son corruptos. En sí, también se mantiene una percepción de que el problema está generalizado entre políticos, pero no hay relación clara con la legitimidad de golpes de Estado militares.

Gráfico 15: Percepción de corrupción entre funcionarios públicos.



Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

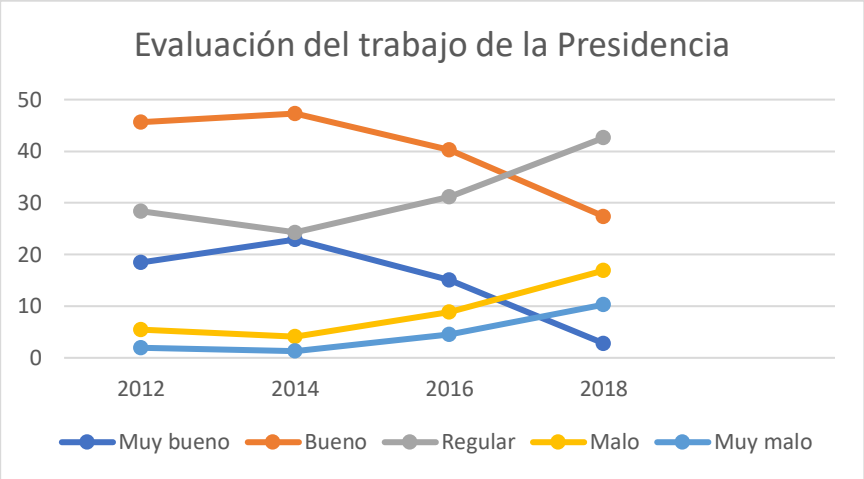
Gráfico 16: Percepción de corrupción entre políticos.



Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

El Gráfico 17, por su parte, presenta la evolución del trabajo de la Presidencia en Ecuador. Este gráfico evidencia cómo las evaluaciones positivas, las que establecen que el trabajo del presidente es bueno y muy bueno, crecen de 2012 a 2014 y, a partir de ese año, comienzan a decrecer de forma considerable. Al contrario, las evaluación regular y las negativas, malo y muy malo, decrecen de 2012 a 2014 y, a partir de ese año, vuelven a crecer de forma considerable. Incluso, en el año 2012 y 2014, las evaluaciones positivas eran ampliamente mayores que las negativas; en el 2016 y 2018, por su parte, la tendencia se revierte. En suma, se puede evidenciar que existe una correlación con la legitimidad de golpes de Estado y, además, los indicadores económicos, configurando el año 2014 como un quiebre en las orientaciones positivas.

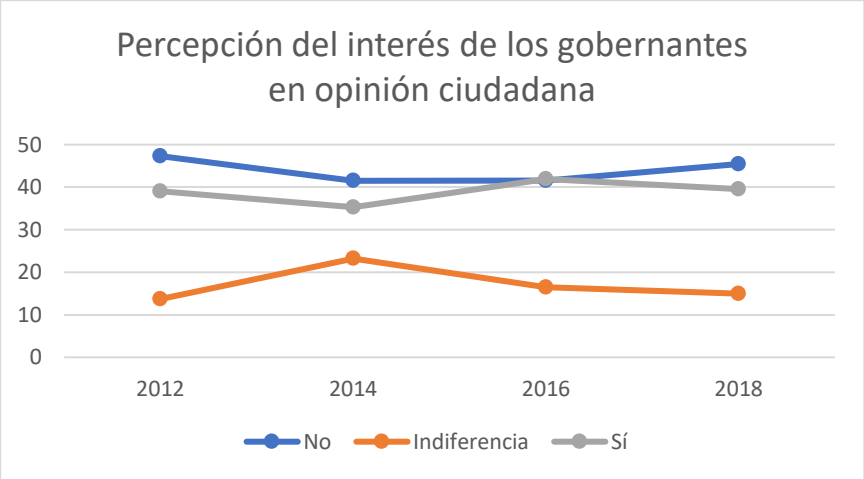
Gráfico 17: Evaluación del trabajo de la Presidencia.



Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

Por su parte, el Gráfico 18, por su parte, muestra las percepciones ciudadanas que evalúan si a los gobernantes les interesa la opinión de los ciudadanos. En este caso tampoco se puede evidenciar una relación clara, en tanto las evaluaciones negativas se comportan de forma similar a las positivas. De 2012 a 2014, el porcentaje de encuestados que declaró que a los gobernantes les interesa su opinión disminuyó. De 2016 a 2017, aumentó el porcentaje que mencionó que los gobernantes sí se interesan por su opinión, contrario a lo sería intuitivo; por su parte, quienes establecieron que a los gobernantes no les interesa la opinión ciudadana no variaron en gran medida. Finalmente, de 2016 a 2018, disminuye el porcentaje de personas que consideran que a los gobernantes les interesa su opinión y aumenta el porcentaje de quienes dicen lo contrario. A nivel general, la percepción más generalizada es aquella que establece que quienes gobiernan el país no se interesan por lo que el pueblo piense. En el caso de las respuestas indiferentes, aumentaron de 2012 a 2014 y, a partir de ese año, disminuyeron. Ello podría significar que aumentó la polarización en torno al tema, pero no evidencia una relación clara con la legitimidad de golpes de Estado.

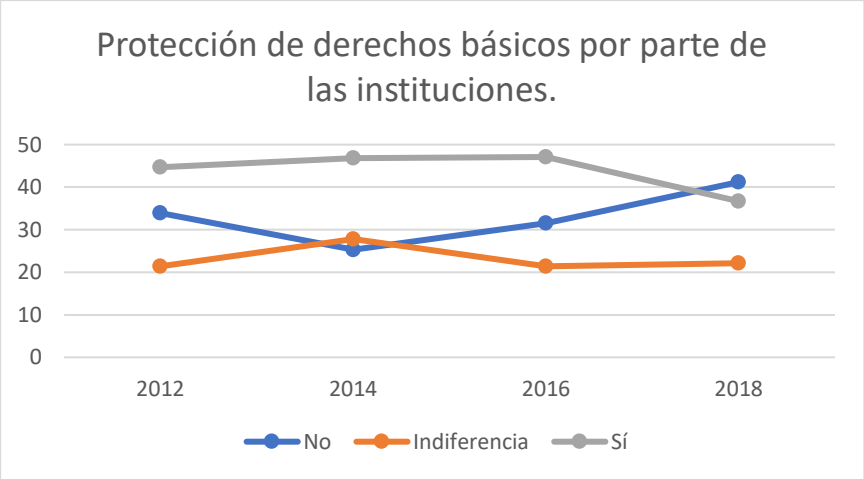
Gráfico 18: Percepción de que a los gobernantes les interesa la opinión ciudadana.



Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

A continuación, se presentan la evolución de las orientaciones hacia las instituciones. El Gráfico 19 muestra la percepción de que los derechos básicos están protegidos por las instituciones. En este caso, se puede evidenciar cierta relación con las variables dependientes. De 2012 a 2014, disminuyó el porcentaje de encuestados que percibieron que los derechos básicos no están protegidos y, a partir de ese año, aumentó de forma considerable. Lo contrario sucedió con las respuestas indiferentes: aumentaron entre los dos primeros dos años de estudio y comenzaron a disminuir de forma sostenida a partir de ese momento. Lo que vale destacar es el comportamiento de las evaluaciones positivas: aumentan, previsiblemente, de 2012 a 2014, y tienen un ligero aumento en 2016; a partir de ese momento, disminuye su porcentaje. En suma, existe una relación en tanto las orientaciones negativas aumentan y las positivas disminuyen a partir del 2014 o 2016, en conjunto con lo que sucede con las variables dependientes. A nivel general, en los tres primeros años de estudio la posición mayoritaria recalca que los derechos básicos se encuentran protegidos; en el 2018, se invierte la tendencia.

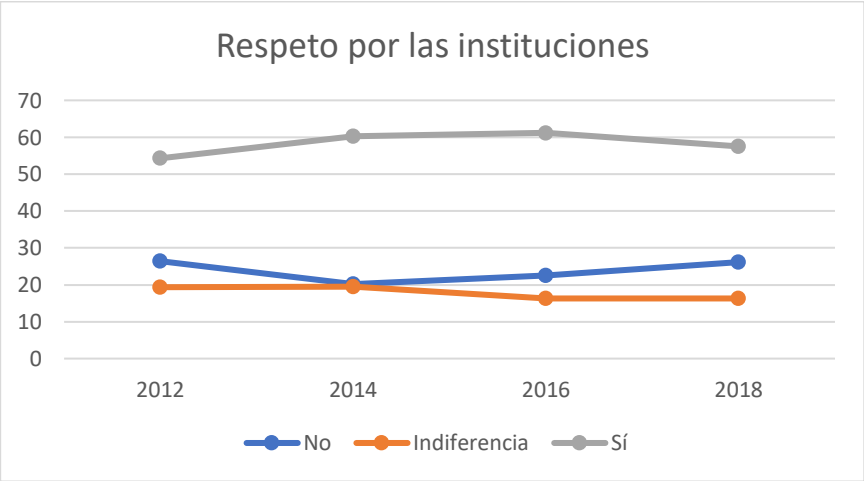
Gráfico 19: Percepción de que los derechos básicos están protegidos por las instituciones.



Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

Por su parte, el Gráfico 20 representa la evolución del respeto por las instituciones políticas del país. En este caso, existe cierta relación, pero no es totalmente clara. El porcentaje de personas que establecieron que las instituciones del país merecen respeto aumenta de 2012 a 2014, previsiblemente, y se estabiliza en 2016, para reducirse ligeramente en 2018. Por otro lado, el porcentaje de encuestados que declara que no respetan las instituciones disminuye de 2012 a 2014 y, a partir de ese año comienza a crecer. Las respuestas indiferentes no presentan variaciones amplias. A nivel general, la posición mayoritaria reside en aquellos que establecen respetar las instituciones.

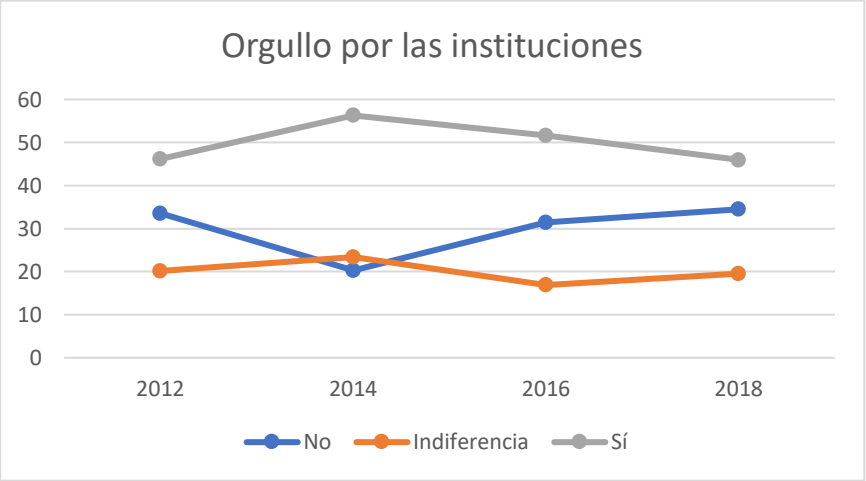
Gráfico 20: Respeto por las instituciones.



Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

El caso del orgullo por las instituciones es más marcado, como lo muestra el Gráfico 21. En esta variable se puede evidenciar cierta relación con las variables dependientes. De 2012 a 2014, la cantidad de encuestados que responden sentirse orgullosos de vivir bajo el sistema político ecuatoriano aumenta y, a partir de ese año, comienza a disminuir considerablemente. Por su parte, el porcentaje de quienes dicen que no están orgullosos de las instituciones disminuye de 2012 a 2014 y comienza a aumentar a partir de ese momento. Las respuestas indiferentes tienen un comportamiento más dispar. A nivel general, predomina las orientaciones positivas de orgullo hacia las instituciones del país.

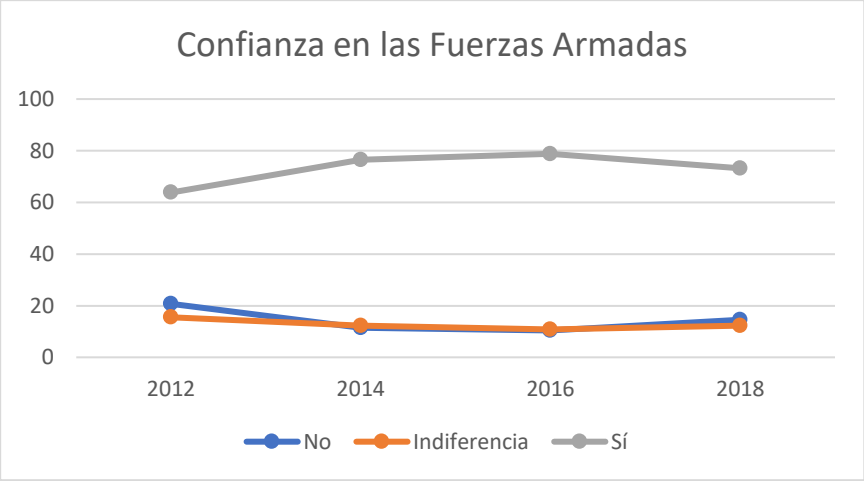
Gráfico 21: Orgullo por las instituciones.



Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

Se prosigue a presentar la evolución de la confianza en instituciones específicas del Ecuador. El Gráfico 22 presenta la progresión de la confianza en las Fuerzas Armadas. En sí, se puede evidenciar los altos niveles de confianza que tiene la ciudadanía ecuatoriana en la institución militar, siendo ésta la más confiada. El cuadro no permite identificar una relación clara con la legitimidad a un golpe de Estado militar. De 2012 a 2016, los niveles de confianza en dicha institución aumentaron y disminuyeron levemente en 2018. Las evaluaciones negativas e indiferentes se comportan de manera similar: Disminuyen de 2012 a 2014, se estabilizan en 2016 y aumentan levemente en 2018.

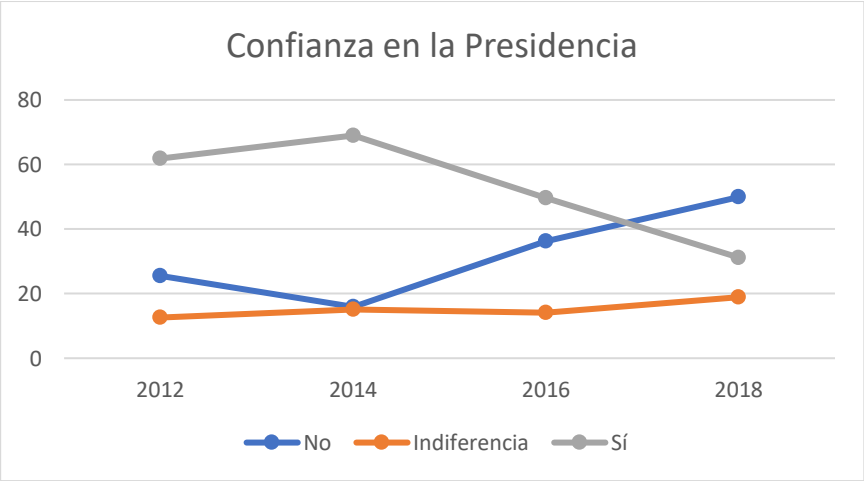
Gráfico 22: Confianza en las Fuerzas Armadas.



Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

Sucede algo diferente en el caso de la confianza en la Presidencia, mostrada en el Gráfico 23. En esta variable sí se puede evidenciar una relación con la legitimidad de un golpe de Estado militar, en concordancia con lo que ocurre con la evaluación del trabajo del presidente. A nivel general, se puede establecer que en los tres primeros años de estudio, coincidiendo con la administración de Rafael Correa, primaron evaluaciones positivas; sucede lo contrario en 2018, con la administración de Lenín Moreno. La confianza en el máximo órgano ejecutivo aumenta, previsiblemente, de 2012 a 2014 y, a partir de ese año, comienza a decrecer de forma sostenida. Al contrario, la desconfianza en el presidente disminuye entre los dos primeros años de estudio y comienza a aumentar considerablemente entre 2014 y 2018. El porcentaje de respuestas indiferentes tienen un comportamiento relativamente estables.

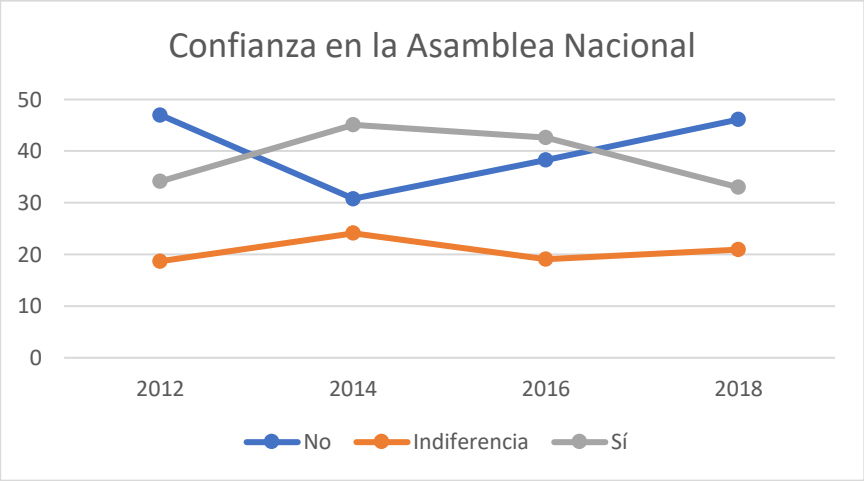
Gráfico 23: Confianza en la Presidencia.



Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

El Gráfico 24 presenta la evolución de la confianza en la Asamblea Nacional y también permite identificar cierta relación con la legitimidad de golpes de Estado militares. Entre 2012 y 2014, aumentó la confianza en el órgano legislativo y, a partir de ese año, dichas orientaciones positivas comienzan a disminuir. Asimismo, la desconfianza en la Asamblea disminuye entre los dos primeros años de estudio y aumenta considerablemente a partir del 2014. Las respuestas indiferentes no presentan, relativamente, variaciones amplias. A nivel general, se puede ver cómo en el 2012 y 2018 predominan las orientaciones negativas en lo que a confianza se refiere por el Legislativo.

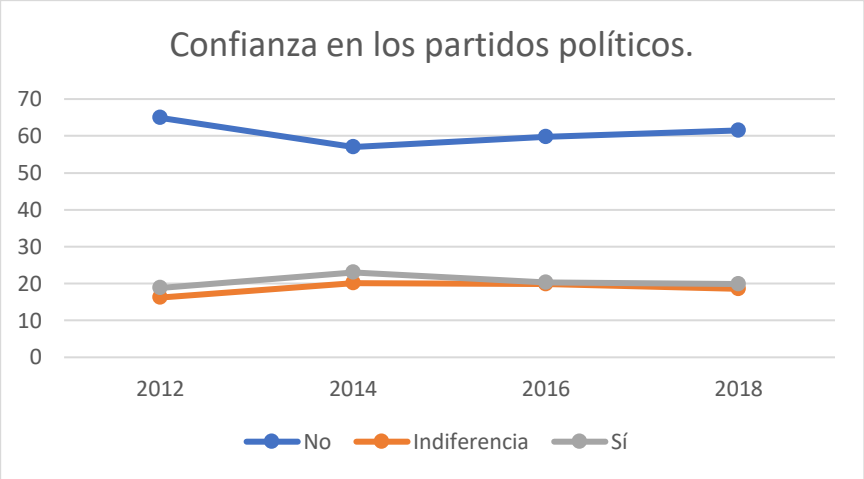
Gráfico 24: Confianza en la Asamblea Nacional.



Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

En el caso de las orientaciones hacia los partidos políticos, se puede evidenciar poca variación a través de los cuatro años de estudio, como lo muestra el Gráfico 25. Predomina la desconfianza de la ciudadanías en las instituciones partidistas y no existe una relación muy clara con las variables dependientes. En los dos primeros años de estudio, la desconfianza en dichas instituciones decrece levemente y, a partir de 2014, comienza a aumentar ligeramente. Las respuestas positivas y e indiferentes se comportan de manera similar, aumentando de 2012 a 2014 y disminuyendo a partir de entonces.

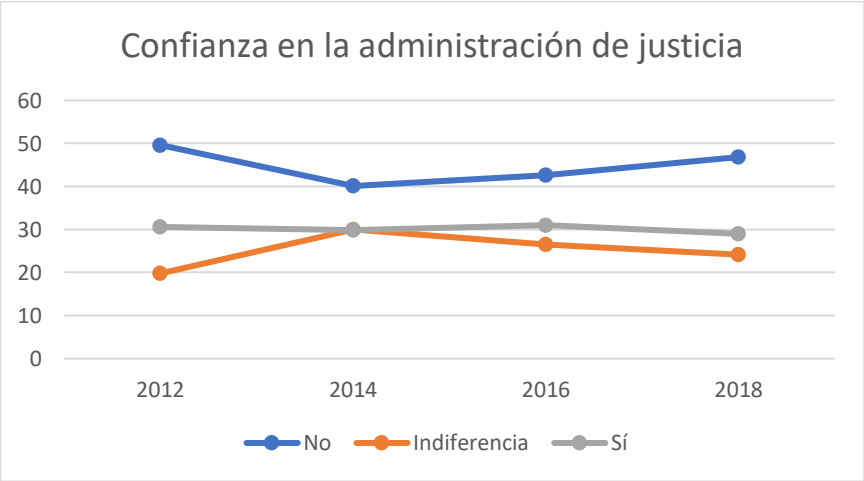
Gráfico 25: Confianza en los partidos políticos.



Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

Por su parte, se puede observar cierta relación entre las variables dependientes y la confianza en la administración de justicia, como se evidencia en el Gráfico 26. La desconfianza en la capacidad de las Cortes para garantizar un juicio justo disminuye de 2012 a 2014 y, a partir de ese año, crece ligeramente pero no alcanza los niveles de desconfianza del 2012. Por su parte, la confianza tiene poca variación y un comportamiento variado. Además, la indiferencia crece entre los dos primeros años de estudio y disminuye a partir de ese entonces. A nivel general, predomina la desconfianza en esta institución y una ligera correlación entre la desconfianza y la legitimidad de golpes de Estado militares.

Gráfico 26: Confianza en la administración de justicia.

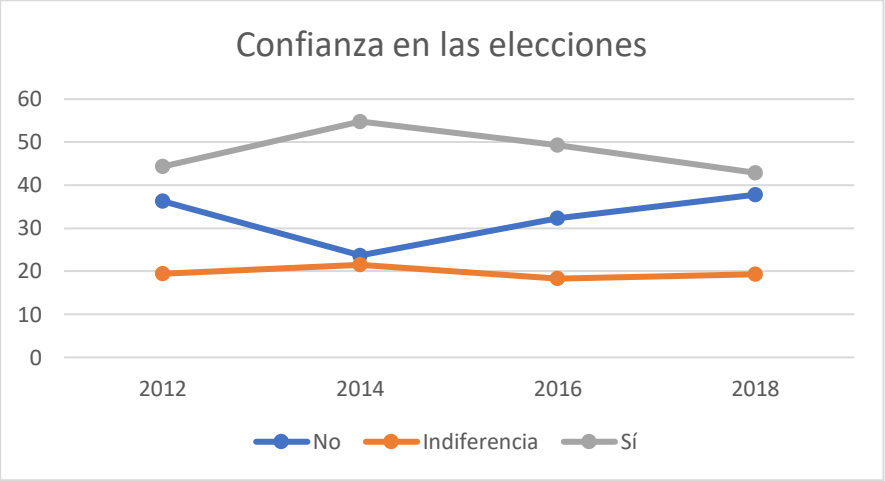


Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

El Gráfico 27 muestra la confianza en las elecciones. En esta variable se puede observar cierta relación con la legitimidad de golpes de Estado militares y, a nivel general,

predomina la confianza en los procesos electorales. De 2012 a 2014, los niveles de confianza en las elecciones aumentan y, a partir de ese año, disminuyen. Al contrario, la desconfianza en los procesos electorales disminuye de 2012 a 2014 y comienza a aumentar entre 2014 y 2018. Es decir, la disminución de la confianza se da en conjunto con el aumento de la legitimidad de los golpes de Estado. Finalmente, el comportamiento indiferente no presenta mayor variación.

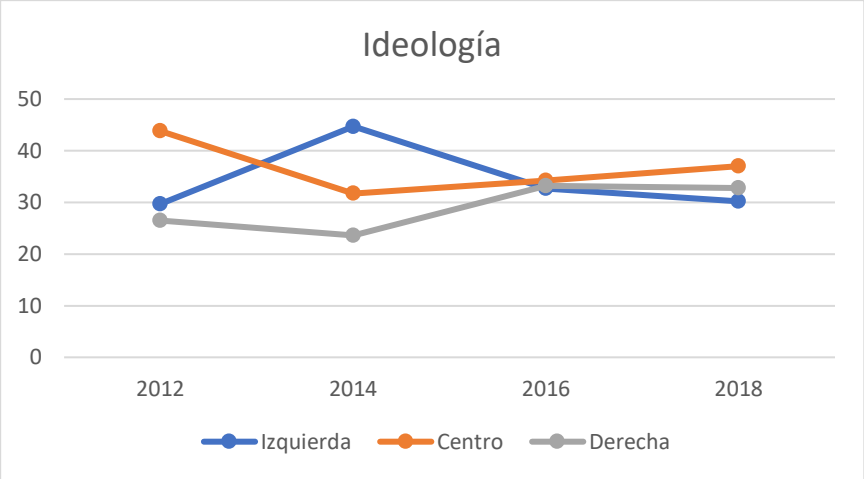
Gráfico 27: Confianza en las elecciones.



Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

Finalmente, el Gráfico 28 expone la evolución de la autopercepción ideológica de la ciudadanía. En sí, se puede ver cierta correlación con las variables dependientes. De 2012 a 2014, aumentó considerablemente el porcentaje de encuestados que se declararon de izquierda y, a partir de ese año, la cifra comienza a reducir. Por su parte, entre los dos primeros años, la cantidad de personas identificadas en el centro y en la derecha disminuyen. A partir de 2014, aumentó el porcentaje de encuestados que se declaran de centro. De 2014 a 2016 aumenta también el porcentaje de personas declaradas de derecha; sin embargo, de 2016 a 2018, ese porcentaje disminuye. A nivel general, el comportamiento mayoritario de dicha variable cambia.

Gráfico 28: Autopercepción ideológica.



Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

Una vez revisado el comportamiento de las variables en el tiempo y las correlaciones que podrían existir con las variables dependientes, se procederá a revisar las relaciones específicas que se mantienen entre cada variable independiente con las dos variables dependientes. Ello con el fin de profundizar la revisión de cómo están relacionadas las variables escogidas en el estudio. Finalmente, se expondrá cuáles variables y cuáles no obtuvieron relaciones estadísticamente significativas con la legitimidad hacia un eventual golpe de Estado militar, con el objetivo de evaluar el peso de cada variable.

3. Tendencias evidenciadas en las relaciones entre variables independientes y legitimidad de golpes de Estado a lo largo del estudio.

Se procede a presentar la evolución de las relaciones entre variables. En primer lugar, en los cuatro años de estudio se presentó la tendencia intuitiva por la cual quienes legitimarían un golpe de Estado ante las circunstancias planteadas se mostrarán en mayor medida en desacuerdo o indiferentes frente al postulado de que la democracia es la mejor forma de gobierno que quienes no legitimarían un eventual golpe. Asimismo, tanto en los tres primeros años de estudio, los encuestados que aceptarían una toma de poder militar tendieron a responder en mayor medida que no se encontraban satisfechos con la democracia que quienes no legitimarían un golpe. Ello cambia en el 2018, en tanto quienes legitimarían un golpe frente a mucha delincuencia se mostraron más satisfechos con la democracia que quienes no legitimarían el golpe militar; sucedió lo contrario en la aceptación de golpes militares frente a mucha corrupción. A pesar de lo mencionado, en todos los años persistió

la anomalía mediante la cual un amplio porcentaje de quienes legitimaron un eventual golpe de Estado militar legitimaron, a su vez, la democracia y se sintieron satisfechos con la misma, levantando la pregunta sobre qué es lo que la ciudadanía entiende por democracia, en tanto se concilia dos ideas irreconciliables desde el punto de vista teórico.

En el caso de las evaluaciones de la situación económica con relación a la del año anterior, se obtienen resultados concluyentes en su mayor parte. En los tres primeros años de estudio, las relaciones entre dichas variables arrojan el resultado mediante el cual quienes legitimarían un golpe de Estado militar tenderán a evaluar la situación económica, tanto nacional como personal, de peor forma que quienes no justificarían dicho quebrantamiento democrático. En el año 2018, las tendencias se vuelven menos claras. En sí, se obtiene la tendencia intuitiva por la cual quienes legitiman el golpe de Estado evaluarán de peor forma la situación económica nacional que quienes no legitimarían una toma de poder militar. En el caso de la evaluación de la situación personal, quienes aceptarían un golpe militar frente a mucha delincuencia evaluarán de mejor forma, contra intuitivamente, su situación; por otro lado, no existe resultados claros en el caso de la legitimidad de un golpe militar frente a mucha corrupción y su relación con la variable independiente en cuestión.

Las relaciones entre las variables dependientes y aquellas relacionadas a las orientaciones hacia la política y percepciones de corrupción son menos claras. Tanto en 2012 como en 2014, los encuestados que legitimarían un golpe de Estado militar tuvieron mayores porcentajes de respuesta en torno al mucho interés en la política; sin embargo, a nivel general, se mostraron menos interesados en la política, en cuanto sus niveles de respuesta de "interesado" fueron mucho menores. En el 2016, quienes legitimarían un golpe de Estado frente a mucha delincuencia tendieron a mostrarse menos interesados por la política; sucedió lo contrario en el caso de la segunda variable dependiente. En el 2018, no se pudieron establecer relaciones claras en torno al interés hacia la política y la legitimidad de un eventual golpe militar. En el caso del entendimiento de la política, los resultados son más claros: a nivel general, se puede observar que los encuestados que declararon aceptar una toma de poder militar tendieron a responder en menor medida entender bien los asuntos políticos. Por último, en todos los años de estudio, salvo en el 2014, no se pudieron establecer relaciones claras en torno a la percepción de la generalización de la corrupción y la legitimidad de golpes de Estado.

Los resultados se vuelven más concluyentes en torno a la relación entre variables dependientes y orientaciones hacia los gobernantes. En todos los años de estudio se puede

evidenciar cómo los encuestados que legitimarían un golpe de Estado militar evaluaran de peor forma el trabajo de la Presidencia que quienes no aceptarían tal quebrantamiento democrático. Ello se da en concordancia con la teoría que menciona que la ciudadanía en América Latina puede evaluar cuestiones relativas al sistema político en concordancia con las percepciones hacia el gobierno. En torno a la percepción de que a los gobernantes les interesa la opinión ciudadana, las tendencias son menos marcadas y, en algunos casos, poco claras. En 2012 y en 2018, se obtiene la tendencia mediante la cual quienes justificarían un golpe de Estado militar ante mucha corrupción percibirán en mayor medida que a los gobernantes no les interesa su opinión que los encuestados que no justificarían el golpe; sin embargo, en el caso de la segunda variable dependiente, en 2012 se obtienen resultados poco claros y en 2018 se revierte la tendencia. En 2014 y 2016, sí se obtiene el resultado intuitivo que marca que quienes legitimarían un golpe perciben en menor medida que a los gobernantes les interesa su opinión.

Se prosigue con la evolución de las relaciones entre variables dependientes y las orientaciones hacia las instituciones. En los tres primeros años de estudio, se puede constatar que los encuestados que respondieron que legitimarían un golpe de Estado militar tendieron a responder en mayor medida que los derechos básicos no se encuentran protegidos por el sistema político que quienes no hubiesen aceptado un eventual golpe. En el 2018, ello cambia y se obtiene la tendencia mediante la cual los encuestados que aceptarían una toma de poder militar ante mucha delincuencia, paradójicamente, perciben en mayor medida que los derechos están protegidos por el sistema político ecuatoriano; sucede lo contrario, sin embargo, con la legitimidad de golpes militares ante mucha corrupción.

Las tendencias en torno al respeto por las instituciones son menos claras. En el 2012 y 2018, las encuestas arrojan la tendencia mediante la cual quienes legitiman el golpe tenderán a responder en mayor medida que respetan las instituciones que quienes no justificarían un golpe de Estado, levantando la pregunta de qué es lo que la ciudadanía entiende por instituciones. En el 2014 y 2016 se dan tendencias opuestas y se puede observar que los encuestados que legitimarían un eventual golpe responderán en menor medida que las instituciones merecen respeto, aunque de forma no marcada. En todos los años se presenta la anomalía por la cual la mayor parte de encuestados que legitiman un golpe responden, a su vez, que respetan las instituciones. En lo referente al orgullo, en los tres primeros años se da la tendencia intuitiva mediante la cual quienes legitimarían un golpe de Estado militar se muestran menos orgullosos por las instituciones. En el año 2018, los datos de la relación

entre legitimidad de golpes militares y orgullo son poco claros y contradictorios entre las dos variables dependientes.

En cuanto a la confianza hacia instituciones específicas del país, se obtienen resultados variados. En primer lugar, sobre las Fuerzas Armadas, se puede establecer que, en todos los años, salvo en el 2012, año en el que no se dan resultados claros, quienes justificarían un golpe de Estado militar tenderán a mostrar mayores niveles de confianza en las Fuerzas Armadas que quienes no legitimarían tal quebrantamiento. El caso de la confianza en la Presidencia es más concluyente: en todos los años se evidencia una tendencia marcada mediante la cual los ciudadanos que justificarían una toma de poder militar se mostrarán más desconfiados e indiferentes hacia la Presidencia que quienes no justificarían un eventual golpe. Es decir, la deseabilidad de un quebrantamiento democrático está relacionado con las orientaciones hacia la Presidencia. Las relaciones con la Asamblea Nacional son menos claras. En el año 2012 y 2016, se da la tendencia intuitiva que marca que los encuestados que justificarían un golpe de Estado se mostrarán más desconfiados de la Asamblea Nacional que quienes no lo justifican. Por su parte, en el año 2014, no se da una tendencia clara y, en el 2018, se dan resultados contradictorios entre las relaciones entre la confianza en el Legislativo y la legitimidad de golpes militares.

Con referencia a las otras tres instituciones tomadas por este estudio, los resultados son menos concluyentes aún. En lo que respecta a los partidos políticos, se puede observar que en el 2012 y 2016, los encuestados que legitimarían un eventual golpe de Estado se tendieron a mostrarse menos confiados de las instituciones partidistas. En el 2014, quienes aceptarían un golpe de Estado frente a mucha delincuencia tienden a desconfiar más y ser más indiferentes al respecto de los partidos políticos; sucedió lo contrario con la segunda variable dependiente. En el 2018, contra intuitivamente, se dio la tendencia mediante la cual los encuestados que legitimarían un golpe de Estado se mostraron más confiados en los partidos. En lo referente a la confianza en la garantía del sistema judicial de otorgar un juicio justo, no se obtuvieron resultados claros en ninguno de los años de estudio. Finalmente, en todos los años, salvo en el 2014, año en el cual no se obtuvieron resultados claros, se puede observar que los encuestados que justificarían un eventual golpe también tenderán a mostrarse más desconfiados en los procesos electorales que quienes no aceptarían una toma de poder militar.

Por último, en torno a la ideología, no se puede identificar una tendencia clara. Tanto en el año 2012 como en el 2018, no se pueden establecer tendencias claras en torno a la

relación entre las variables dependientes y la autopercepción ideológica. En los años 2014 y 2016, por otro lado, existen tendencias contradictorias. Por un lado, en 2014, se puede observar que quienes justifican una toma de poder militar tenderán a ubicarse en mayor medida a la derecha; en el 2016, sucede que quienes legitimarían un eventual golpe tienden a auto ubicarse en mayor medida a la izquierda del espectro ideológico.

4. Relaciones estadísticamente significativas entre variables.

Una vez presentadas las evoluciones de las tendencias obtenidas de las relaciones entre la legitimidad de golpes de Estado militares y las variables independientes, se procede a revisar las combinaciones de variables que obtuvieron un Chi-cuadrado que permita identificar una relación estadísticamente significativa. En la Tabla 2, se presenta los resultados obtenidos tras el cruce de variables dependientes e independientes sin agrupar los resultados posibles de las variables relativas a legitimidad de la democracia, orientaciones y confianza hacia las instituciones e ideología. La categoría 1 significa que la relación entre dicha variable independiente y la variable dependiente es estadísticamente significativa; caso contrario, si el valor es cero, implica que no se obtuvo una relación estadísticamente significativa. Los asteriscos, por su parte, muestran valores que cambiaron cuando el Chi-cuadrado de la relación se obtuvo sin agrupar las respuestas. En el caso de presentar N.A., significa que, en ese año, dicha pregunta no fue presentada a los encuestados. En la última columna, se presenta el total de relaciones estadísticamente significativas, sobre ocho posibles casos, que obtuvo la variable independiente en cuestión.

De dicha Tabla, se puede concluir que las tres variables que más relaciones estadísticamente significativas obtuvieron tras el cruce con la legitimidad de golpes de Estado militares son la evaluación del trabajo de la Presidencia y la confianza en la Presidencia, todas con seis relaciones obtenidas. Las variables que obtuvieron cinco de las posibles ocho relaciones estadísticamente significativas fueron la evaluación de la situación económica personal, la percepción de la situación económica nacional, el interés por la política, el orgullo de vivir bajo el sistema político ecuatoriano y la percepción de que los derechos están protegidos por el sistema político. Por su parte, obtuvieron tres relaciones estadísticamente significativas las variables relacionadas con la satisfacción hacia la democracia y el conocimiento de la política.

Las variables que menos relaciones estadísticamente significativas obtuvieron fueron las siguientes: con dos relaciones obtenidas, percepción de corrupción entre funcionarios públicos, percepción de que a los funcionarios les interesa la opinión ciudadana, respeto por las instituciones, confianza en las Fuerzas Armadas, confianza en la Asamblea Nacional y confianza en las elecciones; con una relación obtenida, legitimidad de la democracia, percepción de corrupción entre políticos, confianza en la justicia e ideología; y, con ninguna relación obtenida, confianza en los partidos políticos.

Tabla 2: Resumen de relaciones estadísticamente significativas con variables agrupadas.

Tabla de Resumen de Relación de Variables Cruzadas Agrupadas										
Relación signficativa (1)		2012		2014		2016		2018		Total sobre 8
		Legitimidad de golpe militar		Legitimidad de golpe militar		Legitimidad de golpe militar		Legitimidad de golpe militar		
		Delincuencia	Corrupción	Delincuencia	Corrupción	Delincuencia	Corrupción	Delincuencia	Corrupción	
Orientación hacia democracia	Legitimidad	0	1**	0	0	0*	0	0	0	1
	Satisfacción	0	0	1	1	0	1	0	0	3
Percepción de situación económica	Nacional	1	1	1	1	0	1	0	0	5
	Personal	1	1	1	0	1	1	0	0	5
Orientación hacia política	Interés	1	1	1	0	1	0	1	0	5
	Conocimiento	1	0	0	0	1	0	0	1	3
Percepción de corrupción	Funcionarios	1	0	0	0	N.A.	N.A.	0	1	2
	Políticos	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	1	0	0	1
Orientaciones hacia gobernantes	Evaluación de Presidencia	1	1	1	1	1	1	0	0	6
	Percepción de interés	1	0*	0	0	1	0	0	0	2
Orientaciones hacia instituciones	Protección de derechos	1	0*	1	1	0	1	1	0	5
	Respeto	0	0	1	1	0	0*	0	0	2
	Orgullo	1	0*	1	1	1	1	0	0	5
Confianza en Instituciones	Fuerzas Armadas	0*	0*	0	0	1	0*	1	0	2
	Presidencia	1	1	1	1	1	1	0	0*	6
	Asamblea	0*	0	0*	0*	1**	1	0	0	2
	Partidos	0	0*	0	0	0	0	0	0	0
	Justicia	0*	0	0	0	0	1**	0	0	1
	Elecciones	0	0	0	0	1**	1	0	0	2
Ideología	Ideología	0	0	0	1**	0	0	0	0	1
*Valores que, agrupados, consiguieron 0 y sin agrupar, 1.										
**Valores que, agrupados, consiguieron 1 y sin agrupar, 0.										

Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

Por su parte, la Tabla 3 presenta los resultados de las relaciones entre variables dependientes e independientes sin agrupar. La variable que más relaciones estadísticamente significativas obtuvo con las variables dependientes fue la confianza en la Presidencia, con siete sobre ocho posibles. Obtuvieron seis relaciones estadísticamente significativas, entre ocho posibles, las siguientes variables: evaluación del trabajo de la Presidencia, percepción de que los derechos están protegidos por el sistema político y orgullo por las instituciones.

Prosiguiendo, obtuvieron cinco relaciones estadísticamente significativas las variables de percepción de situación económica nacional, percepción de situación económica personal, interés por la política y confianza en las Fuerzas Armadas.

Las variables que siguen son: la confianza en la Asamblea Nacional, con cuatro relaciones obtenidas; satisfacción con la democracia, conocimiento de la política, percepción del interés de los gobernantes en la opinión ciudadana y respeto por las instituciones, todas con tres relaciones obtenidas. Obtuvo, por su parte, dos relaciones estadísticamente significativas, la variable de la percepción de la corrupción entre funcionarios públicos y obtuvieron una relación estadísticamente significativas las variables relacionadas a la legitimidad de la democracia, percepción de corrupción entre políticos, confianza en los partidos, confianza en la justicia y confianza en las elecciones. Por último, no obtuvo ninguna relación la variable de ideología.

Es decir, las siguientes variables tuvieron alguna variación: la legitimidad de la democracia, percepción de que a los gobernantes les interesa la opinión ciudadana, protección de derechos por parte de las instituciones, respeto por las instituciones, orgullo por las instituciones, confianza en las Fuerzas Armadas, confianza en la Presidencia, confianza en la Asamblea Nacional, confianza en los partidos, confianza en la justicia, confianza en las elecciones e ideología.

Tabla 3: Resumen de relaciones estadísticamente significativas con variables sin agrupar.

Tabla de Resumen de Relación de Variables Cruzadas Sin Agrupar										
Relación signficativa (1)		2012		2014		2016		2019		Total sobre 8
		Legitimidad de golpe militar		Legitimidad de golpe militar		Legitimidad de golpe militar		Legitimidad de golpe militar		
		Delincuencia	Corrupción	Delincuencia	Corrupción	Delincuencia	Corrupción	Delincuencia	Corrupción	
Orientación hacia democracia	Legitimidad	0	0**	0	0	1*	0	0	0	1
	Satisfacción	0	0	1	1	0	1	0	0	3
Percepción de situación económica	Nacional	1	1	1	1	0	1	0	0	5
	Personal	1	1	1	0	1	1	0	0	5
Orientación hacia política	Interés	1	1	1	0	1	0	1	0	5
	Conocimiento	1	0	0	0	1	0	0	1	3
Percepción de corrupción	Funcionarios	1	0	0	0	N.A.	N.A.	0	1	2
	Políticos	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	1	0	0	1
Orientaciones hacia gobernantes	Evaluación de Presidencia	1	1	1	1	1	1	0	0	6
	Percepción de interés	1	1*	0	0	1	0	0	0	3
Orientaciones hacia instituciones	Protección de derechos	1	1*	1	1	0	1	1	0	6
	Respeto	0	0	1	1	0	1*	0	0	3
	Orgullo	1	1*	1	1	1	1	0	0	6
Confianza en Instituciones	Fuerzas Armadas	1*	1*	0	0	1	1*	1	0	5
	Presidencia	1	1	1	1	1	1	0	1*	7
	Asamblea	1*	0	1*	1*	0**	1	0	0	4
	Partidos	0	1*	0	0	0	0	0	0	1
	Justicia	1*	0	0	0	0	0**	0	0	1
	Elecciones	0	0	0	0	0**	1	0	0	1
Ideología	Ideología	0	0	0	0**	0	0	0	0	0
*Valores que, agrupados, consiguieron 0 y sin agrupar, 1.										
**Valores que, agrupados, consiguieron 1 y sin agrupar, 0.										

Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP, 2019.

5. Conclusiones.

Una vez revisada las relaciones estadísticamente significativas, se procede a presentar las conclusiones relativas al peso de cada variable independiente en su relación con la legitimidad de los golpes de Estado. En primer lugar, es necesario recalcar que el país presentó una serie de buenos resultados socioeconómicos de 2012 a 2014, constituyéndose este último como uno de los mejores años del país en la década. Sin embargo, a partir del 2015, coincidente con la caída del precio del petróleo, la economía ecuatoriana desaceleró e, incluso, decreció. En el 2017 se presenta una ligera mejora que no se mantiene en 2018. A nivel general, esto afectó otros indicadores sociales y el país tuvo peores resultados en lo

referente a desigualdad, pobreza y desarrollo humano. Por otro lado, a partir del 2016, los índices de democracia del país experimentaron una mejora.

Ello viene en concordancia con las orientaciones ciudadanas, en tanto, a nivel general, el 2014 presentó percepciones mejores y mayormente acercadas a la cultura cívica del país. Sin embargo, a partir de ese año, la cultura política del Ecuador comenzó a afectarse. En primer lugar, se puede observar cierta correlación con la legitimidad de golpes de Estado. Las cifras de personas que aceptarían un quebrantamiento militar se redujeron al mínimo en 2014 y, a partir de ese año, comenzó a crecer. Incluso, en el 2018 se evidencia como la mayor parte de encuestados legitimaría un golpe militar ante mucha delincuencia. Algo similar ocurrió con las orientaciones hacia la democracia. Los años 2012 y, en especial el 2014, la percepción de que la democracia es la mejor forma de gobierno y la satisfacción con la misma aumentan y, a partir de 2015, comienzan a decrecer. Asimismo, en los dos primeros años de estudio aumentan las percepciones evaluativas positivas del estado de la economía y comenzaron a decrecer a partir del 2014.

En el caso de las orientaciones hacia la política y corrupción, los resultados son menos claros. A pesar de que en todos los años predominó un rechazo hacia la política, no se puede establecer una simultaneidad clara con las variables dependientes y, además, en los cuatro años creció el porcentaje de encuestados que mencionó entender bien los asuntos políticos. En lo referente a la percepción de generalización de la corrupción, tampoco hay una simultaneidad clara con el comportamiento de la legitimidad de golpes militares. De todos modos, siempre perduró una visión de que la corrupción es un problema generalizado en lo público. Caso distinto ocurre con las orientaciones hacia los gobernantes. Existe una simultaneidad clara entre la legitimidad de golpes de Estado militares y la evaluación del trabajo del presidente: las evaluaciones positivas del trabajo presidencial crecen de 2012 a 2014 y, a partir de ese año, comienzan a decrecer. Sin embargo, tampoco se puede observar una relación clara en el caso de las evaluaciones de que a los gobernantes les interese la opinión de los ciudadanos.

En lo referente a las orientaciones hacia las instituciones, se obtiene resultados variados. En primera instancia, existe una simultaneidad entre las variables dependientes y la evaluación de la protección de derechos fundamentales por parte del sistema político: de 2012 a 2014, disminuyó el porcentaje de encuestados que percibieron que los derechos básicos no están protegidos y, a partir de ese año, aumentó de considerablemente. Lo mismo

sucede en el caso del orgullo por las instituciones. Por último, existe una cierta relación, pero no del todo clara con respecto al respeto por las instituciones.

Al respecto de la confianza en las instituciones específicas del país, también se observan resultados variados. En todos los años de estudio, las Fuerzas Armadas se constituyeron como la institución más confiada entre las tomadas para este estudio. En sí, no existe una relación de simultaneidad clara entre el comportamiento de la la confianza a dicha institución con la legitimidad de golpes militares. Por otro lado, sí se puede evidenciar un comportamiento similar entre las variables dependientes y la confianza en la Presidencia, análogo a lo sucedido con la evaluación del trabajo del presidente. Asimismo, la confianza en el Legislativo aumenta de 2012 a 2014 y, a partir de entonces, comienza a disminuir.

Por otro lado, en todos los años de estudio existe poca variación en la confianza hacia los partidos políticos, siendo una de las instituciones menos confiadas; tampoco existe relación con las variables dependientes. Sucede lo contrario en torno a la confianza en las garantías del sistema de justicia para dar un juicio justo y las elecciones. En ambos casos, la desconfianza disminuye de 2012 a 2014 y, a partir de ese año, crece ligeramente pero no alcanza los niveles de desconfianza del 2012. Por último, 2012 a 2014, aumentó considerablemente el porcentaje de encuestados que se declararon de izquierda y, a partir de ese año, la cifra comienza a reducir.

Con ello, se procede a presentar los resultados de las relaciones entre variables. En los cuatro años de estudio se dio la tendencia intuitiva que marca que los encuestados que legitimarían un golpe de Estado militar se mostrarán en mayor medida en desacuerdo con que la democracia es la mejor forma de gobierno, además de estar menos satisfechos con la misma. Persiste la anomalía mediante la cual un amplio porcentaje de encuestados legitimarían un golpe y, a la vez, la democracia. Además, a nivel general, se puede observar cómo los encuestados que aceptarían una toma de poder militar tienden a evaluar de peor forma la situación económica que aquellos que no legitimarían un eventual golpe.

En el caso de las orientaciones hacia la política, los resultados son variados. No se puede establecer tendencias claras en la relación entre interés por la política y legitimidad de golpes de Estado. Por otro lado, a nivel general, se puede ver que quienes legitimarían un golpe militar tienden a responder en menor medida entender bien los asuntos políticos. Además, tampoco se pueden establecer relaciones claras entre las variables dependientes y las percepciones de corrupción.

En el caso de las orientaciones hacia los gobernantes, las relaciones son más concluyentes. En primer lugar, en todos los años de estudio se dio la tendencia clara que marca que quienes legitimarían un golpe militar evaluarían de peor forma el trabajo de la Presidencia. Es decir, se evalúa la deseabilidad de un quebrantamiento democrático en relación con las orientaciones hacia la máxima figura ejecutiva. Sin embargo, esta relación tendencial clara no se da en el caso de la percepción de que a los gobernantes les interesa la opinión ciudadana.

Con referencia a las orientaciones hacia las instituciones, los resultados son variados. En los tres primeros años de estudio, quienes dijeron que legitimarían un golpe de Estado militar tendieron a responder en mayor medida que los derechos básicos no se encuentran protegidos por el sistema político. Las tendencias en torno al respeto por las instituciones son poco concluyentes; sin embargo, en todos los años se presenta la anomalía mediante la cual la mayoría de entre quienes legitimarían un eventual golpe militar responden respetar las instituciones. Por otro lado, en todos los años de estudio, salvo en el 2018, se presenta la tendencia intuitiva que marca que quienes legitimarían un golpe militar responden sentirse menos orgullosos de vivir bajo el sistema político del país.

En el caso de las relaciones entre variables dependientes y confianza hacia las instituciones, existe resultados variados. Se puede constar que, a nivel general, quienes aceptarían una toma de poder militar tendrán niveles de confianza superiores hacia las Fuerzas Armadas que quienes dicen que no se justificaría un golpe ante las circunstancias planteadas. Por otro lado, en el caso de la confianza hacia la Presidencia, existe una tendencia marcada que muestra que, en todos los años, los ciudadanos que justificarían una toma de poder militar se mostrarán más desconfiados e indiferentes hacia el Ejecutivo. En el caso de la confianza hacia la Asamblea Nacional y la administración del sistema de justicia, los resultados son poco claros. Por último, a nivel general, se obtiene que quienes legitimarían un golpe militar tenderán a mostrarse menos confiados de los partidos y las elecciones, aunque de forma poco marcada. Finalmente, no se puede constatar una relación o tendencia clara entre las variables dependientes y la autopercepción ideológica.

Para finalizar, se presentan las variables independientes que, en su relación con la legitimidad hacia un posible golpe de Estado militar, tienen más peso en tanto obtuvieron mayores cantidades de respuestas estadísticamente significativas, en orden. Al agrupar los datos, las variables que más relaciones significativas con la legitimidad hacia un golpe militar tuvieron fueron: la evaluación del trabajo de la Presidencia, la confianza en el

presidente, la evaluación de la situación económica nacional y personal, el interés y el orgullo por la política y el sistema político y la percepción de que los derechos están protegidos. Por otro lado, sin agrupar los datos, las variables que más relaciones significativas tuvieron fueron: la confianza en el presidente y la evaluación de su trabajo, percepción de que los derechos están protegidos por el sistema político, orgullo por las instituciones, percepción de la situación económica nacional y personal, interés por la política y confianza en las Fuerzas Armadas. Cabe destacar que, si bien las orientaciones hacia la democracia poseen tendencias intuitivas, las mismas no son significativas. En el caso del resto de variables, no se presentan tendencias claras o resultados concluyentes.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO.

En este capítulo se procederán a presentar las conclusiones del presente estudio. Se ha partido del supuesto de que la subordinación de las instituciones armadas a los poderes electos es uno de los requisitos básicos para el mantenimiento del sistema democrático (Dahl, 1998). A pesar de ello, y como prueba de la importancia y vulnerabilidad de este requisito en la región, la democracia se vio frecuentemente afectada en América Latina a causa de intervenciones militares a lo largo del siglo XX y XXI. Ello muestra que, a pesar del proceso mundial de democratización que se experimentó a finales del siglo pasado, proceso del cual América Latina fue parte, las instituciones democráticas de la región todavía mantienen rezagos autoritarios. Ecuador no ha sido una excepción y, de hecho, sirve como caso interesante de la aceptación que un posible quebrantamiento democrático, por parte de una intervención militar, podría tener.

La relevancia del tema proviene de una coyuntura que Tokatlián denomina el retorno de la "cuestión militar". En la región se ha observado cómo los militares han tomado progresiva importancia en los asuntos públicos. En el caso ecuatoriano, se presenta una continua realidad que ubica a las Fuerzas Armadas como instancia última de decisión sobre el mantenimiento de un gobierno ante circunstancias de conmoción interna. A modo de ejemplo se sitúan los mandatos de Lucio Gutiérrez y Jamil Mahuad, que no lograron mantener su término correspondiente tras un retiro del apoyo militar. Y, en una realidad política en la cual el país pasó de un periodo de estabilidad política durante la administración de Rafael Correa a una coyuntura inestable, ejemplificada en las protestas masivas de octubre de 2019, el tema toma más importancia todavía.

Una cuestión fundamental es el tema de la percepción ciudadana ante dicha cuestión. La democracia, al ser un sistema de gobierno basado en la participación y decisión de sus miembros, depende de las orientaciones que los ciudadanos tengan hacia ella para su mantenimiento. Una consolidación democrática requiere de una cultura cívica, a términos de Almond y Verba, que se centra en la existencia de ciudadanos activos y comprometidos con

el progreso democrático de la sociedad, mediante el mantenimiento de orientaciones moderadas que favorecen una sociedad plural y estable (Almond & Verba, 1970). Sin embargo, en el caso ecuatoriano, es curioso que, a pesar de poseer un sistema democrático desde hace más de cuarenta años, un quebrantamiento democrático sigue siendo un acontecimiento eventualmente aceptado por una parte considerable de la ciudadanía, como se lo ha mostrado a lo largo del estudio. Ello representa un problema, en tanto una visión favorable o indiferente a una ruptura democrática es un problema para el sistema en sí y demuestra rezagos autoritarios en la cultura popular, un obstáculo para la consolidación democrática. Ante ello, se levanta la pregunta sobre cómo se configuran las percepciones ciudadanas hacia posibles golpes militares a partir de las orientaciones políticas y perspectivas socioeconómicas en el sistema democrático de Ecuador.

Para responder esta pregunta, se parte del supuesto por el cual una percepción desfavorable a la democracia, como la aceptación de un eventual golpe de Estado militar, puede deberse a un problema de funcionamiento de la misma democracia. Así, Guillermo O'Donnell (2004) mantenía que las carencias sociales pueden transformarse en carencias democráticas, ya que minan las posibilidades materiales de participación y beneficio de lo público, e incluso pueden contribuir a una posible deslegitimación de la democracia o a la legitimización del autoritarismo, si éste responde a las demandas de mayor bienestar (O'Donnell, 2004). Frente a ello, se ha escogido para el estudio la progresión de las orientaciones ciudadanas de 2012 a 2018, debido a que este es un periodo en la coyuntura nacional ecuatoriana en el cual el país experimentó un deterioro de su realidad económica y social, además de deterioro de las orientaciones cívicas.

Para el estudio, se ha utilizado un método cualitativo basado en la revisión del mundo interno de la ciudadanía ecuatoriana. Se ha utilizado como base perspectivas académicas referentes al tema de cultura política, legitimidad, democracia, cultura cívica y posibles explicaciones teóricas a la legitimidad de un posible quebrantamiento democrático. Por su parte, se obtuvo los datos empíricos a través de encuestas, que constituyen expresiones de las visiones propias de la ciudadanía, del Latin American Public Opinion Proyect, un proyecto del Barómetro de las Américas, con los estándares más altos de calidad y una muestra representativa a nivel nacional.

Con los resultados de dichas encuestas, mantenidas bianualmente, se han presentado la progresión de las orientaciones ciudadanas, centrándose en nueve subtemas y veintidós variables: legitimidad de golpes de Estado militares, como variables dependientes, y las

respuestas en torno a las orientaciones hacia la democracia, la percepción de la situación económica, orientaciones hacia la política, percepciones sobre corrupción, evaluaciones a los gobernantes, orientaciones hacia las instituciones, confianza hacia instituciones específicas y autoubicación ideológica, como variables independientes. Dichos resultados se han presentado en cada uno de los cuatro años de estudio en conjunto con algunos indicadores que pueden dar un vistazo de la realidad socioeconómica nacional de ese entonces. Finalmente, se presentan las relaciones entre variables dependientes e independientes, y una comparación a lo largo del periodo escogido para obtener las relaciones más importantes. Vale destacar y admitir que las variables escogidas responden a las tendencias teóricas de las cuales parte este estudio y los indicadores nacionales fueron escogidos por simplicidad de análisis. Ello quiere decir que este estudio no pretende postularse como la única forma de revisar la cultura política en este ámbito específico.

En lo referente a la teoría, este trabajo parte del estudio de la cultura política, entendida como el conjunto de orientaciones y percepciones de un grupo humano determinado sobre lo público y lo político, sea que se apeguen a la realidad o no, se hayan construido de forma racional, evaluando costos y beneficios, o irracional, de forma emocional, o si se contó con información completa o no. Se ha utilizado el enfoque psicosocial, que se fundamenta en que los seres humanos encuentran la razón de su conducta en su mundo interior, teniendo éste relevancia, en este sentido, por sí mismo. Una de las cuestiones centrales del estudio de la cultura política es la legitimidad, entendida como la aceptación del ejercicio del poder, que, de acuerdo a Weber, puede derivar de la tradición, de la legalidad o del carisma. Y, para mantener la legitimidad, es importante el desarrollo socioeconómico (Alcántara, 1995).

Por su parte, como democracia se puede entender un régimen en los cuales todos sus miembros pueden expresar preferencias libremente, en igualdad de condiciones, sobre la forma en la cual se maneje lo público y que dicha elección sea igual y respetada para y por todos (Dahl, 2001). De ello, se deduce que un requisito fundamental para un sistema democrático es la subordinación del poder coercitivo a los cargos electos, la representatividad inherente a la democracia actual y la necesidad de una aceptación de los ciudadanos sobre el mantenimiento del sistema. Además, dentro de una lógica de Estado, la democracia implica la vigencia del Estado de derecho, el respeto a la institucionalidad, la separación de poderes, la protección de los derechos civiles y políticos, entre otros (O'Donnell, 2004).

A pesar de ser necesarias, las instituciones formales no son suficientes para el mantenimiento democrático y es cuando se vuelve relevante la cultura política (Mateos, 2017). Para el mantenimiento saludable de un sistema democrático, se requiere percepciones orientadas a la participación, pero también la moderación para no colapsar el sistema (Almond & Verba, 1970). En este sentido, las instituciones de la democracia representativa han presentado una dificultad actual de adaptarse a nuevas demandas posmateriales derivadas del desarrollo social y tecnológico (Inglehart, 1977), además de entrar en una crisis de representatividad (Alcántara & Freidemberg, 2001).

A pesar de la larga historia de la democracia, esta ha tenido problemas en consolidación en América Latina. El diseño institucional de las democracias latinoamericanas se ha copiado de modelos europeos y norteamericanos, y no se ha adaptado a una realidad estatal frágil que no asegura que las previsiones institucionales formales se materialicen (Rouquié, 1981). Por otro lado, la realidad regional está marcada por la existencia de un triángulo marcado por la desigualdad, la pobreza y la democracia, que evita que los derechos formales que prevé la democracia se materialicen y se hagan efectivos en la práctica, derivando la posibilidad de que los ciudadanos subordinen la prioridad del mantenimiento democrático a la satisfacción de sus necesidades materiales (O'Donnell, 2004).

Es donde se presenta el tema de la legitimidad de golpes de Estado militares, como una alternativa o una vía no institucional de quebrantamiento del sistema democrático que puede ser aceptada y legitimada, a pesar de su ilegalidad, en el seno de un sistema que requiere de la aceptación de sus miembros para su mantenimiento, como es la democracia. Una legitimidad que respondería a insatisfacción con el régimen debido a su dificultad de satisfacer necesidades (O'Donnell, 2004), el malestar con el desempeño administración del sistema democrático, si se confunde gobierno de turno con el sistema de gobierno (Alanis Figueroa, 2002, pág. 153), y con las orientaciones hacia la misma democracia. Esto puede generar un desfase entre la legitimidad legal en la que se sustenta el sistema democrático y lo realmente aceptado por la ciudadanía, representando una contradicción problemática en el centro del mantenimiento de la democracia.

En esta serie de consideraciones se inserta Ecuador, un país democrático constitucionalmente en cuyo caso el ordenamiento jurídico prevé la subordinación militar a los cargos civiles y prohíbe el quebrantamiento democrático de forma expresa. El país cuenta con un retorno a la democracia a fines de los años 70s, tras una dictadura militar

caracterizada, a diferencia con otros autoritarismos de la región, por el reformismo, la inversión social siguiendo ideas cepalinas y la implementación de un régimen políticamente no tan represivo (Rivera Vélez, 2011), (Rouquié & Suffern, 1997). En este sentido, las Fuerzas Armadas han sido una de las instituciones más confiadas y aceptadas del país, asentadas en discursos de desarrollo y nacionalismo. Incluso, lo largo del periodo democrático, como se lo mencionó previamente, las Fuerzas Armadas se volvieron la última instancia de mantenimiento de un gobierno ante circunstancias de crisis internas. Finalmente, la cultura política ecuatoriana se ha caracterizado por el apoyo a prácticas que siguen la lógica del mecenazgo político, criterios personalistas, carismáticos, emotivos y difusos, generando problemas para el asentamiento de la modernidad y la legalidad, permitiendo la aceptación de quiebres institucionales si responden a demandas ciudadanas y la condena del gobierno en el caso contrario (Bustamante, 2003).

En Ecuador, como se lo muestra a lo largo del estudio, y siguiendo la lógica antes expuesta, marcada por la evaluación de la deseabilidad de una situación informal de acuerdo a los resultados del gobierno y, además, la presencia de un perjuicio socioeconómico durante los años de estudio, presenta un amplio porcentaje de ciudadanos que respondieron que aceptarían un quebrantamiento democrático por medio de un golpe de Estado militar. Incluso, en el año 2018, la mayoría de encuestados respondieron que una toma de poder militar se justificaría ante mucha corrupción. Dichas percepciones se relacionan con las variables dependientes escogidas, como se lo expondrá a continuación.

En primer lugar, vale destacar ciertos aspectos de la realidad nacional a lo largo del estudio. Ecuador presentó una serie de buenos resultados económicos que se tradujeron en mejoras sociales, como la disminución de la desigualdad por ingresos o la incidencia de la pobreza, entre el 2012 y 2014. Sin embargo, a partir del año 2015, y coincidiendo con la caída del precio del petróleo, el principal producto de la economía ecuatoriana, la economía desaceleró e incluso decreció. En el 2017 existe una pequeña mejora que no se mantiene al siguiente año. Este perjuicio económico se dio en conjunto con una disminución de los buenos resultados sociales que el país experimentó.

A nivel de orientaciones, se ve que esta realidad se dio simultáneamente con una reducción de percepciones favorables a la democracia y la cultura cívica. Entre 2012 y 2014, la legitimidad de golpes de Estado militares se redujo, así como aumentó la percepción de que la democracia es la mejor forma de gobierno, la satisfacción con el sistema democrático y las evaluaciones positivas de la realidad económica nacional y personal. A partir de ese

año, la legitimidad de una toma de poder militar aumentó y las orientaciones positivas hacia la democracia y la economía disminuyeron. Al contrario, no se establece una simultaneidad clara entre las variables dependientes y las orientaciones hacia la política, en las cuales predominó un rechazo al concepto. Algo similar ocurre con las percepciones de generalización de la corrupción.

Por otro lado, sí existe cierta correlación con las evaluaciones hacia los gobernantes. En los años de estudio, se puede establecer una simultaneidad entre la legitimidad de golpes de Estado militares y la evaluación del trabajo del presidente: las evaluaciones positivas del trabajo presidencial crecen de 2012 a 2014 y, a partir de ese año, comienzan a decrecer. Es curioso que, a pesar de ello, no hay una relación clara en el caso de la percepción de que a los gobernantes les interesa la opinión ciudadana. A nivel de orientaciones hacia las instituciones, existen resultados variados. En el caso de la visión de que los derechos están protegidos por el sistema político y el orgullo por las instituciones, existe cierta correlación con el comportamiento de las variables dependientes durante este año de estudio. No sucede lo mismo con el respeto por las instituciones.

Al respecto de la confianza por instituciones específicas del país, también se obtuvieron resultados distintos. En todos los años, las Fuerzas Armadas se consolidaron como la institución más confiada, entre las tomadas para este estudio y, sin embargo, no existe una simultaneidad de las respuestas en torno a la confianza que las mismas tienen con el comportamiento de la legitimidad de un golpe de Estado militar. En el caso de la confianza hacia la Presidencia, la Asamblea Nacional y las elecciones, se puede evidenciar cierta correlación con el comportamiento de la legitimidad de una toma de poder militar. Finalmente, no hay una relación temporal clara entre variables dependientes y la confianza hacia las garantías del sistema judicial y hacia los partidos políticos. Por último, al respecto de la ideología, se observa que de 2012 a 2014, aumentó el porcentaje de encuestados que se declararon de izquierda y, a partir de ese año, la cifra comienza a reducir.

Ahora, ello debe ser leído a la luz de las relaciones entre las variables dependientes e independientes. En el caso de las orientaciones hacia la democracia, la legitimidad y satisfacción, se obtiene una tendencia intuitiva que marca que quienes legitimarían un golpe de Estado militar se encontrarán más en desacuerdo con que la democracia es la mejor forma de gobierno y más insatisfechos con el sistema democrático que quienes no aceptarían tal golpe. Sin embargo, se ha observado en los cuatro años de estudio un amplio porcentaje de encuestados legitimarían un golpe y, a la vez, la democracia. Algo que, vale la pena recordar,

corresponde a conciliar posturas irreconciliables desde la teoría, levantando la pregunta de qué es lo que se entiende por democracia. Ello merece un estudio previo. Por otro lado, se puede observar que, a nivel general, quienes responden aceptar un golpe militar también tienden a evaluar de peor forma la situación económica que los encuestados que no legitimarían un golpe.

En el caso de las orientaciones hacia la política y la percepción de generalización de la corrupción, las tendencias son poco claras, a excepción del conocimiento de la política. En este caso, se observa que los encuestados que responden legitimar un golpe militar tenderán a responder en menor medida entender bien los asuntos políticos. Con referencia al interés por la política y la percepción de generalización de corrupción entre funcionaros públicos y políticos, no se dan relaciones claras con las variables dependientes. Al respecto de las orientaciones hacia los gobernantes, también hay resultados variados. En primer lugar, en todos los años de estudio se da la tendencia clara que marca que quienes legitimarían un golpe de Estado militar evaluarán de peor forma el trabajo del presidente. En el caso de la percepción de que a los gobernantes les interesa la opinión ciudadana, no se puede establecer una relación clara con la legitimidad hacia golpes militares.

Prosiguiendo con las orientaciones hacia las instituciones, se puede establecer ciertas conclusiones. En 2012, 2014 y 2016, se dio la tendencia mediante la cual quienes dijeron que legitimarían un golpe de Estado militar respondieron en mayor medida que los derechos básicos no se encuentran protegidos por el sistema político. En el 2018 no se dio relaciones claras. Las tendencias en torno al respeto por las instituciones, por su parte, son poco concluyentes; sin embargo, en todos los años se presenta la anomalía mediante la cual la mayoría de entre quienes legitimarían un eventual golpe militar responden respetar las instituciones. Por último, en los tres primeros años de estudio, se obtiene la tendencia intuitiva que marca que quienes aceptarían una toma de poder militar responden sentirse menos orgullosos de vivir bajo el sistema político ecuatoriano. En 2018, no se establece tendencias claras.

Los resultados también son variados en torno a la confianza hacia las instituciones. A nivel general, quienes legitimarían un golpe de Estado militar tienden a sentirse más confiados de las Fuerzas Armadas. En el caso de la confianza hacia la Presidencia, existe una tendencia marcada que muestra que, en todos los años, los ciudadanos que justificarían una toma de poder militar se mostrarán más desconfiados e indiferentes hacia la el presidente. Por otro lado, en las relaciones entre legitimidad de golpes de Estado militares y

confianza hacia Asamblea Nacional y administración de justicia, no se da relaciones claras. Finalmente, existe cierta relación, aunque poco marcada, que marca que quienes legitimarían un golpe de Estado militar se sentirán más desconfiados de los partidos políticos y las elecciones. Por último, no se constata relación o tendencia clara entre las variables dependientes y la ubicación ideológica.

Revisando la existencia de relaciones estadísticamente significativas entre la legitimidad de golpes de Estado militares y las variables independientes, se obtiene que las variables que más peso tuvieron fueron las orientaciones hacia la Presidencia, en torno a la confianza y evaluación de su trabajo, así como la evaluación de la situación económica nacional y personal. Obtuvieron ciertas relaciones estadísticamente significativas la percepción de que los derechos se encuentran protegidos por el sistema político y el orgullo por las instituciones. Cabe destacar que, si bien las orientaciones hacia la democracia poseen tendencias intuitivas, las mismas no son significativas. En el caso del resto de variables, los resultados son menos concluyentes.

Estas tendencias pueden asociarse con lo establecido en la teoría. En primer lugar, el hecho de que las relaciones más marcadas se dan entre la legitimidad de un golpe de Estado militar y las orientaciones hacia la Presidencia, sea confianza o evaluación de su trabajo, puede significar que la ciudadanía evalúa la deseabilidad de un quebrantamiento democrático mediante el retiro del poder presidencial electo por parte de las Fuerzas Armadas con base en su percepción sobre esa autoridad presidencial electa. Es decir, puede deberse a una tendencia de confusión entre gobierno de turno y sus resultados con la deseabilidad del mantenimiento de uno de los preceptos de la democracia, que marca que lo electo debe ser respetado y protegido de vías no institucionales, como una toma de poder militar. Ello, en coincidencia, se da en un país en el cual las Fuerzas Armadas se constituyen como la institución más confiada. En otras palabras, esto puede levantar la hipótesis por la cual se podría proponer que, ante un presidente no aceptado, la intervención de las Fuerzas Armadas, como la institución más confiada a nivel nacional, se vuelve un mecanismo no institucional para resolver una demanda de retirar al representante del Ejecutivo de su puesto.

Por otro lado, la legitimidad de un golpe de Estado también posee relación con la evaluación del estado de la economía, la percepción de que los derechos se encuentran protegidos y los resultados que perciben los ciudadanos en su vida diaria. Ello se da en concordancia con lo que establecía O'Donnell: la falta de respuestas del sistema democrático a una realidad marcada por los malos resultados socioeconómicos puede derivar en la

legitimación de una vía no institucional, ilegal y no democrática, como la intervención militar, si ésta se constituye como una respuesta a las demandas de bienestar. Además, se debe considerar que, históricamente, la clase militar ecuatoriana ha jugado un rol clave en el reformismo y redistribución económica en el país en la década de los 70s, así como la asociación al nacionalismo que esta institución posee, por lo que se puede alzar la hipótesis que ésta se constituye en la cultura política como una alternativa para mayor bienestar.

En el caso de las orientaciones hacia la democracia y el sistema político es relevante mencionar ciertas cuestiones. Si bien existe la tendencia que marca que quienes legitimarían un quebrantamiento democrático tienen peores percepciones de la democracia y se sienten menos orgullosos del sistema, estas relaciones no tienen tanto peso. Incluso, como lo mencionó, la mayoría de personas que legitimarían un golpe militar legitiman a la vez la democracia. Ello podría representar un problema de una falta de profundización en la cultura política ecuatoriana de lo que la democracia representa. Leído a la luz de lo anteriormente dicho, un ciudadano bien puede estar de acuerdo con que la democracia sea la mejor forma de gobierno, pero favorecer a un golpe de Estado militar si no acepta el trabajo del presidente o si percibe que la situación económica, y por ende social, no es favorable. Esto evidencia problemas en la consolidación democrática del país y merece atención posterior en tanto se trata del mantenimiento del sistema político ecuatoriano. Finalmente, las variables referentes a las percepciones hacia las instituciones, política, corrupción, ideología y percepción de que la opinión ciudadana importa para los tomadores de decisiones, tienen poco peso en su relación con las variables dependientes.

En síntesis, y para concluir el estudio, se puede mencionar que las variables que tienen relaciones más profundas con la legitimidad de los golpes de Estado militares son las orientaciones hacia la Presidencia y la percepción de la situación económica. Por otro lado, se puede evidenciar que existe una simultaneidad entre los resultados socioeconómicos del país y una cultura política positiva, en tanto las orientaciones positivas hacia las instituciones y mantenimiento democrático disminuyeron en conjunto con el empeoramiento de la coyuntura socioeconómica del país. Ello en el contexto ecuatoriano, en el cual las instituciones militares han jugado un rol reformista en la historia y se consolidan como la institución más confiada del país. Lo que podría significar que, a pesar de una serie de orientaciones positivas hacia la democracia, actitudes autoritarias persisten en la ciudadanía ecuatoriana, al juzgar la deseabilidad de una intervención militar no democrática en el poder ejecutivo electo si ésta se da ante una administración no aceptada o en una coyuntura de

afectaciones económicas. Algo que, sin duda, corresponde un reto para el correcto funcionamiento de la democracia ecuatoriana, que demanda mayor materialización y democratización de sus beneficios, además de la socialización de lo que constituye una verdadera convivencia democrática.

BIBLIOGRAFÍA.

Abellán García, J. (1992). Liberalismo Clásico (de Locke a Constant). En J. Mellón, *Ideologías y movimientos políticos contemporáneos* (pág. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=1042).

Alanis Figueroa, M. d. (2002). Cultura política y elecciones en México. *América Latina Hoy*, 133-159.

Alcántara , M., & Freidemberg, F. (2001). *Los partidos políticos en América Latina.* Salamanca: Universidad de Salamanca .

Alcántara, M. (1995). GOBERNABILIDAD, CRISIS Y CAMBIO. En M. Alcántara, *Una aproximación teórica al fenómeno de la globernabilidad de los sistemas políticos* (págs. 21 - 55). México, D. F: Fondo de Cultura Económica.

Almond, G., & Verba, S. (1970). *Estudio sobre la participación política democrática en cinco naciones.* Madrid: Euramérica S. A.

Anduiza, E., & Bosch, A. (2004). Comportamiento Político y Electoral. Barcelona: Arial.

Angell, A. (1997). La izquierda en América Latina desde c. 792. En L. Bethell, *Historia de América Latina* (Vol. 12, págs. 73 - 132). Barcelona: Grijalbo.

Banco Central del Ecuador. (2017). *PRECIOS PROMEDIO DEL CRUDO ECUATORIANO Y DEL MERCADO INTERNACIONAL.* Obtenido de https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/IEMensual/m1968/IEM-412b.xls

Banco Central del Ecuador. (2020). *REPORTE DEL SECTOR PETROLERO IV Trimestre de 2019.* Obtenido de https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/Hidrocarburos/ASP201906.pdf

Banco Mundial. (2020). *Datos de libre acceso del Banco Mundial.* Obtenido de Banco Mundial: https://datos.bancomundial.org/

Blin, A., & Marín, G. (2013). *Diccionario del poder mundial.* París: Aún Creemos en los Sueños.

Bustamante, F. (2003). Cultura política y ciudadana en el Ecuador. En F. Burbano de Lara, *Antología, Democracia, gobernabilidad y cultura política* (págs. 341 - 382). Quito: FLACSO, Sede Ecuador.

Castells, M. (2009). Emoción y cognición en las campañas políticas - El enmarcado de la mente. En *Comunicación y Poder* (págs. 208 - 227). Madrir: Alianza Editorial.

Comisión de la Verdad Ecuador 2010. (2010). *Informe de la Comisión de la Verdad Ecuador 2010. Sin verdad no hay justicia.*

Constant, B. (1819). *De la libertad de los antiguos comparada a la de los modernos.* Obtenido de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2124/16.pdf

Dahl, R. (1998). *On Democracy.* New Haven and London : Yale University Press.

Dahl, R. (2001). La poliarquía. En e. a. G. Almond, *Diez textos básicos de Ciencia Política* (págs. 77 - 92). Barcelona: Ariel.

Downs, A. (2007). Teoría económica de la acción política en una democracia. En e. a. G. Almond, *Diez Textos Básicos de Ciencia Política* (págs. 93 - 111). Barcelona: Arial.

Duarte, J., & Souza, B. M. (2015). Os valores democráticos no Brasil: revisitando a bibliografia e analisando o cenário atual. *Diálogo*, 73 - 91.

Duque Daza, J. (2014). Guillermo O'Donnell y la democracia. *Movimientos sociales y democracia en américa latina*, 113 -144.

El Barómetro de las Américas. (2019). *LAPOP: Barómetro de las Américas*. Obtenido de Vanderbilt University: https://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/

El Barómetro de las Américas por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina . (2019). *LAPOP: Ecuador, 2019.* Obtenido de Vanderbilt University: http://datasets.americasbarometer.org/database/files/Ecuador%20LAPOP%20AmericasBarometer%202019%20v1.0_W.dta

Fleury, S. (2004). *DEMOCRACIA COM EXCLUSÀO E DESIGUALDADE: A DIFÍCIL.* Obtenido de La Democracia en América Latina: http://app.ebape.fgv.br/comum/arq/PNUDsoniafleury.pdf

Hartlyn, J., & Valenzuela, A. (1997). La democracia en América Latina desde 1930. En L. Bethell, *HISTORIA DE AMERICA LATINA* (págs. 11 - 73). Barcelona: Serie Mayor.

Inglehart, R. (1977). *The silent revolution.* Princeton.

Inglehart, R. (2015). Modernización y cambio cultural: la persistencia de los valores tradicionales. *Quaderns de la Mediterránea*, http://www.iemed.org/publicacions/quaderns/5/eInglehart.pdf.

Justo, M. (20 de mayo de 2013). El fin del auge de las materias primas: ¿golpe para América Latina? *BBC Mundo*, pág. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/05/130509_materias_primas_america_latina_mj.

López-Roldán, P., & Fachelli, S. (2015). *Metodología de la investigación social cuantitativa.* Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.

Lozada, R., & Casas, A. (2008). Enfoques que previlegian el interior del ser humano . En R. Lozada, & A. Casas, *Enfoques para el analisis politico* (págs. 75 - 147). Bogotá: Editorial Ponrificia Universidad Javeriana .

Máiz, R. (2009). Democracia y poliarquía en Robert A. Dahl. *Universidad de Santiago de Compostela*.

Mateos, A. (2017). Cultura política. En S. Marri, J. Solís, & F. Sánchez, *Curso de Ciencia Política* (págs. 189 - 212). México: Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales.

Meyenberg, Y. (2006). Cultura política: un concepto manuable. En V. Alarcon Holguín, *Metodologías para el análisis político enfoques, procesos e instituciones.* (págs. 93-119). México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana.

O'Donnell, G. (2004). El desarrollo de la democracia en América Latina. En PNUD, *La Democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos* (págs. 33 - 70). Buenos Aires: Alfaguara.

O'Donnell, G. (2011). Democracia Delegativa. *Journal of Democracy en Español*, 7 - 23.

PNUD. (2021). *Informe sobre Desarrollo Humano 2020.* Obtenido de PNUD: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_es.pdf

PNUD. (2021). *Informe sobre Desarrollo Humano 2020.* Obtenido de PNUD: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_es.pdf

PNUD. (2021). *Informe sobre Desarrollo Humano 2020.* Obtenido de PNUD: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_es.pdf

Real Academia de la Lengua. (2021). *Diccionario.*

Redacción BBC Mundo. (27 de mayo de 2016). 4 claves para entender el Plan Cóndor, la empresa de la muerte creada por regímenes militares en Sudamérica. *BBC Mundo*, pág. https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2016/05/160524_america_latina_plan_operacion_condor_argentina_uruguay_bolivia_brasil_paraguay_jcps.

Rivera Vélez, F. (2011). La Inteligencia ecuatoriana: tradiciones, cambios y perspectivas. En F. Rivera Vélez, *Inteligencia estratégica y Prospectiva* (págs. 47 - 76). Quito: FLACSO, Sede Ecuador : Secretaría Nacional de Inteligencia del Ecuador.

Rosen, H. (2008). *Hacienda Pública.* Madrid: McGraw-Hill.

Rouquié, A. (1981). Dictadores, militares y legitimidad en América Latina. *Crítica & Utopía. Latinoamericana de Ciencias Sociales*, 1 - 9. Obtenido de http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20130610074923/ROUQUIE.pdf

Rouquié, A. (2011). La continuación de la dictadura por otros medios. En *A la somba de las dictaduras: la democracia en América Latina* (págs. 113 - 135). Fondo de Cultura Económica: Buenos Aires.

Rouquié, A., & Suffern, S. (1997). Los militares en la política latinoamericana desde 1930. En L. Bethell, *HISTORIA DE AMÉRICA LATINA 12. POLÍTICA Y SOCIEDAD DESDE 1930* (págs. 281 - 342). Barcelona: Grijalbo.

Shafritz, J., Russell, E. W., Borick, C., & Hyde, A. (2017). Chapter 2: The Political and Cultural Environment of Public Policy and Its Administration. En J. Shafritz, E. W. Russell, C. Borick, & A. Hyde, *Introducind Public Administration* (págs. 40 - 84). New York: Routledge.

Souza, B. M., & Gallo, C. A. (2014). Legados Culturais do Autoritarismo no Cone Sul. *Revista Sul-Americana de Ciência Política*, 75 - 89.

The Economist. (2019). *The retreat of global democracy stopped in 2018.* Obtenido de The Economist: https://www.economist.com/graphic-detail/2018/01/31/democracy-continues-its-disturbing-retreat

The Economist. (22 de enero de 2020). *Global democracy has another bad year.* Obtenido de The Economist: https://www.economist.com/graphic-detail/2020/01/22/global-democracy-has-another-bad-year

Tokatlián, J. G. (2010). *El retorno de la cuestión militar a Latinoamérica.* Estudios de Política Exterior S. A.

Vanderbilt University. (2019). *LAPOP: Barómetro de las Américas*. Obtenido de https://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/

Victoriano, F. (2010). Estado, golpes de Estado y militarización en América Latina: una reflexión histórico política. *Argumentos (Méx.) vol.23 no.64 cc*. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952010000300008

Vidal de la Rosa, G. (2010). La madre de todas las disputas: desigualdad y democracia. *El Cotidiano, núm. 160*, 91-96.

Weber, M. (2002). *Economía y Sociedad.* México: Fondo de Cultura Económica.